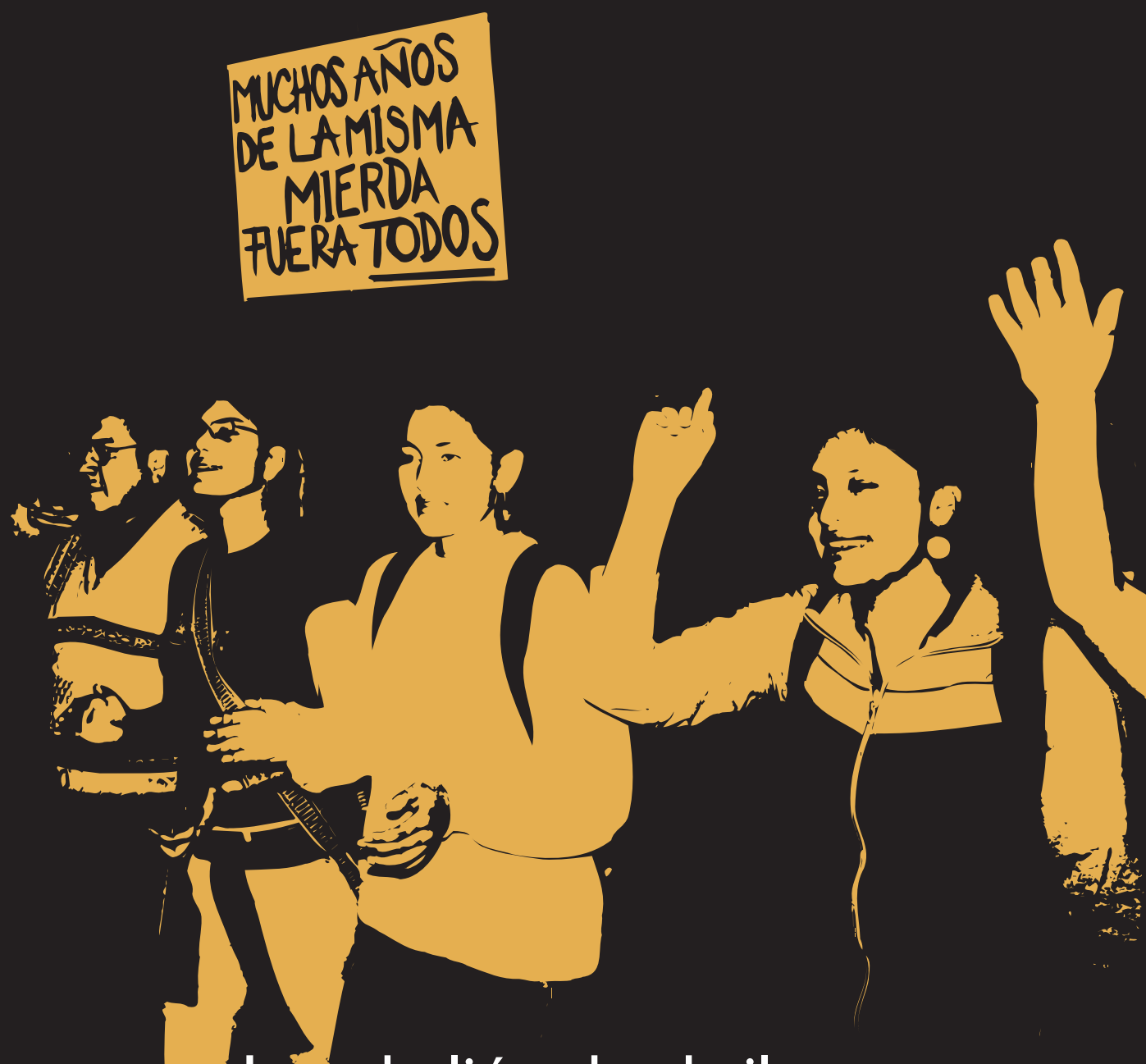


ÍCONOS | 23

Revista de Ciencias Sociales • FLACSO - Ecuador • cuatrimestral • ISSN: 1390-1249 • septiembre 2005



La rebelión de abril

- El fervor democrático quiteño: ¿mito, sueño o algo sustancial?
 - Lo que pasó en Ciespal: una etnografía de la violencia
 - Presente y pasado de un proyecto militar corporativo
- Ciencias políticas y trabajo de campo. Diálogo con Liisa North

ÍCONOS

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

No. 23, septiembre 2005
ISSN 1390-1249
CDD 300.5 / CDU 3 / LC H8 .S8 F53
Vol 9, Issue 3, September, 2005
Quito - Ecuador



FLACSO
ECUADOR

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Sede Ecuador



FLACSO
ECUADOR

ICONOS. Revista de Ciencias Sociales

Número 23, septiembre 2005, Quito-Ecuador

ISSN: 1390-1249 / CDD: 300.5 / CDU: 3 / LC: H8 .S8 F53

(Vol. 9, Issue 3, September 2005)

ÍCONOS. Revista de Ciencias Sociales es una publicación de Flacso-Ecuador. Fue fundada en 1997 con el fin de estimular una reflexión crítica desde las ciencias sociales, sobre temas de debate social, político, cultural y económico del país, la región andina y el mundo en general. La revista está dirigida a la comunidad científica y a quienes se interesen por conocer, ampliar y profundizar, desde perspectivas académicas, estos temas.

Para la selección de artículos se utiliza un arbitraje bajo el sistema de doble ciego (peer review). La revista está indexada en Latindex-Catálogo.

ÍCONOS se publica cuatrimestralmente en los meses de enero, mayo y septiembre.

Los artículos que se publican en la revista son de responsabilidad exclusiva de sus autores; no reflejan necesariamente el pensamiento de *ÍCONOS*. Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos siempre que se cite expresamente como fuente a *ÍCONOS. Revista de Ciencias Sociales*

Director de Flacso-Ecuador: Adrián Bonilla

Director de Íconos: Eduardo Kingman Garcés (ekingman@flacso.org.ec)

Editor de Íconos: Edison Hurtado (ehurtado@flacso.org.ec)

Comité editorial

Felipe Burbano (Flacso-Ecuador), Mauro Cerbino (Flacso-Ecuador), Edison Hurtado (Flacso-Ecuador), Hugo Jácome (Flacso-Ecuador), Eduardo Kingman (Flacso-Ecuador), Carmen Martínez (Flacso-Ecuador), Franklin Ramírez (Univ. París VIII, Francia), Alicia Torres (Flacso-Ecuador)

Comité asesor internacional: Andrés Guerrero (España), Blanca Muratorio (U. Vancouver, Canadá), Bolívar Echeverría (UNAM, México), Bruce Bagley (U. Miami, EEUU), Carlos de Mattos (PUC, Chile), Flavia Freidenberg (U. Salamanca, España), Francisco Rojas (Flacso, Costa Rica), Javier Auyero (SUNY - Stony Brook, EEUU), Joan Martínez Alier (U. Barcelona, España), Joan Pujadas (U. Rovira i Virgili, España), Lisa North (U. York, Canadá), Magdalena León (U. Nacional, Colombia), Rob Vos (ISS, Holanda), Roberto Follari (U. Cuyo, Argentina), Víctor Bretón (U. Lleida, España), Lorraine Nencel (CEDLA, Holanda).

Coordinadores del dossier “La caída de Lucio Gutiérrez y la rebelión de abril”

Franklin Ramírez y Felipe Burbano

Fotografías del dossier: Julio García

Diseño y diagramación: Antonio Mena

Impresión: Rispergraf C.A.

Envío de artículos, información, solicitud de canje: revistaiconos@flacso.org.ec

Suscripciones, pedidos y distribución: lalibreria@flacso.org.ec

©FLACSO-Ecuador

Casilla: 17-11-06362

Dirección: Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro. Quito-Ecuador

www.flacso.org.ec (resúmenes, abstracts y artículos anteriores disponibles on line)

Teléfono: +593-2 323-8888 Fax: +593-2 323-7960

CDD 300.5 / CDU 3 / LC: H8 .S8 F53

Íconos: revista de ciencias sociales.—Quito: Flacso-Ecuador, 1997-

v. : il. ; 28 cm.

Ene-Abr. 1997-

Cuatrimstral- enero-mayo-septiembre

ISSN: 1390-1249

1. Ciencias Sociales. 2. Ciencias Sociales-Ecuador. I. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador)

Pensar los acontecimientos

La preocupación central de este número ha sido el análisis de la insurrección de abril de 2005. Se trata de un momento coyuntural que a criterio de los que hacemos la revista requería y requiere ser pensado. Pero, ¿por qué pensar un hecho de coyuntura? Y en términos más generales, ¿qué significa pensar en términos de coyuntura?

Se entiende que una de las cosas que diferencia a una revista de ciencias sociales de otro tipo de publicaciones es su preocupación por el desarrollo de un campo disciplinario. Como campo funciona con su propio ritmo, sometido a sus propias reglas, sin que esto signifique que sea ajeno a los condicionamientos del mundo social. En nuestro caso concreto, se trata de contribuir al mejoramiento de la reflexión sobre nuestros países, pero esto sólo es posible a partir de un espacio teórico y de pensamiento. Esto supone, como se sabe, un distanciamiento con respecto a los objetos de análisis. Revisar textos, analizar documentos, producir conceptos, todo eso conduce a un cierto alejamiento del mundo que no por eso tiene que eliminar una relación dialógica con él.

Ahora bien, los hechos de abril son aún demasiado cercanos para los científicos ecuatorianos como para poder entender todo su significado, a más de que todos nos hemos visto atravesados, de un modo u otro, por esos hechos. Cualquier estudio sostenido requeriría no sólo de cierta distancia temporal sino de un espacio social que haga posible el análisis. Separarse de los hechos para pensarlos no significa desligar lo académico de lo político sino vivir otra dimensión, igualmente importante, de lo político. Las sociedades latinoamericanas han sido y son el escenario de innumerables sucesos significativos, pero el pensamiento social no siempre se desarrolla a la par de ellos. Eso no permite acumular una experiencia ni un campo de reflexión, necesarios para la política.

Lo coyuntural puede ser asumido como novedad, como algo que sucede en el momento; en este sentido, lo que viviríamos es una sucesión de coyunturas igualmente pasajeras. Los medios se encargan de fabricar esa visión de lo coyuntural; eso forma parte de su razón de ser: los medios convierten los hechos

económicos, sociales, políticos, en elementos espectaculares, sin diferenciar lo que realmente importa de lo aleatorio. La coyuntura es, en este sentido, lo que llama la atención y se comenta por un tiempo, para después desaparecer de la escena. Desde la perspectiva de las ciencias sociales críticas, lo coyuntural está más bien relacionado con el acontecimiento, y esto con lo que marca un momento de inflexión o de cambio. ¿Hasta que punto los hechos de abril pueden ser pensados de ese modo? La llamada “insurrección de los forajidos” ha sido, en buena medida, banalizada por los publicistas y secuestrada por los políticos. En cuanto a los científicos sociales, la mayoría se ha dejado llevar por lo utilitario y no se detiene a pensar en este tipo de acontecimientos.

Íconos quiere impulsar a pensar de otro modo la coyuntura. Por el momento hemos hecho una convocatoria amplia de artículos para analizar lo sucedido en abril. Lo que hemos logrado, en realidad, son atisbos, entradas desde distintos escenarios, puntos de partida realizados desde diversas ópticas. Lo que está en discusión en unos casos es el sentido de la revuelta; en otros, los límites de las instituciones o el juego de fuerzas. Las perspectivas de análisis, los métodos y las valoraciones también difieren. Se trata de una primera entrada a un tema complejo pero necesario. Lo más interesante sería desarrollar a partir de aquí un debate, pero también iniciar un trabajo de mayor aliento que de a estos hechos una profundidad histórica; que los relacione con las formas de funcionamiento de la cultura política en el largo y mediano plazo, y con lo que ha sucedido y sucede en otros lugares a más de Quito, como en ciudades intermedias del Oriente, la Costa y la Sierra, o en Guayaquil y Cuenca. Además, lo acontecido en Quito constituyó un importante movimiento ciudadano -no importa cuan fugaz haya sido- que debería ser comparado con lo sucedido en otras ciudades de Latinoamérica como La Paz o Buenos Aires. Es cada vez más difícil pensar la coyuntura desligada de un juego más amplio de fuerzas y desconectada de esos procesos que, aun cuando se producen en localidades, tienen una dimensión y un significado global.

Eduardo Kingman Garcés
Director de *Íconos*

ÍCONOS

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

No. 23, septiembre 2005
ISSN 1390-1249
CDD 300.5 / CDU 3 / LC H8 .S8 F53
Vol 9, Issue 3, September, 2005
Quito - Ecuador

Sumario

Editorial 3-4

Coyuntura

¿Influyen los precios del petróleo en el alza de los Global 12?
Una reflexión de coyuntura sobre el endeudamiento externo ecuatoriano 9-15
Fander Falconí y Juan Ponce Jarrín

Dossier

La caída de Gutiérrez y la rebelión de abril
Presentación del Dossier 19-26
Felipe Burbano de Lara

La frágil legitimidad del príncipe democrático 27-36
Catalina Pazmiño

Ecuador: cuando la inestabilidad se vuelve estable 37-44
Simón Pachano

**La crisis del sistema político ecuatoriano
y la caída de Gutiérrez** 45-52
Julio Paltán

**El fervor democrático quiteño:
¿un mito, un sueño o algo sustancial?** 53-62
Teodoro Bustamante

**“Lo que pasó en Ciespal” Apuntes etnográficos sobre el poder,
los medios y los sin-sentidos de la violencia** 63-82
Edison Hurtado Arroba

Insurrección, legitimidad y política radical 83-92
Franklin Ramírez Gallegos

El 20 de abril: presente y pasado de un proyecto militar corporativo 93-100
Bertha García Gallegos

El regreso de Abdalá 101-108
Carlos de la Torre

Debate

Persona, religión y jerarquía 111-114
Comentarios al Dossier de ÍCONOS 22
Eduardo Khon

Diálogo

Ciencias políticas y trabajo de campo
Diálogo con Liisa North 117-124
Luciano Martínez

Temas

¿La ciudad puede llegar a ser educadora? 127-140
Patricia Pérez

Reseñas

Magdalena León, editora
Nadando contra corriente. Mujeres y cuotas en los países andinos 143-145
Andrés Mejía Acosta

Fander Falconí y Julio Oleas, compiladores
Economía ecuatoriana 145-147
Enrique Sierra C.

Javier Ponce Leiva, editor
La seguridad del Ecuador. Del 11 de septiembre al Plan Patriota 147-149
Carla Álvarez

Franklin Ramírez Gallegos
La insurrección de abril no fue sólo una fiesta 149-152
Álvaro Campuzano Arteta

Mauro Cerbino, editor
**Violencia en los medios de comunicación, generación
noticiosa y percepción ciudadana** 152-154
Carlos Tutiven Román

Política editorial 156
Normas para la presentación de originales 157

COYUNTURA



¿Influyen los precios del petróleo en el alza de los Global 12?

Una reflexión de coyuntura sobre el endeudamiento externo ecuatoriano

Fander Falconí Benítez y Juan Ponce Jarrín¹
Profesores-Investigadores de Flacso-Ecuador

Mail: ffalconi@flacso.org.ec

Mail: jponce@flacso.org.ec

Fecha de recepción: junio de 2005

Fecha de aceptación y versión final: agosto de 2005

Resumen

Este artículo pretende establecer la relación entre determinadas medidas de política económica interna y la cotización de la deuda externa en el mercado secundario internacional. Concretamente, indaga en la vinculación entre los precios del petróleo, los cambios en la normativa legal y la cotización de los Bonos Global 12 en el caso ecuatoriano. Mediante la utilización de técnicas econométricas, se llega a la conclusión que la creación del Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP) en junio de 2002 fue el detonante principal para la elevación de los Bonos Global 12, lo cual favoreció evidentemente a los tenedores de papeles de deuda.

Palabras clave: FEIREP, endeudamiento público, bonos global, Ecuador

Abstract

This article pretends to establish the relationship between certain internal economic policies and the price of the external debt in the international secondary market. Specifically, this study searches the linking between oil prices, the changes in legal norms and the prices of Global 12 Bonds in the Ecuadorian case. With the application of econometric techniques, the authors reach the conclusion that the creation of the “Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público-FEIREP” (Stabilization, Social and Productive Investment, and Public Debt Reduction Fund) on July 2002 was the main reason for the raise in the price of Global 12 Bonds, which evidently favored debt paper holders.

Keywords: FEIREP, public debt, Global Bonds, Ecuador

1 Los autores agradecen los comentarios de varios analistas e investigadores a una versión preliminar de este documento.

Los vaivenes del endeudamiento público

La deuda externa pública y su pago es quizá uno de los factores más desequilibrantes de la economía ecuatoriana. Las renegociaciones y los programas de pagos comprometidos en diversos esquemas como el Plan Baker en los ochenta y el Plan Brady, fracasaron estrepitosamente. Éste último se vino abajo en la crisis de 1999, cuando Ecuador declaró moratoria de los bonos durante el régimen demócratacristiano de Jamil Mahuad. Entonces, producto de la renegociación de los bonos Brady en el año 2000, se canjearon por los llamados Bonos Global 12 y Global 30.

El gobierno de Mahuad estuvo signado por el conflicto social y político. Jamil Mahuad gobernó entre agosto de 1998 y el 21 de enero del año 2000, cuando una revuelta social y militar le obligó a renunciar. El fenómeno de El Niño, la irresponsabilidad financiera, el desgobierno y la corrupción condujeron al país a la peor crisis de su historia económica. En diciembre de 1998 el gobierno garantizó ilimitadamente los depósitos en el sistema financiero. La flamante autonomía del Banco Central del Ecuador saltó en pedazos. La emisión monetaria se desbocó, lo que no impidió la quiebra del 50% de los bancos, pero imposibilitó seguir pagando los bonos Brady (Falconí y Oleas 2004). En julio de 1999 se bloquearon los flujos internacionales de capital y al final del año el producto interno bruto había caído más del 7%. Este fue el escenario para implantar la dolarización en enero de 2000. Con la caída de Mahuad, asumió el poder el vicepresidente Gustavo Noboa, quien estuvo al frente de la presidencia entre enero de 2000 y enero de 2003.

En junio de 2002, ya durante el gobierno de Noboa, se promulgó la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal (LOREYTF). Esta ley priorizó el pago del servicio de la deuda externa y su recom-

pra y además, al colocar un tope de 3.5% de crecimiento anual real, limitó el crecimiento de gasto primario, que incluye inversión social. Las preasignaciones de ley redujeron prácticamente a cero la posibilidad de ejercer política discrecional anti-cíclica. Si la dolarización fue una camisa de fuerza para una política monetaria alienada por el salvataje bancario, la LOREYTF redujo al Ministro de Economía y Finanzas a la calidad de cajero del gasto público (Falconí y Oleas 2004).

La deuda pública se situó en US\$ 11,062 millones a diciembre de 2004. Durante 2004 el servicio de la deuda pública (amortizaciones e intereses efectivos) representó el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), el 20% de las exportaciones totales, el 39% de las ventas externas de petróleo crudo y el 31% de los ingresos corrientes y de capital del presupuesto del gobierno. El endeudamiento privado ha introducido nuevos elementos de perturbación. La deuda privada se situó en cerca de US\$ 5.949 millones en diciembre de 2004, un crecimiento significativo desde el inicio de la dolarización (en el 2000 se ubicó en US\$ 2.229 millones). En el gráfico 1 se muestra la evolución de la deuda pública y privada.

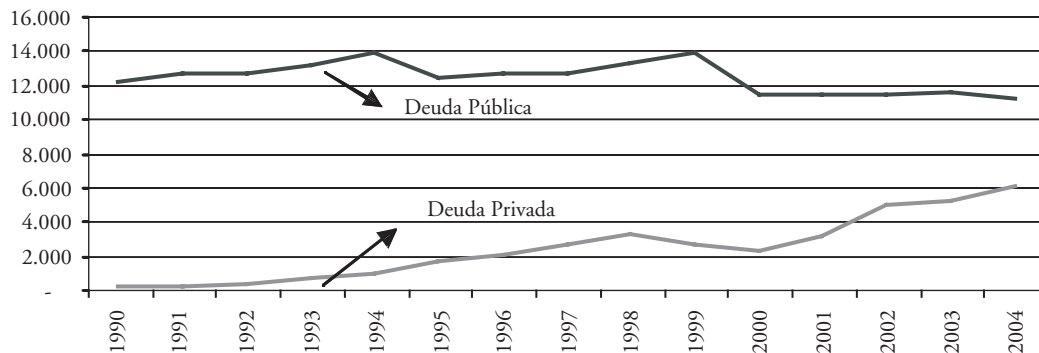
Del total de la deuda pública, el 38% es con organismos internacionales y 11% con el Club de París. La deuda con bancos es 37% del total². De ella 35% está en el mercado en bonos Global 12 y 30. Los montos de los bonos Global ascienden a US\$ 2.700 millones para los de 30 años plazo (Global 30) y US\$1.250 millones para los de 12 años plazo (Global 12).

El FEIREP y su efecto en la cotización de los Bonos Global 12

Luego de la caída de Mahuad, el gobierno de Noboa y del recientemente depuesto presidente Lucio Gutierrez mantuvieron la política de

² Ver BCE: www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000269

Gráfico 1
Evolución de la deuda pública y privada (Millones de dólares)



Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: los autores

endeudamiento y concretamente conservaron el Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP). Tras la destitución de Gutiérrez en un nuevo levantamiento social en abril de 2005, su vicepresidente, Alfredo Palacio asumió el gobierno. Una de las primeras acciones de su Ministro de Economía y Finanzas, Rafael Correa, fue reformar el FEIREP por inconveniente a los intereses nacionales³. Esto fue aprobado con modificaciones por el Congreso Nacional en julio del presente año. Con esto se desarmó la estructura de un esquema de ahorro que privilegiaba el servicio de la deuda, marginando la inversión social.

A propósito de la reforma al FEIREP, en la actualidad existe un debate alrededor de las causas que han provocado un aumento en los precios de mercado de los bonos Global 12 y Global 30. Como se indicó, los montos de los bonos Global ascienden a US\$ 2.700 millones para los de 30 años plazo (Global 30) y US\$ 1.250 millones para los de 12 años plazo (Global 12). Las tasas de interés se elevan paulatinamente para los Global 30 en un 1%

anual, desde 4% hasta alcanzar un máximo de 10%, mientras que los Global 12 tienen una tasa fija de 12% anual.

El mercado financiero internacional reaccionó con la elevación sostenida del precio de estos bonos, ante la promulgación de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal (LOREYTF) (junio de 2002), la cual garantizaba el pago del servicio de la deuda pública y la recompra de deuda externa pública externa e interna a valor de mercado con fondos específicos provenientes de los recursos petroleros –a través del FEIREP-. Desde entonces, la rentabilidad generada por los bonos Global 30 y 12 años en el mercado secundario superó a fines del 2004 el 100%, tomando en consideración que a septiembre de 2002 cotizaban respectivamente con un 62% y 47% de descuento sobre su valor nominal. El valor de mercado de los bonos Global 30 se incrementaron significativamente e inclusive los bonos Global 12 sobrepasaron su valor nominal.

Se ha convertido en un lugar común, entre muchos analistas económicos, afirmar que el incremento del precio de los bonos se debe al incremento en los precios del petróleo (ver por ejemplo, Crespo y Cuenca 2005) Para

³ *Nota del Editor:* El ministro Correa presentó su renuncia el 4 de agosto de 2005.

comprobar esta afirmación, se ha realizado un estudio econométrico para explicar la relación entre precios del petróleo y los precios de los bonos Global. Para ello, se construye una serie mensual comprendida entre septiembre de 2000 hasta marzo de 2005. Entonces, se cuenta con 55 observaciones, de las cuales 21 corresponden al período anterior al apareamiento del FEIREP (junio 2002), y 34 al período posterior. Se tiene el valor de los bonos Global 12 y del precio del barril del petróleo para cada mes (la información proviene de la Información Estadística Mensual, Banco Central del Ecuador, 2005). En el Cuadro 1 se presenta la media y la desviación estándar de los precios de los bonos y del barril del petróleo para el total de la serie, para el período anterior y posterior al FEIREP.

En promedio, en el período examinado el precio de los bonos Global 12 fue del 79,02% de su valor nominal y el precio del barril del petróleo fue de US\$ 24,77. Antes del apareamiento del FEIREP⁴ el precio promedio de los bonos Global 12 fue del 71,02%, con una desviación estándar de 5,5. Ade-

más, el precio promedio del barril de petróleo fue de US\$ 20,4 con una desviación estándar de 4. Por otro lado, para el período posterior al apareamiento del FEIREP el precio promedio de los bonos Global 12 fue de 83,9% con una desviación estándar de 16,6; en tanto que el precio del petróleo fue de US\$ 27,5, con una desviación estándar de 4,2.

Esta estadística descriptiva permite observar que en el período con FEIREP aumentó, en promedio, el valor de los bonos, así como su variabilidad. También se elevó el precio promedio del petróleo, aunque su variabilidad no experimentó modificaciones importantes.

En el gráfico 2 se presenta la evolución de los precios de los bonos Global 12 en el período analizado.

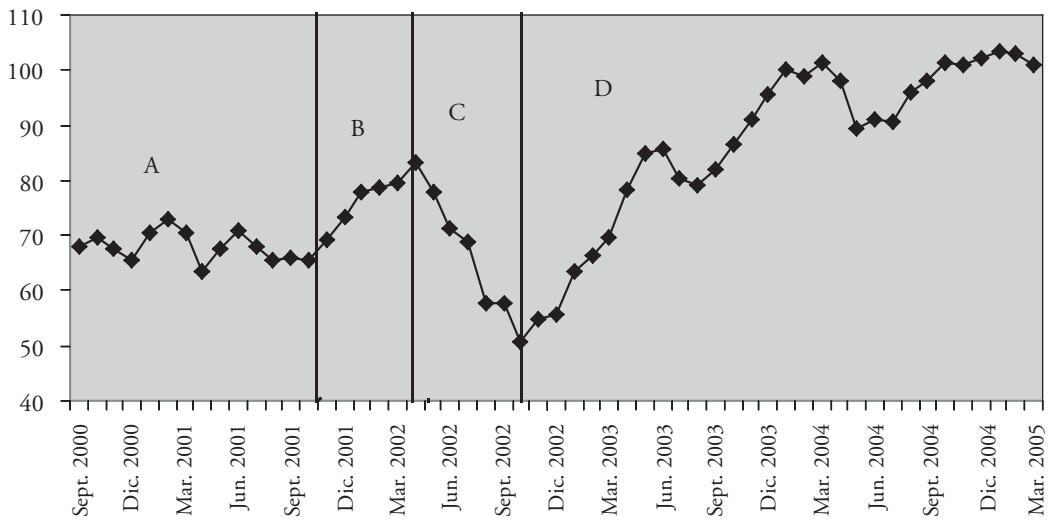
En el gráfico se pueden identificar cuatro momentos en la cotización de los bonos Global a 12 años: a) estabilidad relativa, b) elevación, c) tendencia hacia la baja, d) alza sostenida posterior al apareamiento del FEIREP.

Para tener una idea más clara de la relación entre precio de los bonos y el precio del petróleo, se realizó un análisis econométrico. Se presentan los resultados de tres especifica-

4 Entre septiembre de 2000 a mayo de 2002.

Cuadro 1			
Precio de bonos Global 12 y del barril de petróleo			
Promedio y desviación estándar			
Todo el período	Promedio	Desviación Estándar	No. Casos
Global 12	79.02	14.86	55
Barril Petróleo	24.77	5.36	55
Antes del FEIREP			
Global 12	71.02	5.54	21
Barril Petróleo	20.39	3.97	21
Con FEIREP			
Global 12	83.97	16.64	34
Barril Petróleo	27.48	4.20	34
Fuente: BCE, 2005 Elaboración: los autores			

Gráfico 2
Evolución del precio de los Global 12



Fuente: Banco Central del Ecuador, 2005
Elaboración: los autores

Cuadro 2
Modelos econométricos
Precio de bonos Global 12 en función del precio del petróleo

Var Dep: Precio Global	Especificac. 1	Especificac. 2	Especificac. 3
Precio Petróleo	1.46*	-0.31	2.02*
Constante	42.72*	77.50*	28.24
R ²	0.28	0.052	0.262
Suma residuos al cuadrado	8596.21	581.22	6744.54
Durbin Watson	0.22	0.41	0.31
No. Observaciones	55	21	34

* Significativo al 99%.
Fuente: BCE, 2005
Elaboración: los autores

ciones distintas. En todos los casos, la variable dependiente es el precio de los bonos Global 12 y la variable independiente es el precio del petróleo. La primera especificación abarca todo el período de análisis, la segunda especificación se refiere solo al período anterior al FEIREP, y la tercera regresión se refiere al período posterior al FEIREP. Los resultados se aprecian en el cuadro 2.

Si se analiza la regresión para todo el período (especificación 1) se observa que el precio del

petróleo influye positiva y significativamente en los precios de los bonos Global 12. Un aumento del precio del petróleo de un dólar, está relacionado con un incremento del precio de los Global 12 de 1,5%. Sin embargo, esta regresión asume que los parámetros del modelo son los mismos para el período anterior y posterior al apareamiento del FEIREP⁵.

5 Se realizó un Test de Chow para examinar si la restricción impuesta es válida (de igualdad de los parámetros

La especificación 2 muestra los resultados de la regresión para el período anterior al FEIREP. Se determina que el precio del petróleo no tiene ningún efecto estadísticamente significativo, e incluso el signo del coeficiente es negativo.

La especificación 3 muestra los resultados para el período posterior al apareamiento del FEIREP. En este caso, el coeficiente es estadísticamente significativo y tiene una relación positiva.

Cuando se trabaja con series de tiempo generalmente se presentan dos problemas: que las series no sean estacionarias, y que exista un problema de autocorrelación en los errores. Afortunadamente existen *tests* econométricos para detectar estos problemas y procedimientos específicos de corrección. En el caso de la autocorrelación, el valor del Durbin Watson, incluido en la tabla anterior, indica que en las tres especificaciones existe autocorrelación. El principal efecto de la autocorrelación es que los errores estándares de los estimadores no son los adecuados y por tanto hay problemas con la inferencia estadística. Un efecto similar se presenta

en el caso en que las dos series no sean estacionarias. Se aplicó el *test* de Dickey y Fuller para examinar si las series son estacionarias, y se encontró que las dos series no son estacionarias⁶.

Con base en las pruebas estadísticas realizadas, a continuación se presentan los resultados de estimaciones que corrigen los problemas anteriores. En el cuadro 3, se presentan los resultados con corrección por autocorrelación. Las especificaciones son las mismas que en el cuadro 2, esto es, la primera especificación se refiere a todo el período, en tanto que la segunda y la tercera se refieren al período antes de y después del FEIREP respectivamente.

En esta tabla se puede apreciar que, después de corregir por autocorrelación, no existe una asociación estadísticamente significativa entre el precio del petróleo y los bonos Global 12. Dicha conclusión se mantiene para todo el período, así como para los períodos anterior y posterior al FEIREP.

Para corregir el problema de la no estacionariedad se suele trabajar con las primeras di-

en los dos períodos), y se rechazó la hipótesis nula (de igualdad de los parámetros). Lo anterior significa que se deben correr regresiones por separado para cada período. Por ello se corrieron las especificaciones 2 y 3.

6 Sin embargo, aún cuando se tiene series estacionarias se puede usar los errores estándares obtenidos en los modelos sin ningún problema siempre y cuando las dos series estén cointegradas. Después de realizar los respectivos tests se encontró que las series no están cointegradas.

Cuadro 3			
Modelos econométricos con corrección por autocorrelación			
(Regresión Cochrane Orcutt)			
Var Dep: Precio Global	Especif. 1	Especif. 2	Especif. 3
Precio Petróleo	-0.12	0.03	-0.22
Constante	122.70*	73.11*	150.16*
R2	0.01	0.0005	0.0218
Durbin Watson original	0.22	0.41	0.31
Durbin Watson transformado	1.41	1.65	1.40
No. Observaciones	55	21	34
* Significativo al 99%			
Fuente: BCE, 2005			
Elaboración: los autores			

Cuadro 4
Modelos econométricos con primeras diferencias

Var Dep: Dif.Precio Global	Específic. 1	Específic. 2	Específic. 3
Dif_Precio Petróleo	-0.139	-0.015	-0.189
Constante	0.639	0.496	0.762
R cuadrado	0.01	0.00	0.0148
Durbin Watson	1.43	1.79	1.31
No. Observaciones	55	21	34
* Significativo al 99% Fuente: BCE, 2005 Elaboración: los autores			

ferencias de las variables originales. Los resultados, para las tres especificaciones, se presentan en el siguiente cuadro, y confirman que no existe ninguna relación significativa entre el precio del petróleo y el precio de los bonos Global para ningún periodo.

Conclusiones

En resumen, los resultados presentados inicialmente indican que en todo el período hay una relación positiva entre precio del petróleo y el precio de los bonos. Sin embargo, una vez que se divide a la serie en dos períodos, antes y después del FEIREP, se observa que la relación es significativa y positiva sólo para el período posterior al FEIREP.

El problema con estas estimaciones es que pueden presentar una relación espúrea en la medida en que las series sean no estacionarias o la regresión presente problemas de autocorrelación. Una vez corregidos dichos problemas se encuentra que no existe ninguna asociación estadísticamente significativa entre el precio del petróleo y el de los bonos para ningún período.

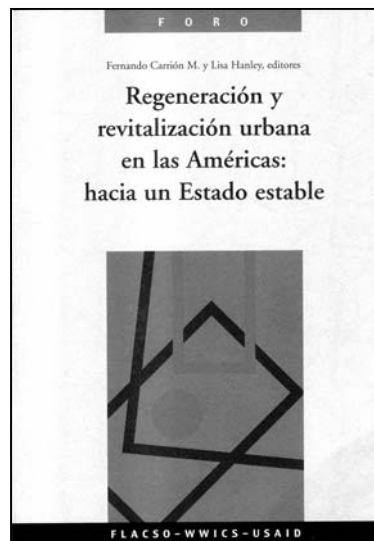
Esta reflexión no trata de explicar de manera exhaustiva el comportamiento de los bo-

nos Global 12. Para ello sería necesario un estudio más profundo que tome en cuenta todos los posibles determinantes. Lo único que se ha pretendido es explorar la relación entre precio de los bonos Global 12 y precio del petróleo. La principal conclusión es que no existe una relación estadísticamente significativa entre las dos variables, y que la creación del FEIREP fue el elemento clave que motivó el alza de los bonos Global 12.

Bibliografía

- Banco Central del Ecuador, 2005, *Información Estadística Mensual No. 1840* (junio 13), BCE, Quito.
- Crespo, Ramiro y Carlos Cuenca, 2005, *Ecuador Weekly Report*, Analytica Investments LTD (semana del 1 al 7 de junio).
- Falconí, Fander y Julio Oleas, 2004, *Antología de economía ecuatoriana*, Flacso-Ecuador, Quito.
- Ley orgánica de responsabilidad, estabilización y transparencia fiscal –LOREYTF- (4 de junio de 2002). Disponible en: <http://www.bce.fin.ec/FEIREP/docs/BaseLegal/LeyTrans211204.pdf>

Ediciones de FLACSO - Ecuador



Serie FORO

Regeneración y revitalización urbana en las Américas: hacia un Estado estable

Editores: Fernando Carrión y Lisa Hanley

FLACSO-Ecuador - 2005

Los procesos urbanos tienen hoy en día una importancia significativa en la constitución de estados estables y economías sustentables. Visión importante porque hasta ahora la temática urbana había sido vista más como tributaria de las determinaciones estructurales de las instituciones públicas y sus políticas, y muy poco desde una perspectiva inversa donde ella puede aportar al desarrollo económico, a la estabilidad política y al fortalecimiento cultural. Esta propuesta nos lleva a preguntar: ¿Cómo un proyecto urbano puede aportar al fortalecimiento institucional? ¿Cómo la renovación urbana puede ser componente importante de un proyecto nacional que conduzca a la construcción de estados legítimos y estables?

O

DOSSIER

Las fotos de Julio García sobre la rebelión de abril

Julio García murió en la calles de Quito el 19 de abril de 2005 a causa de un paro respiratorio provocado por los excesivos gases lacrimógenos que disparó la policía contra los manifestantes. Como un tributo a su memoria, publicamos a lo largo de este dossier de Íconos las fotografías que él captó en las jornadas de abril.

El 19 de abril de 2005 Julio García se despertó con el ánimo de registrar con su cámara las protestas que se vivían en Quito. Mientras tanto, Gutiérrez y sus asesores amanecieron planeando la estrategia para pretender continuar en el poder. En la tarde, Julio revisó su cámara, recargó las baterías, colocó palos en los carteles que elaboramos con nuestras pequeñas ciudadanas. Salimos hacia la Cruz del Papa. Él, comprometido en el registro de imágenes de estas luchas impor-



tales, y yo, como mujer y madre, queríamos unirnos a las otras voces, a reclamar por el derecho a vivir en un país libre de corrupción, nepotismo, abuso y mentira. Compartimos la emoción de niños, jóvenes, mujeres y hombres que nos convocábamos nuevamente. La marcha avanzó hacia el Centro. Nos despedimos en la Colón y Amazonas. Las niñas y yo regresamos a nuestro hogar, y él continuó firme en su compromiso de captar -con su ojo mágico y su sensibilidad- los rostros y las situaciones que hoy forman parte de la memoria histórica de este pueblo quiteño. Julio ya no está. Se quemó los pies hasta entregar su preciosa vida. Pero Julio, para nosotras, está presente de otra forma. Está reflejado en las miles de imágenes que captó con sus lentes. Y es que sus fotos no fueron sólo sobre los forajidos. Las imágenes que nos dejó hablan de la riqueza natural de este país, del crisol de razas que nos enorgullecen, del esfuerzo de la gente pobre y sencilla por vencer las limitaciones de la pobreza dignamente, de sus luchas por vivir en paz y ser felices en su propia tierra. Por eso me encanta hablar del Julio, porque es hablar de una persona que durante su vida se interesó por el ser humano. Nos enorgullece profundamente haber sido parte de su vida. Su espíritu sembrador dará fruto porque la belleza no se rinde ante el poder.

Charito Parra

La caída de Gutiérrez y la rebelión de abril

Presentación del dossier¹

Felipe Burbano

Profesor-investigador de Flacso-Ecuador

La caída de Lucio Gutiérrez tiene un enorme interés analítico por las continuidades que muestra de la política ecuatoriana en los últimos años, pero también por una serie de fenómenos nuevos cuya interpretación abre múltiples interrogantes sobre el futuro de la democracia. Parecería que el Ecuador se debate entre el agravamiento de la crisis de inestabilidad iniciada en 1997 con la destitución de Abdalá Bucaram, y el apareamiento de prácticas, discursos, luchas, unidas a nuevos actores sociales, que buscan cambiar las maneras de hacer política. El hartazgo, la frustración y el desencanto, se enfrentan a la búsqueda incesante, conflictiva, de nuevas formas de convivencia social y política. Como toda crisis, la actual no tiene un desenlace claro. Éste será el resultado de la capacidad política de las fuerzas involucradas en la confrontación.

El dossier que presenta *ÍCONOS* está dedicado a reflexionar sobre los alcances y consecuencias de la caída de Gutiérrez. Los artículos exploran diversas facetas del fenómeno: el papel de la clase media quiteña en las movilizaciones de abril, la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas, el apareamiento de formas de protesta no vinculadas a movimientos sociales y partidos políticos, el papel de las Fuerzas Armadas en el ordenamiento político, y la tensión creciente entre una complejidad de actores que im-

men sentidos distintos y contradictorios a la vida política nacional, son algunos de los temas que se abordan. Todos ellos abren perspectivas diferentes de interpretación sobre lo ocurrido.

La caída de Gutiérrez nos lleva a pensar inmediatamente en sus similitudes con las de Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad. Los artículos del dossier subrayan la activación, en los tres casos, de un mecanismo de legitimación de los derrocamientos presidenciales que va más allá del orden constitucional. Detrás de la inestabilidad, una constante. Se trata, en efecto, de la política en las calles, de las movilizaciones que han precedido a cada destitución y que sirvieron para legitimar los relevos presidenciales. Una tensión constante entre los marcos normativos de la democracia, con sus tiempos y límites, y la idea de que la democracia es, finalmente, la expresión de la soberanía popular, dondequiera que ésta se manifieste. Surgen dos preguntas en dirección opuesta. Por un lado, ¿cómo pensar los derrocamientos fuera de los marcos constitucionales? Por otro, ¿qué implicaciones tiene para la democracia el constante abandono de la Constitución en nombre de una difusa soberanía popular expresada en las calles?

El problema va más allá de sostener, de manera bastante general, la tesis de la precariedad institucional de la democracia ecuatoriana. Si bien resulta evidente que las instituciones han perdido la capacidad para organizar y procesar los conflictos sociales, y que los partidos aparecen como los principales res-

¹ Este dossier fue coordinado por Franklin Ramírez, y Felipe Burbano.



ponsables de la degradación política (“que se vayan todos”), la debilidad de las instituciones sólo muestra que en el Ecuador la política se mueve por otros canales, sigue otras lógicas y recurre a otros mecanismos para preservar intereses y privilegios. La continuidad de la crisis plantea como desafío preguntarse qué hay detrás de las débiles instituciones democráticas en el Ecuador.

De las tres experiencias recientes hemos aprendido que los relevos presidenciales son el resultado de pérdidas progresivas e insalvables de legitimidad de los presidentes, como plantea Catalina Pazmiño, acompañada de procesos de movilización social. Hay dos temas importantes que se analizan en el dossier sobre este punto: el primero, si fueron los mismos sectores sociales los que se movilizaron en las tres coyunturas. La conclusión, en palabras de Simón Pachano, es que no se puede identificar un actor socio político como

sujeto de los tres golpes. Los indígenas fueron protagonistas en las caídas de Bucaram y Mahuad, pero estuvieron ausentes en la última. Las clases medias no aparecieron en las movilizaciones contra Mahuad. Tampoco se puede establecer determinaciones similares en los derrocamientos. La caída de Mahuad estuvo presidida por una larga crisis económica; la de Gutiérrez ocurrió en un momento de estabilidad. Los relevos han afectado a políticos de signo tan opuesto como el moderno y muy racional Jamil Mahuad, y al loco e incontenible Abdalá Bucaram. Afectó a políticos de la costa y la sierra, a un miembro de la elite blanca y a un mestizo de origen popular. Dicho de modo directo, nadie se salvó.

El segundo tema va a contrapelo del primero. Se lo puede formular desde una pregunta: ¿los sucesivos relevos no expresan distintas maneras de redefinir la forma cómo las instituciones y los actores centrales de la polí-

tica conducen el Estado y se relacionan con la sociedad? ¿No hay, más allá de las particularidades de cada caso, un problema general con la política que reaparece una y otra vez?

Franklin Ramírez acude al concepto de “insurrección ciudadana” para referirse a las movilizaciones de abril. Con esa definición quiere diferenciarlas de las formas convencionales de oposición reconocidas por las democracias institucionalizadas. Mientras estas últimas se ejercen dentro de los límites fijados por el propio sistema político, la insurrección se genera en la exterioridad del sistema y tiene la capacidad de cuestionarlo como un todo. Se trataría de una insurrección respecto del “poder instituido”. No se puede desconocer la legitimidad de esas otras formas de ejercer la crítica a la dominación en sociedades donde las instituciones democráticas no tienen la capacidad para procesar las luchas en contra de la exclusión y la desigualdad. La insurrección, según Ramírez, constituye una suerte de ejercicio de la soberanía popular para establecer un control social sobre la política. Una suerte de “ciudadanía activa” que pretende constituirse en un medio de regulación y producción democrática. Los presupuestos de esa afirmación pueden aparecer como debilidades. Mirar las movilizaciones como expresiones de anhelos ciudadanos por construir la democracia, como si entre ellas no se habría dado motivaciones muy diferentes, resulta arriesgado. De otro lado, si miramos en retrospectiva lo ocurrido desde la caída de Abdalá Bucaram hasta la crisis de abril 2005, difícilmente se podría admitir una capacidad de esas insurrecciones para reconstituir la institucionalidad y democratizar la sociedad. Ramírez sostiene que la insurrección se afirma en la política ecuatoriana como un “derecho conquistado de la ciudadanía”; se ha instalado en el ordenamiento democrático ecuatoriano como una rutina de acción colectiva que se expresa en momentos de franca degradación de la política institucional. El desafío

dependerá de la capacidad para transformar las presiones episódicas en acumulados políticos e institucionales desde los cuales provocar una efectiva redistribución del poder político y social.

A contramano, Teodoro Bustamante intenta desmitificar precisamente aquellas visiones que interpretan los acontecimientos de abril como una confrontación entre el mundo corrupto y perverso de la política, y un movimiento forajido que encarna una ciudadanía más o menos constituida, con capacidad para inaugurar una nueva política. El riesgo de esta visión es caer en la trampa interpretativa de la traición: los movimientos ciudadanos son burlados, secuestrados, por una elite política cuya perversidad no tiene límites. La visión que opone a buenos contra malos, para simplificarla, se viene abajo si los buenos no son tanto como se los pinta; si los forajidos, predominantemente sectores de clase media quiteña, se movilizaron en abril para defender sus intereses y privilegios frente a un gobierno que los desplazaba. La clave estaría en comprender los dilemas y amenazas a los que se enfrentó la clase media quiteña. En una sociedad estamental, de corte feudal como la llama Bustamante, los privilegios del poder político deben distribuirse de acuerdo con un principio jerárquico. Dentro de esa lógica, violentarlo, alterarlo, sólo puede provocar una incomodidad general, un sentimiento de vulnerabilidad especialmente en los sectores medios. La osadía de un grupo social subordinado de atribuirse lugares dentro de la jerarquía que le están vedados, que asume roles que no les corresponde, y rompe con las jerarquías tradicionales, incomoda y desconcierta a todos. El gobierno de Gutiérrez trastocaba el mundo de la clase media - sus valores de ascenso y reconocimiento - al utilizar el Estado como un aparato desde donde sectores subordinados de la estructura social accedían a beneficios y privilegios.

El argumento merece mayor análisis. Se

reconoce que tanto en la caída de Bucaram como en la de Gutiérrez las movilizaciones sociales fueron protagonizadas principalmente por la clase media. Los dos presidentes, a su turno, manejaron un discurso de corte populista en el cual esos sectores no encuentran un espacio. La retórica populista enfrenta al pueblo, representado por el líder, contra la oligarquía. El Estado es un instrumento para golpear a la oligarquía y privilegiar al pueblo. La clase media queda excluida. Dos precisiones son necesarias. La primera, identificar bien dónde se encuentra esa clase media movilizada. Si consideramos el movimiento forajido, concluiremos que se encuentra sólo en Quito. Esto es muy importante porque revela la diferencia de la capital con respecto al resto del país -quizá con la excepción de Cuenca- y plantea límites severos al movimiento ciudadano, si existe, en el contexto nacional. La sola constatación, por ejemplo, limita el argumento de Ramírez o lo hace más problemático pensado desde el heterogéneo escenario nacional. En segundo lugar, habría que preguntarse, tanto en las movilizaciones contra Bucaram como contra Gutiérrez, las articulaciones entre la clase media quiteña y las clases altas. No hay ninguna duda de que existen vínculos, de la presencia de unos vasos comunicantes, de espacios identitarios compartidos -por ejemplo, la ciudad-, aunque la que salga a las calles sea la clase media. De todos modos, habría que preguntarse qué les une y que les separa.

Bustamante plantea un argumento muy sugestivo. Se pregunta si el discurso de la democracia no es apenas una retórica de los sectores medios (quiteños) para defender, desde las ideas abstractas del Estado de derecho, la ciudadanía, los derechos universales, su lugar en el orden social. Me parece muy interesante el argumento. El discurso de la democracia se agota cuando la clase media asegura su posición en la estructura social, aún cuando sea con reconocimientos y posibilidades subordi-

nadas de ascenso y movilidad. Lo mínimo a lo que aspira es a echar del poder a quien pone en riesgo, frente a las elites y frente al pueblo, su propia ubicación social. La conclusión de este planteamiento lleva el debate a un terreno totalmente distinto: nada hay de democrático en las luchas de las clases medias. O si se quiere, para continuar con el argumento de Bustamante, esas luchas democratizadoras se ven limitadas por la presencia de una estructura social feudalizada, donde las clases altas tienen una enorme capacidad para preservar los rangos jerárquicos y los privilegios, aunque sea en un orden político degradado y siempre amenazante. El orden social se sustenta en un principio de respeto jerárquico: "Cada quien debe saber a quien puede atropellar, qué atropellos puede sufrir, y qué apoyos debe buscar para minimizar estos riesgos". Pachano sostiene que la clase media actúa cuando tiene una percepción de peligro y amenaza, como ocurrió con Bucaram y Gutiérrez. Le asigna a la clase media la función de anticuerpo que actúa cuando percibe la presencia de elementos extraños al sistema, como Bucaram y Gutiérrez; un anticuerpo que se moviliza para restablecer el equilibrio del sistema. Habría que preguntar, por un lado, ¿de qué equilibrio se habla? Y de otro, ¿por qué considerar a Bucaram y Gutiérrez como extraños al sistema? Todo sistema opera sobre unas líneas de exclusión, pero es evidente que en el caso ecuatoriano esas líneas hace tiempo que se volvieron difusas en el campo de la política. Distinto sería sostener que el equilibrio guarda relación con la idea de un orden social jerarquizado, donde la clase media encuentra algún espacio.

Gutiérrez, las FF.AA. y la política

El gobierno de Gutiérrez no se puede entender fuera de la relación de las Fuerzas Armadas con la política nacional. No debemos ol-



vidar que el Ecuador eligió a un ex coronel del ejército como presidente de la República. Si lo pensamos desde los ideales de la transición democrática de 1979, ese solo hecho revela la desaparición de la frontera que separaba al poder militar del civil. Esa frontera se removió en 1997 cuando las FF.AA. intervinieron en la caída de Bucaram. Fue el episodio que rompió con el pacto de la transición de 1979 y nos devolvió, en parte, a la tradición anterior. Tres años después de caída de Bucaram, se produjo la alianza de los coroneles con los indígenas para provocar la salida de Mahuad. La alianza intentó, recordémoslo, constituir un gobierno de salvación nacional, conformado por civiles y militares. El episodio fue cantinflasco -como lo definió Mahuad- pero revelador de cuánto se alteraron las relaciones entre civiles y militares. Las investigaciones revelaron más adelante que en esa alianza estuvieron involucrados algunos

generales, lo cual quiere decir el 21 de Enero fue bastante más que un alzamiento de coroneles.

No haber puesto la suficiente atención sobre esta trayectoria de la política ecuatoriana desde la caída de Bucaram, provocó una enorme sorpresa frente al triunfo presidencial de Gutiérrez. Su victoria tuvo como soporte al movimiento indígena y a Sociedad Patriótica, partido que representa la incorporación de una organización de militares al sistema político ecuatoriano. Bertha García sostiene que el ideario de Sociedad Patriótica “reproduce la versión politizada y tecnocrática de la seguridad nacional, aquella que llega a justificar la intervención militar directa en la política”. Gutiérrez llenó la administración pública de militares (Pacifictel, Petroecuador, Andinatel, las aduanas, el Fondo de Solidaridad, el IESS). Al mismo tiempo, intervino de modo directo en las Fuerzas Armadas para tener un

mando leal al presidente y a su gobierno. Los cuarteles se convirtieron en las tribunas preferidas del ex presidente para criticar a los políticos y pedir el respeto de las FF.AA. a la Constitución. Gutiérrez quería curarse en sano. Tenía plena conciencia de la precaria legitimidad de su gobierno. Sabía, también, que los gobiernos dependen, en última instancia, del respaldo de las Fuerzas Armadas.

Pero entre Gutiérrez y los militares hubo más que un juego de conveniencias mutuas para preservar sus intereses políticos e institucionales. Bertha García sostiene que las FF.AA. consideraron al gobierno de Gutiérrez como un gobierno militar. Había, por lo tanto, que “arrimar el hombro”. La idea de un gobierno militar se sustenta en una premisa: la incapacidad de los civiles para gobernar el país. Su discurso se ha matizado ligeramente en los últimos años para focalizar las críticas en los partidos políticos. De esta manera, los militares empatan con ese sentimiento de malestar ciudadano en contra de la clase política. Hay un puente constante que se tiende entre militares y civiles descontentos con la democracia. La identificación erosiona la legitimidad de las instituciones democráticas y lleva la política al campo de lo popular. Desde los años 60, los militares siempre intentaron arrebatarle al populismo la representación de lo nacional popular en contra de la oligarquía. Varios son los fenómenos que se desprenden de este prejuicio militar hacia los civiles: el papel tutelar que asumen frente a la política, percibirse como el corazón del Estado y encarnar el principio de unidad y soberanía nacional. Bertha García afirma que subsiste en el Ecuador un proyecto militar que se empeña en rescatar de manera recurrente los éxitos de las dictaduras, especialmente la de los años 70. Gutiérrez expresaba un intento por realizar ese proyecto militar en un contexto social y político distinto, y bajo el ropaje de un gobierno civil. Existe una continuidad ideológica -como la llama García- del proyec-

to militar para la sociedad ecuatoriana; un proyecto que no fue, según ella, abandonado con la transición a la democracia en 1979.

La presencia de “lo militar” en el gobierno se expresaba también en una forma de relacionarse con la oposición. García hace notar que la práctica política de Gutiérrez seguía la lógica militar del “ablandamiento”; esto es, desplegar de manera permanente un conjunto de “operaciones psicosociales” con el fin de “ablandar” a cualquier “enemigo externo”. Utilizó esas tácticas en contra de periodistas, diputados de la oposición, editorialistas, dirigentes indígenas y al final de su mandato contra León Febres Cordero, la oligarquía corrupta, los quiteños pelucones y aniñados (blancos por fuera, corruptos por dentro). En las semanas finales del gobierno, su lenguaje fue el de las contramarchas, en este mismo sentido de ablandamiento de quienes se le oponían. A raíz del intento de destitución por parte del PSC, la ID y Pachakutik en el Congreso, Gutiérrez identificó a sus adversarios y críticos como “enemigos externos”, a los cuales declaró la guerra. Su alianza con Bucaram fue parte de ese juego.

Teodoro Bustamante subraya un hecho importante: el poco respeto a la autoridad del



presidente por parte de sus críticos. A Gutiérrez se le podía decir cualquier cosa. Su figura se volvió extremadamente vulnerable en los espacios de debate público. Algo de la figura de Gutiérrez merecía poco respeto. ¿Su condición de clase? ¿Su condición de coronel? ¿Su condición étnica? El gobierno recurrió a la violencia para defenderse. Desde el grupo Cero Corrupción, que desafió a quienes protestaban delante de la Corte de Justicia, hasta la violencia verbal del propio coronel y de sus colaboradores, donde ocupó un lugar especial el ex ministro de Bienestar Social, Bolívar González. La violencia del gobierno se apartó del uso legítimo de la fuerza por parte de la autoridad, para convertirse en la violencia de una “banda rival”. Así fue interpretado el intento del gobierno de aplastar las protestas de abril en Quito con la llegada a la capital de grupos de matones el 20 de abril. Esa decisión agudizó la sensación de amenaza en contra de los quiteños opuestos al gobierno. Gutiérrez cometió el peor de los errores cuando todas las salidas políticas se le cerraban. Finalmente, perdió la guerra y huyó en el intento.

CIESPAL: el pálido reflejo de lo que vendría

Si algún momento condensa todo el complejo proceso de la caída de Gutiérrez es lo acontecido la tarde del 20 abril en CIESPAL, donde el Congreso se reunió en la mañana para destituirlo y designar a Alfredo Palacio como presidente. Lo que pretendió ser un “relanzamiento institucional” de la democracia, bajo la tutela de los partidos opositores a Gutiérrez, terminó ensombrecido por los acontecimientos que se dieron en la tarde. Palacio estuvo varias horas sin el apoyo de las Fuerzas Armadas; los diputados que se encontraban dentro del edificio de CIESPAL fueron amenazados, golpeados, vejados; se produjeron saqueos; un coronel quiso proclamar un go-

bierno popular; nada deja de hacernos sospechar que allí se produjo un intento de golpe militar, quizá con la intención de convocar a elecciones anticipadas (la salida que le ofreció la cúpula militar a Gutiérrez antes de retirarle el apoyo).

CIESPAL condensa, desde el punto de vista de Edison Hurtado, la disputa de sentido sobre la política ecuatoriana en ese momento tan dramático. Condensa todas las contradicciones, tensiones, sin-sentidos del momento. La complejidad de lo que aconteció al interior del edificio mostraba que la caída de Gutiérrez podía tener muchos desenlaces posibles. Una mirada atenta, como la de Hurtado a lo ocurrido en CIESPAL, muestra que allí se produjo mucho más que un ritual de restauración de la democracia, si admitiéramos que la salida de Gutiérrez tendría ese final feliz. No nos ha quedado claro lo que aconteció en CIESPAL porque los medios minimizaron los acontecimientos mediante un discurso que habló de delincuentes, vándalos, huestes gutierrezistas, turbas de maleantes y salvajismo. Esos “no forajidos”, supuestos infiltrados, aparecieron para arruinar la fiesta democrática y la lucha cívica de la clase media quiteña (que mereció, dicho sea de paso, hasta los elogios de León Febres Cordero). Hurtado muestra cómo el discurso mediático simplificó maniqueamente la realidad. El discurso de los medios se presenta como un intento por construir un sentido ordenador de lo ocurrido, sin interesarse mucho por entender lo que realmente ocurría allí dentro. Edison Hurtado lanza algunas pistas. Una de ellas es la del “poder desamparado”, metáfora con la cual quiere mostrar la precariedad de la autoridad civil. Sin el respaldo de la Policía y las Fuerzas Armadas, Palacio no era nada. El vacío creado por los militares evidenció el chantaje al que está sometido el poder de los civiles, por un lado. Por otro, mostró que el orden descansa, en última instancia, en las Fuerzas Armadas.



Sin su contingente, el país es un caos, una banda de maleantes, con unos políticos que no gozan de ninguna consideración ni respeto de la ciudadanía. Políticos agredidos, vejados, golpeados. “Que se vayan todos”, como también gritó el coronel Servio Samaniego en su arenga golpista. Una segunda lectura es la violencia que allí imperó, con claros contenidos políticos. La violencia muestra la indignación moral hacia los políticos. Al intentar conjurarla, exorcizarla, los medios también querían contribuir a restablecer un orden en el cual los políticos pudieran volver a ocupar un lugar privilegiado, después de un *mea culpa*. Al estigmatizar la violencia en contra de los diputados, confundiéndola con la de una banda de delincuentes, se cerraron

los espacios para comprender la profundidad del malestar frente a la política. También intenta imponer, como dice Hurtado, casi un sentido normativo de la protesta; volver dóciles a los forajidos, civilizarlos a todos, cuando en ese movimiento hubo enorme heterogeneidad. Civilizar a los forajidos para contribuir a un reacomodo de fuerzas, a un simulacro democrático. Toda esa condensación de sentidos contradictorios, imposibles de ser exorcizados, han aparecido semanas después de caído Gutiérrez. Ni se ha restablecido la institucionalidad democrática, ni los políticos han cambiado sus malos hábitos, ni las Fuerzas Armadas se han replegado a sus cuarteles. CIESPAL expresó, de manera condensada, lo que vendría después.

La frágil legitimidad del príncipe democrático

Catalina Pazmiño

Licenciada en Ciencias Públicas y Sociales, UCE
Egresada de la Facultad de Comunicación Social, UCE

Email: katalinapp@yahoo.com.mx

Fecha de recepción: junio 2005

Fecha de aceptación y versión final: agosto 2005

Resumen

La legitimidad del gobernante democrático requiere ser construida para ser obtenida, y necesita ser permanentemente renovada para ser conservada. El problema surge cuando el discurso que le permitió ser considerado la mejor opción en una elección, se contrapone a su gestión gubernamental, debilitando e incluso destruyendo la legitimidad obtenida a través del voto. Este fue el caso de Lucio Gutiérrez, cuya actuación como presidente lo alejó del imaginario y de los relatos que, durante el proceso electoral, lo habían posicionado con una imagen distante a la proyectada por los políticos tradicionales. Esto mermó su legitimidad presidencial, y desembocó en la llamada “rebelión de los forajidos”.

Palabras clave: crisis política, representación, legitimidad, democracia, forajidos

Abstract

Democratic legitimacy needs to be built in order to be gotten and need to be constantly renovated in order to be maintained. But, when government performance is opposed to political discourse, legitimacy gotten through vote is destroyed. It was the case of Lucio Gutiérrez, whose performance as president was far away from the imaginary and the narratives that he built as candidate during the electoral process. Thereby, his legitimacy was shattered, and it lead to the named *rebelión de los forajidos*.

Keywords: political crisis, representation, legitimacy, democracy, *forajidos*

Elección o seducción democrática

Independientemente de las formas de Estado y de las formas de gobierno instauradas en diversos momentos históricos y en distintos contextos culturales, los gobernantes han puesto en escena rituales, narrativas, símbolos y representaciones a fin de conformar un discurso que legitime su poder ante los gobernados. A diferencia del gobernante monárquico cuyo poder estaba reconocido irrefutablemente en base a la “unción divina” y la puesta en escena de su poder sólo afianzaba una legitimidad obtenida *a priori*, el gobernante actual logra su legitimidad *a posteriori* en base a la “unción del voto” (Debray 1995: 20).

La legitimidad del actor político actual requiere ser construida para ser obtenida. En éste afán “el poder ha descubierto que su legitimidad depende de su capacidad de comunicar” (Balandier 1992: 152), una capacidad que no establece como su principal objetivo informar a través de argumentos racionales sino poner en escena, en el nuevo espacio público conformado por los medios, un tipo de discurso que se ha adaptado y ha adoptado la estética propuesta por éstos, especialmente por la televisión. Un discurso que, entonces, puede ser denominado mediático.

Atrás han quedado las propuestas programáticas de gobierno. Apoyado en las propuestas del marketing político, el discurso político actual se presenta más espectacular que nunca, poniendo en escena a un candidato que apela a la emotividad del ciudadano y no a su racionalidad.

Y aunque existen elementos propios de una cultura política determinada que, más allá del discurso, llegan a influir en la intención del voto del electorado, no se debe pasar por alto que es en base al establecimiento de un orden simbólico discursivo que un candidato se posiciona en el imaginario ciudadano como la mejor opción para gobernar. Así, a

través de la seducción mediática el político llega a conseguir su tan ansiada legitimidad. Sin embargo, los efectos de la seducción son efímeros.

Cuando el actor político llega al poder requiere renovar permanentemente su legitimidad para conservarla. El problema surge cuando el discurso mediático resulta insuficiente para mantener esa legitimidad, ya que es durante la gestión de gobierno cuando la acción del gobernante debe imponerse sobre la influencia de su discurso. La falta de propuestas ejecutables de gobierno hace que la praxis del gobernante se contraponga a la construcción simbólica que contribuyó a su legitimación en el poder al punto, incluso, de contribuir a su destrucción.

Un año antes de que se realicen las próximas elecciones presidenciales en el Ecuador resulta pertinente preguntarnos por qué en nuestro país el nivel de confianza, credibilidad, reconocimiento y aceptación de un mandatario, electo a través del voto popular, cae al punto de desembocar en su derrocamiento, como resultado de las presiones de descontento ciudadano. Aunque no desconocemos la existencia de otras estrategias utilizadas por el poder que, más allá del discurso mediático, contribuyen a la búsqueda de legitimación del actor político, los próximos párrafos pretenden hacer una lectura del proceso simbólico que permitió a Lucio Gutiérrez ascender al poder y, en lo posterior, observar su progresiva erosión y los modos en que ello aportó a la caída del ex-mandatario. El texto analiza, entonces, su lucha por lograr la presidencia de la República y las formas en que, durante dos años de gestión, Gutiérrez fue mermando la legitimidad que había ganado en las urnas.

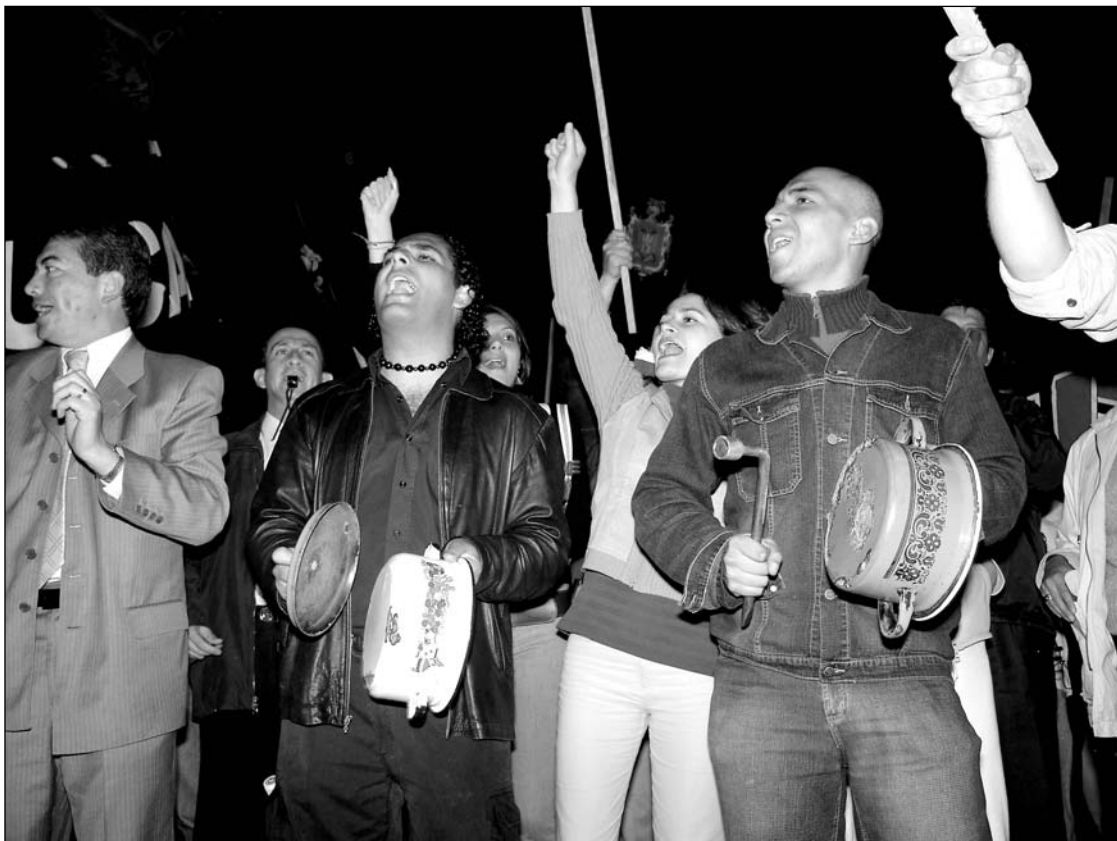
El caudillo golpista en busca del reconocimiento democrático

Lucio Gutiérrez entró en la escena pública en enero del 2000 y ya en noviembre del 2002 había sido electo presidente del Ecuador, un periodo relativamente corto en el que había logrado posicionarse favorablemente en el imaginario político de los ecuatorianos. Su participación activa durante el derrocamiento de Jamil Mahuad, su encarcelamiento y baja de las Fuerzas Armadas y su posterior lucha por lograr su amnistía fueron elementos que le permitieron construir alrededor de su persona un discurso apropiado para sus objetivos durante el proceso electoral 2002.

Y aún cuando una lectura del triunfo electoral de Lucio Gutiérrez y su legitimidad como mandatario electo exige considerar aspectos mucho más profundos que el simbolismo construido a través de los *spots* publicitarios -

como son el peso del regionalismo sobre la intención del voto del electorado, las alianzas con grupos y movimientos políticos y sociales que lo apoyaron, e incluso el quiebre del sentido de representación de los ciudadanos en los políticos y en las organizaciones partidistas que habría llevado a los ecuatorianos a ejercer un “voto protesta” contra el sistema político tradicional- no debemos olvidar que fue en base a una producción simbólica, expuesta mediáticamente, que Gutiérrez logró construir el imaginario que le permitió ganar legitimidad en las urnas, ubicándolo como la mejor opción presidenciable para los ecuatorianos.

A diferencia de otros países latinoamericanos, donde la imagen de los militares está asociada a la violencia y a la violación de los derechos humanos, en el Ecuador, que también ha atravesado por periodos dictatoriales, se asocia a las Fuerzas Armadas con un imaginario de orden, estabilidad y equilibrio, mante-



niendo incluso un mayor nivel de credibilidad y legitimidad por sobre otras instituciones públicas. Según datos estadísticos proporcionados en el informe 2003 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el nivel de confianza del Ecuador en el sistema democrático era del 0,36%, y apenas del 5% respecto a los partidos políticos, datos que ubican a nuestro país con el más bajo índice de confianza de entre los países latinoamericanos. La Iglesia y los medios presentaron el mayor porcentaje de confianza con 62 y 36%, respectivamente, aún cuando estos porcentajes demuestran una considerablemente disminución respecto a 1996. Las Fuerzas Armadas también presentaban un alto índice de confianza (30%), confianza fortalecida por el reconocimiento constitucional que las coloca como garantes expresas de la integridad del Estado y de su ordenamiento jurídico.

Fue así que el discurso electoral del ex-coronel Gutiérrez, en un primer momento, supo explotar su condición de ex militar y golpista para construir una imagen sobre el arquetipo de héroe. El uso del traje "safari" fue uno de los principales símbolos utilizados por el líder de Sociedad Patriótica que, a través de tal *performance*, fortaleció una imagen que marcaba la continuidad de un relato de lucha que había iniciado en enero del 2000. Fue así que, durante los *spots* políticos transmitidos por televisión durante la campaña electoral 2002 en nuestro país, el coronel retirado manifestó haber "sacrificado su carrera militar" en su deber de velar por la democracia y de luchar contra un "gobierno corrupto", proyectando así su imagen de mártir.

Además, a través de la publicidad política, Gutiérrez construyó un aura de honestidad proclamando su entrada al mundo de la política como un no-político con las "manos limpias", sin "compromisos partidistas", a la vez que ofrecía construir un país "más honesto" para las futuras generaciones. Su partido político, Sociedad Patriótica, cuyo nacimiento

obedeció a la necesidad coyuntural de institucionalizar su candidatura, calificaba su ideología como "humanista integralista". Poco antes de candidatizarse a la presidencia, el mismo Gutiérrez manifestó: "no nos queremos encasillar en ideologías del siglo pasado. Lo que el país necesita hoy es gente que se ubique en el centro del país, pero no en el centro ideológico, sino en el geográfico para mirar el Ecuador como un todo". Esto le permitió afianzar la construcción de una imagen alejada de los estereotipos de los políticos tradicionales, quienes se han posicionado dentro de los imaginarios de corrupción, ineptitud e ineficiencia.

Aunque pocas veces mencionó la palabra revolución, sus antecedentes de golpista lo mostraron como un revolucionario. Así lo postularon los principios de su partido Sociedad Patriótica "Somos ciudadanos que amamos por sobre todas las cosas a nuestra nación, por eso el 21 de enero del 2000, iniciamos una lucha cívica, pacífica e ineludible por un cambio profundo y radical en el país."

Más allá de los ofrecimientos que solucionaban necesidades particulares o sectoriales, Gutiérrez enfatizó su campaña electoral en cambios institucionales como la reducción del número de diputados, el establecimiento de nuevos parámetros para el funcionamiento de los partidos políticos y la reorganización y despolitización de las cortes de justicia. Sin embargo, los continuos ataques de sus opositores políticos (principalmente de su contrincante electoral Álvaro Noboa) que ubicaban de modo insistente a Gutiérrez como un potencial dictador, obligaron al coronel retirado a redefinir su imagen. Así, durante la segunda vuelta del proceso electoral, el líder de Sociedad Patriótica trató de desvincularse de la imagen negativa de militar golpista, alternando el "traje safari" con el uso de terno y corbata.

Pese a manifestar, durante este periodo electoral, no tener ningún nexo partidista, las pretensiones nacionalistas del coronel retira-



do trataron de construir un discurso de concertación, buscando acercamientos a otros sectores de la sociedad, en los que se incluyó al sector empresarial, representantes de la Iglesia e incluso otros partidos y movimientos políticos, a fin de construir la imagen de un candidato “progresista”. Tal estrategia fue complementada con la transformación del slogan de campaña: de un simple “Lucio, presidente” utilizado en la primera vuelta a “Un presidente para todos” en la segunda.

La progresiva destrucción de la legitimidad

Las reacciones de descontento en contra de Lucio Gutiérrez se intensificaron los últimos cuatro meses de su gestión presidencial debido a su intromisión en la función judicial; sin embargo, su proceso de deslegitimación se inició mucho antes. Desde el inicio de su

mandato el entonces presidente luchó contra la desconfianza que en algunos sectores seguía causando su condición de ex militar. Posesionado en el cargo, por ejemplo, no volvió a aparecer públicamente con el “traje safari” y solicitó infructuosamente a los medios de comunicación que se dirijan a él como ingeniero y no como coronel. Era evidente que con tales acciones pretendía alejarse del simbolismo de “caudillo militar” que le ayudó a llegar a la presidencia.

Pero no solo negó ese simbolismo sino que mostró la contradicción interna de su mandato. Si bien las estrategias de legitimación durante el discurso electoral del ex coronel apelaron a la simpatía y a la emotividad del electorado, también expresaron la falta absoluta de coherencia ideológica y la falta de un programa de gobierno, las mismas que se evidenciaron en su gestión gubernamental.

Gutiérrez no solo cambió su traje. Ya posesionado en el poder, la gestión de gobierno



se apartó de su discurso electoral. Desde enero 2003, las reiteradas retractaciones de sus declaraciones, lo llevaron a una permanente caricaturización y a la consecuente ridiculización de su persona y, lo que fue más grave, a una creciente pérdida de credibilidad de su palabra como mandatario. No pudo resultar de otra manera cuando la principal función de los diferentes titulares de la Secretaría de Comunicación del Estado fue la de “interpretar” y “justificar” el sentido de las declaraciones del entonces Presidente, con el objetivo de ocultar los desatinos verbales que evidenciaban su inexperiencia e incapacidad política.

Pero más allá de la forma de conducir su persona, la corrupción -a la que en campaña había ofrecido destruir- fue la constante característica del gobierno de Gutiérrez. Según datos publicados en el diario *Hoy* el 1 de enero de 2005, durante el primer año y medio de gobierno se había hecho público al

menos 50 actos de corrupción que involucraban directamente a instituciones que dependían del gobierno central. El nepotismo y el “piponazgo”, se reflejaron en el nombramiento no sólo de ex militares cercanos a su persona sino también en la designación de familiares de Gutiérrez -directos e indirectos- en cargos públicos de alto nivel. El escándalo se hizo cotidiano en el gobierno gutierrista, al punto que incluso se llegó a atribuirle una presunta vinculación con el narcotráfico y con la guerrilla colombiana. Todo esto contradujo el relato de honestidad que había construido durante su discurso de campaña.

Sin embargo, aún cuando la imagen de Gutiérrez se transformó de la primera a la segunda vuelta, debido a la redefinición de sus estrategias político-publicitarias, la representación construida en base al golpe de Estado del 2000 siguió siendo preponderante.

En los días de su gobierno, no pudo impedir que se evidencien los atropellos a los derechos ciudadanos y abusos de poder realizados por las instancias gobernantes, y esto a pesar de su permanente estrategia mediática orientada a realzar las obras realizadas desde que asumió la presidencia. Entre sus acciones contrarias a la ciudadanía que recibieron un fuerte rechazo estuvo la creación de una comisión adscrita a la Presidencia, cuyo principal objetivo era preparar una lista de “enemigos” del Gobierno, entre los que incluía a dirigentes indígenas, sindicales, sociales, políticos de izquierda e incluso a periodistas. Como parte de las acciones planteadas en contra de estos “enemigos” se planteó la posibilidad de someterlos a una “confesión judicial”, de así requerirlo el Estado, poniendo en duda el reconocimiento de derechos constitucionalmente garantizados como la libertad de expresión y el derecho de confidencialidad de las fuentes. Según denuncias realizadas en diciembre del 2003 por Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) del Ecuador, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez se dieron detenciones arbitrarias e ilegales de dirigentes indígenas y sindicalistas. Se registraron, además, amenazas y atentados “anónimos” a los que fueron sometidos ciertos opositores políticos y algunos representantes de los medios de comunicación.

El financiamiento gubernamental para la creación de grupos paralelos a las organizaciones no gubernamentales de veeduría ciudadana, como Participación Ciudadana que se había constituido en un fuerte opositor al gobierno, fue una muestra más del estilo de gobernar de Gutiérrez. Por otro lado, la ruptura de sus relaciones con grupos políticos que lo apoyaron durante su candidatura, especialmente el quiebre con el movimiento indígena -una conflictiva relación que había sido establecida en términos claramente clientelares¹- lo condujeron a una soledad política que le abrió un alto grado de ingobernabilidad. Tra-

tar de superar tal aislamiento le llevó a cometer errores estratégicos que marcaron su salida del poder. El principal de ellos: el acuerdo que el partido de gobierno, Sociedad Patriótica, logró con las bancadas legislativas del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) a los cuales repartió el control de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral. En su búsqueda desesperada por conseguir una mayoría en el Congreso, Gutiérrez no reflexionó sobre el costo político de ese acuerdo. Y es que el expresidente no se imaginó que, al haber marcado el camino para el retorno de Bucaram, dio la estocada final a la ya muy debilitada legitimidad de su gobierno. La impunidad que permitió el retorno del líder del PRE, terminó por destruir los relatos de honestidad, transparencia e incorrupción que había construido en su discurso electoral.

La revolución de los forajidos: expresión del desencantamiento democrático

Aún cuando las convocatorias multitudinarias en las calles se constituyeron en un factor clave en el derrocamiento de Abdalá Bucaram en 1997 y de Jamil Mahuad en el 2000, “la revolución de los forajidos” toma una serie de características que la hace incomparable con las dos experiencias anteriores.

El carácter “espontáneo” con que se ha caracterizado a las movilizaciones tal vez sea el elemento más reconocible de estas diferencias, porque aunque se ha cuestionado la dirección de la organización de los eventos de

1 La alianza de Lucio Gutiérrez con la CONAIE, durante la campaña electoral, abrió la posibilidad para que el movimiento indígena coparticipe del poder y logre alejarse de la imagen de un grupo cuyo principal recurso es su capacidad de convocatoria, de movilización y de bloqueo.

abril, el hecho de que los ciudadanos de Quito hayan salido a la calle sin la convocatoria de grupo político o movimiento social alguno es digno de ser analizado.

El agradecimiento que el entonces presidente Gutiérrez dio a los quiteños por el presunto apoyo a su gestión, ante el fracaso del paro convocado por el alcalde de Quito y el prefecto de Pichincha (el 13 de abril), pertenecientes al partido Izquierda Democrática, fue otro desacierto del entonces presidente. Tal maniobra permitió poner en debate, en el espacio mediático, el supuesto apoyo de los ciudadanos al gobernante; cuando lo que en realidad puso en evidencia fue un problema enraizado en la democracia de nuestro país: la crisis del sentido de representatividad² de los ciudadanos en las instituciones democráticas, en las organizaciones partidistas, en los “políticos de siempre” y en nuestros gobernantes.

En un país en el cual los partidos políticos han sido calificados como los más corruptos del mundo³, no es de extrañarse que el sentido de no representatividad en las organizaciones partidistas y en sus actores sea una constante de nuestro sistema democrático. Tradicionalmente se consideraba a los partidos políticos como mediadores entre los intereses de los gobernados y el Estado. Hoy las organizaciones partidistas son consideradas, en el mejor de los casos, simples maquinarias electorales. El particularismo que mueve a los partidos por sobre el principio del bien común ha resultado en una “desconexión”, calificativo usado por Andrés Mejía (2003) para describir la relación que mantienen las organizaciones partidistas con el ciudadano común.

Además, los partidos políticos al estar vi-

ciados por el clientelismo, el acomodo político y la corrupción han demostrado su incapacidad de canalizar las demandas sociales y de incluir en sus discursos y acciones los modos de sentir de la mayor parte de la población. Ello abre el camino para que sean otros actores los que asumen el papel de la representatividad, como es el caso de los observatorios de gestión gubernamental, grupos de veeduría ciudadana, foros focalizados en la reivindicación de los derechos de edad, etnia y género, e incluso los medios de comunicación.

Tal como lo reconoce Jesús Martín Barbero los medios de comunicación poseen un “valor social” determinado, no por su desarrollo tecnológico, sino porque éste es proporcional a la ausencia de los modos de sentir de la mayor parte de la población en el discurso político oficial y a la falta de espacios de expresión y negociación de los conflictos, así como a la crisis de representación de las instituciones políticas tradicionales como los partidos políticos y el parlamento (1994: 27). En este escenario, los medios contribuyen a constituir nuevos espacios de representación ya que proporcionan “algunas formas de identidad, de identificación, de proyección y de sublimación” (Ibíd. p. 28).

En los eventos de abril, una radio local, más allá de su función informativa, redescubrió el “valor social” que pueden desarrollar los medios en el ejercicio de la ciudadanía. Pese a que la mayor parte de los medios de comunicación se niegan a reconocer su papel como actores políticos, por considerar que esto atentaría contra los principios de neutralidad y objetividad promulgados por el periodismo, radio La Luna se convirtió abiertamente en un militante en contra de los desaciertos y exce-

2 La crisis de representatividad no sólo implica la pérdida de representación de los intereses sociales, del sentido de bien común de la política, sino que también conlleva la disminución de los niveles de credibilidad, confianza, reconocimiento y aceptación del sistema democrático, de sus instituciones y de sus actores.

3 Según un informe de Transparencia Internacional, publicado en diciembre del 2004, los partidos políticos de América Latina son los organismos más corruptos a nivel mundial, siendo Ecuador el que recibió la más alta puntuación (4.9 sobre 5) ubicándolo como el país más corrupto del mundo.



sos del gobierno gutierrista. De esta forma asumió el sentido de representatividad, extrañado para los partidos políticos y las instituciones democráticas. No sólo que radio La Luna se convirtió en la tribuna abierta para la expresión del descontento ciudadano -de quien se sentía perjudicado y de quien quería ser escuchado- sino que también logró canalizar esas mismas expresiones. Las redes alternativas de comunicación, como fueron el uso del e-mail y del celular, permitieron ampliar las convocatorias que se realizaron a través de sus micrófonos para manifestar contra el gobierno de Gutiérrez.

Con el objetivo de mermar el impacto de las marchas el coronel puso en escena una estrategia de relegitimación, intensificando una estrategia mediática basada, principalmente, en la transmisión de *spots* políticos que hacían un desesperado llamado de apoyo “al presidente que tú elegiste”. Al error inicial del co-

ronel retirado de subestimar las marchas de Quito, le siguió otro aun más grave: el tratar de terminar con el fenómeno social que estaba ocurriendo en las calles, a fin de asegurar su permanencia en el poder, por medio de estrategias basadas en una lógica castrense, lo que afianzaba aún más su imagen de dictador. Una lógica que pretendió anular a quien consideró su principal opositor: radio La Luna, amenazándola y posteriormente ejecutando el cierre de su frecuencia de transmisión.

Pero, además, sus estrategias militares le condujeron a dicotomizar el sentido de ciudadanía, reconociendo como ciudadanos sólo a quienes lo apoyaban, a quienes consideraba sus aliados, mientras calificaba como “forajidos” a quienes se manifestaban en contra de su gobierno. Tal palabra fue revertida semánticamente y transformada en la insignia de lucha de los manifestantes.

En un último intento por recobrar legiti-

midad, Gutiérrez anunció el cese de la Corte Suprema de Justicia, hecho que empeoró aún más su legitimidad como gobernante democrático y exaltó una imagen autoritaria.

La excesiva represión de las manifestaciones pacíficas y la amenaza de sabotear los suministros de agua potable a la ciudad de Quito, por parte de sus aliados políticos, no fueron razones suficientes para mermar las convocatorias; por el contrario, se intensificaron. Tal situación fue agravada con la llegada de turbas provenientes de la Costa y el Oriente ecuatoriano -que basaron su apoyo a Gutiérrez en arreglos clientelares- lo cual fue percibido como un ataque frontal y un atentado a la seguridad e integridad de los habitantes de la ciudad de Quito.

El pedido, a una sola voz, de “que se vayan todos” se mantuvo a pesar de que las Fuerzas Armadas retiraron su apoyo a Lucio Gutiérrez y el parlamento declaró el cese de sus funciones por abandono del cargo. Todo ello reflejaba el descontento generalizado de los ciudadanos hacia los políticos y el conjunto del sistema democrático y denotaba la necesidad de cambiar, no sólo el estilo de ejercer la política de un gobernante, sino también las formas de ejercicio de la ciudadanía.

Más allá de ciertos criterios que asumen este de tipo de acciones como desestabiliza-

doras del orden democrático⁴, “la revolución de los forajidos” debe ser considerada la expresión del ciudadano común que desea dejar de ser considerado únicamente como un sujeto pasivo en el escenario político, y que busca cambiar “el espejismo” de participación que le ofrece la democracia delegativa por una democracia verdaderamente representativa y participativa. Este será el reto que actores sociales y políticos en nuestro país deberán considerar para lograr vencer la frágil legitimidad del príncipe democrático y su incierta permanencia en el poder.

Bibliografía

- Balandier, George, 1992, *El poder en escenas: del poder de la representación a la representación del poder*, Paidós, Madrid.
- Cerbino, Mauro, 2003, “Medios, política y democracia”, en *Iconos. Revista de Ciencias Sociales* No. 16, Flacso-Ecuador, Quito, pp. 24-29.
- Debray, Régis, 1995, *El Estado Seductor. Las revoluciones mediológicas del poder*, Manantial, Buenos Aires.
- Martín-Barbero, Jesús, 1994, “Culturas populares e identidades políticas” en *Entre Públicos y Ciudadanos*, Calandria, Lima, pp. 21-34.
- Mejía, Andrés, 2003, “Partidos políticos: el eslabón perdido de la representación” en Felipe Burbano, compilador, *Democracia, gobernabilidad y cultura política*, Flacso-Ecuador, Quito, pp. 287-326.

⁴ Dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), la caída de Lucio Gutiérrez ha abierto el debate sobre la participación de esta entidad en las crisis políticas de la región. Condolizza Rice, secretaria de estado norteamericana, defiende la aplicación efectiva de “sanciones a los países que incumplan con los principios democráticos”.

Ecuador: cuando la inestabilidad se vuelve estable

Simón Pachano

Profesor-investigador de Flacso-Ecuador

Email: spachano@flacso.org.ec

Fecha de recepción: junio 2005

Fecha de aceptación y versión final: agosto 2005

Resumen

El presente artículo busca explicaciones para los derrocamientos de tres presidentes ecuatorianos, que han marcado los puntos culminantes de una década de inestabilidad. Lo hace indagando en el campo de las movilizaciones sociales que precedieron a cada uno de esos hechos, con especial referencia a su composición social y a los objetivos de sus integrantes. En la parte final se proponen algunas hipótesis acerca de la movilización en contra del gobierno de Gutiérrez. Sugiere que no son válidas las explicaciones de racismo y de temor clasista. Enlaza la explicación al surgimiento de reivindicaciones democráticas originadas tanto en los bajos rendimientos del sistema político como en el carácter dictatorial que iba tomando el último gobierno.

Palabras clave: movimientos sociales, democracia, Estado de derecho, movimiento indígena, Ecuador

Abstract

The article looks for explanations for the overthrows of three Ecuadorian presidents, which have marked the culminating points of a decade of instability. It analyses into the field of the social mobilizations that preceded each one of those facts, with special reference to its social composition and the objectives of its members. In the final part, some hypotheses are set out about the mobilization against Gutiérrez' government. It suggests that explanations of racism and classism are not valid. Rather, it connects the explanation to the sprouting of democratic vindications originated so much in the low yields of the political system like in the dictatorial character of the last government.

Keywords: Social Movements, Democracy, Rule of Law, Indigenous Movement, Ecuador

Poco después del medio día del 20 de abril de 2005, el Congreso Nacional del Ecuador cesó al presidente Lucio Gutiérrez por abandono de su cargo. Con esto concluyó un período de inestabilidad que se inició en noviembre del año anterior, cuando una mayoría legislativa favorable al gobierno reemplazó -sin ajustarse a las disposiciones constitucionales- a los integrantes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia. La decisión del Congreso constituyó también el último acto de una larga, novedosa y sorprendente protesta ciudadana escenificada fundamentalmente en la ciudad de Quito. Aunque, en términos estrictos, sería más apropiado decir que fue el penúltimo acto, ya que el hecho definitorio fue el retiro del apoyo de las Fuerzas Armadas al gobierno, expresado por las máximas autoridades militares pocos minutos después de la decisión parlamentaria.

Lucio Gutiérrez se convirtió así en el tercer presidente que termina abruptamente su mandato en menos de una década. En febrero de 1997, cuando apenas había cumplido ciento veinte días en la presidencia, Abdalá Bucaram fue destituido por el Congreso que, amparándose en una confusa disposición constitucional, lo declaró incapacitado para gobernar. Los vacíos constitucionales hicieron posible un conjunto de interpretaciones que desembocaron en la conformación de un gobierno interino que, a su vez y atendiendo a los resultados de un plebiscito, convocó a una Asamblea encargada de elaborar una nueva Constitución. Pero los cambios introducidos en el ordenamiento político no fueron garantía de estabilidad para el nuevo gobierno -instalado en agosto de 1998 y presidido por Jamil Mahuad- que terminó abruptamente en enero de 2000 por un golpe de Estado perpetrado por un grupo de militares. Quien encabezaba esta



tropa no era otro que Lucio Gutiérrez, que iniciaba así su vertiginosa y conflictiva vida política.

Tanto la acción del Congreso en la destitución de Bucaram, como la actuación de la facción militar en el derrocamiento de Mahuad, estuvieron precedidas por movilizaciones sociales, del mismo modo que estuvo la terminación del mandato de Lucio Gutiérrez. Esa activa presencia de sectores sociales fue en todas esas ocasiones no solamente el desencadenante de las acciones institucionales, sino sobre todo el elemento de justificación de éstas. A ella se apeló como la fuente de legitimidad de decisiones que en ninguno de los casos se ajustaban a las disposiciones constitucionales o que -como sucede con los hechos más recientes- por lo menos dejan muchas dudas en ese sentido.

Esta relación entre sectores sociales movilizados y decisiones institucionales coloca dos temas de interés para el análisis. En primer lugar, lleva a preguntarse sobre el tipo o contenido de las demandas de los grupos movilizados e, implícitamente, a indagar por la composición de esos sectores, su origen, sus formas organizativas, las modalidades de acción que han empleado en cada ocasión y el carácter (estable o efímero) de su presencia en el conjunto de la sociedad. En segundo lugar, plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema político para procesar esas demandas, pero sobre todo convoca a preguntarse por las causas que condujeron a respuestas poco ortodoxas de interpretación de las normas vigentes, cuando no violatorias de ellas en su totalidad. A pesar de la importancia de este último, en el presente texto se aborda únicamente el primer punto, de manera que deja amplio campo sin explorar. Futuros análisis deberán desarrollar ambos en conjunto para buscar explicaciones más sólidas sobre el fenómeno de la inestabilidad política ecuatoriana.



Indios, militares y *forajidos*

Se ha insistido mucho en el protagonismo de las organizaciones indígenas en los derrocamientos de los presidentes ecuatorianos. Esto constituye solamente una verdad a medias, ya que en la destitución de Bucaram su presencia fue más bien marginal, en tanto que el protagonismo recayó sobre los sectores medios de las ciudades de Quito y Cuenca. La intervención de los indígenas sí fue decisiva en el golpe de Estado del año 2000, ya que ellos fueron prácticamente los únicos acompañantes de los militares insurrectos, mientras la presencia de otros sectores fue insignificante. Finalmente, su ausencia fue absoluta en las movilizaciones que llevaron al derrocamiento de Gutiérrez, protagonizadas nuevamente por sectores medios urbanos claramente circunscritos a la ciudad de Quito. Los *forajidos* -término con el que se autocalificaron después de haber sido llamados así por el presidente- no tienen relación alguna con las organizaciones indígenas ni pueden ser adscritos a ese tipo de población.

Por tanto, una primera conclusión en este sentido es que no se puede identificar a un solo sector o, para decirlo en términos de la

literatura de los movimientos sociales, a un actor sociopolítico como sujeto de los tres episodios. Más allá de la alusión a la sociedad movilizadora -que constituye una generalización equivalente a la puerta de entrada al problema- no hay un común denominador en los tres casos. Por el contrario, estos muestran importantes diferencias en términos de la composición social, del lugar que ocupan en la sociedad, de las estructuras organizativas y de las modalidades de movilización (los repertorios de la acción social). Se puede esperar, por tanto, que existan también sustanciales diferencias en cuanto a los contenidos, esto es, en las demandas sociales y políticas, que es hacia donde debe dirigirse la atención. Pero antes de entrar en este tema es necesario destacar que las mayores similitudes se encuentran entre las movilizaciones que concluyeron con los derrocamientos de Bucaram y de Gutiérrez, lo que puede tener una explicación que será propuesta al final de este texto. El papel central en ambos casos estuvo a cargo de los sectores medios urbanos, especialmente quiteños, pero se diferencian por el contenido de las demandas, así como por la acción de los partidos políticos y de las Fuerzas Armadas. Hecha esta observación es posible abordar los contenidos de las movilizaciones.

Dadas las condiciones de las movilizaciones, de manera especial su carácter efímero e inorgánico, resulta difícil y hasta aventurado afirmar algo al respecto. Sin embargo, en rasgos muy gruesos es posible identificar sus componentes principales. En la primera ocasión se combinaron las protestas por los efectos de las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Bucaram con el rechazo a su estilo caótico de gobierno. Con cierto mecanicismo se podría decir que, en la medida en que intereses tan diferentes confluían en el tiempo, tendían a compartir la misma acción (y el mismo espacio, el de las calles de las ciudades) los sectores popu-

lares -especialmente indígenas- con los sectores medios urbanos.

El escaso tiempo que Bucaram ocupó el cargo no fue suficiente para contar con señales claras respecto a la orientación de sus políticas, menos aún para evaluar sus resultados, de manera que las causas inmediatas de las movilizaciones pueden atribuirse a la extraña combinación del rechazo al “paquetazo económico” con la percepción de inseguridad que se encargaba de crear el propio mandatario. Se puede suponer, así mismo -y considerando experiencias muy similares bajo gobiernos anteriores-, que de manera aislada el primer factor no habría sido suficiente para provocar la caída del presidente. De este modo, el elemento determinante había sido una percepción que no se origina ni se explica por variables económicas. En esa misma vía podría decirse, entonces, que el actor fundamental para el desenlace final fue el de los sectores medios urbanos movilizadores por un temor que se originaba principalmente en elementos simbólicos y valorativos.

Para el golpe contra Jamil Mahuad concuerrieron como elementos básicos el rechazo a la política económica y la participación directa de un grupo de militares. En cuanto a lo primero, no se trató en este caso de la oposición a medidas tomadas en un momento determinado, sino de la orientación general de una política económica que llevaba más de un año de resultados negativos. De manera especial, era la respuesta a los efectos de la crisis bancaria, que se asociaba directamente con la acción -o con la inacción- del gobierno. Pero, aunque ese era sin duda el telón de fondo y constituía la explicación de la erosión de la credibilidad y de la confianza en el gobierno, queda la duda acerca de los motivos que llevaron a la participación protagónica de los indígenas. Aunque es indudable que ellos se encuentran entre los sectores más afectados por el mal manejo económico, es evidente que ese no es un asunto de corto plazo y que



además no es posible encontrar una relación directa entre la crisis financiera y la magnitud de su reacción. Más bien, los más golpeados por el cierre de bancos, el congelamiento de cuentas y la pérdida de depósitos fueron los sectores medios, que en esta ocasión prácticamente no tuvieron participación. Por consiguiente, se puede suponer que la fuerte movilización indígena tuvo otras motivaciones, seguramente de carácter más político que estrictamente económico, y que fue eso lo que llevó a que convergieran con el discurso -y la acción- de contenido redentor y mesiánico de los militares.

En las movilizaciones en contra de Gutiérrez hubo un contenido claramente político, con total ausencia de los factores económicos. No estuvieron antecedidas por “paquetazos” ni por medidas que provocaran sobresaltos que amenazaran la estabilidad (expresada en la más baja tasa de inflación de la historia nacional y de este momento en América Lati-

na). Es más, desde el año 2001 y hasta comienzos del 2005 se había vivido un período de descenso de la movilización social. El desencadenante que puso fin a ese período fue la intervención del gobierno, apoyado por la mayoría legislativa, en los tribunales Constitucional y Electoral, pero de manera especial en la Corte Suprema de Justicia. Las protestas efectuadas por medio de multitudinarias marchas en Guayaquil y Quito en el mes de febrero fueron las primeras expresiones de esta nueva coyuntura. Aunque inicialmente fueron promovidas por partidos políticos (Social Cristiano en Guayaquil e Izquierda Democrática en Quito) a través de sus autoridades locales, inmediatamente se separaron de esa conducción y adoptaron caminos propios. Así, mientras en Guayaquil se detuvieron las acciones, en Quito asumieron una magnitud desconocida e inesperada incluso para quienes inicialmente las impulsaron. Su apogeo se produjo cuando la población se au-



toconvocó para concentrarse en la noche después del fracaso de un paro convocado por las autoridades locales. De ahí en adelante apenas fueron necesarios siete días de acciones novedosas y creativas -guiadas por primera vez en el país por consignas de defensa de la democracia y de los derechos ciudadanos- para desembocar en el derrocamiento del presidente.

Los movilizados (en nuevos repertorios que deberán ser estudiados con detenimiento) fueron claramente sectores medios que mostraron insatisfacción con la conducción del gobierno, no en el aspecto económico, sino en lo político. Se puede atribuir a la percepción de inseguridad que se desprendía de la intervención en la Corte (reiterada el 15 de abril cuando el presidente destituyó a sus integrantes en un acto clara y totalmente violatorio del orden constitucional), que podía interpretarse como un riesgo que rebasaba el ámbito estrictamente judicial. Es decir, es po-

sible suponer que la creación de factores de inseguridad por parte del gobierno -objetivos y concretos en la medida en que constituyeron violaciones del orden constitucional y sobre todo en que abrieron un período de duros enfrentamientos- era trasladada en la percepción ciudadana a los otros ámbitos de su vida y de sus intereses. Esto se alimentó además de características básicas del gobierno, como su manifiesta incapacidad política, la escasa preparación e incluso la mediocridad de sus integrantes, la conducción errática y confrontacional por parte del presidente, el nepotismo en la administración pública y las evidencias de corrupción gubernamental. Un ingrediente fundamental para configurar esa percepción fue el de indignación por las reacciones despectivas y denigratorias del presidente frente a las demandas iniciales en torno al tema de la Corte de Justicia. La incompreensión de lo que estaba ocurriendo por parte del presidente y de su entorno más cercano

-en el que predominaba una visión guerrerrista de la política, derivada a su vez de la formación militar de sus integrantes- fue determinante en ese sentido.

En síntesis, cabe reiterar que fue muy diversa la composición social y fueron muy específicas las motivaciones de los grupos que se movilizaron en cada una de las ocasiones. No hubo un patrón generalizado que pudiera servir de explicación. Como se ha dicho antes, la única similitud se encuentra en la composición social de los sectores predominantes en el derrocamiento de Bucaram y Gutiérrez, lo que posiblemente encuentre explicación en la percepción de los dos personajes como elementos ajenos y opuestos al equilibrio del sistema. Cabe recordar que ambos tuvieron un estilo absolutamente confrontacional, fueron incapaces de comprender su propia situación y la de su gobierno dentro de cada momento político y apenas pudieron hacer acuerdos políticos transitorios, y siempre en condición de inferioridad. Es poco probable que se trate, como ha interpretado algún sector de la prensa internacional, de un rechazo basado en valores clasistas o étnicos, producido por su origen social y el de los integrantes de su gobierno, la llamada *cholocracia*. Más bien cabe suponer que predominó la percepción de peligro que cada uno de ellos suponía para una estabilidad asentada en acuerdos más implícitos que explícitos.

Dentro de esas diferencias y de esas semejanzas, algo que demanda atención es la valoración de la democracia y del Estado de derecho que ocupó el lugar central en la movilización en contra de Gutiérrez. Concretamente, cabe preguntarse las razones por las cuales una sociedad poco afecta a esos valores los retomó en ese momento y los convirtió en bandera de lucha y en demandas centrales. Al respecto solamente se pueden ensayar hipótesis, y en este texto solamente se proponen tres, de las cuales la última es claramente alternativa a las dos anteriores.

En primer lugar, se puede suponer que esas reivindicaciones no eran nada más que la fachada de otro tipo de motivaciones (el rechazo racista de los sectores medios). Es decir, que los objetivos de la acción social eran simplemente inconfesables y por eso se escondieron detrás de otros que tenían mejor imagen o *mejor venta*. Pero ésta podría invalidarse de inmediato por tres vías. Primera, al suponer que la democracia y el Estado de derecho son valores que se pueden *mercadear* exitosamente entre esos sectores se está suponiendo que esos conceptos son valorados por ellos, lo que constituye un contrasentido ya que precisamente se está tratando de demostrar lo contrario. Segunda, se podría establecer una simple comparación aritmética entre el número de personas que participaron en las acciones nocturnas y el volumen de los sectores medios quiteños. Dicha comparación podría establecer algo tan absurdo como que todos los integrantes de esos sectores se movilizaron en todas y cada una de esas noches. Tercera, se podría también hacer alguna estimación más cualitativa sobre el origen de las llamadas a Radio La Luna, verdadero cauce de expresión de quienes se movilizaron.





En segundo lugar, dado que las movilizaciones prácticamente se restringieron a la ciudad de Quito, se puede suponer que la movilización tuvo relación con algún tipo de demanda propia o por la defensa de valores simbólicos particulares. Sin embargo, fue evidente a lo largo de cuatro meses la imposibilidad de las autoridades locales para detectar objetivos específicos y movilizar a la población en torno a estos. Las denominadas Asambleas de Quito y de Pichincha perdieron rápidamente todo protagonismo y quedaron en el olvido. La marcha del 16 de febrero demostró hasta la saciedad que no contaban para nada las reivindicaciones locales, a diferencia de lo que se había demostrado dos semanas antes en Guayaquil.

En tercer lugar, a contramano de las hipótesis anteriores, se puede suponer que en realidad ha tomado cuerpo una demanda demo-

crática, especialmente entre los sectores urbanos más cercanos a las actividades políticas. Los bajos rendimientos del sistema político (expresados en pésimos resultados económicos y sociales, baja representatividad, escasa capacidad para procesar los conflictos y crisis permanente, entre otros) habrían generado una insatisfacción que no se expresa en el rechazo al régimen sino en el interés por perfeccionarlo. El carácter dictatorial que iba tomando el gobierno de Gutiérrez habría ayudado significativamente, ya que se veía justamente como la profundización de la situación que se rechazaba. Pero, para abordar estos temas sería necesario entrar en el campo del sistema político, su institucionalidad y su capacidad para responder a las necesidades y demandas sociales que, como se señaló antes, no forma parte de este texto y queda para futuras indagaciones.

La crisis del sistema político ecuatoriano y la caída de Gutiérrez

Julio Paltán

Departamento de Sociología y Ciencias Políticas, PUCE

Email: juliop827@hotmail.com

Fecha de recepción: junio 2005

Fecha de aceptación y versión final: agosto 2005

Resumen

En este artículo se analiza el curso de deslegitimación y declive del sistema democrático representativo reflejado en el triunfo electoral del populismo autoritario, corporativo y clientelista del gobierno de Lucio Gutiérrez. Además, se ubican algunos elementos que inciden en su caída, y que reflejan un déficit de ciudadanía y de integración nacional.

Palabras clave: deslegitimación, democracia representativa, clientelismo, crisis de los partidos políticos, corporativismo

Abstract

This article analyzes the course of deslegitimación and declivity of the representative democratic system in Ecuador since the electoral triumph of authoritarian populism, corporative and clientelist government of Lucio Gutiérrez. In addition, it puts some elements that affect its overthrow, and that reflects a deficit of citizenship and national integration.

Key words: delegitimation, representative democracy, clientelism, crisis of political parties, corporativism

Crisis, representación y legitimidad en los 90

Presenta que el surgimiento del movimiento indígena y de Pachakutik renovó el liderazgo político -en especial para la izquierda-, se podría afirmar que los noventa fueron años en los que el sistema de partidos perdió legitimidad y credibilidad. Buena parte de la aprobación y expectativa que habían logrado los partidos fue socavada debido al evidente deterioro de la calidad de vida. Las políticas de ajuste estructural y el financiamiento continuo del gasto público del Estado a costa de la devaluación de la moneda y la subida de los precios de los servicios básicos, hicieron que la población sufra las consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo del dinero. El tipo de cambio liberalizado y la rampante inflación acentuaron esa tendencia. A ese contexto se sumó una propensión al desempleo.

Las sucesivas medidas de ajuste adoptadas por los partidos, sumado al deterioro de la calidad de vida y la inequidad creciente, minaron la fe en ellos. Durante toda la década, el Estado se supeditó al mercado y ello implicó la aprobación de medidas neoliberales antidemocráticas. Se dio una paulatina deslegitimación popular de los gobiernos democráticos ya que estos solamente se habilitan en la praxis del óptimo ejercicio del gobierno y de los resultados obtenidos (Sánchez-Parga 2004). Esto se evidenciaría en las agudas movilizaciones (primero del FUT en los 80 y luego de la CONAIE en los 90) a las que los sucesivos gobiernos tuvieron que enfrentarse. La deslegitimación que hace vulnerables a los gobiernos es el resultado, en parte, de su decisión de adoptar drásticas medidas de tipo restrictivo.

Los partidos se encuadran en una lógica de corporativización de intereses, compromisos y servicio a grupos y sectores de poder con intereses privados, los cuales hacen perder la noción de lo público en el Estado. Se tiende a

elegir presidentes para que tales grupos reciban un cheque en blanco y puedan hacer lo que quieran. Esto quiere decir que se ha producido una separación entre elegir y legitimar.

En este contexto, se presenta una galopante corrupción que usa y se sirve de las instituciones públicas y democráticas, haciendo que se desvirtúe la institucionalidad pública y se reproduzca en toda la escala social una pérdida de legitimidad de lo político (Sánchez-Parga 2004:80). La acción democrática se desdibuja como algo construido desde lo público y para lo público. Más bien, se evidencia la imposición de intereses privados en la política, lo que mina la fe en las instituciones democráticas y hace que surjan tendencias de apoyo a los autoritarismos como fórmulas válidas para que la ciudadanía resuelva sus problemas; esto explica que en el país impere la degeneración institucional, el descrédito, la apatía, la propensión a insurrecciones y los discursos antisistema.

Los partidos en el país han tenido el karma de no articular grandes intereses: al no recoger la gran diversidad de la nación y unirla a grandes metas y objetivos, se concentran en torno a grupos de poder económico. En Ecuador esto se expresa muy claramente en la deslegitimación de la política y el sentimiento adverso hacia la clase política tradicional. Entre 1996 y 2003, el apoyo a la democracia representativa expresada en los partidos políticos se redujo del 52% al 46%, y su satisfacción con ella, del 34% al 23%.¹

Para las elecciones de 1996 el sistema político y de representación entra en una crisis que -podría decirse- repite el ciclo histórico del surgimiento del populismo (que está marcado por el caos en la gobernabilidad, la legitimidad y en las instituciones). El populismo emerge en el marco de una degeneración de la democracia representativa. Así, en dichas elecciones resulta ganador Abdalá Bucaram,

1 www.latinobarometro.org



un político que despliega un discurso en contra de la clase política tradicional, pero que proviene de los partidos tradicionales y de los intereses ligados a ellos. El discurso de Bucaram se dirige a los sujetos históricamente marginales del país, aquellos excluidos de la democracia de las elites. Mediante el viejo estilo clientelista-instrumental incorpora a las masas. Se vale de un montaje escenográfico en el que reivindica los símbolos culturales de los estratos excluidos; el líder se apropia de ellos, los valoriza y los reivindica con orgullo como forma de reproducir una lucha de clases en contra de “los oligarcas” (De la Torre 2004:89).

En 1997, Bucaram es derrocado a causa de sus medidas económicas, los escándalos de corrupción y su estilo chabacano de gobernar. En esta caída jugaron un rol clave los pactos políticos y los intereses de los partidos tradicionales. Para destituirlo, los partidos se valieron de una violación a la Constitución (de-

raron la “incapacidad mental” de Bucaram), y nombraron un jefe de Estado que respondía a sus intereses.

A partir de este momento, la clase política instrumentaliza para sus fines a la Constitución y enmarca la legitimidad de sus acciones como una respuesta a los momentos de crisis política expresados en las movilizaciones populares. El interinazgo de Fabián Alarcón complejizó aún más este problema al legitimar su mandato en base a una consulta popular. La clase política, percibiendo la crisis de representatividad, hace aprobar leyes y reformas electorales. A través de la ley electoral, asegura sus escaños en el Congreso por largos periodos y se crea la figura de los diputados independientes.

En este contexto, merece atención el problema que enfrentan los partidos respecto a la falta de renovación de sus cuadros y al déficit de liderazgo político nacional. Un problema que conlleva el peligro de que los partidos de-

jen de ser las instancias óptimas de mediación, procesamiento y canalización de las demandas sociales hacia el Estado. Un problema que, también, conlleva el peligro de dar paso a formas de representación privadas expresadas en la corrupción, el prebendalismo o el lobby (Sánchez-Parga 2004:67), lo que marca la gestación de poderes al margen de todo aparato jurídico o institucional. Bajo un esquema como este, los actores políticos tenderían hacia el asedio y el uso privado y particular de las instituciones públicas y democráticas; y lo harían a través de mecanismos como la extorsión, la paralización, el corporativismo, la negociación, la búsqueda permanente de prebendas.

Otro de los males de los partidos políticos en los últimos 26 años radica en su práctica de asegurarse el poder a través del apoyo a figuras caudillistas. Estamos frente a un agudo personalismo que desplaza una democrática confrontación de ideologías o programas de gobierno. La tendencia electoral de los votantes de elegir en función de cualidades personales y no de agendas de gobierno ratificaría, una vez más, la decadencia de la representación política partidista (Zalles 2001). Es en este contorno crítico cuando los populismos aparecen. Las aventuras populistas son la expresión de la degeneración de la representación democrática y de la crisis institucional.

Lo que acontece después de la crisis política de 1997 no es sino el ahondamiento de toda esa amplia gama de problemas descritos. El discurso antisistema se pone en auge, las rebeliones también. La idea de que la solución a los problemas nacionales puede encontrar un cause en posibles experiencias autoritarias y extra institucionales se manifiesta aún más. Cobra además fuerza, de manera creciente, el discurso anti-político, anti-sistema y anti-partidos; y a ello se suman tendencias hacia la ruptura institucional. Surgen liderazgos *outsider*, de fuera del sistema político, que replican los discursos anti-política y

anti-sistema (Montúfar 2004). Un discurso que a ratos se confunde con el abanico ideológico y con los mesianismos revolucionarios de la izquierda.

La consumación del proyecto populista autoritario de Gutiérrez

Como una pequeña cuota de fe en la clase política tradicional (respaldada por el buen desempeño en la alcaldía de Quito), la ciudadanía vota mayoritariamente por Jamil Mahuad en la elecciones presidenciales de 1998. Pero el triunfo de Mahuad expresa sobre todo las proyecciones de la clase media y alta quiteña, quienes confían en su excelente preparación académica y en su (demostrada) capacidad para la gestión pública (Corral 2005).

Como se sabe, el panorama a fines de los 90 estuvo marcado por la crisis financiera mundial, a lo que se sumó, en el caso del Ecuador, el descalabro bancario. La moneda nacional sufrió una hiper-devaluación y los ajustes en la economía siguieron uno tras otro. Todo ello tuvo un costo social y político bastante alto para el país, lo que se tradujo en una gran convulsión nacional acompañada de paralizaciones sectoriales y movilizaciones de las organizaciones sociales, entre las que destacaba como protagonista mayor la CONAIE. En los momentos de mayor presión social, la organización indígena, súbitamente y sin coordinación previa, encontró en los estratos medios militares -cuya figura prominente era Lucio Gutiérrez- un aliado. La coalición indígena-militar encontró, en medio de la convulsión social, suficiente respaldo ético como para desconocer el orden legal y gestar un golpe de Estado contra el gobierno de Mahuad. La gesta del 21 de enero no fue mal vista por la ciudadanía. La mayor parte de la población estuvo de acuerdo con el hecho y no lo visualizó desde la dimensión del desbordamiento del orden institucional y jurídico que

ello implicaba. A nivel internacional, la izquierda latinoamericana tenía mucha expectativa por esta hazaña y por el que se presentaba como uno de sus autores principales.

Históricamente, este suceso repite de alguna manera el ciclo crítico de 1925, en el que un grupo de coroneles rompe con el orden instituido como forma de poner fin a los débiles, corruptos e ineficaces gobiernos de la plutocracia guayaquileña, en un contexto de crisis de los precios del principal rubro de exportación de ese entonces.

La deslegitimación del sistema político se evidenció, nuevamente, cuando el coronel Gutiérrez ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2002 con un respaldo del 20,64%. Como segundo finalista, junto al coronel, llega otro *outsider*, el magnate Álvaro Noboa. Era claro, en ese entonces, el vuelco del electorado hacia un candidato antisistema. Sin embargo, la ciudadanía no visualizaba los alcances de ser golpista y militar y, por el contrario, esa característica fortaleció la imagen, el discurso y el apoyo del electorado. Finalmente, en 2002 Gutiérrez triunfa y emerge como presidente democráticamente electo.²

Siendo Gutiérrez uno de los líderes del golpe del 21 de enero, un hecho que simbolizaba un triunfo sobre la corrupción y la ineficiencia de la política tradicional, su triunfo electoral abrió en el país un abanico de expectativas de cambio. Sin embargo, la indefinición ideológica fue evidente desde el inicio de su gobierno. En el ejercicio del poder, Gutiérrez reprodujo el estilo de dominación político-familiar de los partidos tradicionales. Sociedad Patriótica, el partido que creó con fines electorales, reprodujo los males de los partidos tradicionales (personalismo, nepotismo, etc.). Lejos de su imagen progresista de izquierda, enarbolada durante la campaña, ya en el poder Gutiérrez cambió la dirección de su mandato hacia una línea conservadora en

el manejo de la economía, hizo acercamientos políticos con la derecha (el PSC) y los EEUU. Su agenda generó entonces el rechazo y la ruptura con los movimientos sociales. En la mirada del gobierno gutierrista, la ruptura con Pachakutik fue leída inicialmente como un potencial peligro de quedarse sin sostén político. Para evitarlo, Gutiérrez consolida una base política a través de tres estrategias:

1. La sede de Sociedad Patriótica se convierte en una agencia de empleo, en clara estrategia clientelista. La histórica marginación que han sufrido varios sectores rurales y suburbanos del país hace que éstos se relacionen con la política y con el Estado a través de fines instrumentales y clientelares (Burbano y De la Torre 1989). Se aprovecha esta condición estructural para asegurar la base política de Sociedad Patriótica, que no es fuerte ni en términos ideológicos ni personales. El sistema de prebendas y redes es además utilizado para dividir a grandes organizaciones como la CONAIE. Las obras públicas se vuelven, así, vitales para sostener políticamente al gobierno.
2. Estrecha los lazos con sectores económicos de la costa. En sus visitas a Guayaquil pactó de diversos modos con el Partido Social Cristiano, sin embargo, esta fuerza política costeña fue luego dejada de lado por Gutiérrez, en su permanente rotación y acercamiento con otros sectores políticos. Su sed de apoyo político hizo que traicionara al PSC y establezca una alianza con el PRE, MPD y con el PRIAN a cambio de prebendas y cuotas en el sector público. He ahí la raíz del reparto de las Corte de Justicia y Tribunales Constitucionales y Electorales. Su permanente búsqueda de apoyo político y de aceptación se evidenció, también, en sus permanentes cadenas nacionales en la que quería demostrar que

² www.tse.gov.ec-elecciones

el gobierno estaba con “excelentes índices de popularidad”. En su discurso convirtió en elemento propagandístico la no subida de los precios. Gutiérrez tenía miedo permanente, estaba atento de cualquier cosa que se decía y se organizaba para enseguida, mediante grandes despliegues propagandísticos, contrarrestarlo. Su discurso comenzó a ser dualístico y maniqueo. Así, por ejemplo, calificó a toda forma de oposición bajo el genérico de ser “deudores de la banca cerrada”. Además, utilizó el dispositivo discursivo de “oligarquía corrupta” de forma permanente, y bajo éste pretendió legitimar los golpes que dio a la Corte de Justicia y a los Tribunales. Este discurso y este proceder sedujo a los oídos de un tipo de izquierda clientelar, representada en el MPD, que supo aprovechar su oferta de reparto institucional. Esto también le llevó a simpatías con el PRE, pues el discurso “antioligárquico” era el mismo. De esta forma estableció un tipo de alianza que fue demasiado lejos, hasta provocar su caída.

3. Los golpes permanentes a varias organizaciones rompieron las bases de su organización y sus bases. Las cúpulas policiales y militares fueron comprometidas a favor del gobierno, politizando abiertamente a los uniformados e inmiscuyéndolas en todas las instancias legales de control por dentro y fuera del Estado. El corporativismo ha sido el sistema de representación más utilizado por los regímenes autoritarios de la historia, y esto se debe a que el mecanismo funciona cuando surgen liderazgos políticos personalistas fuertes que concentran poderes en torno de sí: Gutiérrez, de alguna manera, transitó por estos rumbos ya que quiso unificar a su alrededor a los poderes públicos, a los medios, a los partidos y las organizaciones sociales, con la pretensión mesiánica de ser “el sal-

vador del Ecuador”. De ello hace parte la continua invitación a “sumarse al consenso” que Gutiérrez propone a la oposición. Sin embargo, su régimen sólo logró integrarse en base a una variada y corrupta red clientelar y gracia a una amplia y extendida oferta de prebendas. El corporativismo, como forma de representación, borra las fronteras entre la esfera pública y la privada, y deja pocos espacios libres de la influencia del Estado y de su líder. Si, por ejemplo, prestamos atención a la propuesta gutierrista de la consulta, vemos que en la nominación de la nueva Corte se expresó la tendencia a concentrar hacia el centro de poder todos los gremios y órganos de la sociedad civil. Ello quizá obedeció al miedo permanente que tuvo Gutiérrez a cualquier forma de oposición organizada. Un miedo que le llevó a violar la división de los poderes del Estado, y que le hizo levantar un extenso aparato de espionaje, represión y de fuerzas de choque.

La caída del coronel y la división nacional

Ante los múltiples intereses creados en una estructura social clientelar, un buen gobierno resulta ser aquel que más cuotas y prebendas concede. De esta manera nos explicamos la poca inconformidad social expresada al inicio del último ciclo de desestructuración institucional y de violación de la Constitución iniciada por Gutiérrez y sus aliados en diciembre de 2004. La acción política no se despliega en torno a temas institucionales o legales, sino más bien en función de obtener fines concretos y materiales del gobierno. Esto nos presenta el problema de la limitada construcción de una ciudadanía que visualice la acción política más allá de las reivindicaciones económicas, las obras y la satisfacción de los intereses inmediatos y concretos. La histórica mar-

ginalidad y exclusión sufrida por varios estratos de la población nacional por la ausencia del Estado, hará que la acción política de estas sea siempre la reivindicación y demanda de obras y atención del Estado.

Gutiérrez se aprovecha de esta situación e intenta levantar su base política a partir del clientelismo y de la creación de obras. Asimismo, es parte de su estrategia la supuesta no utilización de “paquetazos” como lo que distingue a su gobierno. Los frutos de esta empresa política no son pocos: consolida clientelas en el Oriente y en zonas marginales de la Costa y coopta a los indígenas evangélicos.

Por otro lado, a raíz de la consumación de la alianza entre Gutiérrez y el PRE (que significó el retorno de Bucaram), se cristalizó la movilización social en tres ciudades del país, Quito, Guayaquil y Cuenca; las dos últimas sin embargo se movilizaron sobre la base de reivindicaciones regionales de seguridad, viabilidad y descentralización, antes que abiertamente políticos.

En el caso de Quito, la movilización giró en torno a la temática legal, ética e institucional. Parecería que la condición de ser la capital y vivir de cerca los avatares de la acción pública y de la política hizo que sus habitantes desarrollen una conciencia cívica basada en los imaginarios de sentirse parte del Estado-nación. En Quito, de lo que se conoce, no se desarrollaron formas de acción política basadas en reivindicaciones materiales. Los juicios éticos se convirtieron en preponderantes y estuvieron relacionados con los imaginarios y concepciones de la política que poseen los quiteños.

Al inicio de la movilización contra Gutiérrez, la población de Quito estuvo aglutinada en la coalición denominada Asamblea de Quito, en la cual tuvieron protagonismo las autoridades del municipio y la prefectura (la alianza ID-Pachakutik) y otras organizaciones ciudadanas que en sus nominaciones, apelativos y manifestaciones recalcan un



discurso de la ciudadanía visto desde las obligaciones y el valor de la democracia. Sin embargo, el fracaso de la Asamblea se produjo a raíz del *paro a medias* decretado por la prefectura de Pichincha para el 13 de abril. Desde allí se hizo evidente la honda crisis de convocatoria, articulación y representatividad de la ID y Pachakutik y de la otrora poderosa CONAIE, que se sumó al decreto. Parecía que tras la derrotada Asamblea de Quito, venía la muerte de toda forma de movilización. Sin embargo, en esos días se gestó una original forma de protesta que no podría denominarse un movimiento, pues carece de ideología, agenda y liderazgo central. Fue una protesta que aglutinó mayoritariamente a la clase media. Fue espontánea, original (por ejemplo, con respecto al horario nocturno de las convocatorias) y se basó el más variado despliegue de símbolos, manifestaciones artísticas, leyendas creativas que apelaban a lo nacional y a la quiteñidad, que reflejaban una opinión política madura, y que levantaban como objeto de lucha a temas que nunca antes -por lo menos en los últimos años de democracia-



habían sido factor de protesta: la dignidad, la institucionalidad democrática perdida, etc. (Ospina 2005). La coordinación, convocatoria y motivación de la acción fueron potenciadas por medios de comunicación como la radio y los mensajes celulares; éstos ganaron la guerra mediática contra la costosísima campaña desmovilizadora, indignante y manipuladora levantada por el gutierrismo. Las concentraciones nocturnas de la ciudadanía creaban lazos de solidaridad, de coordinación y revivían de alguna manera el frenesí de las fiestas del 6 de diciembre.

El 20 de abril fue el espacio en que dos lógicas de acción política, fruto de la fragmentación y desintegración nacional y de la debilidad histórica del Estado, se enfrentaron con el riesgo de una guerra civil. Por un lado, una movilización convocada desde la ética, la recuperación institucional, y con una elevada conciencia cívica y política; por otro, una movilización que por la pobreza y marginalidad se acopló al juego clientelista y prebendista y al aparato de choque que el gutierrismo creó comprando conciencias.

El retiro del apoyo de las FFAA, convirti-

das en garantes y defensoras del orden jurídico y de la seguridad interna del Estado, se debió a la pretensión desesperada y errónea de Gutiérrez de convertir las calles de Quito en escenario de una guerra civil y a su fallida pretensión de utilizar a éstas como su brazo armado de represión contra la ciudadanía (desventura demostrada en la poca acogida del estado de emergencia el sábado 16 de abril por los militares).

Bibliografía

- Burbano, Felipe y Carlos de la Torre, 1989, *El populismo en el Ecuador*, ILDIS, Quito
- Corral, Fabián, 2005, "Los ciudadanos como protagonistas" en *Revista Gestión* No. 131, Dinediciones, Quito.
- De la Torre, Carlos, 2004, "Polarización populista y democrática en Ecuador" en *Revista Dialogo Político* No. 2, Konrad Adenauer Stiftung.
- Dirmoser, Dietmar, 2005, "Democracia sin demócratas, sobre la crisis de la democracia en América Latina", en *Nueva Sociedad* No. 197, Caracas, pp.28-40.
- Montúfar, Marco, 2004, "La emergencia de outsiders en la región andina", en *Ecuador Debate* No. 62, CAAP, Quito, pp.233-249.
- Ospina, Pablo, 2005, "El peso de la noche: una perspectiva histórica de la crisis política en Ecuador", en *Ecuador Debate* No. 64, CAAP, Quito, pp.73-90.
- Sánchez-Parga, José, 2004, "¿Por qué se deslegitima la democracia? El desorden democrático", en *Ecuador Debate* No. 62, CAAP, Quito, pp.41-82.
- Zalles Cueto Alberto, 2001, "El arduo camino de la constitución de la sociedad civil boliviana", en *Nueva Sociedad* No 171, Nueva Sociedad, Caracas.

El fervor democrático quiteño: ¿un mito, un sueño o algo sustancial?

Teodoro Bustamante
Profesor-investigador de Flacso-Ecuador

Email: tbustamante@flacso.org.ec

Fecha de recepción: mayo 2005
Fecha de aceptación y versión final: agosto 2005

Resumen

Este artículo propone entender el discurso sobre la revuelta política de abril como un conjunto de dispositivos que lo mitifican, lo incorporan a matrices dicotómicas de comprensión de la realidad política, y que -al mismo tiempo- neutralizan el contenido disruptivo que el movimiento tuvo -consistente en postular una defensa de la democracia como forma política, en una sociedad que la niega sistemáticamente-.

Palabras clave: revuelta política, democracia, mitificación, Ecuador, discurso político

Abstract

This paper suggests that the discourse about the April revolt in Ecuador is a mechanism to reintroduce those events in a mythic, dichotomist comprehension of Ecuadorian political reality. In this process, the disruptive content of the revolt, the affirmation of democracy in a society that denies it, is diluted.

Keywords: Political revolt, Democracy, Mystification, Ecuador, Discourse

Los acontecimientos políticos del mes de abril constituyen un fenómeno que presenta paradojas. Lo que en cierto momento fue percibido y presentado como una irrupción de una nueva ciudadanía parece desvanecerse como espejismo, pues lo que se mostró como una fuerza -que pudo lograr la destitución de un presidente- está produciendo cambios políticos que son de poca monta. Si consideráramos que la principal consecuencia del movimiento de abril fueron las reformas políticas propuestas, resulta sorprendente que ni siquiera respecto a temas como los de la constitución de un Tribunal Electoral encontremos acuerdos claros. Más aún, no sería raro que en la gama de discursos de reforma que se han lanzado, las medidas que realmente se impongan sean aquellas que cierran la democracia, o se alejan de ella.¹

En este artículo pretendemos mostrar que esta aparente paradoja se relaciona con una visión que hemos llamado mitificada del proceso de los forajidos. En ella se propone que existe un mundo de política corrupta, perversa, degradada, que se manifiesta y expresa con Lucio Gutiérrez; un mundo que es enfrentado por una nueva política en la cual la participación popular en el movimiento de los forajidos inaugura una nueva ciudadanía. Un tipo inédito de democracia, que habría estado a punto de lograr la transformación del sistema político y tal vez del conjunto de la sociedad. Esto que describo es un discurso mítico, que busca ordenar la realidad a través de oposiciones simplistas y dicotómicas y que, desde mi punto de vista, no tiene casi ninguna utilidad para explicar los hechos. Esta mitificación no explica la realidad, sino que la inscribe en un orden determinado. En este sentido, la codifica y permite que a través de este proceso los elementos subjetivos que esa realidad despierta

ta sean “contenidos” por una estructura que le da sentido. Sin embargo, esta mitificación es además mistificación, en la medida en que uno de los efectos más importantes de esta construcción es la de borrar, ocultar, la realidad, mostrándola de una manera sustancialmente diferente a lo que fue. Con ello negamos no sólo las cosas desagradables de la realidad, sino también las posibilidades que ofrece.

La caracterización del gobierno de Gutiérrez escapa a los objetivos de este artículo y hay ya algunos textos que aportan a esa discusión². Nos limitaremos a señalar algunas dinámicas de su colapso. Recordemos que luego de haber destruido la alianza con Pachacutik, ese gobierno estableció otra con el Partido Social Cristiano. Esta alianza también se rompió y Gutiérrez decide contra-atacar. El Coronel es consciente de la tradición de la oligarquía: establecer alianzas de extorsión en las cuales se obtienen crecientes prebendas, pero una vez que estas son aseguradas, la oligarquía es partidaria de los gobiernos desechables. Gutiérrez sabe esto de manera muy cercana. Le tocó vivir el proceso como edecán de Bucaram, fue nuevamente parte de la lógica para desechar al gobierno de Mahuad y sabía que esto es lo que se le venía.

Toma una decisión, en cierto sentido arriesgada, osada: decide asumir las banderas anti-oligárquicas; arma una alianza con diversos sectores populistas, MPD, PRE y PRIAN. Pero para negociar con ellos, está obligado a ceder en lo que ellos le exigen. Se trata solamente de ciertas violaciones constitucionales. Lo cual ya se ha hecho. Otros sectores políticos lo harían si correspondiera a sus intereses y si las demás fuerzas políticas se lo permitiesen.

Las medidas generan la reacción de una oligarquía que se vio herida en su capacidad de disponer a su arbitrio de las Cortes de Justicia. Comienza entonces un forcejeo en el

1 Tales sería por ejemplo los casos de las propuestas de distritos electorales, formas de representación corporativas, entre otras.

2 A este respecto nos parece especialmente interesante el trabajo de Barrera (2005).



cual poco a poco se van perfilando otros sectores que intervienen y que van a complicar toda la dinámica del conflicto. Un cierto grupo de organizaciones intelectuales y profesionales comienza a estructurar una oposición, una denuncia sistemática, que si bien no representa demográficamente algo que se deba temer, muestra una “desagradable” persistencia en sus acciones. Son sectores que tienen condiciones especiales, pues no entran fácilmente en los esquemas de negociación y hacen presente al gobierno la existencia de todo un componente de mediación social que no está bajo su control. La reacción del gobierno es la de insistir en mecanismos tradicionales: negociaciones por diversos frentes, tratar de neutralizar al enemigo más poderoso (los socialcristianos), todo lo cual fue logrado en alta medida. La oposición socialcristiana desde el municipio de Guayaquil fue diluyéndose.

El segundo componente de la estrategia fue una agresiva política para controlar y mo-

nopolizar los recursos que permitían desarrollar obra social. Esto implica un esfuerzo por desacreditar el trabajo de “las fundaciones”, que son la base material desde la cual opera parte de la *intelligentsia* politizada de la capital, pero incluyó también un intento de apropiarse de los recursos de ellas. El caso más claro fue el de la Fundación Mariana de Jesús, que tuvo la virtud de irritar, a una institución que sigue teniendo poder en el país, la Iglesia Católica y de manera más directa la Compañía de Jesús.

Se agrega una estrategia de amenazas y ataques que buscan amedrentar a los disconformes. Pero estas medidas tienen un efecto inverso: la oposición se hace cada vez más abierta, poco a poco se percibe una pérdida de respeto al presidente. Sin embargo, las cosas se demoran en definirse. Las fuerzas políticas que son parte de la nueva alianza tienen esperanzas de llegar a disfrutar los beneficios de la cuota de poder recién distribuida. En el

caso de la oposición tenemos que los social-cristianos buscan presionar para forzar algún diálogo que permita recuperar el control de los hilos del poder. La Izquierda Democrática se ve atrapada en una encrucijada entre buscar negociaciones o participar y organizar una movilización ciudadana. La disyuntiva se refleja en acciones vacilantes aunque de todas maneras a través de la Alcaldía de Quito, la Prefectura y algunas estructuras provinciales, la ID se juega por la manifestación; fruto de ella es la decisión por el paro provincial. Hay un nivel de participación no despreciable, pero la marcha, al tratar de vencer el cerco policial, se muestra como una estrategia y un objetivo que no corresponde ni a los sectores movilizados ni a sus posibilidades reales. Quienes están manifestando no son adolescentes con la energía y vitalidad para correr entre las bombas lacrimógenas. Los manifestantes no están dispuestos a perder sus jornadas de trabajo pero el sentimiento opositor es generalizado. Este se refuerza con la represión y sobre todo con el triunfalismo despectivo del presidente Gutiérrez.

Probablemente, en la tarde de ese miércoles Gutiérrez creyó haber derrotado a la “conspiración” PSC-ID. Lo que la ID mostraba como capacidad de combate parecía haber sido vencida. Pero hay algo que se mueve a otros niveles y a partir de ese momento surge una nueva dirección, casi anárquica, que se diferencia de las organizaciones políticas y que en algunos momentos es anti-partidos políticos. En realidad, se trata de una amalgama en la cual convergen desde los partidarios de una democracia formal, hasta grupos que ven en este momento la posibilidad de impulsar sus agendas (anti-TLC, anti-Base de Manta u otras). Existen sin lugar a dudas otras dimensiones adicionales; el grito de forajidos también tiene elementos de aglutinación identitaria.

Tal vez sea útil explorar ciertas cuestiones en este sentido. Si el término “forajidos” sirvió

para aglutinar a un conjunto amplio y diverso de personas, es por que algo pre-existía y permitía el funcionamiento de los símbolos y de la convocatoria. En los discursos explícitos no vamos a encontrar una base compartida. La palabra central “democracia” es no sólo muy general sino que tiene contenidos muy diversos para diferentes grupos. Pero algo unió a toda esa gran masa que no sólo fue de clase media sino que además incorporó algunos otros segmentos. Hubo sectores de las clases altas, pero también de barrios populares.

Podemos pensar que se desencadenaron otros mecanismos identitarios; una hipótesis puede ser lo regional. La sensación de que existía una amenaza contra la ciudad, que venían grupos -convencidos o pagados- dispuestos a tomarse la ciudad y a castigar a los forajidos.

Puede existir otra, según la cual la alianza de sectores populistas amenaza el discurso que justifica la existencia de una clase media en una ciudad capital. En esa línea, se ataca la producción de un discurso que ordena el mundo a través de la técnica, de la racionalidad, de los principios universalistas que se proclaman éticos. Esta matriz básica no es una ideología específica, sino los presupuestos de cualquier ideología moderna. Es, además, la condición de la racionalidad administrativa de un Estado y es el conjunto de presupuestos que permiten y crean condiciones para desarrollar actividades económicas con ciertas leyes claras. Es decir, son las condiciones de existencia de una clase media. En este proceso en que la clase media sale a defender cierta visión del mundo, cierto discurso, no dejan de existir contradicciones. En efecto, esta clase puede enarbolar los valores éticos de la lucha anti-corrupción. Pero ha aprendido a vivir en una realidad que no se rige por principios ni por valores universales, sino que es particularista. Tal vez no es accidente que el tema que desencadena toda la crisis esté relacionado con el poder judicial, el espacio de

los abogados, de los profesionales, que argumentan principios, procedimientos y normas, pero que en realidad trabajan sobre tales elementos para usarlos, no para defenderlos.

Se podría pensar que convocatorias tales como las de la democracia o de valores tan generales como los de una Corte Suprema de Justicia no eran capaces de movilizar una oposición fuerte. Uno podría preguntarse: ¿cómo van a ser capaces los ecuatorianos y los quiteños de revelarse contra una exacerbación de la corrupción en la Corte Suprema de Justicia, si a eso están acostumbrados, en eso viven y se las arreglan cotidianamente buscando la oportunidad de ese día y el tipo de alianzas que tendrán con cada gobierno para seguir en su línea de acción?

Lo sorprendente e interesante es que eso sí sucedió. La movilización se produjo y no fueron los mecanismos políticos los que la armaron, pero tampoco la trama de lo que se llama la sociedad civil. Las personas se unieron, se citaron, por lo que decía el hermano, el compañero de trabajo, y se comunicaban a través de un lenguaje que además de informal, reclamaba, “derechos” y dignidad.

Las clases medias tienen privilegios en la sociedad ecuatoriana, tienen contactos, tienen derecho a ser respetados, son alguien. Tal vez la amenaza que estos sectores percibieron fue que el nuevo orden que buscaba instaurarse pretendía negarles tal condición, y convertirlos simplemente en instrumentos. Para retomar la metáfora jurídica, se les anunciaba que ya no habría sitio para abogados o para administradores, sino sólo para testaferros, lacayos o tinterillos. Es decir, para servidores del poder que no podían retener un nivel de dignidad propia.

En esta dinámica, probablemente el propio Lucio Gutiérrez tuvo un importante papel en aunar a este grupo que en general es muy disperso; organizó un discurso público que, pretendiendo –y tal vez parcialmente logrando– expresar los sentimientos anti-oligár-

quicos, agrede, descalifica e ignora a estos sectores sociales proporcionándoles la afrenta que necesitan para unificarse.

Sin embargo, hay otras dinámicas adicionales. Gutiérrez crea una situación en la cual termina ofendiendo a las propias Fuerzas Armadas. El episodio del general Gallardo y el regreso de Bucaram carcomen el apoyo de ellas.³ Gradualmente el discurso hacia el presidente se hace más irrespetuoso, los desafíos son más abiertos. La respuesta es de una violencia rival. El ejecutivo organiza su marcha; sus colaboradores anuncian que usarán una violencia paralela. De esta manera se crea un contraste entre el discurso de los que protestan y se rebelan (en el cual se enfatiza la paz, la no agresividad) y el lenguaje de una violencia muy subjetiva de los defensores del gobierno. Esta no es la violencia que le corresponde a la autoridad, no es el ejercicio del monopolio legítimo de la violencia, es la violencia de la banda rival, una violencia que tiene aún menos legitimidad que la de los forajidos.

En el momento en que Gutiérrez opta por el estado de emergencia se ve obligado a dar marcha atrás. Queda claro que tiene escasa autoridad. Se está desarmando el edificio del poder. Es un momento transitorio especial, en el cual el orden normal ha sido abolido, la autoridad no merece respeto, la represión puede ser desafiada y negada. Hay un período para el reino de la pulsión, la dinámica insurreccional, con los contenidos de creatividad y la liberación de *eros* parecen haber encontrado su oportunidad. Esto tiene especial significación para los sectores juveniles que viven una etapa de ajuste, de conflicto y negociación entre su energía vital y el marco normativo de una sociedad que tal vez más que represiva es frustrante.⁴

Esto plantea toda una dinámica frente a la ley. La protesta es en defensa de la ley, pero

3 Esta idea la retomo de Amilcar Alban, comunicación personal.

pronto su dinámica se convierte en la expresión del deseo, de la fuerza de la posibilidad de romper la ley. Una ley fallida, impotente, inconsistente. Entonces aparece en el imaginario la posibilidad y casi la consigna de crear una nueva ley, una ley verdadera, auténtica.

Es por ello que se hace indispensable plantear el tema de la refundación. Refundar es regresar al tiempo mítico, aquel en el cual se crean los parámetros del orden nuevo, pero este orden nuevo, que se anuncia, es un orden que debe cumplir promesas. Pero la realidad exige que la satisfacción pase por un orden social, por límites, por el respeto al otro. Si no estamos dispuestos a asumir esta dimensión del orden, se crea una fantasía de una realidad en la que no hay sitio para la frustración, parece anunciarse el orden de uno goce ilimitado.

La expresión social de tal perspectiva es el florecimiento de las reivindicaciones y la negación de la política. Se trata de una expresión, en negativo, de la increíble capacidad de nuestro régimen para generar exclusión, marginalidad. Es también ilustrativo el lenguaje de la reivindicación, planteado como la necesidad de satisfacción, con el mínimo de mediaciones posibles. Para atender a esta aspiración de acceder a la satisfacción sin el paso por la norma social hay un camino: crear privilegios particularistas. Casi parecería que lo que se produce ante esta quiebra de la norma es un florecimiento de expectativas, de discursos que reclaman no sólo el acceso directo al conjunto de gratificaciones que la sociedad puede proporcionar, sino también un deseo de negar, anular, expulsar a todo aquel que puede representar los límites a ese acceso, o de aquellos que acceden a los objetos gratificantes, en contraste o competencia con las limitaciones del acceso propio. "Todos fuera" puede ser una expresión de esa lógica.⁵

Todo esto es relevante para plantear el marco normativo de la gestión política de la

sociedad. Éste ha sido deteriorado: quienes tenían la responsabilidad de encarnarlo, lo usaron, lo violentaron, lo rompieron. En ese proceso negaron su carácter de ley a la cual incluso la autoridad se sometía. El pueblo la rompió y exigió que de manera ilegal salga un presidente. Así, la posibilidad de una ley misma queda radicalmente fracturada, puesto que se ha convertido en un dispositivo sospechoso del cual lo único que queda claro es que es o puede ser un instrumento para negarnos el acceso a los bienes necesarios y deseados.

Con esto, el contenido central de la ley, en cuanto condición que -limitando- crea la posibilidad del acceso a los bienes, se ha perdido. La ley -o la vida social- como camino, como puente para la satisfacción, ha sido dismantelada. Las dimensiones de este daño son realmente importantes, pues no sólo afectan al régimen constitucional, sino a su misma posibilidad. ¿Es posible creer luego de esto en un régimen de derecho?

Si respondemos que no, que ya no es posible esa esperanza, surge la necesidad de responder a esa ausencia. Para ello, podemos asumir que no sólo que hemos roto la legalidad, sino que nunca existió realmente y nunca existirá. Lo único que nos queda en este mundo de desorden es movernos para buscar los dispositivos para poder acceder a esos bienes. Esto es válido individual y colectivamente. Pero esta salida no es la única. Puede surgir la idea de que deseamos y queremos construir otro orden de legalidad, que se base, en elementos diferentes, por ejemplo en la movilización popular, en la participación de las masas y otras propuestas que buscan agregar al sistema de la ley un componente que le cambie en su carácter, que la hagan más legítima.

El discurso de la nueva democracia tiene dificultades para organizar una propuesta. En ocasiones lo "nuevo" se expresa como una presencia popular, el recurso a la movili-

4 En este tema nos inspiramos en Milamniene (2004).

5 Respecto al análisis del particularismo ver León (1997).



ción, es decir adjetivos, no un contenido. Esta dificultad propositiva nos lleva a sospechar que la búsqueda de la Nueva democracia sirve más para combatir la posibilidad de una democracia simple y concreta que para proponer algo real.

Las argumentaciones de las nuevas democracias recurren con frecuencia a la movilización y presencia directa del pueblo que por sobre las formalidades impone la nueva utopía. La lógica que se crea es la de confrontaciones identitarias que -movilizando la subjetividad- evitan los análisis, la discusión y crean las condiciones de la confrontación violenta. Sospechamos que el riesgo de la violencia se está acumulando en nuestro país, pero en los acontecimientos de abril, tuvimos todavía niveles bajos de agresión: cuando se enfrentan grupos totalmente adversos en condiciones de mucho acaloramiento aparecen mecanismos que reducen la tensión. Hay otra

ley de convivencia que sigue vigente. Hay un *ethos* que incluye un grado de respeto al otro.⁶

Una vez que se ha señalado con claridad que el marco de una convivencia democrática bajo el imperio de la ley no sólo que fue desmantelado, sino que aparentemente nunca tuvo consistencia conviene regresar a la pregunta de cómo entender lo que pasó.

Sugerimos entender los hechos asumiendo que el orden existente es básicamente un orden feudal, un orden en donde el conflicto y la lucha de poderes se juega entre un conjunto de personas que son "alguien", que tienen acceso a los medios de comunicación, que representan poderes, que tienen acceso a recursos, que cuentan con una cierta legitimidad para hablar de derecho, de democracia, de desarrollo.

Este orden tiene reglas; se ejerce el despotismo según criterios que los entiende cualquier

⁶ Un ejemplo es como se salvaron las vidas de quienes disparaban contra los manifestantes en el Ministerio

persona que sabe moverse en el juego, pero que nunca pueden explicitarse. Se trata de un orden con jerarquías, privilegios y muchos fueros. Cada quién debe saber a quién puede atropellar, qué atropellos puede sufrir, y qué apoyos debe buscar para minimizar estos riesgos.

Un sector bastante secundario de los jugadores al poder (Gutiérrez, por ejemplo) logró proyectarse hacia arriba en este juego y se atribuye privilegios que no le son reconocidos. En otras palabras, usa de la arbitrariedad más allá de lo que el poder se lo permitía. Se enfrenta a sectores que tienen más poder, y en su esfuerzo para acumular fuerzas atropella también los fueros y pequeños privilegios de los grupos medios. Esto produce en estos sectores una reacción especial, pues se ven ante la alternativa de armar un discurso universalista, no ya de sus derechos sino de un sistema de derecho. Surge una ventana para plantear un orden social distinto, un orden democrático.

La expectativa prende, muchos se sienten llamados, se unen voluntades que se expresan y fortalecen. Su común denominador es el rechazo al presidente. En este momento entra a operar el mecanismo constitucional real del país. Los círculos del poder feudal realmente importantes decretan la orden para el reciclaje, y se procede a desautorizar al poder. Se busca otro para asignarle la función de enarbolar, el falso simulacro de las leyes y de la constitución.

Cuando esto se ha producido, se ha descubierto la inconsistencia del sistema de la legalidad, se ha desnudado la falsedad de todo el discurso sobre la legitimidad y esta obscena irrupción de la mentira como parte del "orden" es algo que desestabiliza a todo el edificio del poder. Se hace necesario un esfuerzo para regresar a la estabilidad anterior.

En este proceso fue necesario mostrar el discurso de la democracia como si esta fuese

algo importante, como si fuera posible creer en ella. Se creó un escenario en el cual era relevante la toma de posición de las personas que contaban solamente por el hecho de ser personas. Estas características de la realidad que vivimos por unos días, son totalmente disfuncionales con el sistema político que tenemos. Si se hubiesen mantenido, habría sido inevitable un cambio.

Pero las cosas no evolucionaron hacia el cambio, se produjeron una serie de acontecimientos, que están permitiendo con celeridad neutralizar estos elementos que perturban el orden normal de funcionamiento de nuestro sistema político. En primer lugar ha sido necesario sacar del escenario a las personas comunes y corrientes; para ello, los expertos en las técnicas de ocupación del espacio público han desarrollado una intensa labor. Lo importante ha sido regresar a un espacio público y político en el cual lo único que es relevante, son los personajes que se mueven y que actúan entre ellos. Las tesis, las propuestas, nuevamente ya no tienen lugar.

En este proceso hay aspectos a destacar: una de ellas es la ya anotada dinámica de las reivindicaciones. Aparentemente el debilitamiento del sistema de poder marca el momento más adecuado para atacar y obtener desde

de Bienestar Social. Los propios agredidos impidieron un linchamiento.



cualquier lado alguna concesión que permita satisfacer las aspiraciones que todos los sectores sociales sienten. Este dispositivo permite competir en la radicalidad de los reclamos, creando la ilusión de que a planteamientos más radicales, más política es la posición que se está asumiendo. Cuando en realidad el contenido real es otro, y este es el de reconducir los elementos de politicidad que se presentaron en la sociedad hacia el cause inofensivo, funcional al orden real de poder que es la negociación de particularidades, el clientelismo, y la prohibición de pensar y proponer lo verdaderamente político, es decir, lo referente al ordenamiento del conjunto de la sociedad.

Tan importantes como las reivindicaciones son las identidades, el esquema actual -basado en las fragmentaciones- nos propone una transacción: niego a todo el mundo el acceso a la identidad de ciudadano, pero a cambio ofrezco un sinnúmero de identidades particulares, cada una de ellas habla de valores y contenidos especiales y en muchos casos aparentemente superiores. Valores e identidades que pueden presentarse como mejores que los de la ciudadanía común y corriente, pero que resultan falsos, espurios, porque ni tienen la autenticidad de las identidades premodernas -ya que el mundo ya no es el de ellas- y tampoco se convierten en mecanismos de enriquecimiento de una ciudadanía, que no existe.

Afirmar una identidad fundamentalmente ciudadana no es fácil. Exige renunciaciones, exige aceptar la situación de ser un cualquiera, exige un sometimiento a normas, exige aceptar los derechos de los otros, sus diferencias, sus cuestionamientos, sin necesidad de fundirse con ellos. En este contexto tal vez podemos entender la apremiante necesidad de muchos sectores para des-comprometerse de una perspectiva democrática y ciudadana. Nuestra percepción es que una vez que surgió la posibilidad de enunciar el tema de la democracia surge la necesidad de volver a expulsarla del espa-

cio público. Para ello es necesario desacreditarla, lo cual es posible a través de varios mecanismos: mostrando las numerosas inconsistencias de su existencia real, desacreditándola frente a utopías aparentemente más prometedoras, reduciendo la explicación de los hechos a la denuncia de los intereses que se movieron tras los acontecimientos o encerrando a los eventos de abril en una simple prolongación de la actividad de ciertos grupos que reclaman la propiedad del movimiento forajido.

El espacio público vuelve a su cauce, los notables han recuperado el control. Con esta dinámica, el conjunto de la población se ha desmovilizado. No tiene mecanismos para permanecer activa frente a lo público. Los mecanismos tradicionales han logrado re-imponerse, re-establecer su hegemonía y así cerrar las perspectivas de cambio. Sin embargo, quedan algunos elementos que no han podido ser cerrados completamente: hay expectativas respecto a la gestión económica y la gestión internacional del gobierno. Muchos ciudadanos saben que lo que ha pasado no satisface nada de sus expectativas, saben que no vivimos en democracia y ha surgido un deseo de llegar a tenerla. Existen hoy día miles de personas que a pesar de que no encuentran una vía clara buscan caminos para ese proyecto. Es cierto que el sistema político tiene como principal objetivo hoy en día decepcionarlos, obligarlos a dejar de soñar, frustrarlos para que regresen a sus casas y dejen el sitio libre a los señores, a los legítimos detentores de los privilegios. El proceso de reforma política anunciado por el gobierno de Palacio no sólo ha sido amenazado por el mismo ejecutivo sino que -sumido en una gran confusión- promete muy poco. Casi nada queda del sueño de construir una democracia.

Pero no es necesario obedecer a estos designios: es posible tomar en serio la afirmación democrática y trabajar porque el afán y el deseo de crear democracia permanezca y de frutos. Para ello podemos pensar, debatir lo

que significan los valores de la ciudadanía y de la democracia en los distintos espacios concretos en los cuales nos desenvolvemos. Hacer evidente que los valores de la democracia están en conflicto con gran parte de la organización de la vida social hoy en día, con la forma de funcionar de las organizaciones, de los servicios básicos.

Pero hay también problemas generales de toda nuestra sociedad que tienen que ser debatidos: el primer problema, que menoscaba toda posibilidad de construir una sociedad democrática en nuestro país porque constituye en sí su negación, y porque es la base que alimenta los mecanismos del clientelismo, es que nuestro país tiene una estructura social basada en una masiva y creciente marginación. Construir democracia es erradicar la marginalidad y es necesario hacerlo teniendo en cuenta que todos los programas asistenciales han fracasado. Es necesario construir una propuesta que rompa con la tradición desarrollada hasta ahora. Esto implica oponerse a los mecanismos clientelares que han caracterizado la política social reciente. La respuesta no puede ser otra que los servicios básicos gratuitos (salud y educación), de calidad y con carácter universal. Si no somos capaces de asumir esto como objetivo político significa que no somos capaces de asumir los compromisos de la democracia.

Un segundo aspecto se refiere a la necesidad de hacer de la democracia, un tema de reflexión sistemático y serio. Solamente si estamos dispuestos a tomar a la democracia en serio, tan en serio como para hacerla el centro de una propuesta política, podremos cambiar

las farsas que hemos vivido. Si pudiéramos rescatar aunque sea sólo la fe en la ciudadanía que brilló por instantes en abril, podríamos lograr avanzar para ser un día ciudadanos de un país democrático. Estoy seguro que este sueño vale la pena.

Bibliografía

- Barrera Augusto, 2005, "La caída de Gutiérrez: que nadie cante victoria" en *La Tendencia* No. 3, Trama Social, Quito, pp. 9-15.
- Bustamante, Fernando, 2005, "En los arrabales del Estado de Naturaleza", en *Ecuador Debate* No. 64, CAAP, Quito, pp. 49-72.
- Bustamante Teodoro, 2000, "Fuerza y límites de los símbolos", en *Iconos. Revista de Ciencias Sociales* No. 9, Flacso-Ecuador, Quito, pp. 16-21.
- Guendel, Ludwig, 2005, "Algunas reflexiones de un recién llegado con respecto a la crisis política del Ecuador", manuscrito no publicado.
- Hernández, Raúl, 2000, "La retórica de la democracia, discursos, símbolos y apelaciones durante el golpe de estado del 21 de enero del 2000", ponencia presentada en el Primer Encuentro de LASA sobre estudios ecuatorianos, Quito, junio 2000.
- León, Jorge, 1997, "Entre la propuesta y el corporativismo", en *Iconos. Revista de Ciencias Sociales* No. 2, Flacso-Ecuador, Quito, pp. 29-39.
- Milmaniene, José, 2004, *La función paterna*, Biblos, Buenos Aires.
- Ospina, Pablo, 2005a, "El peso de la noche. Una perspectiva histórica de la crisis política del Ecuador", en *Ecuador Debate* No. 64, CAAP, Quito, pp. 73-90.
- , 2005b, "El abril que se llevó al coronel que no murió en el intento", manuscrito no publicado.
- Silva, Erika, 2005, "El Coronel y los Forajidos", en *Renovación* No. 7, Cuenca. Ecuador.

“Lo que pasó en Ciespal” Apuntes etnográficos sobre el poder, los medios y los sin-sentidos de la violencia

Edison Hurtado Arroba
Editor de Íconos, Flacso-Ecuador

Email: ehurtado@flacso.org.ec

Fecha de recepción: junio 2005

Fecha de aceptación y versión final: agosto 2005

Resumen

A partir de un trabajo etnográfico, el artículo presenta una lectura política de los acontecimientos ocurridos en Ciespal el 20 de abril de 2005, día de la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez. Frente al cúmulo de representaciones y estigmatizaciones que se han tejido, y que tienen que ver con una lucha política por definir la situación, el texto reconstruye tres perspectivas paralelas: a) una institucional en donde el poder se reacomoda, b) una del sinsentido, donde la violencia se estigmatiza, y c) una fenomenológica, donde los actores se guían por una lógica de la práctica. El argumento central se construye a partir de la relación entre violencia y política: explica que las actitudes violentas de los manifestantes, lejos de ser irracionales o caóticas, como las ha visto la prensa, estuvieron cargadas de una racionalidad práctico-moral, una profunda indignación de la población contra los políticos. Concluye, retomando a Benjamin, en un intento por entender los sentidos de la violencia política, tanto de aquella que desde el orden busca conservarse, como de aquella que desde el desenfreno (“fuera todos”) presenta atisbos potenciales de un cambio político sustantivo.

Palabras clave: violencia, etnografía, indignación moral, acción colectiva, cultura política, medios, Ciespal

Abstract

Based on ethnography, the article presents a political approach to the events occurred in Ciespal on April 20, 2005, the day of Lucio Gutierrez overthrow. Opposed to representations and stigmatizations that have been woven into the political fight, the text constructs three parallel perspectives: a) an institutional one, in which power is re-established, b) one of the non-sense, in which violence is stigmatized, and c) a phenomenological one, in which actors guide themselves by a logic of practice. The central argument is built from the relation between violence and politics: it explains that violent attitudes against politicians, far from being irrational or chaotic, as some media has put it, were loaded of a practical-moral rationality expressed in the indignation of population against politicians. Following Benjamin, it concludes in an attempt to understand the senses of the political violence: that violence of the order that tries to conserve itself, and that violence of the demonstrators that displays slightly signs of a substantive political change.

Keywords: Violence, Ethnography, Moral Indignation, Collective Action, Political Culture, Mass Media, Ciespal



El miércoles 20 de abril tuvo lugar el último acto de la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez. El toque final, desde la perspectiva del juego democrático, lo dieron los diputados reunidos en el auditorio de Ciespal (Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina)¹. En una apurada sesión, 60 de 62 diputados presentes declararon el abandono del cargo de Lucio Gutiérrez como presidente constitucional y, “como dice la ley”, proce-

dieron a posesionar como primer mandatario al vicepresidente Alfredo Palacio. Sin embargo, “lo que pasó en Ciespal”² fue mucho más que un relanzamiento institucional de la democracia. Un poco antes de que Palacio pueda terminar su discurso de posesión, un grupo de manifestantes entró a la fuerza en el recinto. Habían pasado del “fuera Lucio” al “fuera todos”. Ambas, consignas que se habían construido a lo largo del ciclo de protestas sociales que se vivía desde diciembre³. Quienes entraron al edificio de Ciespal querían emprender una depuración, sanear al

1 Habrá quienes dirán que ese “toque” lo dieron los militares al “retirarle” su apoyo. Otros dirán que Gutiérrez cayó porque “la embajada” (de los Estados Unidos) “ya no lo pudo sostener”. Lecturas un tanto más sociológicas se enfocarán en un ciclo de protestas que habría comenzado en diciembre de 2004 y que terminó ese miércoles de abril. Algunos politólogos dirán que Gutiérrez estaba caído desde que se posesionó y encontrarán en su fragilidad política las causas de su progresivo deterioro en el poder; y con ésta caída contarán tres en menos de una década.

2 Retomo la frase a partir de un lugar común que ha construido la prensa para referirse a los hechos de esta tarde y noche. Me percaté por primera vez de la frase por la recurrencia con la que el programa de televisión *Día a Día* de Teleamazonas la utilizó en un programa “especial” (domingo 01.05.05, 20h30). Ver, también, “¿Qué sucedió en Ciespal?”, reportaje de *La Televisión*, Ecuavisa, 29.05.05 (www.tvecuador.com), “Hechos de Ciespal, inexplicables: Espinosa”, *Hoy*, 28.04.05.

país de los políticos corruptos, y querían comenzar, precisamente, con la renuncia de los diputados.

Lo que pasó después, a lo largo de la tarde y noche de ese miércoles, ha sido objeto de múltiples interpretaciones que, considero, constituyen o un déficit o una sobrecarga de sentido. Una superposición de múltiples hechos crean un agujero negro, tan vacío como cargado de significados y posibles interpretaciones: los actos de violencia y vandalismo que cometieron los manifestantes, el “secuestro” de Palacio en el edificio a expensas de -según la prensa- “una horda, una turba, una masa”, la desprotección policial y militar de Palacio que duró varias horas (el presidente no pudo abandonar el edificio sino hasta entrada la noche)⁴, el rumor de golpe de estado que se habría fraguado durante ese vacío de poder, las (reales) motivaciones y objetivos de la gente que estuvo ahí (los “verdaderos forajidos”, los “infiltrados”, el comandante de policía Marco Cuvero, los “mandos medios militares” como el coronel Servio Samaniego, etc.), y el papel de quienes sin estar, estuvieron (desde el periodista de radio La Luna Paco Velasco o el líder del PSC León Febres Cordero, a quienes Palacio llamó a pedir ayuda⁵, hasta los altos mandos policiales y militares que monitoreaban la situación a través de celulares), todos ellos, son -entre otros- even-

tos de una volátil disputa de sentidos, actos con interpretaciones múltiples, con decodificaciones diversas.

Con el ánimo de encontrar unas mínimas -no exhaustivas- coordinadas interpretativas dentro de este denso cúmulo de sentidos, en este artículo planteo que los acontecimientos de abril en Ciespal pueden ser vistos desde, al menos, tres ópticas:

- a) como espacio (institucional) de resolución de la crisis política, lugar donde toma cuerpo el reacomodo del poder,
- b) como espacio del sinsentido, de la anarquía, del caos, de la violencia, donde los actores y las circunstancias sólo pueden aprehenderse a través de la frase “lo que pasó en Ciespal” (el discurso de los medios, por ejemplo), y
- c) como espacio de lo fenomenológico, de lo que pasó en Ciespal, sin comillas, cuando personas concretas acudieron a un lugar persiguiendo varios y diversos objetivos: ya sea “el hueveo” como dicen Hugo y Bruno, (utilizo seudónimos) dos de mis entrevistados, festejar la caída de Gutiérrez, pedir la renuncia a los diputados (y de paso golpearles, insultarles, vejarles), robar en medio de la confusión, “quemarles así como quemamos el Ministerio [de Bienestar Social]”, sondear las condiciones para un golpe de estado, “proteger la casa” como dice una funcionaria de Ciespal o, como en el caso de Mauricio Gándara (hoy ministro de gobierno de Palacio) que fue de los primeros en llegar, darle su respaldo a Palacio y confirmar su interés de ser parte del nuevo gobierno.

Al plantear estas tres perspectivas, mi interés es tomar “lo que pasó en Ciespal” como un evento que condensa significaciones (Geertz 1997), un pretexto para activar narrativas sobre la protesta (Polletta 1998, Auyero 2000 y

3 Rebase los límites de este artículo una sistematización exhaustiva del escenario de crisis en el que tuvo lugar la acción colectiva contenciosa denominada “la revuelta de los forajidos”. Para el efecto, consúltese entre otros, los artículos que aparecen en este número de *Íconos*, “El abril de los forajidos”, *Hoy*, mayo 2005, “La revuelta de los forajidos”, *El Comercio*, 24.04.05, Ramírez (2005). “Forajido” fue el calificativo que usó Gutiérrez para descalificar a quienes comenzaron a protestar frente a su casa particular una semana antes de *lo de Ciespal*. Los manifestantes se apropiaron de la palabra y la resignificaron como factor aglutinante contra Gutiérrez (“yo también soy forajido”).

4 “El poder desamparado”, editorial de Enrique Valle, *Hoy*, 04.05.05.

5 “Rómulo López: ‘querían matar al presidente’”, *Hoy*, 26.04.05.

2004), un corpus de producción y disputas de sentido sobre la política (López-Maya 2004). No pretendo, por tanto, “aclarar” los hechos, ni presentar una versión más real o más verdadera que otras (por demás, tareas imposibles). Busco entender las formas en las que la lucha política continúa en el campo de las representaciones. Guía mi reflexión la idea de que “de-finir”, decantar, lo que pasó en Ciespal es un proceso sujeto al cruce de relaciones de poder⁶. Así, me llama la atención la forma en la que tanto algunos actores políticos que hacen parte del *status quo* como algunos medios de comunicación (tal vez, la mayoría), han producido un sinfín de voces, interpretaciones, códigos, etc., con el ánimo, considero, de imponer un conjunto de representaciones sobre lo legítimo y lo ilegítimo, lo apropiado y lo impropio, lo que se tomará en cuenta y lo que se excluirá-estigmatizará, etc. Y me parece que el nudo semántico más tupido y prolífico tiene que ver con el trato que se da a la violencia producida en Ciespal por unos actores beligerantes en extremo: los definidos como “infiltrados”. Lo se podría definir como el sentido común forjado en/por los discursos dominantes, prefigura un ámbito de lo posible en donde la violencia debe ser excluida. El orden social civilizado -según este lugar común- estaría representado por los “verdaderos forajidos”, gente pacífica que protesta “legítimamente” contra los diputados, los políticos, pero sin causar destrozos, sin golpearlos (“casi” sin alterar el orden). Se trata de un intento por pasteurizar la imagen de los forajidos de abril excluyendo a sus expresiones más críticas y radicales. Este texto apunta, entonces, a presentar una lectura po-

lítica de los hechos para entender aquel discurso del orden que, al intentar exorcizar la violencia, separa los “infiltrados” de los “verdaderos forajidos” y, bajo esta argucia, busca anular o, al menos, no llega a comprender, los profundos contenidos políticos condensados en las actitudes violentas de quienes atacaron a los diputados en Ciespal. Es sobre este eje alrededor del cual gira este ensayo. Aclaro que mi recolección de información se enfocó hacia allá; otros temas, en especial las estrategias que en el lugar desplegaron quienes querían promover un golpe de estado, ya sean grupos políticos organizados de distinta índole o militares insurrectos⁷, no son abordados aquí con la minuciosidad que requieren.

Para escribir este artículo me he valido de entrevistas *in situ* y *a posteriori* a personas que estuvieron ese día en Ciespal, de mis propios apuntes, ya que fui testigo presencial (observador-participante), y de una revisión de la prensa televisiva y escrita. También he utilizado fotografías tomadas por diversos manifestantes presentes, las grabaciones (imágenes y entrevistas) que realizaron dos camarógrafos y un periodista de Ciespal a lo largo de todo ese miércoles, y las que -ese mismo día- recogimos en audio junto a Sebastián Mantilla, un amigo antropólogo, en un intento -sin mayores pretensiones- de hacer etnografía de la protesta.

El último acto

A ese 20 de abril el país llegó convulsionado. Las relaciones de fuerza entre los políticos se habían exacerbado a tal punto que el consabido, democrático y saludable par gobierno-oposición había dado paso al más efervescente par amigo a defender-enemigo al que des-

6 “Uno de los factores fundamentales de las luchas políticas, tanto a escala de los intercambios cotidianos como a escala global, consiste en la capacidad de imponer unos principios de visión del mundo, de hacer llevar unos lentes que hagan que la gente vea el mundo según unas divisiones determinadas” (Bourdieu 1996:29).

7 Sobre el recurrente proyecto político de los militares en el Ecuador, ver el artículo de Bertha García en este número de *Íconos*. Como insumo para futuros análisis, adjunto como anexo un recuadro que recoge la intervención del coronel Servio Samaniego en Ciespal.

truir. El punto más álgido: la disputa que desde diciembre se había activado en torno al control de la Corte Suprema de Justicia. Durante casi 5 meses los partidos políticos alimentaron actitudes de lo que en el medio se conoce como “canibalismo político”. Las alianzas de momento a las que había recurrido el gobierno le pasaban factura: el PRE quería a Bucaram de vuelta (y varios sectores sociales y políticos mostraban su descontento); el PRIAN, el MPD y “los independientes” (diputados comprados a cambio de cargos públicos, dinero o prebendas) no se cansaban de desangrar al gobierno⁸. La oposición, entre otras formas de acción, mostró su poder en las calles: recordemos las marchas de Quito -promovidas por la ID y otros actores locales- y de Guayaquil bajo la venia del PSC.

La semana previa se había activado el dispositivo forajido, la revuelta que concentró inicialmente a personas de clase media y media-alta en la tribuna de la avenida de los Shyris en Quito, luego de una convocatoria a través de radio La Luna. Día tras días las autoconvocatorias ciudadanas fueron ganando en espesor y efectividad hasta que contribuyeron a minar las bases del régimen. Sin embargo, la de los forajidos fue una revuelta que rebasó los límites del conflicto fijados por los políticos. La protesta se enmarcó en la indignación general sobre el manejo maniqueo, corrupto e interesado del poder por parte de la clase política dirigente. Del “fuera Lucio” -procurado por los políticos de oposición- al “fuera todos” -erigido en las calles contra todos los políticos- no había sino un paso.



En ese escenario, ese miércoles de abril fue el día de la lucha final: el primo de Gutiérrez, Renán Borbúa, y el subsecretario de bienestar social, Bolívar González, organizaron la llegada a Quito de las huestes gutierristas, gente que apoyaba al gobierno y que había sido reclutada de forma clientelar en diversas provincias del país. La gente de Quito, en cambio, organizaba un tanto espontáneamente la “defensa de la ciudad” y bloqueaba rutas, bajaba llantas, lanzaba piedras. La política contenciosa de los manifestantes, “los forajidos”, limitó las intenciones del gobierno de crear fuerzas de choque a su favor. El episodio más violento se vivió en el edificio del Ministerio de Bienestar Social (MBS), donde seguidores del régimen -apoyados por la policía- dispararon a la población civil. Una vez que los “forajidos” se tomaron ese edificio, lo destruyeron, le prendieron fuego, golpearon a los gutierristas. Muchos de los victoriosos manifestantes que se tomaron este edificio fueron luego a Ciespal, en búsqueda de los diputados a quienes se veía (junto a Gutiérrez) como responsables de la recurrente crisis política y, más aún, como protagonistas de una larga historia de corrupción y manejo maniqueo del poder.

8 El gobierno había sido muy hábil al mantener una mayoría en el Congreso hasta ese momento. La balanza se inclinó a favor de la oposición sólo luego que dos diputados otrora aliados -Carlos Vallejo y Marco Proaño, del PRIAN y el PRE respectivamente- cambiaron de bando, arriesgando perder el apoyo de sus partidos. Con ellos en contra, en una maniobra oportunista, un grupo de los “independientes” también le dio la espalda al gobierno.

Simulacro democrático, reacomodo

“Era como ver la tele” dice Manuela, una estudiante de bachillerato que fue de las primeras en entrar al auditorio de Ciespal, cuando se refiere a cómo presencié la posesión del presidente Palacio:

“Estaban ahí toditos, sentados. Estaban las cámaras. Y la Cynthia Viteri [diputada que presidió la sesión y posesionó a Palacio] con una corbata, super seria, y leía la resolución. Y Palacio levantaba la mano como saludando así, como que estuviera en el estadio. Y los guardaespaldas. Era como decirle ‘bueno, aquí está, te posesionamos, todo listo, *borra y va de nuevo*’. Había mucha gente, pero ese rato se quedaron callados, tu sabes, *por la ceremonia*” [énfasis agregado]

Marco, un joven empresario que salió a protestar “sólo un par de días, porque el trabajo no me deja mucho tiempo”, también recuerda su llegada a Ciespal:

“Veníamos de la Plaza Grande. Cuando llegué, los diputados se abrazaban entre ellos. Gritaban: ‘Y donde está, que no se ve, el cachetón del coronel’, y algunos nos aplaudían y nos decían: ‘bien, bien, ya le botamos’. Ahí fue cuando me enojé y les grité: ‘No vale. Debían votar por la disolución de la Corte [la Corte de Justicia armada a la medida de sus objetivos por Gutiérrez y Bucaram] hace meses. Ahora no vengan a hacerse los héroes. Ustedes también fuera.’”

Los relatos de Manuela y Marco ilustran dos momentos de un mismo acto. Por un lado, la solemnidad teatral con la que los políticos, actores visibles del poder, encarnan su rol; la ritualidad, aunque sea al apuro, con la que “debe” posesionarse un presidente. Todo tiene que estar dispuesto -retomando la idea de Manuela- como para que salga en la tele, como para conjurar un ritual, para consumir un *performance*.

Por otro lado, tal como lo percibe Marco, el acto de posesión de Palacio condensa un



reacomodo de las fuerzas políticas. Tomaría demasiado espacio anotar y analizar el sinnúmero de reveladores diálogos y decidoras imágenes que captaron las cámaras de Ciespal durante ese día, antes y durante la posesión de Palacio. Entre los diálogos, por ejemplo, vemos a un muy esmerado diputado democristiano que organiza la sesión: “Nada de discursos largos. Nada de confrontaciones entre nosotros. Todo rápido, ¿ok?” les dice a un grupo de diputados que lo escuchan atentamente. “Yo tengo ya redactada la resolución para destituir a Gutiérrez”, agrega antes de subir la voz: “¿y qué fue la lista?”. Otro diputado, uno de los que inclinaba la balanza ese día (léase: que horas antes estaba a favor del gobierno), estaba a tono con la diligencia del momento: “primero [nombramos] un director de la sesión, luego destitución de Quintana [el presidente del Congreso], nombramos un vicepresidente y de ahí directo a lo de Gutiérrez”. Entre las imágenes podemos ver a una diputada socialcristiana que habla, al mismo tiempo, por dos celulares, mientras otros dos timbran y timbran frente a ella. “Por eso le filmé”, me cuenta el camarógrafo de Ciespal. Otros diputados, sin tanta prolijidad, hablan por un sólo celular, pero cubriendo su boca con la mano.

Estos pequeños actos, entre muchos otros que valdría entenderlos a la luz de la complejidad semántica de los guiños de ojo de los que nos habla Geertz (1997), revelan el instante (o los instantes) en el que un nuevo equilibrio de fuerzas toma lugar en la política ecuatoriana: el reacomodo de fuerzas, el nuevo reparto. Al respecto, vale recordar que lo primero que hicieron los diputados luego de la crisis fue nombrar nuevos miembros del Tribunal Electoral (que antes lo controlaban los aliados de Gutiérrez) y, además, expulsar a los diputados que apoyaron al gobierno rompiendo -esa fue la justificación legal que encontraron ese momento- “la disciplina partidista” consagrada en el Código de Ética del Congreso⁹.

Este primer punto está bastante claro: en Ciespal se vivió un ritual de restauración del juego democrático (la posesión de Palacio) que, en el fondo, únicamente reacomoda las fuerzas existentes; una especie de conjuro ampliamente legitimado por la dinámica de acción colectiva que se vivía en las calles de Quito, pero signado por la enseñanza del Gatopardo: cambiar algo, para que todo quede igual.

El plató mediático

Durante toda la tarde así como en las semanas posteriores a ese miércoles, la prensa escrita (periódicos y revistas) fue muy prolífica en producir noticias, recoger relatos, presentar versiones¹⁰. La televisión, por su lado, transmitió en vivo y, luego, produjo una serie de

“especiales” (*Día a Día*, *La TV*¹¹, *Ecuavisa*, *Teleamazonas*). En tanto evento mediático, *lo que pasó en Ciespal* vio así incrementada súbitamente la circulación de imágenes y representaciones sobre la política, la legitimidad de la protesta, la violencia, el potencial golpe de estado, etc.¹² Quisiera proponer una lectura exploratoria respecto al tratamiento mediático sobre los hechos en Ciespal ese miércoles (aquí sigo a Farinetti 2000 y a Aguiló 2004). Así, me parece que habrían dos ejes en torno a los que los medios articulan sus narraciones; ambos buscan descifrar algo que aparece poco inteligible, algo que es menester aclarar: el primero se centra en la violencia (y sobre todo, en su espectacularización); y el segundo en el papel pasivo de la fuerza pública ante el desborde de los manifestantes.

“Infiltrados”

En el primer eje, la beligerancia de los actores es vista como irracional, fuera de orden, excesiva. Los protagonistas de esta narrativa se dividen entre víctimas y victimarios. Sobre los primeros se tiende un velo de proximidad: son llamados por sus nombres; si bien forman grupos (los diputados o los periodistas) también son presentados de forma identificable y hasta en singular (el diputado tal, el reportero tal). Sobre los victimarios, en cambio, prima un difuso plural que los presenta sólo como colectivo: son seres de la masa, la horda,

9 “Depuración a medias y a dedo”, *La Hora*, 27.04.05.

10 Para el análisis he recopilado todo lo publicado sobre Ciespal desde esa fecha hasta junio 2005, en los periódicos *Hoy*, *La Hora*, *El Mercurio*, *El Universo*, *El Comercio*, *Ecuadorinmediato* y *Tintají*. También he tomado en cuenta las revistas *Vistazo* y *Sobo*. Durante esa tarde y noche, las versiones *on line* de los periódicos nacionales e internacionales no perdieron la pista a los eventos (“19h15: Palacio rodeado en sótano de Ciespal”, “19h43: Palacio habría salido de Ciespal”, *El Comercio*, *on line*, 20.04.05; “Nuevo presidente ‘secuestrado’ por manifestantes”, *El Mercurio*, *on line*,

20.04.05; “Confusión y caos reinan en capital ecuatoriana”, *Prensa Latina*, México, 20.04.05)

11 “¿Qué sucedió en Ciespal?”, reportaje televisivo de *La Televisión*, Ecuavisa, 29.05.05 (disponible en: www.tvecuador.com)

12 Según Sáez (2005) habrían tres procesos por los que los medios influyen en las audiencias: el de tematización (*setting*) que remite a la jerarquización de lo más importante; el de primacía (*priming*), según el cual la argumentación de los medios es tomada como propia por las audiencias; y el de encuadre (*framing*): el tratamiento que los medios dan a un tema influye en la decodificación que de él hace la audiencia (cf. Hall 1980, Cerbino 2005, León 1994, Aguiló 2004).

la turba; no tienen historias particulares; son un ente múltiple, vago, impreciso. Constituyen un “otro”, distinto, lejano¹³. Usualmente llamados “infiltrados”, los victimarios son presentados como llenos de pasiones, irracionales, lujuriosos, marginales (drogadictos). En este primer eje sobre el que se asienta el discurso mediático, prima la descripción (en algunos casos, cronológica) y el relato de los hechos de esa tarde, narrados desde una posición normativa sobre lo aceptable y lo inaceptable. Veamos, por ejemplo, cómo presenta los hechos un periódico de Quito:

“Bajo la consigna ‘¡Fuera todos!’, decenas de personas ingresaron el miércoles al edificio de Ciespal para buscar a los diputados que, en horas de la mañana, sesionaron en el lugar. El hecho puso a correr a legisladores, periodistas, asesores y al propio presidente Palacio. La turba no sólo estaba integrada por ‘forajidos’ sino por delincuentes que, a punta de palos, piedras e, incluso, armas cortopunzantes, llegaron al lugar, que se convirtió en un campo de batalla. Empujones, gritos, ‘palazos’... fue el método que *esa gente* usó para romper puertas, techo y ventanas, en busca de su objetivo” [énfasis agregado]¹⁴

En algunas variaciones, “esa gente” toma el rostro de “infiltrados”. En estos casos, se especula que “seguían un libreto”, que tendrían un objetivo deleznable (reinstalar a Gutiérrez en el poder, matar a Palacio...):

“Hay que condenar la brutal presión de la que fueron objeto [los diputados] en Ciespal, no por los ‘forajidos’ que lucharon en las calles contra el ‘dictócrata’ [desafortunada autodenominación del propio Gutiérrez], sino por infiltrados que siguieron un libreto que tenía por finalidad regresar al coronel a Carondelet”¹⁵

13 Sobre la política de representación que, en un entorno de violencia, identifica a los cercanos, los “nuestros”, y des-identifica al otro, al “enemigo”, ver Judith Butler (2003).

14 “Ladrones se colaron en toma de Ciespal”, *Hoy*, 22.04.05

15 “Diputados, pudo más el populismo”, editorial de Thalía Flores, *Hoy*, 14.07.05.

“La vida del presidente de la República, Alfredo Palacio, estuvo en riesgo, al ser perseguido por 200 mercenarios para asesinarlo, quienes habrían sido contratados por el directivo de Sociedad Patriótica, Renán Borbúa. Así lo reveló Rómulo López, quien acompañó al jefe de Estado, el miércoles anterior, luego de que se posesionó en Ciespal, ante el Congreso, que escogió como sede ese lugar”¹⁶

En esta lectura mediática, no cabe concebir a los forajidos como violentos. A “esa gente”, los infiltrados, no se le atribuye una capacidad de indignación moral sobre la política. Los forajidos violentos no son forajidos. La regla que impone este relato parece simple, sin embargo, es muy efectiva a la hora de construir una línea divisoria entre quienes calzan en el ámbito de los posibles, y aquellos que “al comportarse así” deben ser excluidos del orden social civilizado.

Por otro lado, para construir su relato, algunos medios se apoyan en testimonios. Quienes dan testimonio no son, en ningún caso, los victimarios. Quienes tienen derecho a expresarse son los “testigos” o las “víctimas” de la violencia de la turba; los otros, ese otro difuso, anónimo y violento, está presente en los relatos, pero no por su propia voz, lo que permite que sobre él se cuelen un conjunto de estigmatizaciones¹⁷. Un periódico de Cuenca recoge así el testimonio de dos diputados (testigos-víctimas):

“El diputado de la DP, Ramiro Rivera, dijo que los responsables de los hechos violentos registrados en Ciespal el pasado 20 de abril, son la denominada banda de ‘Cero Corrupción’ [grupo de choque creado por partidarios de Gutiérrez] y del Movimiento Popular Democrático que estuvo junto al Gobierno y lue-

16 “Rómulo López: ‘querían matar al presidente’”, *Hoy*, 26.04.05.

17 Estigma, dice Goffman (2003), es un atributo de la persona que lo diferencia de los demás y que lo convierte en menos apreciable. Puede ser corporal o social (de su personalidad) pero siempre se basará en un juicio social y moral de lo aceptable.



go pretendió señalar que habrían participado en su caída. Según Rivera, la *turba de maleantes* estuvo drogada y armada de palos, machetes, que se infiltró con la juventud de los forajidos que gritaban ahí ‘no más violencia’ y acusó a Renán Borbúa y Bolívar González de ser quienes trajeron a las *hordas* para defender al coronel, Lucio Gutiérrez. Mientras el diputado de la ID, Andrés Páez, sostiene que el presidente, Alfredo Palacio, sí estuvo en peligro de ser asesinado, afirmando que en Ciespal estuvo *gente embriagada, con puñal en mano*, los mismos que *asaltaron a los forajidos*, a diputados y a la gente que esta cerca, que salieron sin celular, sin billeteras; chicas que fueron quitadas sus carteras, los aretes, lo anillos; habían personas que se entraron a las oficinas a sacarse los ceniceros, las computadoras, los cuadros de las paredes, los libros. En un momento, sostuvo el legislador, *hubo la intención de matar* al presidente Palacio, ‘sólo los que estuvimos dentro podemos visualizar el *salvajismo* con el que se expresaba *cierta gente*, la violencia que utilizaba esta gente elucubraba su propósito de

ir a delinquir al interior de Ciespal’. Recordó que los *delincuentes infiltrados en la protesta cívica de los forajidos*, con botella en mano rompieron la cabeza de los diputados: Cinthya Viteri, Carlos Vallejo, Luis Fernando Torres, Patricio Dávila, Miriam Garcés, Ana Lucía Cevallos, Miguel López, este último legislador estuvo a punto de ser lanzado desde el segundo piso de Ciespal” [énfasis agregado]¹⁸

El poder desamparado

En el segundo eje, el referido a lo que hicieron y, sobre todo, a lo que dejaron de hacer la policía y las fuerzas armadas aquella tarde, los medios lanzan una cacería informativa. Siguen los hechos, manejan hipótesis, exigen transparencia. Sobre todo, especulan (tal vez, con razón) sobre un potencial golpe de esta-

18 “Hubo intento de golpe de estado militar. A eso se debe la separación del coronel Servio Samaniego”, *El Mercurio*, 01.05.05.

do. Más en detalle, los medios se preocupan - mayormente- por explicar dos hechos paralelos: a) por qué la policía o la milicia no contuvo la violencia de los manifestantes¹⁹ y b) por qué no protegió o rescató a Palacio²⁰. Al respecto, han realizado tanto la cobertura de “las investigaciones legales procedentes” (que tienen como principal escenario al Congreso y a la Fiscalía de la Nación)²¹, como la condena de las pretensiones ocultas de “militares y otros grupos de poder” por crear un escenario de caos y pescar a río revuelto²². En ambos casos, la preocupación de los medios gira en torno al paréntesis que esa tarde sufrió el weberiano monopolio legítimo de la violencia. Casi la totalidad de mis entrevistados también coinciden en que la policía no hacía nada y en que los militares estaban, pero no actuaban.

El punto más alto de esta narrativa se deja ver a propósito de la presencia de un coronel en servicio activo (Servio Samaniego) que increpa a los presentes a no reconocer a Palacio. Si las fuerzas armadas mostraron recurrentemente su politización en las últimas tres caídas, éste fue -junto a la participación del coronel Gutiérrez en el 21 de enero- el momento de menor hipocresía (ver ANEXO).

Tanto en la estigmatización de los violentos, como en la inquisición sobre la inacción de la fuerza pública, prima en los medios un

discurso del orden. Para los medios que aquí he analizado, al menos eso es lo que pudo leer en el conjunto de notas de prensa y en los pocos pero decisivos minutos de video, la violencia es un problema a conjurar, a contener, a exorcizar, a través de una narrativa sobre el caos y la anarquía. Toda violencia por fuera de los cánones impuestos por el *status quo* será estigmatizada, penada moralmente, sancionada como extrema. Al reproducir el discurso dominante sobre la violencia legítima, los medios muestran su articulación con el poder.

¡Fuera todos! Violencia e indignación moral²³

Comienzo esta sección con un el relato de Hugo, un joven que fue a Ciespal aquella tarde y encontró -como tantos otros- un *aquí* y un *ahora* propicios para mostrar su rechazo y su ira hacia los diputados:

“Era como estar en el estadio y que al frente estaban los dirigentes de la barra contraria²⁴. Era tenaz. Ahí me topo con la Mónica [seudónimo], que como te explicaba era del grupo este del Gándara y del Cordovés, de [la organización] Ciudadanos por la Democracia, y me pasa el megáfono y me dice ‘tranquilízales, tranquilízales’. Cogí el megáfono. Y yo nada de querer tranquilizar a nadie. Aquí les voy a hostigar. ‘Perdóname Mónica, pero ahora me voy a dar gusto’. En la oficina que te digo, que era en el primer piso alto era donde creíamos que estaban los diputados, y yo comencé: ‘Hijueputas, ahora se mueren’. Yo no tenía la in-

19 Por ejemplo: “Ladrones se colaron en toma de Ciespal”, *Hoy*, 22.04.05; “Sodoma y Gomorra en Ciespal” *El Comercio*, 26.04.05; “Nos estuvieron pegando hasta que un pelotón de la Policía entró a ayudarnos”, (Jorge Marirrodriga), *El Comercio*, 24.04.05.

20 “No fue fácil para Palacio”, “Alfredo Palacio asume y queda atrapado”, ambos en *Hoy*, 21.04.05; “Casi muere en el intento”, *Revista Vistazo*, 02.06.05; “El presidente pasó un susto en Ciespal”, *El Comercio*, 21.04.05; “Cynthia Viteri: no sabíamos dónde estaba el presidente”, *La Hora*, 23.04.05.

21 “La Fiscalía investiga desmanes en Ciespal”, *El Comercio*, 26.04.05. Al respecto, luego de los acontecimientos, tanto el Congreso como el presidente Palacio se comprometieron a pagar por los daños que sufrió el edificio, sin hacerlo hasta la fecha.

22 “Rosero y Cuvero callan por ataque en Ciespal”, reportaje de Gabriela Fajardo, *Hoy*, 27.04.05.

23 Siguiendo a E.P. Thompson (1995) entiendo por indignación moral la forma en la que un actor evalúa una situación como injusta e impropia, un acto que crea un agravio. De forma similar, Benjamín (1921) ubica el campo de la moral en relación a la justicia y al derecho entendiéndolo por éste no sólo lo legal, sino también lo legítimo.

24 Hugo es miembro de una barra de fútbol. Su descripción del evento (“era como estar en el estadio”) podría ser analizada como un momento ritual (*aggro*) de exaltación y confrontación violenta con el adversario (Hernández *et al* (2001).

tención de matarles pero era una jugada del aspecto psicológico de los manes, ¿cachas? Los manes frente a un montón de gente, una turba enardecida, totalmente resuelta a cualquier cosa... y alguien que te esté martillando el cerebro. Era jugarles la psicológica. Que sientan estos desgraciados lo que la gente puede hacerles por la irresponsabilidad, que sepan que realmente la cuestión de votar o no votar en un periodo de 6 meses por una resolución, sí hace la diferencia. Porque si ellos votaban por esa misma resolución en diciembre, cuando fue todo el despelote de la Corte y todo, todo esto no hubiera sido necesario. Ahí me quedé un rato con el megáfono y me explayé con florido vocabulario a mandarles a la puta madre.

E.H: ¿Que les decías?

‘Vos Villacís [diputado del MPD] hijo de puta, te vas a morir, ahora sí te voy a colgar de los huevos yo mismo’. Yo no sabía si él estaba ahí adentro escuchando. ‘Te voy a colgar de los huevos’. *Todo cague de risa*. Y cuando llegué al capítulo Dávila [diputado del PSC] le dije: ‘Vos Dávila, maricón, desgraciado’. Eso de ‘maricón’ no era por ser homofóbico, para nada²⁵. ‘A voz si me voy a dar el gusto de meter-te esta estaca por el culo’. Y yo no tenía ninguna estaca ni nada. ‘Voz fuiste el de la AGD, vos fuiste el atracador de este país’. Entonces hacía memoria del papel del man en la Superintendencia de Bancos en la época de Mahuad, de cómo el man se enriqueció ilícitamente: tiene 3 informes de la Comisión Anticorrupción que no dan trámite en la Fiscalía, encubrió a los deudores de la AGD mientras él estaba a cargo. Con él sí me explayé. Me seguía y me seguía acordando. Así, era una cuestión de ponerle memoria a un montón de notas y de gritarle todo en la cara. Así eran los gritos, ya un poco

en serio, no tan joda, *de la indignación que sentía*” [énfasis agregado]

Quien habla, Hugo, está muy bien informado sobre los asuntos de corrupción en los que están involucrados los diputados a los que agrede. Su actitud violenta se guía conscientemente por estrategias de amedrentamiento, buscando causar unos efectos políticos y psicológicos específicos: el miedo y la lección moral, a unos sujetos perfectamente identificados/identificables²⁶. No se trata de una actitud indiscriminada e irracional de agresión. Su acto, por el contrario, está guiado por una racionalidad estratégica que se ajusta al momento específico y, más aún, está cargado de implicaciones morales (“de la indignación que sentía”), es decir, una racionalidad práctico-moral. Te busco para golpearte -parece ser la lógica-, si no lo logro, no dejaré pasar la oportunidad de darte un escarmiento (moral) recordándote *lo que eres* a través de un megáfono. La forma de su acción, el insulto y la vejación, están cargados de connotaciones sexualizadas y desmaculinizantes (“colgarte de los huevos”, “una estaca por el culo”) que merecen un análisis más detenido, el cual rebasa los límites de este artículo. Su relato, también, está envuelto de una narrativa festiva, carnavalesca (“todo cague de risa”). El cruce tiempo-espacio (aquí-ahora) producido en Ciespal no es un lugar vacío, sino uno en donde la transgresión, la inversión del orden, es posible y hasta deseable (Bataille 2002).

Es una situación límite donde las emociones operan más diligentemente (lo que los teóricos de la acción colectiva llamarían *emotions at work*, emociones en acción). Veamos,

25 En otro momento de la entrevista, Hugo explica que usa “maricón” o “hijo de puta”, “sólo como insultos”: “Yo tengo buenos amigos gays y no tengo nada contra las prostitutas. No es por ser homofóbico. Los manes después sacan un comunicado diciendo ‘queremos hacer conocer que el señor tal y tal no hace parte de la comunidad gay’ o ‘hacemos saber que el señor éste no es hijo de ninguna de nuestras trabajadoras sexuales federadas’. Es joda, ¿cachas? Cualquier cosa con tal de no tener ninguna relación *con ese hijo de puta*, sobre todo el Gutiérrez” (énfasis agregado).

26 Sobre la precisión en la ubicación de blancos con la que actúan los manifestantes indignados con los políticos, ver Auyero (2004:174-179). Este autor analiza las jornadas de protestas conocidas como el “Santiagueño” en Argentina, en donde los manifestantes ubican e identifican con precisión a los que consideran políticos corruptos. La precisión se explica por la lógica que guía la práctica, a saber, la indignación hacia esos políticos.



por ejemplo, cómo momentos después, Hugo cuenta que, a su pesar, “no tuvo chance” de golpearles a los diputados objeto de sus insultos (Dávila y Villacís). “Ni les vi cuando salieron” concluye. “A la Cynthia sí, a ella sí casi le pego”, dice:

“Era como a la salida a la calle. Agarré una bandera y le iba a dar un palazo, pero uno de los guardaespaldas me empujó el brazo. Me quiso pegar y yo ahí con el hasta de la bandera le hacía así, así, para que no se me acerque. Imagínate si el man, un grandote, me avanza a meter un quiño. El fauleado era yo”

Si algún sentido ha de encontrarse a la violencia de quienes fueron a Ciespal dispuestos a agredir a los diputados, habrá que partir de un marco normativo-sociológico que entienda a la violencia como una relación social, como un tipo de vínculo entre actores, como una opción dentro de un ámbito de posibles,

un ámbito -por su puesto- de sociabilidad. La violencia es una relación y en tanto tal hace parte de un proceso²⁷. Ver la violencia como un conjunto de actos aislados, desligándolos de la trama de relaciones sociales en los cuales se insertan, la vuelve ininteligible y, así, proclive a ser dotada de connotaciones morales negativas (cf. Webber *et al* 2003). La lectura que sobre la violencia quisiera presentar aquí no busca contribuir al cúmulo de juicios morales que eventos como los de Ciespal ese

27 En un análisis sobre violencia en El Salvador, Philippe Bourgois (2002) retoma la “ley de la conservación de la violencia” de Bourdieu (1997) para explicar las formas en las que ésta circula entre distintos niveles (“toda violencia se paga”). Así, habla de al menos 4 formas de violencia: política (ejercida en tono represivo por el Estado u otros actores políticos), simbólica (aquella que logra definir el campo de lo real, cf. Bourdieu 1997:217-276), cotidiana (interpersonal, cf. Schepers-Hughes 1992) y estructural (aquella que crea segregación social y económica, cf. Tilly 2004).

20 de abril suscitan. No quiero hacer una oda de lo virtuoso del pueblo insurrecto que derrocó al “dictócrata”. Tampoco quiero hacer una apología legitimadora de los actos de violencia que se suscitaron en Ciespal (y más gravemente en el MBS) o en diversos puntos de confrontación entre los *a favor* y los *en contra* de Gutiérrez. Tampoco, y esto tal vez deba subrayarse, es mi intención reproducir una pornografía de la violencia²⁸, como llama Bourgois (2002) al hecho de que la etnografía de la violencia supone un acercamiento *emic* a las dotaciones de sentido de los perpetradores, y no sólo una mirada *etic* a partir de las historias de las víctimas o de alguna de concepción dominante sobre el orden civilizado (cf. Rodgers 2001). A partir del caso de Ciespal, encuentro más útil en términos analíticos plantear elementos de juicio para entender cómo y por qué la gente actúa violentamente en situaciones específicas. Mi interés es desentrañar la lógica de la práctica a través de entender el contexto en el que tiene lugar la violencia y las motivaciones de los actores. Por ejemplo, en la televisión vimos cómo el (autodenominado) “forajido” Diego Guzmán (hoy funcionario del gobierno de Palacio) golpea con el puño el rostro de uno de los “matones pagados” que atacaron a los protestantes desde el edificio del MBS, mientras éste, sentado, asustado y con las manos esposadas en la espalda, suplica a la policía que lo proteja de los manifestantes. En este caso, por ejemplo, no me interesa calificar como “digno” o “cobarde” el comportamiento del forajido, sino explicar el contexto en donde esa acción violenta tiene un sentido y, asimismo, entender ese sentido. Una pista para ello, insisto, puede encontrarse cuando ubicamos el

28 “A través de cautivantes descripciones, desgarradoras fotografías y seductoras formas poéticas, los etnógrafos corren el riesgo de contribuir a una pornografía de la violencia que refuerza las percepciones negativas de los grupos subordinados a los ojos de lectores poco compasivos” (Bourgois 2002:96).

tema de la violencia como producto de relaciones sociales.

De la indignación que sentía

Si partimos de ahí, saltan a la vista al menos dos posiciones *emic* respecto a la violencia. Una, aquella de los entrevistados-actores que justifican la violencia contra los diputados a través de su indignación moral; y otra, aquella de quienes no la justifican apelando a criterios humanistas. En el primer caso se hallaría Hugo, a quien cité anteriormente, pero también María, una profesional acomodada, madre de dos niños, que recuerda:

“A Dávila [diputado del PSC] yo no le pegué. Quise, pero la gente me empujó y no podía acercarme. Y era chistoso porque el Juan, mi esposo, estaba justo al frente gritando ‘no violencia’. Él era de los que se asustó con la violencia. Él creía que podía pasar algo grave. Y tal vez sí hubiese sido así, pero ese rato yo sólo quería darle un puñete. Yo le quería pegar y el Juan estaba en contra de eso. Después ya nos reíamos. Era el momento; era tenaz.

E.H.: ¿Y por qué sentiste ganas de pegarle?

Por lo que él representa. Porque él representa la impunidad. Yo cuando oigo ‘Patricio Dávila’ es como identificar... es como saber cuál es la gente que se ha beneficiado de cargos públicos y que no ha hecho nada por el país. Fíjate en la gestión de este hombre en la AGD, es de lo peor que ha habido. Entonces es eso. Es lo que él representa: un cúmulo de cosas, la impunidad, la corrupción. Para mí el Dávila no es el Dávila. Ahí yo pierdo la personificación de este individuo. El Dávila representa un sentimiento de hastío. Él es eso.”

En el segundo andarivel, aquel que condena la violencia, está Graciela, una periodista que ayudó a los diputados a esconderse:

“Le escondí a un diputado detrás de un escritorio... y les decía [a los manifestantes] ‘no están aquí, no están aquí, ya se fueron’. No te

voy a decir el nombre del diputado, porque el pobre realmente estaba que se orinaba. Era una cuestión de humanidad. No le ibas a dejar que le peguen... si toditos venían justo por eso, para encontrarles. Claro, había un montón de gente que hubiera gritado 'no violencia' y se hubieran calmado, pero ¿qué tal si no?"

Al mismo argumento recurre Esperanza, una funcionaria de Ciespal que también ayudó a esconder a los diputados, y cuya meta principal ese día era "proteger el edificio, que no es sólo el lugar donde trabajas, llega a ser como tu casa":

"Algunos diputados estaban llorando. Y me dio mucha lástima. Es cierto que te pueden causar muchas iras: que corruptos, que rateros, que sinvergüenzas. Pero en ese momento son seres humanos, desprotegidos y a merced de un grupo que les quiere hacer pedazos. Yo, personalmente, no podría ponerle a un perro sarnoso a que le despellejen. No podría. Fue raro, y te lo digo sinceramente, ese rato se crea una especie de solidaridad"

Éstos últimos cuatro relatos también ilustran una parte sustancial de la fenomenología de la violencia, tal como se experimentaba en Ciespal esa tarde. Tanto aquellos que agraden como aquellos que buscan limitar la agresión, se mueven estratégicamente. La violencia, en el momento mismo de su cometimiento, es resultado de un juego tanto de disuasión como de fuerza (cf. Tilly 2003 y Auyero 2005). "Para que no rompan las puertas, les mostrábamos todas las oficinas, de una en una. 'Si ven, aquí no están, ya se fueron, ya se fueron'. Pero ni bien se iba un grupo, venían otros buscando a los diputados. Nunca íbamos a abrir las puertas donde sí estaban los diputados, pero era una forma de despistar a la gente", confiesa Fernando, un técnico de Ciespal.

Bruno, uno de los jóvenes que estaba más exaltado esa tarde, nos cuenta en cambio las estrategias de los victimarios. Junto a un grupo de "carnes", amigos que se conocen de to-

da la vida, Bruno es parte de una barra de fútbol organizada que, en esos días, tomó como suya la tarea de salir a las calles a enfrentarse a la policía y protestar contra Gutiérrez. La tarde de ese miércoles, ellos fueron de los más arriesgados y furibundos adversarios que se enfrentaron a los "matones pagados" que trajo el gobierno y que atacaban a la población desde el Ministerio de Bienestar Social. Saliendo victoriosos de ahí, Bruno y sus amigos fueron a Ciespal a "sacar a todos, que no quede ni uno".

"No íbamos a matar a nadie. Nadie puede hacer esas cosas. En el estadio nos hemos sacado la puta contra otras barras, pero nunca nada más que eso. Es como dicen, por más borracho que estés no comes caca. Para nosotros era igual, por más cabreados... no íbamos a matar a nadie. Pero de que les sacábamos la chucha, les sacábamos. Yo me acuerdo, estaba cabreado. Y eso que yo vi bala en el MBS... Alguna gente, incluso de nuestros panas, estaban más bien fresco: hueveo, a ver qué pasaba... 'no violencia, no violencia'. Otros ya sabíamos a lo que íbamos. Nos organizamos. Nada de vos haces esto, yo hago esto, ponte acá... No, como que ya sabías... con las miradas. Nos pusimos en fila india en toditas las gradas. De ley algún rato iban a pasar los diputados por ahí. Les encontraban arriba y les sacaban por donde nosotros... y listo el capote. Y para que no nos huyan nosotros también gritábamos 'no violencia, no violencia'.

E.H.: ¿Y les funcionó? ¿Le pegaron a alguien?

Ahí adentro no. Pasamos esperando a ver si caían, pero no, nada. Unos le agarraron al Dávila y le pedían la renuncia... pero ese rato no era de eso. Había que meterle un palazo. *Es lo único que te queda.* 'Sí, sí, ya les firmo. Pasen papel y les firmo'. ¡Huevadas! A ese le esperamos afuera y ahí sí... Yo le metí un quiño en la cabeza, un manotazo en la espalda... ¡Qué alivio! ¡Toma! ¿Qué chucha? [énfasis agregado]

Transgresión, violencia creadora

La tarea de entender cómo operan las emociones en situaciones de violencia requeriría un abordaje psicosocial detenido (cf. Hernández *et al* 2001) que, como otros potenciales temas de indagación, desbordan mis fuerzas y los límites de este ensayo. Lo que sí quisiera plantear como colofón es lo que Benjamín (1921) llama “la necesidad de una crítica de la violencia”. Según este autor, habría que ubicar la reflexión sobre la violencia en el plano de las relaciones morales, es decir, en la relación de ésta con el derecho y la justicia. Tal reflexión sólo puede plantearse —dice— desde una *filosofía de la historia* que asuma una oscilación entre aquella violencia que funda y aquella que conserva el derecho. Tal filosofía se contrapone a una *concepción iusnaturalista del derecho* (y, por ende, de la violencia) ya que ésta última sólo se pregunta por el origen del derecho y las formas de conservarlo y, por tanto, es insuficiente a la hora de entender el cambio histórico. Los grandes cambios, las grandes revoluciones, se consiguen a través de procesos violentos de erradicación del antiguo régimen y de imposición de un nuevo orden. En este marco, matiza Benjamín, la violencia sólo puede ser entendida como un medio, ya que ésta no es un fin en sí misma. Benjamín distingue, más bien, entre si los medios por los cuales opera la violencia son legítimos o no. Y serán legítimos en la medida en que se ajusten a derecho. Pero el derecho, concluye, y este es su argumento, tiene a su vez su origen en la violencia. Un orden (social-legal) se funda o se conserva violentamente. La ley, en cualquier caso, es violenta, pues establece los límites de lo permisivo. La violencia (revolucionaria) que funda una nueva ley (un nuevo orden, un nuevo derecho), la violencia que Benjamín (como Bataille) llama creadora, se volverá decadente cuando comience a ejercerse para conservarse. *Fundar o conservar el orden son las funciones de la violen-*

cia; del momento del “hamacarse dialéctico” en el que nos encontremos dependerá que la violencia sea vista como legítima o no.

En el caso de la violencia producida en Ciespal, los conjuros que sobre ella se han tejido (sobre todo por algunos medios) contribuyen a crear una visión estigmatizante, y no permiten comprender (si seguimos el argumento de Benjamín) los entretelones de su legitimidad que, como hemos visto, radica en la indignación de los manifestantes hacia quienes encarnan una práctica política corrupta. Aún peor, tales conjuros invisibilizan las reales motivaciones de los violentos de ese día. Aquellos violentos de un día que se cansaron de ser violentados todos los otros días por una clase dirigente maniquea e interesada. Si retomamos la idea de Benjamín de que el papel de la violencia es fundar o conservar el orden, ¿qué tan violenta resulta la restitución del orden democrático encarnada en la posesión de Palacio? ¿O no hay violencia en la restitución de un nuevo orden que de nuevo sólo tiene otros rostros pero las mismas estructuras? Es decir, ¿no resulta violenta la restitución de un orden que, en términos políticos, no ha generado sino mecanismos de reproducción de la exclusión política o de concentración y apropiación privada y corporativa de recursos públicos, es decir, de una práctica política percibida y evaluada —por los manifestantes— como abiertamente deshonesto, cínica, impropia, injusta, en una palabra, inmoral?

Graciela, la periodista que escondió a un diputado debajo de un mueble:

“Lo que me calienta es que después de eso, como si nada. Al siguiente día, otra vez a negociar.

E.H.: ¿Y ahora, después de que pasó eso, le volverías a esconder?

No, ¡qué va! Mi pelado me decía que qué bruta, cómo le voy a proteger a ese diputa-

do... y es cierto. Ahora otra vez anda negociando, poniendo precio a su voto, en sus andanzas. Tal vez le hubiera servido de lección. Un escarmiento para que no sea tan cínico. Él y todos los otros. ¿No ves? Después de eso se fueron otra vez a sesionar y siguen en las mismas. Ahora no sé, no creo, no sé si yo misma les buscaría para pegarles, aunque sea un coscorrón. A mí como periodista me conocen, por estar ahí cubriendo el Congreso todo el tiempo. Pero eso sí, no les volvería a proteger. Al menos que les peguen un poco, que aprendan a no ser tan sinvergüenzas”

Esperanza, la funcionaria de Ciespal que ayudó a despistar a los manifestantes:

“Yo no tuve esa sensación de bienhechito que les pegaron. Pero sí me da bronca lo que pasa ahora. El cinismo con el que actúan. La rapidez con la que se volvieron a repartir los puestos en el Tribunal Electoral, o las comisiones legislativas. Todo ese reparto que es el típico. Lo único que me queda es... ¡qué gente! No aprenden. ¿Qué más les hace falta para reaccionar? Yo supongo que te habrá pasado que, estando en un momento así super difícil, es como que te sientas a evaluar y reaccionas para ver lo que te ha pasado. Pero me sorprende que esta gente no. Que siguen en las mismas. Que no hayan procesado adecuadamente lo que les pasó o les pudo pasar acá en Ciespal”

Parece claro, entonces, que la violencia expresada en Ciespal estuvo guiada por una profunda indignación moral contra los políticos (“que se vayan todos”). Sin embargo, comprobar si *lo de Ciespal* fue una lección para los políticos (o para los manifestantes) es aún una tarea abierta. Por como se han rearticulado las fuerzas políticas luego de la crisis, me temo que no. Aún peor, me temo que la beligerancia desatada a partir de la general indignación hacia los políticos quede exorcizada, una y otra vez, por un discurso que estigmatice la protesta y aspire a que los “dóciles forajidos” protesten casi sin protestar. Y que sus frutos no sean otros que el reacomodo de las fuerzas, un simulacro democrático, como el

que vivimos en Ciespal con la posesión de Palacio. Un reacomodo que, retomando a Benjamín, resulta violento por cómo conserva el poder, por cómo reinstala el mismo juego político frente al cual protestaron los otros violentos, los que atacaron a los diputados en Ciespal. Sin embargo, como puntualiza Bourgois (2002) respecto a la bourdiana “ley de la conservación de la violencia”: si toda violencia se paga, toda violencia, también, se sufre. Nadie sale librado de la violencia. En algún momento, ésta da la vuelta, no por una moraleja, sino por el flujo de relaciones sociales que se condensan en ella. Queda abierta, por tanto, la expectativa sobre *el poder del poder* para conjurar las potencialidades políticas contenidas en la violencia expresada en Ciespal por los manifestantes. Quedan abiertas las potencialidades para que la indignación moral, hoy expresada en forma de violencia contra los políticos, encuentre en el futuro ante situaciones similares los mismos causes u otros. Está por verse. Momentos como los de Ciespal en abril de 2005 pueden repetirse, tal vez para bien. Es decir, para canalizar la indignación hacia un cambio político sustantivo, y no sólo hacia una manita de gato-pardo.

Agradecimientos

Mi sincero agradecimiento a quienes dieron su tiempo para ser entrevistados: periodistas, estudiantes, empresarios, militantes de distintas organizaciones sociales y políticas, funcionarios de Ciespal, entre otros. Un especial reconocimiento merecen Edgar Jaramillo, director de Ciespal, Mauro Cerbino y Grace Benalcazar quienes gentilmente me permitieron usar valioso material de primera mano. Sofía Argüello, Eduardo Kingman, Felipe Burbano, Franklin Ramírez y Carlos de la Torre leyeron, comentaron y aportaron con críticas y sugerencias a la versión (por ahora) final del artículo. Mi gratitud hacia ellos/ella.

Anexo: **Lo que dijo el coronel Samaniego en Ciespal**

Caía la noche. El coronel Samaniego no llegó solo. Junto a él llegó un grupo de militares que se ubicaron en la entrada principal de Ciespal y la bloquearon. También llegaron con él, un grupo de jóvenes a quienes no he identificado; sospecho que son un grupo organizado no partidista, tal vez con ideas nuevas sobre cómo organizar el país, a quienes llamaré “*acólitos*”. Samaniego se abre paso entre la multitud, los que luego serán su “*audiencia*” (así denominaré a quienes escuchan el mensaje -y gritan a veces a favor y otras en contra- en el hall). Cruza el pasillo de entrada al edificio. Sube unas gradas; trata de ubicarse en un hall interno, a desnivel, que lleva al ala este del edificio: es una especie de balcón improvisado. El video muestra a dos personas que, sin uniforme pero vestidas con prendas militares, no se separan de él. Se pegan a su espalda todo el tiempo y luego, cuando habla a la audiencia, le susurrarán ideas al oído (“*susurros*”). Mucha gente mira con extrañeza la llegada de un militar al recinto. Algunas personas muestran rostros de asombro o repugnancia. Mientras Samaniego sube las gradas para ubicarse de forma visible, los *acólitos* le abren paso y gritan varias veces: “Gobierno popular, gobierno popular”. Cuando se encuentra en la parte superior, frente a la “audiencia”, un joven -que evidentemente no es de los “*acólitos*”- se acerca y le dice: “Debemos apoyar al presidente. Hay que apoyar a Palacio”. Samaniego no se inmuta. Uno de sus dos acompañantes le responde al joven: “¡Qué chucha! Palacio también fuera. Nada que ver. Todos fuera”. El periodista de Ciespal (cuya cámara ha filmado todo el ingreso de Samaniego) le pregunta: “¿A

qué se debe su presencia aquí?”. Samaniego no responde. Hace *mutis*. Segundos después se sitúa frente a la audiencia:

Servio Samaniego (S.S.): Pueblo del Ecuador. Pueblo de Quito... ¡Viva el Ecuador!

Audiencia: ¡Viva!

S.S.: Yo vengo a título personal. Soy el coronel Servio Samaniego. Vengo a apoyar la moción, porque en este momento el país está sin dirección política. Hay un presidente que no lo quieren reconocer. No hay un vicepresidente. No hay una Corte de Justicia. Por tal razón, yo les pido a ustedes conciudadanos que mediten, que si ustedes pidieron un gobierno popular, que tengan un gobierno popular.

Acólitos: ¡Fuera todos! ¡Asamblea popular! ¡Gobierno popular! ¡Gobierno popular!

Audiencia: ¡Gobierno popular! ¡Gobierno popular! [*La gente grita por contagio*]

Susurros: *Yo no quiero nada. Yo no quiero nada...*

S.S.: Yo en lo personal no quiero nada en absoluto. Yo lo que quiero es que mi país se reconstruya y se mantenga en paz. Que vivan en paz...

Susurros: *Para eso...*

S.S.: Para eso tiene que disolverse el Congreso Nacional...

Susurros: *Junta popular...*

S.S.: Formar un gobierno de transición, una junta cívica, para que pueda llamar lo más próximo a elecciones

Audiencia: ¡No! ¡No militares!

S.S.: O una asamblea constituyente

Audiencia: ¡No dictadura!

S.S.: No, no dictadura de ninguna naturaleza.

Audiencia: ¡Dictadura no! ¡Dictadura no!
¡Dictadura no!

S.S.: Dictadura no.

[Silencio-pausa: Samaniego pierde el control de la audiencia]

S.S.: Señores: que se vayan todos como ustedes lo han pedido. Que se vayan todos.

Audiencia: ¡No dictadura!

S.S.: No dictadura. Por eso quiero involucrarlos y pedirles a los señores generales que asuman el reto histórico que la patria les ha puesto

[El ruido es ensordecedor. La audiencia grita, murmura, habla en voz alta]

Acólitos: ¡Escuchen! ¡Escuchen!

Audiencia: ¡No dictadura! ¡No dictadura!
¡No dictadura!

Acólitos: ¡Escuchen! ¡Escuchen!

S.S.: Una asamblea constituyente donde no participen los partidos políticos, donde las clases sociales y las bases sociales tengan su participación. Que se vayan todos. En este momento estoy entregando mi uniforme al pueblo ecuatoriano, para que el mando disponga

Audiencia: ¡No militares!

S.S.: No militares.

Uno de los acólitos: ¡Ya! No militares. No. No. No estamos, no estamos...

S.S.: Integrarse y formar una constituyente, un gran frente, que les permita conseguir al final lo que ustedes, lo que durante todos estos días han venido luchando y buscando.

Acólitos: ¡Junta popular! ¡Asamblea popular!
¡Gobierno popular! ¡Gobierno popular!

S.S.: El señor doctor Palacio...

Audiencia: ¡Ni Borja ni León! ¡Ni Borja ni León!
[La audiencia muestra su desengaño]

Susurros: No queremos políticos, no políticos...

S.S.: No queremos la clase política

Acólitos: ¡Eso! ¡Bien!

Audiencia: ¡Ni Borja ni León!

Audiencia: ¡Militares no! ¡Militares no!

Toma la palabra un joven de unos veinte y ocho años que parece pertenecer al grupo de acólitos: Compañeros, compañeros..._

Acólitos: ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Aprendan a oír!

El joven: Logramos sacar a Lucio Gutiérrez. Este proceso quiere refundar el país y tiene que encontrar un cause. ¿Cuál es el cause que queremos proponer?

Audiencia: ¡Ninguno! [La audiencia deslegitima, con este grito, al joven]

El joven: ¿Que es lo que plantea el pueblo de Quito?

Audiencia: ¡Nada! [idem]

El joven: El pueblo de Quito está planteando en primer lugar que se cese al Congreso Nacional, al igual que al mando medio de los militares...
¡Compañeros! ¡Compañeros! [El joven pierde el control de la audiencia]

Retoma la palabra Servio Samaniego: Será un gobierno transitorio que ustedes lo pongan. Que participe la ciudadanía, que no haya participación política de nadie porque han de querer seguir mangleando. El señor doctor Palacio ha sido nombrado sucesor como dicta la constitución, pero el pueblo no lo quiere, tiene que irse.

Audiencia: Sí lo quiere [Esta vez, una voz deslegitima a Samaniego]

S.S.: Tiene que irse el Congreso, y tienen que dar paso a que se conforme una asamblea o se conforme un gobierno provisional con la participación de todo el pueblo. Muchas gracias ¡Que viva el Ecuador!

Acólitos: ¡Gobierno popular! ¡Gobierno popular!



Bibliografía

- Aguiló, Ignacio, 2004, “El proceso de producción de sentido en televisión. Estudio de la codificación y decodificación de textos televisivos sobre piqueteros”, disponible en <http://www.nombrefalso.com.ar> (consultado en junio 2005).
- Auyero, Javier, 2005, “The Dynamics of Collective Violence: Dissecting Food Riots in Contemporary Argentina” (con Timothy Moran), inédito, disponible en <http://www.sunysb.edu/sociol/faculty/Auyero/auyero.html>, 33 págs.
- , 2004, *Vidas beligerantes. Dos mujeres argentinas, dos protestas y la búsqueda de reconocimiento*, Universidad de Quilmes, Buenos Aires.
- , 2000, “El juez, la reina y el policía. Etnografía, narrativa y los sentidos de la protesta”, en *Apuntes de Investigación del CECYP* No. 6, Buenos Aires, pp. 46-76.
- Bataille, Georges, 2002, “La transgresión”, en *El Erotismo*, Tusquets, Barcelona, pp. 67-75.
- Benjamín, Walter, 1921, “Para una crítica de la violencia”, en *Philosophia*, Escuela de Filosofía, Universidad ARCIS, edición digital, disponible en www.cholonautas.edu.pe, 18 páginas.
- Bourdieu, Pierre, 1997, *Meditaciones pascales*, Anagrama, Barcelona.
- , 1996, *Sobre la televisión*, Anagrama, Barcelona.
- Bourgeois, Philippe, 2002, “El poder de la violencia en la guerra y en la paz. Lecciones pos-Guerra Fría de El Salvador”, en *Apuntes de Investigación del CECYP* No. 8, Buenos Aires, pp. 73-98.
- Butler, Judith, 2003, “Violencia, luto y política”, en *Iconos. Revista de Ciencias Sociales*

- No. 17, Flacso-Ecuador, Quito, pp. 82-99.
- Cerbino, Mauro, 2005, "Maniqueísmo y personalización en el cubrimiento periodístico de acontecimientos violentos: el 'caso Fybeca' en el Diario El Universo de Guayaquil", en Mauro Cerbino, editor, *Violencia en los medios de comunicación, generación noticiosa y percepción ciudadana*, Flacso-Ecuador, Quito, pp. 101-128.
- Farinetti, Marina, 2002, "Violencia y risa contra la política en el Santiagueño", en *Apuntes de Investigación del CECYP* No. 6, Buenos Aires, pp.77-126.
- Geertz, Clifford, 1997 [1973], *La interpretación de las culturas*, Gedisa, Barcelona.
- Goffman, Irving, 2003 [1963], *Estigma. La identidad deteriorada*, Amorrortu, Buenos Aires-Madrid.
- Hall, Stuart, 1980, "Codificar y decodificar", en *Cultura, media y lenguaje*, Hutchinson, Londres, pp. 129-139, versión on line, disponible en <http://www.nombrefalso.com.ar> (consultado en junio 2005).
- Hernández, Antonio, Maribel Molina, Genoveva Pérez, Angustias Estrella, Pilar Gálvez, Irene Ortega, 2001, "La violencia en el fútbol: una reseña bibliográfica", en *Revista Digital*, Año 6, No. 29, Buenos Aires, <http://www.efdeportes.com>
- León, Ninfa, 1994, "Medios de comunicación y violencia en el caso ecuatoriano", en J. Echeverría y A. Menéndez-Carrión, editores, *Violencia en la Región Andina. El caso de Ecuador*, Flacso-Ecuador, Quito, pp. 194-212.
- López Maya, Margarita, 2002, *Protesta y cultura en Venezuela: los marcos de acción colectiva en 1999*, CLACSO, Buenos Aires.
- Polletta, Francesca, 1998, "Contending Stories: Narrative in Social Movements", en *Qualitative Sociology* Vol.21, No.4, Human Sciences Press, pp. 419-446.
- Ramírez, Franklin, 2005, *La insurrección de abril no fue solo una fiesta*, Taller El Colectivo, Abya-Yala, Ciudad, Terranova, Feuce-Q, Quito.
- Rodgers, Dennis, 2001, "Haciendo del peligro una vocación: la antropología, la violencia, y los dilemas de la observación participante", en *Revista Española de Investigación Criminológica* (AC-03-04), 24 págs., www.criminologia.net
- Sáez, Chiara, 2005, "Seguridad ciudadana y conflictos sociales. Cobertura y tratamiento en la TV", en Mauro Cerbino, editor, *Violencia en los medios de comunicación, generación noticiosa y percepción ciudadana*, Flacso-Ecuador, Quito, pp. 21-49.
- Scheper-Hughes, Nancy, 1992, *Death without weeping. The violence of everyday life in Brazil*, University of California Press, Berkeley.
- Thompson, E.P., 1995, "La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII", en *Costumbres en común*, Crítica, Barcelona.
- Tilly, Charles, 2003, *The Politics of Collective Violence*, Cambridge University Press, Cambridge, USA.
- , 2004, *Desigualdades persistentes*, Manantial, Argentina.
- Webber, Ruth, J. Bessant y R. Watts, 2003, "Violent acts: why do they do it?", en *Australian Social Work* Vol. 56, No. 3, pp. 247-257.

Insurrección, legitimidad y política radical

Franklin Ramírez Gallegos*

Sociólogo. Dr. © Ciencia Política, Universidad París VIII, CSU.

Email: klamirez2003@yahoo.fr

Fecha de recepción: junio 2005

Fecha de aceptación y versión final: agosto 2005

Resumen

El texto efectúa un *test* de la legitimidad política de la insurrección de abril. Para el efecto se articulan categorías provenientes de la filosofía política contemporánea con herramientas provenientes de la sociología política de la protesta. Ello permite una reflexión sobre el lugar de la insurrección, la resistencia y/o la desobediencia civiles en el marco de sociedades democráticas. Se privilegia, así, la evaluación normativa de a) las formas y medios con los que la rebelión de abril tomó cuerpo en las calles de Quito; b) la oportunidad o el tiempo político en que tales acciones tuvieron lugar; y c) la responsabilidad política con que se asumieron las implicaciones y efectos de las acciones contestatarias que culminaron con un nuevo derrocamiento presidencial en el Ecuador. A la luz de tal lectura, y en el marco del ciclo de desacato político abierto con la primera destitución presidencial en 1997, se sostiene que en el ordenamiento político se ha instalado una forma intempestiva de ejercicio de la soberanía popular desde la que se establece un modo radical de control democrático de las elites políticas: la “forma insurrección”.

Palabras clave: insurrección, legitimidad, democracia, participación radical, poder constituyente, dominación

Abstract

This article accomplishes a test of the political legitimacy in April insurrection. For that matter, some issues have been taken and articulated from political contemporary philosophy and the political sociology of protest. This work allows us to think deeper about the place of insurrection, the resistance and/or the civil rebellion within democratic societies. It therefore privileges the normative evaluation about: a) The way and methods how the rebellion in Quito grew on the streets; b) The political time and the occasion in which these actions took place; and, c) The political responsibility assumed over the implications and effects of anti-establishment actions that finished with a new government overthrown in Ecuador. According to this analysis and considering the political unrest initiated with the first presidential dismissal back in 1997, it has been shown that a new sudden way of sovereignty exercise has been established in the political order that considers a radical way of controlling the political elites, that is “the insurrection way”.

Keywords: Insurrection, Legitimacy, Democracy, Radical Participation, Constituent Power, Domination

* Este texto se basa en parte del capítulo final del libro *La insurrección de abril no fue sólo una fiesta*, F. Ramírez, Taller El Colectivo-Ciudad-Terranova-Abya Yala, julio 2005.

Mucho se ha discutido sobre la legalidad de la destitución presidencial de abril. El gobierno norteamericano, la OEA, algunos países vecinos, los residuos del gutierrismo y otros actores políticos nacionales levantaron con fuerza la bandera de la dudosa juridicidad con que fue resuelta la crisis política y pusieron así en cuestión el reconocimiento político del nuevo régimen en el Ecuador. Las respuestas locales fueron varias. Unas asumieron que, efectivamente, la destitución presidencial por “abandono del cargo” -tal fue la resolución legislativa que posibilitó la sucesión- ha sido tan inconstitucional como la de los dos derrocamientos anteriores (A. Bucaram en 1997 y J. Mahuad en el 2000) por cuanto Gutiérrez jamás abandonó el Palacio presidencial. Otras han planteado que desde el momento en que el defenestrado régimen se puso al margen de la Constitución existió en el país un vacío de poder democrático legítimo que fue finalmente resuelto por el Congreso Nacional

por la vía de la sucesión. Otras versiones, por su parte, enfatizan que la revocatoria al mandato presidencial provino de una revuelta popular, catapultada por la deslegitimación política del régimen, y que la resolución legal del Congreso apenas si consagró lo actuado por la ciudadanía¹. Cada uno de estos argumentos tiene algo de razón y la discusión puede prolongarse. Es claro, no obstante, que tal ambigüedad jurídica revela la forma en que *la política de las calles* puso ésta vez las condiciones y los tiempos para la acción legislativa: los factores estructurales de poder, y sus asientos legales, debieron ajustarse a las circunstancias políticas propiciadas por el desborde ciudadano.

Más que en la legalidad de la destitución, entonces, cabe insistir en la discusión sobre la legitimidad de la insurrección y la resistencia

¹ Al respecto puede consultarse: Fabián Corral, “Deslegitimación política”, *El Comercio*, 28.04.05; Alfredo Pinargote, “Nube Rosada”, en *Revista Vistazo* No. 905, abril 2005; *Tintají*, abril 2005.



ciudadana. Las situaciones en las cuales el derecho a la resistencia y a la insurrección se justifican son múltiples y no se reducen a los casos extremos de regímenes puramente tiránicos, de arbitrariedad manifiesta, o de disolución de la sociedad política por invasión de un Estado extranjero. Desde Locke, en el *Segundo Tratado del Gobierno Civil*, se menciona que en el cuadro de un Estado de Derecho, “la rebelión popular está justificada” cuando el poder Legislativo ha sido desnaturalizado por el abuso recurrente del poder del Ejecutivo. La libre formación de la soberanía popular es insidiosamente alterada cuando los poderes fácticos instrumentalizan legisladores y electores por medio de procedimientos extralegales que deforman el proceso deliberativo de construcción de la voluntad general (compra y corrupción de diputados, manipulación clientelar, alteración de modalidades de elección del legislativo, negligencia e incapacidad de hacer aplicar las leyes). Bajo tales condiciones la legitimidad del gobierno se halla derruida desde sus raíces mismas. Pero “la ciudadanía tiene también el derecho a la resistencia” cuando cualquiera de los poderes del Estado, o todos ellos, rompen la confianza (*breach of trust*) que aquella le había depositado. Así sucede cuando el ejecutivo o el legislativo violan los derechos fundamentales de aquellos que los eligieron al disponer arbitrariamente de sus vidas, sus libertades y sus riquezas.

Las fuentes de legitimidad de una insurrección no devienen, no obstante, única y automáticamente de la negatividad del campo político en que germina. Las *formas y los medios* con que se concreta la insurrección, la *oportunidad* en medio de la que surge y la *responsabilidad* ética y política con que la asumen cada uno de sus protagonistas contribuyen también al reconocimiento y validación del acto insurreccional y de las consecuencias políticas y legales que de él se derivan. ¿Se reunieron las condiciones para el efecto en la insurrección de abril?

Las formas de la protesta

Los sucesos de abril pueden ser nombrados, indistintamente, como insurrección, resistencia, rebelión, contestación o desobediencia. Todas estas denominaciones procuran evitar, enfáticamente, que aquellas sean apreciadas, apenas, como un ejercicio de oposición civil al régimen. La oposición pertenece al mundo de la institucionalidad partidista y la estrategia política. Desde allí, y aún en sus formulaciones más extremas, la oposición no puede abarcar una crítica totalizadora. Únicamente, la insurrección o la resistencia sociales poseen la suficiente exterioridad y, en consecuencia, están en capacidad de *desplegarse contra el poder instituido* como un todo. Abril tuvo esa marca y desde ahí se abre su margen de legitimidad.

El fin no justifica, sin embargo, cualquier medio. Sabemos ya cómo han terminado los intentos de liberación autoritaria de pueblos, clases y naciones. En esa constatación reside la importancia de pensar la forma en que se articulan medios y fines en toda acción contestataria. J. Habermas (1997 y otros (Cohen y Arato 1992) han insistido en la necesidad de diferenciar la insurrección (rebelión) o resistencia (contestación) de la desobediencia civil. Al hacerlo, buscan reflexionar sobre la especificidad y eficacia de las luchas políticas existentes en las sociedades democráticas contemporáneas. Ello significa, en primer término, asumir que aún cuando las vigentes democracias representativas están atravesadas por relaciones de dominación, no se reducen a ellas y, por tanto, el derecho a la resistencia no puede justificar las mismas acciones que en regímenes tiránicos o dictatoriales. La desobediencia civil deviene entonces en una forma privilegiada de contestación radical no violenta que se efectúa en nombre de principios y derechos que están de antemano reconocidos en el orden político-constitucional existente (aún cuando no estén necesariamente garantizados). La trasgresión de tales

derechos y principios legitima la desobediencia civil pero su existencia, a su vez, marca los márgenes dentro de los cuales la sociedad debe auto-limitar sus acciones de resistencia. Desde una perspectiva democrática son, en efecto, los procedimientos libres, igualitarios y deliberados (deliberativos), y no el supuesto conocimiento que algunas vanguardias afirman tener del bien común o de las mejores vías de transformación social, los que otorgan validez a las formas de contestación desplegadas por la multitud. Las formas de contestación, en suma, no pueden situarse por encima de la justicia, el derecho y los procedimientos de regulación democrática. Un análisis indiferenciado de la insurrección puede perder de vista, entonces, tales condiciones de validez de las resistencias contemporáneas. Ello no implica, según Habermas, que incluso en el mejor de los mundos, la desobediencia civil sería legítima y enriquecería la vida política.

A pesar de esta última tesis, es evidente que el privilegio que el filósofo alemán otorga a la desobediencia civil deja por fuera la posibilidad de formas más radicales de contestación. Su excesiva confianza en los principios constitucionales como reguladores de los juegos de poder y del desenvolvimiento estatal, le impide ver la extrema contingencia con que de hecho se legitima el orden político. En este margen de contingencia que, en muchas sociedades democráticas, incluye formas arbitrarias y estructuradas de dominación y desigualdad, se abre la legítima posibilidad de experimentación con múltiples formas de resistencia y contestación que no tendrían cómo colocarse al interior de los umbrales del orden legal.

El abril quiteño fue pródigo en acciones de resistencia y contestación que abarcaron, y rebasaron, formas de desobediencia civil. Aún teniendo en mente la distinción habermasiana puede decirse que la sociedad ejerció su derecho a la insurrección bajo diferentes modalidades. Primó, es cierto, y se valorizó la acción política no violenta como modo de re-

chazo a la arbitrariedad del poder. El altísimo protagonismo de las mujeres en las noches de abril simboliza, como en diversas movilizaciones que han conducido a través de la historia, la hegemonía de formas no agresivas de lucha social. No predominaron tampoco los saqueos ni los excesos vandálicos -aún a pesar de que durante varias horas se vivió un virtual vacío de poder y de deserción de las funciones de seguridad pública por parte de las fuerzas del orden (desde la noche del 19 y a lo largo del día 20). Y, hasta donde fue posible, se contuvieron y desincentivaron los enfrentamientos físicos y la violencia gratuita².

El imperativo de auto-limitación de la insurrección no provenía, únicamente, de que ella se efectuaba en nombre de ciertos principios democráticos trasgredidos por el régimen, o de un repentino legalismo ciudadano, lejos de eso, era el resultado de una cierta coherencia estratégica que sabía que allí residía su fuerza, política y moral, y que cualquier desborde suponía entrar en la lógica de la provocación y el desprestigio al que el poder le apostó, en vano, desde un principio. En consecuencia, las acciones puntuales de desobediencia cívica, como las de la noche del miércoles 13 cuando hubo órdenes de desocupar los alrededores de la Corte Suprema de Justicia y, sobre todo, las de la noche del viernes 15 cuando el gobierno decretó el estado de emergencia, conservaron el tono de desafío pacífico pero activo ante los peligrosos arbitrios del poder. Tales acciones fueron en extremo eficaces; el Ejército no pudo hacer efectivo el decreto presidencial: no había ningún desborde a ser reprimido.

2 En los extremos contrarios, y como elocuente expresión del moralismo burgués de las buenas formas y el respeto de lo ajeno que atraviesa a las clases medias quiteñas -protagonistas de la revuelta- se llegó incluso a disuadir la reproducción de los inofensivos *escraches*, una forma de escarnio público que tomó cuerpo a través de ruidosos plantones frente a los domicilios particulares de diversos políticos.



La misma perspectiva democrática de la resistencia se observó cuando los modos de convocatoria y la estructuración de las motivaciones para la acción crítica estuvieron atravesados por un llamado a la opinión pública. La dinámica insurreccional se desplegó a partir de un nítido elemento de comunicación política y deliberación colectiva, y no desde iluminaciones vanguardistas: las formas de protesta se negociaron y se argumentaron públicamente a través de radioemisora La Luna y, en menor medida, por medio de páginas web creadas para el efecto. Múltiples propuestas fueron descartadas o asumidas³ según como los intercambios dialógicos, a partir de las llamadas y visitas a la radio, persuadían a los manifestantes. Desde los micrófonos, entonces, un espontáneo procedimiento deliberativo reguló y dio forma a la contestación ciudadana de abril, dejando en evidencia que el campo político no está saturado de puras relaciones de fuerza y manipulación.

No obstante, en la medida que la “no-violencia es un valor político y no meta-físico” (Sintomer 1998 :101) no tiene un carácter absoluto y depende de las específicas condiciones en que se levanta la movilización social y se ejerce su poder constituyente. En abril, la progresiva ampliación y radicalización de los objetivos de la protesta se correspondieron con la inmovilidad y enclaustramiento del poder sobre sí mismo. Con los partidos fuera del tablero, el escenario político colocaba frente a frente la potencia del régimen y la potencia de la movilización. Las condiciones se

3 Paco Velasco y los reporteros de La Luna contuvieron, muchas veces, las interpelaciones racistas y regionalistas con que múltiples radioescuchas justificaban y alentaban a la movilización ciudadana. Estos niveles de ponderación y tolerancia se diluyeron, sin embargo, cuando las intervenciones ciudadanas se pronunciaban en contra de la agitación política del país o insinuaban cierto apoyo al régimen. Ahí uno de los límites de la racionalidad argumentativa que guió las acciones de abril.

degradaron entonces hacia un ambiente de desmedida represión y, paulatinamente, de confrontación civil que el régimen nunca pretendió desmontar. La multitud debió resistir y contestar a los embates policiales y a lo que percibieron como una “invasión” de las huestes gutierristas a la ciudad y como una pura confrontación entre bandas rivales -y nunca como una expresión del uso legítimo de la violencia estatal-. Hubo choques, enfrentamientos, heridos y muertos: violencia política *tout court*. La disposición para el combate social no fue absorbida por el carácter cívico y pacífico de la protesta.

Sostengo que, horas antes de la destitución presidencial, se vivió un escenario de *soberanía escindida* -el gobierno nacional versus la ciudad de Quito- y en tal imagen se condensa el desbordamiento del orden normativo con que finalizaron las noches de abril. Aún así, las acciones de defensa y resistencia ciudadanas, en la medida en que respondían a un dispositivo autoritario y violento desatado desde la cima del orden político, guardan un piso de legitimidad. Si se examinan en el mismo contexto, no obstante, ciertos intentos de justicia por mano propia (dirigida en contra de los manifestantes contratados por el régimen), agresiones físicas (en CIESPAL) y vejámenes morales o de violencia simbólica (en clave de racismo, o de regionalismo) desproporcionados, el balance es menos equilibrado. En varias ocasiones, en efecto, los mecanismos espontáneos de auto-limitación de la protesta fueron rebasados, y solo pudieron reconstituirse en el límite de situaciones muy complejas⁴. Por lo demás, solo gracias a los bajos umbrales de tolerancia a cualquier tipo de excesos represivos y de violencia, en la sociedad y en las mismas fuerzas del orden ecuatorianas, se pudo activar un último recurso de regulación de una eventual acelera-

ción del espiral de violencia en el desenlace del conflicto.

La dominante retórica de la resistencia civilizada y pacífica del “heroico pueblo de Quito”⁵ pierde de vista esta dimensión constitutiva de los eventos. No cabe ocultarlo: la insurrección de abril no fue sólo una fiesta.

La oportunidad política de abril

La revuelta se dio, sin dudas, en medio de una situación de extrema emergencia. No sólo que se había ya sobrepasado el límite en la degradación del Estado de derecho, más allá del cual sólo restaba la definitiva supresión de los derechos ciudadanos y/o el sostenimiento del régimen por la pura fuerza, sino que además los canales institucionales de resolución de la crisis estaban del todo sellados, anulándose unos a otros, y la insistencia en su viabilidad únicamente hubiese exacerbado la dinámica de confrontación desleal entre los actores políticos y carcomido, más aún, las estrechas bases de reconocimiento de cualquier instancia de regulación institucional de la política.

Podría argumentarse, en este sentido, que la contestación ciudadana pudo haber sucedido antes y asumir un carácter preventivo que evite lo irreparable. Tal vez. Tal vez incluso las protestas que antecedieron abril tuvieron ese carácter. Pero en condiciones en que el autismo del poder sólo le permite reconocer las señales que él mismo forja (encuestas, contra-marchas) y en que las razones de Estado están blindadas, policial e institucionalmente, contra los recursos morales de la crítica pública, entonces, la contestación civil sólo puede tener un carácter intempestivo. Allí radica el sentido de oportunidad y la contundencia de la insurrección de abril: mientras más tarde, mayor es la urgencia.

⁴ Sobre los acontecimientos en CIESPAL ver “Mandato popular a ritmo de churo”, en *Tintajá*, abril 2005, y el artículo de Edison Hurtado en este dossier de *Íconos*.

⁵ Tal narrativa se ha consolidado como la versión oficial de la movilización ciudadana. Desde ella, el *establishment* político y los medios hegemónicos han estableci-

Responsabilidad política

Resta por tratar la cuestión de si la insurrección de abril ha sido un acto políticamente responsable. Ello remite, en un primer nivel, a observar la implicación de cada ciudadano en la dinámica misma de una acción política colectiva. Sin dirección ni centro organizativo de por medio, es decir, sin la posibilidad de contar con estímulos selectivos garantizados por algún empresario de la movilización⁶ (movimiento, asociación, partido), la participación en las jornadas de abril dependió por completo de decisiones particulares que, sin embargo, fueron convergiendo hacia la producción de una acción colectiva sobre cuya base se asentó la posibilidad de transformar el curso de las cosas. En las noches de abril, no fueron pocas las ocasiones en que unos manifestantes conminaban a otros a no desertar de los lugares de la protesta: se evidenciaba así la certeza de que únicamente por medio de la *acción de masa* era factible cumplir con el cometido de dar fin al gutierrato. Una opción primordialmente subjetiva, cuya recompensa residía en la misma posibilidad de formar parte de la contestación⁷, no quedó así res-

tringida a una manifestación individual de indignación sino que se conectó con un fuerte sentido de compromiso colectivo en torno a la causa común de derrocar al régimen. El denso componente de voluntad individual, la irreductibilidad de lo subjetivo, no funcionó como un afuera de lo político, sino como la contrapartida necesaria para contener la amenaza de la arbitrariedad del poder, a saber, “el equivalente democrático del estado de excepción” (Balibar 2002:21-22).

El segundo nivel en la comprensión del grado de responsabilidad política de la insurrección ciudadana remite a saber si ésta asumió sus propias consecuencias. La pregunta es válida tanto para cada uno de los manifestantes como para los efectos que de ella se derivan para el conjunto del espacio político. La libre implicación en la acción colectiva tiene su contracara en la asunción particular de las amenazas y riesgos que la rebelión implica para quienes toman partido. Cada uno acepta, ello es obvio, los peligros de su participación. Así fue. En el campo político, el inmediato efecto de la insurrección, el derrocamiento presidencial -no por intempestivo, inintencionado-, obligaba a la multitud a posicionarse frente al reconocimiento de una sucesión constitucional que debía operar por la vía de los canales institucionales y las decisiones partidarias que repudiaba. No había alternativa que plantear en su lugar. Los límites del “que se vayan todos” se hacían manifiestos mientras colocaban a la sociedad frente a un principio de realismo político del que tan alejada se mantuvo en esos días. El traspaso de poder fue admitido entonces sin vítores ni unanimidades. Sólo unos pocos aplaudieron la transición⁸. La legitimidad del nuevo gobierno se

do la arbitraria frontera entre “buenos” y “malos” forajidos. O, para ser más precisos, entre los forajidos (cultos, pacíficos y demócratas) y aquellos identificados como vándalos/anarcos (más radicales) como las dos figuras claves de las jornadas de abril. La muestra *Prohibido olvidar. La rebelión de abril: Quito 2005* expuesta en el Centro Cultural Metropolitano constituye una ilustrativa señal del predominio y la consagración de tal retórica en la opinión pública local.

- 6 Según las teorías de la acción racional, la participación individual en acciones colectivas depende de la existencia de beneficios específicos, provistos por alguna estructura organizacional, para militantes y activistas. La participación pública deviene entonces en un acto fundamentalmente instrumental.
- 7 Las acciones orientadas hacia lo público forman parte de todo un conjunto de actividades humanas, que incluyen la búsqueda de la solidaridad, el conocimiento, la belleza, la salud, y que tienen por trazo común portar *en ellas mismas* su recompensa. En tal tipo de actividades desaparece cualquier nítida diferenciación entre costo y beneficio (Ver Hirshman, 1983:149).

-
- 8 Múltiples sectores afines al ex presidente, por su parte, expresaron públicamente su rechazo a la destitución y su disgusto con una revuelta percibida como “quiteño-céntrica”. ¿Es ello un argumento para rebatir la legitimidad de la insurrección? Muy parcialmente. Los reclamos provenían de actores articulados dentro

dio por omisión, por defecto o por resignación. El cuadro de desgaste de la política institucional se completaba con la inalterable hostilidad social hacia la reinstalación de las sesiones del legislativo.

En esa abstención se verifica, no obstante, el ambiguo empoderamiento social que ha resultado de la rebelión. Ahí reside otra, la última, de sus consecuencias para el campo político: el auto-impuesto desafío, ético y organizativo, de hacer de la ciudadanía activa un nuevo medio de regulación y producción democrática que, en su asedio al mundo de los partidos y sus grandes barones, gobierne junto con ellos, los regule. La difusa dinámica asamblearia que se ha instalado en múltiples lugares de la sociedad acusa recibo de tal desafío. Dicha responsabilidad política no ha sido entonces eludida; tampoco se puede hablar, no obstante, de una asunción plena y homogénea del reto participativo. Su impulso ha sido suficiente, de momento, para estimular nuevas convocatorias, rearticular militancias y espacios organizativos en repliegue, y sostener instancias asociativas ya en marcha. Sus perspectivas, metodologías políticas y composición social parecen representativas de la dispersa multitud que ocupó las calles de Quito en abril. Aún así, algo las liga: un extremo escepticismo y desconfianza con la política institucional y una voluntad de ejercer sobre ella diversos modos de control social. El “que se vayan todos” se habría traducido, por medio

de las redes clientelar-burocráticas del guttierrato y no levantaron una crítica substantiva o procedimental de los sucesos. La consistencia de su lealtad política con el ex presidente ha sido, además, en extremo precaria: transcurridos más de tres meses de su caída tales manifestaciones se han debilitado, o se han activado frágilmente en relación a específicas declaraciones del ex presidente sobre su voluntad de retornar al país. Por otro lado, legitimidad no debe ser confundida con unanimidad: aquella reposa en unas ciertas formas, contenidos y procedimientos -de ahí el recurso analítico a su evaluación interna- y ésta en la lógica de lo mayoritario, de la opinión pública como fabricación, como producto de la encuesta.

de la más o menos ingenua intuición de que las cosas pueden ser hechas de otro modo, en un “no más de lo mismo”. La posibilidad de hacer efectivo ese tránsito radica, además de una cierta apertura del sistema político, en la consistencia organizativa de las asambleas ciudadanas. ¿Es el escepticismo anti-partidista un recurso moral y normativo suficiente para sostenerlas en el tiempo? Parece difícil.

En cualquier caso, la desigual y emergente dinámica asamblearia pone de manifiesto que, al menos en una primera instancia, la acción contestataria ha tomado la forma de asociaciones deliberativas desde las que se pretende participar en la vida política de país. El espacio público no ha sido desocupado; el inmediato repliegue a la normalidad de lo privado, que ocurrió en los derrocamientos anteriores, deberá esperar. De la calle a los foros: un giro responsable, aunque incierto y seguramente insuficiente, se perfila como un posible resultado de la insurrección de abril.

El *test* de legitimidad política de la revuelta quiteña arroja, en suma, un balance globalmente favorable en lo que concierne a su oportunidad política y a la aceptación, tanto en términos individuales como en su trama de interacciones colectivas, de las consecuencias legales y políticas del proceso insurreccional. Ética de las convicciones y ética de las responsabilidades no parecieron desajustadas entre sí. El balance es más complejo, sin embargo, cuando se hace referencia a los medios de su despliegue: la desobediencia cívica, el carácter pacífico y la autolimitación de la protesta fueron rebasadas por agresiones, enfrentamientos y combates entre oficialistas y manifestantes, con un repudiable saldo de víctimas para los bajos márgenes de tolerancia a la violencia en el país. La contestación y la resistencia aparecen, en cualquier caso, como el efecto político de la indignación moral de la multitud frente a la respuesta autoritaria del poder. Los marcos constitucionales lejos están de contener todo el juego político democrático.

Democratizaciones intempestivas y forma insurrección

La evaluación interna de la legitimidad política de la insurrección la afirma, entonces, como *un derecho conquistado por la ciudadanía*, en el curso de un ciclo de desacato y asedio a las figuras dominantes del ordenamiento político abierto con el primer derrocamiento presidencial de 1997, y como una *forma intempestiva de ejercicio de la soberanía popular* -sin lugar, sin duración, sin orden- desde el que se ha establecido una *forma radical de control democrático de las elites políticas*.

Más aún, en el marco de tres procesos de movilización ciudadana que han tenido como desenlace un derrocamiento presidencial (1997, 2000, 2005), parecería pertinente afirmar que la *forma-insurrección*⁹ se ha instalado en el ordenamiento democrático ecuatoriano como una rutina de acción colectiva participativa extrema que se expresa en momentos de franca degradación de la política institucional (pero que condensa dinámicas más estructurales de exclusión y subordinación política de amplios sectores sociales).

Su dimensión rutinaria, así como su carácter radical-participativo, devienen tanto de su



reiteración en el vigente ciclo político como de diversas regularidades sociológicas que comprenden: a) la articulación episódica, b) de movimientos, colectivos y ciudadanos, frustrados e insatisfechos, c) en torno de objetivos políticos que se van delineando y acotando en el curso mismo d) de específicas acciones de contestación e) que se radicalizan a medida que el poder trata de disolverlos, y que f) terminan por ampliar y desbordar el campo institucional de la política, g) sin conseguir, sin embargo, su plena reconstitución¹⁰.

Los efectos de la dinámica insurreccional sobre el campo de lo instituido poseen también unas ciertas recurrencias. Se opera, en efecto, a) un tipo de presión social episódica que incluye b) la recomposición de las relaciones de fuerza y las líneas de poder entre los principales actores del sistema, c) la emergencia más o menos inconsistente de nuevos actores políticos, d) la apertura de procesos y/o agendas de cambio político -que van de refor-

9 Podría argumentarse, desde una perspectiva substancialista de la política, que la expresión de la potencia del poder constituyente es, de por sí, un contenido/un sentido inmanente ("voluntad de poder de una libertad insatisfecha", "imaginario radical trastocador de órdenes", etc.). En un intento de levantar una mirada constructivista del problema sostengo más bien que cabe observar las regularidades sociológicas de la acción política constituyente presentes en la sucesión de insurrecciones y derrocamientos presidenciales en el Ecuador de la última década. Llamo la atención, entonces, respecto de las figuras, los contornos, la forma con que ha tomado cuerpo la acción colectiva radical-democrática, para enfatizar un *específico modo de actuación política* que, aún en la agregación de *momentos* de desborde de lo instituido y de afirmación de la soberanía popular, no termina de instaurar un nítido conjunto de agenciamientos sociales en la esfera pública ni de dibujar los trazos de la recomposición del orden. Ello no implica desconocer los importantes indicios democráticos contenidos en la forma-insurrección.

10 Esto último estaría ligado al hecho de que la "forma insurrección" no basta por sí sola, si quiera, para desencadenar las destituciones presidenciales. A su lado se ha configurado el "dispositivo derrocamiento", que incluye en diversos grados, la intervención, más o menos conspirativa, de diversos actores y partidos políticos, la venia de la embajada norteamericana, y la decisión dirimente de las Fuerzas Armadas.

mas políticas parciales a la convocatoria de procesos constituyentes- y e) la evanescente incorporación de la dimensión ético-normativa de la democracia dentro de un campo político colonizado por la pura pragmática del poder.

La consolidación de la “forma insurrección” no se corresponde, sin embargo, con el pleno establecimiento de un campo de organizaciones, movimientos y partidos, políticamente articulados, capaces de convertir tal dinámica de presión episódica en acumulados políticos e institucionales desde los cuales posibilitar una efectiva redistribución del poder político y social que siente las bases para subvertir los términos de la dominación estructural sobre los sectores excluidos de la sociedad.

A través del establecimiento de la “forma insurrección” se verificaría, entonces, el surgimiento de una suerte de *cuarto poder ciudadano intermitente* o de un *poder constituyente menguado* caracterizado por la expansión de su conciencia de soberanía política y de su potencia como colectivo auto-producido, pero sin todas las capacidades y competencias, organizativas, estratégicas e ideológicas, para dar lugar a sostenidas dinámicas de acción colectiva y/o para prefigurar y constituir órdenes alternos. Tal limitación le deja en la opción, no por minimalista menos trascendente, de marcar difusos límites ético-políticos por fuera de los cuales a la clase política le resulta cada vez más difícil moverse. Del poder de control popular radical no se deriva, pues, una efectiva dinámica constituyente sino *unos volátiles indicios de los trayectos que las elites no pueden continuar caminando* a menos que estén dispuestas a reemplazar sus ya exiguos pisos de legitimidad por cada vez mayores dosis de dominio coercitivo. No estamos frente a la imagen negrista del poder constituyente -en cuanto capacidad de movilización colectiva para-

sino ante la más foucaultiana imagen del poder y gobierno modernos que -derrocando, impidiendo, des-constituyendo- consigue *delimitar el campo de probabilidades en que se desenvuelven los otros*¹¹ (las elites políticas); enunciar aquello que *ya no se puede hacer*.

Las intempestivas democratizaciones abiertas por la “forma insurrección” dejan claro, en cualquier caso, que la comprensión de la política en la democracia ecuatoriana contemporánea pasa por la observación de una dialéctica entre la dominación y el “poder constituyente”. No se trata de oponer aquello que, de modo evidente, proviene de la dominación social frente a un orden político fundamentalmente igualitario y libre: Weber demostró de manera implacable la persistencia de la dominación al interior mismo de todo campo político (cf. Sintomer 1999). Se trata, más bien, de situar las diversas formas en que se expresa la dialéctica del poder constituyente y de la dominación y de reconocerla como algo que atraviesa transversalmente los dominios de la economía, la sociedad, y la política. Ahí un desafío investigativo e intelectual que complejiza la agenda institucionalista, dominante en los estudios políticos del medio.

Bibliografía

- Cohen, J. y A. Arato, 1992, “Civil disobedience and civil society”, en *Civil Society and Political Theory*, MIT Press, Cambridge.
- E. Balibar, 2002, *Droit de cité*, PUF, Paris.
- Foucault, Michel, 1988, “El sujeto y el poder”, en *Revista Mexicana de Sociología No.3*, pp. 3-20.
- Habermas, Jürgen, 1997, *Droit et démocratie*, Gallimard, Paris
- Hirshman, Albert, 1983, *Bonheur privé, action publique*, Fayard, Paris.
- Locke, John, 1988 [1690], “The Second Treatise of Government”, en *Two Treatises of Government*, Cambridge University Press.
- Sintomer, Yves, 1998, “Aux limites du pouvoir démocratique: désobéissance civile et droit à la résistance”, en *Actuel Marx No. 24*, PUF, Paris.
- , 1999, *La démocratie impossible? Politique et modernité chez Weber et Habermas*, La Découverte, Paris.

11 Según M. Foucault (1988:15), el poder y gobierno modernos se desenvuelven por medio de “modos de acción, más o menos pensados y calculados, destinados a actuar sobre las posibilidades de acción de otros individuos”.

El 20 de abril: presente y pasado de un proyecto militar corporativo

Bertha García Gallegos

Dra. en Sociología. Profesora de la PUCE.

Directora de la Fundación Democracia, Seguridad y Defensa

Email: bgarcia@puce.edu.ec

Fecha de recepción: julio 2005

Fecha de aceptación y versión final: agosto 2005

Resumen

En el Ecuador, las dictaduras de los años 60 y 70 vincularon a los militares con el desarrollo social y económico. Si bien en los 80 retornaron a los cuarteles, y a su bien acariciada política de autogestión empresarial, durante los 25 años de democracia formal se quedaron con esa visión idílica del poder basado en la fuerza y en el reemplazo de la política por la tecnocracia. Siguieron acariciando su vocación planificadora sobre lo social y lo político, hasta el punto que, ya en el siglo XXI, no dudaron en hacer suya la aventura gutierrista, apoyando tras bastidores a uno más de los populismos ecuatorianos. Criticando a la clase política, el gutierrismo saltó a la política por la vía electoral. Quiso revivir el proyecto militar. Pero ahora -como entonces- esta aventura no era más que una versión ideológica de una sociedad pensada en los cuarteles.

Palabras clave: militares y política, proyecto militar, proyecto social, seguridad nacional, militarismo, corporativismo

Abstract

In Ecuador, dictatorships of 60s and 70s tied the military to the social and economic development. Although in the 80s they returned to the quarters, during the 25 years of formal democracy they remained that idyllic vision of power based on force, and the replacement of politics by technocracy. They continued caressing its planning vocation on the social and the political, so far to, already in XXI century, they did not doubt in doing theirs the Gutierrez adventure, supporting one more of the Ecuadorian populisms. Criticizing the political class, *el gutierrismo* jumped to politics through the electoral route. It wanted to retake the military project. But now -like then- this adventure was not more than an ideological version of the society built into the quarters.

Keywords: Military and Politics, Military Project, Social Project, National Security, Militarism, Corporativism

Los proyectos societales de los militares

Desde el siglo XVIII, pero especialmente durante el XX, el tema de los proyectos sociales estuvo vinculado al desarrollo de las ideologías y de los sujetos sociales que las portaron, construyendo particulares visiones de la modernidad. Pero este no es ciertamente el caso de la historia política latinoamericana, donde actores institucionales como los militares jugaron papeles insospechados. Desde su independencia, Latinoamérica fue tierra de caudillos y militares. Los estados latinoamericanos carecían de cohesión interna y de articulaciones externas al momento de su irrupción como unidades políticas. La dispersión y atomización social fue subsanada con estructuras militares desproporcionadas que fungían de ases vertebradores de la sociedad y el estado. En su afán de organizarse a sí mismas y de hacer del caos un orden, aunque precario, establecieron alianzas y oposiciones contradictorias y de todo género. Se convirtieron en mediadoras de los conflictos políticos y en árbitros de los débiles procesos de democratización. Sus posiciones maximalistas frente a los abundantes problemas limítrofes que heredaron estas naciones desde los tiempos coloniales, hicieron difícil cualquier entendimiento en el plano de la diplomacia interestatal (García 1999) y fueron la base de un enorme poder que desplegaron sobre sus propios pueblos, estableciendo inviolables y sagrados “espacios del secreto” que sirvieron sobre todo para evitarles el engorroso deber de rendir cuentas.

Durante la Guerra Fría, jugaron un papel decisivo en la afirmación de la geopolítica norteamericana. Las políticas prácticas de los EE.UU dieron un espaldarazo a las corporaciones militares latinoamericanas, convirtiéndolas en ejes de proyectos políticos destinados a disciplinar a las sociedades en función del nuevo orden hemisférico anticomunista y cris-

tiano. En el Ecuador, las dictaduras de los años 60 y 70 vincularon a los militares con el desarrollo social y económico, hasta el punto que lograron delinear una visión integradora de la sociedad que querían. En ésta, todo -pero especialmente sus propios intereses corporativos- tenía cabida. Luego de la Guerra del Cenepa (1995) se acrecentó su voluntarismo y se mezclaron con populismos de todo género encontrando clientelas especialmente políticas. El “gutierrismo” quiso hacer realidad el gran anhelo del militarismo ecuatoriano: desplazar a una clase política nunca bien preparada, según su óptica, para dirigir los destinos nacionales.

Este artículo tiene el propósito de hacer una lectura de los acontecimientos del 20 de abril, evocando las líneas substanciales del proyecto de sociedad que construyeron los militares de este país, y demostrar entre líneas (porque así se presentan las historias nacionales) hasta dónde pudieron llegar.¹

Un proyecto de sociedad acariciado en los cuarteles

“La historia se repite con los mismos ropajes; unas veces como tragedia y otras como comedia”, escribió Marx en el *18 Brumario de Luis Bonaparte*. Sin duda triste opción para los pueblos que no aprenden de sus experiencias históricas. Con las distancias y diferencias respectivas, treinta y cinco años después, hablemos de un Ecuador cuyos escenario, actores y circunstancias parecen casi idénticos a los años setenta.² Nos preguntamos: ¿cuales son los sucesos del 20 de abril de 2005 que traen a la memoria el golpe militar de febrero de

1 Para un análisis de la formación y mantenimiento de los proyectos militares en el Ecuador, ver García (1987).

2 Las diferencias tienen por fuerza que admitirse. El Ecuador de comienzos de los años setenta era una economía oligárquica basada en la exportación agraria. El presupuesto del Estado en 1973 era de un millón de dólares. En 2005 alcanza los 6.810 millones según datos del Ministerio de Economía.



1972? ¿Habrá algunas líneas de continuidad entre esos dos procesos?

El gobierno militarista de Gutiérrez terminó gracias al golpe de mano de la mayoría legislativa en la tarde y noche del 20 de abril de 2005; mientras que en la madrugada del 13 de febrero de 1972 empezaba apenas a dibujarse el sueño militar de la transformación política del país por parte de las Fuerzas Armadas; el golpe de Estado estaba empapado de la ideología de la seguridad nacional que había cundido en los cuarteles de América Latina asumiendo múltiples formas y expresiones. Joseph Comblin describió un tipo ideal del fenómeno que iba desde el nacionalismo desarrollista, que fue el caso de Brasil de la primera etapa, del Perú de Velasco Alvarado, del Ecuador durante el gobierno de Rodríguez Lara, hasta el estado de la contrainsurgencia, la guerra sucia y el terrorismo oficial como fue el caso del Chile de Pinochet, de Uruguay Argentina de los años setenta.³

Para los partidarios de Pinochet, fue la disciplina militar aplicada sobre la sociedad, de la mano de los “Chicago boys” y sus políticas neoliberales, la que abrió paso a Chile hacia el crecimiento económico en los oscuros años setenta y ochenta. Pero olvidan la sangrienta represión a los ciudadanos, la horrenda filosofía contrainsurgente que causó muertos, desa-

3 Joseph Comblin, citado por Fitch (1998). Para Comblin, el tipo ideal de la doctrina de la seguridad nacional en América Latina, producto del entorno de la Guerra Fría, tenía este contenido: un marco conceptual que supedita estrategia, objetivos y política nacional a la seguridad del Estado; una hipótesis de conflicto que enfatiza en la seguridad interna (amenaza comunista); una teoría del uso de la fuerza militar en las amenazas internas, como si fueran externas (el comunismo internacional); una justificación racional al uso de medios que violan los Derechos Humanos, como la tortura y la desaparición; la vinculación entre Seguridad y Desarrollo, tomando al subdesarrollo y a la pobreza como fuente de producción de la insurgencia comunista; y la justificación de la intervención militar directa, cuando malos gobernantes civiles ponen en peligro la seguridad nacional.

parecidos y una enorme división social que aún en estos días, a comienzos del siglo XXI, no termina de saldarse.

En el Ecuador, quienes aún permanecen como admiradores del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas se quedaron con la ilusoria imagen del rápido crecimiento económico de unos pocos años (realmente fueron dos: 1973-1974) basado en el boom petrolero (el precio del petróleo trepaba en un año desde un dólar por barril, a más de cuarenta, gracias a la crisis petrolera del medio oriente, que preocupaba al mundo internacional de entonces). Los militares no toman en cuenta que no fueron ellos ciertamente los causantes del referido boom de la economía, sino los petrodólares que empezaron a fluir y los tecnócratas civiles, que habían mentalizado el golpe y la política de desarrollo que lo justificaba, con el objeto de emprender en una redistribución social de los nuevos recursos del Estado. El Estado tenía ahora recursos y esto era lo nuevo. Los tecnócratas civiles confabulados con el cambio social prefirieron poner el destino en manos militares antes que en la voraz oligarquía presta a festinar la nueva riqueza, pues la mesa estaba puesta con la Ley de Hidrocarburos del interino Otto Arosemena (García 1987). Hay que reconocer que tecnócratas y militares actuaban con la ingenuidad y buena fe que inciertas circunstancias otorgan a bisoñas experiencias. Pero, luego del histórico 11% de crecimiento que alcanzó la economía ecuatoriana en 1973, los tecnócratas de la Junta Nacional de Planificación (JUNAPLA) se fueron despechados de las pugnas militares y las arremetidas de la Texaco Gulf. El gobierno militar descendió y fue de tumbo en tumbo, causando, de paso, enormes fisuras y estragos dentro de las filas militares, cuya unidad corporativa se esfumó. Entonces la “dictablanda” mostró lo que realmente era: “una abusiva usurpación del poder”. La tragedia del ingenio Aztra y la muerte de Abdón Calderón quedan a la espera de

que alguien reviva la memoria.

Desde enero de 1976, desaparecidos de la escena política tanto tecnócratas civiles como Rodríguez Lara por las maniobras de la cúpula militar, la distribución de petrodólares (ya sin boom y sin política alguna) llovió a manos llenas por todos los pueblitos de la sierra y de la costa. Un enjambre de calles, estadios, canchas de fútbol y escuelitas surgieron por doquier, bautizados con el nombre de algún triunviro. En 1976 también se emprendió en la “modernización del equipo militar” que dio al autoritario Durán Arcentales un puesto entre los héroes castrenses. Años después, en noviembre de 2004, el Ministro de Economía Mauricio Yépez, en un Seminario sobre Presupuesto militar organizado por la PUCE, vinculaba ese hecho con la multiplicación geométrica de los intereses de la deuda externa que ahora nos agobia. Recuerdo que el flamante equipo militar fue exhibido al público en 1977, en gran parada para la cual se construyó en Quito el graderío de la Shirys. No faltaron quienes maliciaron que los militares marcharon sobre Quito con tremendas máquinas de guerra, con ánimo de disuadir a las crecientes masas antimilitaristas que empezaron a brotar por todos lados, rechazando a los funcionarios militares que se empeñaban en impedir la entrega del poder a los civiles. ¡Es que nueve años de ocupación militar de la sociedad nadie aguanta! Tampoco es verdad que los militares “siempre” han gozado de popularidad.

En 1981, el episodio de Paquisha, con el Perú, ya durante el primer gobierno civil, nos puso súbitamente pies en tierra. Tantos años de politiquear habían convertido a nuestros militares, con maquinaria bélica nueva y todo, poco menos que en inservibles para la defensa del país. La defensa es la única misión que, por último, la sociedad espera que los militares sepan hacer bien.

¿Qué pasó en Ciespal?

Volviendo al principio, esto es, a registrar lo ocurrido en nuestro país en la tarde del 20 de abril de 2005, nadie podía adivinar que en la CIESPAL⁴ se preparaba otra guerra, esta vez para defender el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, quien llegó al poder por vía electoral, el 15 de enero de 2003, luego de una campaña en la que capitalizó el hacer derrocado al gobierno “neoliberal” de Jamil Mahuad el 30 de enero de 2000, en medio de una insurrección indígena-militar. Sus dos años de gobierno fueron todo menos “la refundación del país” que prometió.

Ya en el desenlace, ubicadas las fuerzas militares a doscientos metros del teatro de los acontecimientos, recordaron sin duda la vieja estrategia de cerco de otros siglos. Esperaban pacientemente que los propios acontecimientos de violencia que acompañaron el *sui generis* cambio de mando presidencial, les obligaran a “salvar a la Patria” nuevamente. Nada mejor que asumir el poder como Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, si cinco o más diputados resultaran convertidos en “lamentables bajas”, o quizá el propio presidente. Para eso andaban entre los infiltrados de la CIESPAL algunos “agitadores” y uno que otro “campana” con uniforme militar que azuzaban a los presentes a pedir la “histórica intervención patriótica de los generales”. El día anterior se habían juramentado los Altos Mandos con Gutiérrez para sostenerlo o reponerlo, según el caso, aconsejándole que “adelantara las elecciones”. Así, el inefable caudillo podría incluso volver a presentarse como candidato. Confiaron en la eficacia de las “operaciones psicosociales” que ablandan a cualquier “enemigo externo” en caso de guerra, pero que en caso de crisis política hasta pueden ser aplicadas sin remilgos a los pro-

prios ciudadanos. Así efectivamente se había procedido durante “todo el gobierno militar de Gutiérrez”. “Ablandamiento” era el que se quiso aplicar al Congreso el mismo día de la inauguración del período presidencial, el 15 de enero de 2003 con el anunciado incidente de no recibir la banda presidencial de manos de “los mismos de siempre”. “Ablandamiento” siguió mandando pleitos a la clase política por una u otra cosa, o asediando a los legisladores en los propios tribunales de justicia⁵ (caso Haro). Igual “ablandamiento” fue aplicado a la primera marcha de protesta en Quito hacia la plaza de San Francisco, cuando la euforia de los quiteños contestatarios fue opacada por el *team* de bailarinas tropicales y sus fans, entre los que constaba el mismo Presidente. Guerra psicológica cuyo teatro de operaciones fue la misma sociedad.

Milagrosamente las bajas no se produjeron en la CIESPAL en la tarde del 20 de abril, de modo que el comandante de la Primera División y sus 400 hombres, esperaron por nada durante cuatro horas bajo la lluvia, a dos cuadras de distancia de los acontecimientos. Casi tres meses después, los ecuatorianos esperamos que se aclaren las posiciones de cada cual en el Plan de toma del poder. Pero también las razones para que el Jefe de la Primera División, agitadores militares uniformados y campana sigan tan frescos, en sus puestos, como si nada hubiese pasado.

4 Lugar en donde ocurrió la sesión del Congreso en la que se destituyó a Gutiérrez.

5 Desde el 2002, Guillermo Haro, diputado de la Izquierda Democrática, venía denunciando irregularidades cometidas en Fuerzas Armadas: contrataciones ilegales, sospecha de fuga de armas de los arsenales militares ecuatorianos hacia la guerrilla colombiana, etc. El tema empezó cuando estalló el Polvorín de la Brigada Galápagos situada en plena ciudad de Riobamba, al sur del Ecuador. Evidencias de errores técnicos en el manejo de explosivos se habrían encontrado y el Legislador se empeñó en señalar culpables. La respuesta de la cúpula militar fue una arremetida contra el diputado, solicitando al Congreso su desafuero y haciendo *lobby* en los juzgados y cortes para acorralarlo.

Las razones de la militarización del gobierno gutierrista

¿Por qué los militares, como personas y como institución, se involucraron con tanto fervor en el gobierno de Gutiérrez populista, ineficaz, que entró a saco con familiares, allegados y militares en servicio activo, a ocupar el Estado como si fuera un botín? La mayoría de los jefes militares implícita o explícitamente se adherieron al gobierno o no pudieron distanciarse de él, perdiendo totalmente la noción de los principios institucionales y las razones jurídicas que sustentan su presencia y permanencia institucional, como fuerzas del Estado para misiones completamente distintas a las de gobernar el país. Ocupando la administración de Aduanas, y ejerciendo funciones en Pacifictel, en Petroecuador y tantos otros destinos, se olvidaron del principio de no deliberación y de que la obediencia militar, que es el pilar de la disciplina institucional, no es a la persona del Presidente sino al Estado de Derecho.

Una respuesta posible es que consideraron que este, el de Gutiérrez, era un “gobierno militar” y había que arrimar el hombro para “no hacer quedar mal” al que había subido al poder empujado por un *sui géneris* partido surgido de las propias entrañas de las Fuerzas Armadas. “Los militares estamos preparados para gobernar el país mejor que los políticos corruptos de siempre” era una frase escuchada en los cuarteles muchos meses antes de los sucesos del 21 de enero de 2000. De modo que Gutiérrez encarnaba las aspiraciones políticas, el espíritu interno de los militares, en parte golpeados por los términos de los acuerdos de paz con el Perú, pero también por su propia incapacidad de salir de su encerramiento, romper con la endogamia crónica a la que llegaron por fuerza de apartarse de la sociedad civil, por creer que pueden manejar las crisis de re-posicionamiento en el mundo post-guerra fría y post-conflicto con el Perú por sus propios medios. El Mesías pudo ha-

ber sido cualquier otro; pero Lucio sin duda fue el más audaz.

Otra respuesta es aquella que sostiene la existencia de una continuidad ideológica en las fuerzas armadas, desde los años sesenta cuando empezó a infiltrarse elementos de la doctrina de Seguridad Nacional producida en el Brasil.⁶ La Ley de Seguridad Nacional se empezó a implantar desde 1963 en forma reservada, con el texto brasileño incluido, a pretexto de que entonces se necesitaba una Ley de defensa civil que reemplazara a las Juntas de Reconstrucción tan recurridas en años anteriores cuando una población era asolada por un evento de la naturaleza.⁷ La Ley proporcionaba a las dictaduras militares una suerte de Constitución, un paraguas contra cualquier desliz jurídico y un instrumento apropiado para entender a la sociedad desde la perspectiva militar, que pretendía suprimir el conflicto social por decreto y dar a las Fuerzas Armadas la condición de sujeto político superior. La verdad es que desde entonces se fue forjando un “proyecto militar” empeñado en rescatar los supuestos éxitos de las dictaduras (de la Junta de los sesenta y de las dos dictaduras de los setenta).

La doctrina de la seguridad nacional sigue viva en la mentalidad militar

Según Fitch (1998), en América Latina el lenguaje conceptual de la seguridad nacional es típicamente mezclado con una orgánica y

6 La Ley de Defensa Nacional de 1951, expedida por el gobierno de Velasco Ibarra, ya acusa algunos elementos identificados como parte de la doctrina. Ver Aguilar (2005).

7 Informantes calificados señalan que el texto de la Ley de Seguridad Nacional, fue elaborado a semejanza de otro usado en Brasil. Originalmente se intentaba contar con una Ley de Defensa Civil para organizar una estructura que reemplazara a las “Juntas de Reconstrucción Cívica” organizadas en casos de situaciones de desastre provocados por eventos de la naturaleza.



corporativa perspectiva militar de la sociedad y la política que, implícitamente, denigra a los políticos civiles a los que se considera incapaces de resolver los conflictos sociales y lograr el bien común. Los escritos militares definen a la seguridad nacional como sinónimo de armonización entre los campos militares, diplomáticos, económicos y psicosociales para alcanzar los objetivos nacionales. Estos aparecen como “permanentes y generales”, trascendiendo los gobiernos individuales. Los civiles son denigrados por mantener intereses partidistas, oscuros y falsos. “Esta perspectiva militar es profundamente antipolítica, privilegia una visión unitaria de nación o estado que no es compatible con la sociedad civil real”. Desde esta perspectiva, se entiende que la acción del gobierno debe ser un ejercicio eminentemente tecnocrático. No se entiende el juego de conflictividades alternativas, la importancia de los mecanismos institucionales de participación y la inevitabilidad de los conflictos ideológicos. La antipatía militar al pluralismo político es reflejado en la consecuente denigración del “político real”.

Las doctrinas de las seguridad nacional de los 60 y 70 dieron un fundamento intelectual común a los roles militares; un fundamento

que pretendía reemplazar a los burócratas civiles en el manejo de políticas sociales y, más específicamente, a los roles militares en la política “cuando los líderes civiles se demostraban incapaces para manejar el desarrollo y la seguridad interna”

El tutelaje militar en la democracia ecuatoriana

En Ecuador, nueve años de dictadura y veinticinco de democracia parecen haber servido sólo para marcar, como un trazo continuado, las líneas maestras de un proyecto militar que no ha dejado de refundarse y refrescarse en cada episodio político e incluso militar. La victoria del Cenepa en 1995, así como la firma de la paz con el Perú en 1998, trajeron otros factores que no dejaron de confluir en el fortalecimiento de la percepción militar, corporativa y tutelar sobre la sociedad. En realidad, desde ojos militares la sociedad parece no tener una existencia propia y quizá no cuenta por sí misma, sino en la medida en que es construida idealmente por la representación que de ella se hace desde los cuarteles. Esto lleva a excluir aquello que no encuentra sitio en la imagen ideal: la clase política, los críticos y los analistas civiles de asuntos militares.

La transición del poder en 1979 en Ecuador estuvo condicionada al mantenimiento de la estructura militar y su dominio en las “áreas estratégicas”. El tutelaje militar se mantuvo soterradamente presente sobre los gobiernos de la transición en los años ochenta. Diversos conatos de insurrección no faltaron en la compleja adaptación de los militares a los poderes civiles. Pero ni estos ni los partidos políticos visualizaron la necesidad urgente en ese entonces de construir una fuerte (doctrinaria, jurídica y política) conducción civil sobre el poder militar, ni de posicionar a la estructura militar en el lugar que le corresponde entre las instituciones del Estado de

Derecho. Al contrario, especialmente el poder legislativo le ha cedido posiciones constantemente. Ecuador es quizá el único país en donde aún se excluye al parlamento de sus funciones de legislador y fiscalizador con respecto a los asuntos militares.

A contracorriente con las tendencias democráticas que se extienden en el mundo, en el Ecuador el poder militar llegó al punto de actuar realmente como una fuerza política. Por ello no hubo extrañeza cuando desde el 2001 surgió una suerte de brazo político militar, Sociedad Patriótica, que en su nombre evoca las antiguas cofradía militares de sociedades inferiores, y en su ideario reproduce totalmente la versión politizada y tecnocrática de la seguridad nacional, aquella que llega a justificar la intervención militar directa en la política. El ideario estaba dictado por quienes realmente se preparaban para gobernar u ocupar posiciones de decisión en las empresas militares y, ¿por que no?, en el gobierno. Para ello, los sistemas de calificación de oficiales superiores se habían convertido en poco menos que un concurso de merecimientos (Castro 2005). Pero también registra el surgimiento de un nuevo nacionalismo nacido del descontento militar por los términos de la reciente solución limítrofe y posiblemente de la infiltración en la ideología militar de elementos de la cultura contestataria de la mundialización.⁸

El pasado y un futuro incierto

Hemos hablado de la persistencia de un proyecto militar de sociedad en el Ecuador. Un fantasma que desde 1979 quiere volver recurriendo a imágenes del pasado para imponerse nuevamente a fuerza de no entender para nada el presente, de aferrarse a un pasado que no fue

⁸ Fenómeno que debe ser tomado en cuenta en análisis específicos.



como se lo recuerda, ni tan heroico y eficaz como se piensa. Que en su versión moderna, siglo XXI, fue mucho mas lejos que una farsa.

Bibliografía

- Aguilar, Juan Pablo, 2005, "El Comando Conjunto en la organización militar y en la política ecuatoriana" en *La administración de la defensa en el Ecuador*, Quito, PUCE-KAS.
- Castro, José, 2005, "Autonomía y corporativismo militar en el Ecuador", Documento sin publicación, Quito, PUCE.
- Fitch, Samuel, 1998, *The Armed Forces and Democracy in Latin America*, John Hopkins University Press, Baltimore.
- García Gallegos, Bertha, 1999, "New Perspectives on Using Diplomacy for the Resolution of the Ecuador-Peru Conflict", en Gabriel Marcella y Richard Downes, *Security Cooperation in the Western Hemisphere: Resolving the Ecuador-Perú Conflict*, North-South Center Press, Miami.
- , 1987, "Militares, Economía y Lucha Política; Ecuador en los años setenta", Tesis doctoral, El Colegio de México, México.

El regreso de Abdalá

Carlos de la Torre
Profesor-investigador de Flacso-Ecuador

Mail: cdelatorre@flacso.org.ec

Fecha de recepción: julio 2005
Fecha de aceptación y versión final: agosto 2005

Resumen

Este artículo estudia las relaciones ambiguas entre el populismo y la democracia a través de los rituales y discursos de Abdalá Bucaram cuando regresó de su exilio en Panamá. El artículo discute los diferentes significados del término “el pueblo”, las paradojas de la representación populistas y los significados de la democracia para el populismo.

Palabras clave: populismo, democracia, discurso político, rituales políticos.

Abstract

This article explores the ambiguous relationships between populism and democracy by focusing on the rituals and discourses of Abdalá Bucaram's return from exile. The article discusses the different meanings of the term “el pueblo”, the paradoxes of populist representation, and the populist meanings of democracy.

Key words: Populism, Democracy, Political Discourse, Political Rituals.

El regreso de Abdalá Bucaram de su exilio-refugio por ocho años en Panamá fue uno de los detonantes de la indignación moral de muchos manifestantes quiteños de clase media para arriba en contra del régimen del coronel Lucio Gutiérrez.¹ Para muchos editorialistas, directores de programas de opinión en la radio y en la televisión así como para ciudadanos, sobre todo serranos, el regreso de Bucaram fue la última gota que desbordó su indignación moral y estética en contra de Gutiérrez. El que este evento, diseñado para los medios, haya sido transmitido en directo por varios canales de televisión fue resentido por muchos ciudadanos que volcaron su ira en contra de los noticieros de televisión a quienes vieron cómo cómplices del gobierno de Gutiérrez. A diferencia de éstos, para los militantes del Partido Roldosista Ecuatoriano así como para su familia y su círculo íntimo, el retorno del “loco” fue vivido como un momento eufórico que permitiría la recuperación del partido que había perdido espacios frente al PRIAN de Álvaro Noboa y al Partido Social Cristiano. Además, se especulaba sobre una alianza entre el PRE y el partido de Gutiérrez, Sociedad Patriótica, para las futuras elecciones de 2006. Muchos de quienes asistieron a la avenida 9 de Octubre a presenciar el acto de recibimiento a Bucaram fueron a ver un espectáculo en el que, además de gozar de entretenimiento gratis, podrían ver en vivo y en directo al “loco” Bucaram, de quien esperaban que al igual que en ocasiones anteriores arremeta contra la oligarquía social-cristiana, se mofe de los valores y costumbres de los ricos y reivindique lo que el político considera como las virtudes de los pobres.

1 Para un análisis de las protestas contra Gutiérrez ver Franklin Ramírez, 2005, *La insurrección de abril no fue sólo una fiesta*, Abya-Yala, Quito, y el artículo de Edison Hurtado, “Lo que pasó en Ciespal. Apuntes etnográficos sobre el poder, los medios y los sin-sentidos de la violencia” en este número de *Íconos*.

El regreso de Bucaram, como cualquier espectáculo político, puede tener varias lecturas y significados que serán analizados para desentrañar las ambigüedades de su apelación populista. Abdalá no es ni el “repugnante otro”, es decir, la encarnación de los valores estéticos y morales que no debería tener un político, ni es el líder popular puro, auténtico, exiliado y perseguido por las oligarquías que él dice ser. Bucaram, más bien, encarna formas de resistencia a la dominación cotidiana y a las humillaciones a las que son sometidos los de abajo. Pero, por otro lado, el cuestionamiento a la arrogancia de los ricos y de los más blancos se basa en la apropiación de la voluntad popular por parte del líder político, en un uso instrumental de la legalidad y de las instituciones de la democracia liberal, y en la construcción autoritaria de lo que el líder considera que son los auténticos valores de los pobres.

“Más loco para romper el alma a la oligarquía ecuatoriana”

El ambiente en la calle 9 de Octubre el 2 de abril de 2005, día en el que el loco regresó a Guayaquil de su exilio de 8 años en Panamá, fue festivo. Gracias a que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, militante de su partido político e íntimo amigo suyo, revocara las órdenes judiciales en su contra, el ex-presidente Abdalá Bucaram pudo regresar al país. Bucaram fundó el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) en 1983 en homenaje a la memoria del ex-presidente Jaime Roldós y de su esposa, Martha Bucaram, hermana de Abdalá, que fallecieron en un accidente de aviación.² Luego de participar en dos contiendas electorales, Bucaram llegó a la presidencia en 1996 durando apenas seis meses en el poder.³

2 Véase Flavia Freidenberg, 2003, *Jama, caleta y camello. Las estrategias de Abdalá Bucaram y del PRE para ganar elecciones*, Corporación Editora Nacional, Quito.



En febrero de 1997, una alianza de políticos de la oposición, elites empresariales, la alta cúpula de las fuerzas armadas y movimientos sociales protagonizaron multitudinarias manifestaciones en contra de la corrupción de su gobierno y del paquetazo económico que subió drásticamente los servicios de primera necesidad. Bucaram fue cesado de sus funciones con la artimaña legal de su incapacidad mental para gobernar y sin pruebas médicas sobre su locura.

Pese a que se contó con apenas dos días para organizar su recibimiento, desde la mañana del 2 de abril aparecieron las pancartas, las grandes telas con *slogans*, las camisetas y las pegatinas para los autos. En estas se escri-

bieron mensajes mesiánicos a favor del líder del PRE tales como: “sólo Dios sabe cuanto hemos sufrido en tu ausencia”, “Abdalá mi pasión”, “salva tu pueblo”, “tiemblen porque volví.” Desde varias provincias llegaron los buses. Muchos eran acarreados por las redes clientelares del partido, otros tenían curiosidad de ver al “loco” y otros fueron a recibir a su líder. Concurrieron parejas con sus mejores galas, familias, grupos barriales y de campesinos. La gente, en su mayoría humilde, se preparaba para un acto gratuito amenizado con tecnocumbias y cuyos platos fuertes prometían ser el grupo uruguayo Los Iracundos y Bucaram. Algunos jóvenes, como si estuviesen en un concierto de rock o en el fútbol, saltaban eufóricos mientras gritaban los nombres de los pueblos y ciudades de donde vinieron. Algunos tomaban trago, pero se impuso el orden. Mujeres y señores mayores les pidieron calma, que no empujen, que respeten pues entre el público había niños. Ya que

3 El triunfo de Bucaram es analizado en mi libro *¡Un Sólo Toque! Populismo y Cultura Política en Ecuador*, CAAP, Quito, 1996. El corto gobierno y la caída de Bucaram son estudiados en el capítulo 3 de mi libro *Populist Seduction in Latin America*, Ohio University Press, Athens, 2000.

el incentivo era ver el acto de lo más cerca posible y colocar las pancartas de la organización a vista de los dirigentes del partido, muchos hacían todo lo posible para situarse al frente, a veces pidiendo permiso, las más a empujones. El calor fue insoportable y los comerciantes hicieron su noche vendiendo agua, refrescos y cerveza fría. Cuando ya se acercaba la hora de su llegada empezó el concierto de Los Iracundos y los ánimos se caldearon aún más. La música de este grupo recordó a muchos de los partícipes las canciones con las que Bucaram llegó al poder en el 96. Los más jóvenes disfrutaron la música de este grupo “retro” que todavía no pasa de moda, sobre todo en las celebraciones de San Valentín. El presentador, que parecería que algún día trabajó en un circo y que lo acompañó en la campaña del 96, gritaba: “¡ya viene Abdalá, bajen las pancartas, tranquilícense!”

Y llegó con la lluvia

La expectativa se transformó en euforia cuando apareció el helicóptero que sobrevoló la 9 de Octubre. Algunos esperaban que el aparato aterrice a la vista de todos como lo hiciera cuando Bucaram regresó del exilio en octubre de 1990, o que el loco se baje por una escalera desde el aire. Pero no les decepcionó que el helicóptero aterrizara en el edificio de La Previsora. Crecía la euforia. Entre la multitud aparecieron unos señores, de los cuales era mejor apartarse, gritando “¡abran paso carajo!” No fue fácil abrir espacios, pues no había ni una aguja, pero ni modo, tenía que pasar la camioneta en la que el loco lentamente avanzaba a la tarima. Cuando se lo vio, la alegría se transformó en delirio. El loco gesticulaba y alzaba los puños, su hijo Jacobito reía y saltaba. La gente le gritaba “loco hijueputa” mientras reían y lo aplaudían mirando hacia arriba a quien dice ser el Mesías de los humildes. Cuando pasó la camioneta, de repente vimos

a una veintena de caballos, algunos corcovearon y en ese momento la gente se retiró como pudo. Esta mezcla de euforia y alegría de ver al líder de cerca junto al peligro de ser atropellado por los caballos o por la muchedumbre, sintetizan las actitudes de Bucaram hacia “su pueblo”: exaltación de las virtudes del líder y del pueblo, y desdén por el bienestar de sus seguidores, irresponsabilidad por el peligro innecesario y por crear una situación de riesgo. Todo, para que éste no sea un mitin político más, para que no se lo olvide fácilmente.

El evento situó a los asistentes dentro de un orden jerárquico. Bucaram y su familia en el centro y en las alturas de la tarima, el pueblo a sus pies, cerca y lejos del líder que, a la vez que promete redimirlos, no los respeta. Esta escenificación de la jerarquía populista basada en la proximidad del líder que está en las alturas provocó que quienes estaban presentes traten de tocar y abrazar a quien se dice su redentor. Es por esto que muchos intentaron subir a la tarima y que el líder entre y salga del evento pasando por medio de la muchedumbre.

Ya que la espera fue larga, los discursos fueron cortos. Luego de que Abdalá y su hijo Jacobito, que tiene sobrepeso, fueran cargados a la tarima, los hijos de Bucaram cantaron una canción con los Iracundos en honor a su padre. A continuación habló Jacobito, líder de las juventudes roldosistas, por cinco minutos. Después Abdalá tomó la palabra. Como le es característico, y siguiendo el mismo guión de sus arengas en la campaña del 96, con vos entrecortada y melancólica, se refirió a sus sufrimientos y los de su familia, que según él no son otros que los del pueblo. Con vos enérgica y con rabia arremetió contra la oligarquía. Imitó con vos afeminada a su enemigo, el ex-presidente León Febres Cordero. Los grandes temas alrededor de los cuales giró su oración fueron la familia y el pueblo.

La familia roldosista

A su recibimiento no sólo asistieron familias de curiosos, de clientes y de fervorosos; su familia fue el centro del acto. Abdalá empezó su discurso saludando a Omar Quintana, diputado del PRE y presidente del Congreso, y a los miembros de su familia con los diminutivos que probablemente utiliza en la intimidad del hogar. Se refirió a los sufrimientos de los suyos, en especial al sobrepeso de su primogénito Jacobo causado por el trauma de ver cómo a su padre le apresaban cuando el presidente Febres Cordero le acusó de tráfico de drogas. “Un niño con sobrepeso porque a los 7 años de edad Febres Cordero lo pateó en Panamá, le rompió la cabeza cuando me sacaban con esclavas en las manos acusándome de tráfico internacional de drogas... Jacobino, mijito, he regresado al Ecuador.”

Abdalá invitó a los presentes a ser parte de su familia. Se presentó como el padre de su partido cuya alta cúpula está llena de familiares y amigos incondicionales, de sus pobres, de sus negros de la provincia de Esmeraldas y de su patria. Su discurso borró las líneas que diferencian a lo público de lo privado. El partido, la nación y los pobres son parte de la familia roldosista que serán cuidados y redimidos por el patriarca. Los oligarcas son excluidos de su amor y de la nación. En esta lucha maniquea, que caracteriza a los discursos populistas,⁴ los rivales son transformados en enemigos que no tienen derechos pues atentan en contra de los intereses del pueblo y de la nación que son unívocos y transparentes y que, obviamente, son los señalados por el líder que se autoproclama como la encarnación de las virtudes nacional-populares.

Como lo han señalado David Plotke y Nadia Urbinati, a diferencia de la democracia liberal que se basa en el gobierno de la mayoría pero no en la unanimidad de opiniones e intereses, en el populismo no existe un campo reconocido para expresar la disensión pues

está basado en “la unión y la identidad total entre un representante y aquellos que buscan ser representados”⁵. Quienes no son parte de los seguidores que aclaman al líder son invisibilizados, silenciados, no son tomados en cuenta y pueden ser reprimidos.⁶ Es por esto que las formas de representación populista tienden a no respetar el marco normativo exigente que es visto como un impedimento para que se exprese la voluntad popular encarnada en el líder.

La confusión entre lo público y lo privado también explica la corrupción durante su gestión estatal, pues si hay una identidad entre mi estado, mi nación y mi pueblo, ¿por qué rendir cuentas a nadie, por ejemplo, sobre el uso de las cuentas estatales? El líder populista no sólo dice encarnar las virtudes de la nación y del pueblo. A través de esta usurpación de la representación de la voluntad popular, se sitúa más allá de los procedimientos y de las normas de las democracias liberales. Esta actitud instrumental ante las leyes “reduce los mecanismos constitucionales a un medio que sirve al poder político y el uso repetido de medidas y prácticas extra institucionales debilita la autoridad del estado y del sistema legal”.⁷ Quien dice ser el redentor que conoce las necesidades de su pueblo, cree estar enfrascado en una lucha por valores trascendentales. Ya que viene para “encabezar la revolución de los pobres, la revolución de los hambrientos” no se le pida que de explicaciones sobre sus actos, pues su misión es divina. Por

4 Ver los textos clásicos de Ernesto Laclau, 1977, *Politics and Ideology in Marxist Theory*, Verso, London, y de José Álvarez Junco, 1990, *El emperador del paralelo. Lerroux y la demagogia populista*, Alianza Editorial, Madrid.

5 David Plotke, 1997, “Representation is Democracy”, en *Constellations*, Vol. 4, No. 1, p.28.

6 Nadia Urbinati, 1998, “Democracy and Populism”, en *Constellations*, Vol. 5, No. 1.

7 Enrique Peruzzotti, 1997, “Civil Society and the Modern Institutional Complex: The Argentine Experience”, en *Constellations*, Vol. 4, No. 1, p. 101.

esta razón expresó sin tapujos que el Papa Juan Pablo II “no quería morir hasta que el líder vuelva a su patria”, para luego pedir un minuto de silencio en recuerdo de la memoria del Sumo Pontífice.⁸

El pueblo

Luego de saludar a Omar Quintana y a su familia, Bucaram interpeló a los presentes como “pobres de mi patria”. Cada vez que Abdalá se refirió al pueblo y a los pobres sus palabras fueron respondidas con grandes ovaciones. Contrastó la Marcha Blanca del 26 de enero de 2005 organizada por el Partido Social Cristiano en contra de la delincuencia y del gobierno de Lucio Gutiérrez, con su recibimiento. A diferencia de la primera, a la que tildó de racista, dijo: “aquí no hay sólo blancos, rubios, nalgas blancas, ojos azules. Aquí hay negros, cholos, indios, obreros. Están los pobres de la patria”. Se mofó de la oligarquía, sobre todo de Febres Cordero a quien llamó “viejo marihuanero”. Este insulto fue aclamado pues muchos de quienes estuvieron presentes no olvidan la afrenta clasista de León Febres Cordero cuando manifestó en 1996 que únicamente las prostitutas y los marihuaneros votaron por Bucaram.

Uno de los objetivos de los organizadores fue presentar una imagen de pueblo distinta a la que tiene la “gente bien”.⁹ Varias veces el presentador del acto se refirió al pueblo como organizado, respetuoso, culto y educado. No hubo peleas, saqueos, ni robos y el pueblo sobrevivió a las imprudencias de los organizadores que metieron caballos en donde no ya no cabía nadie. La gente fue a ver un acto con

un guión conocido y no fueron defraudados: al igual que en 1990 el loco regresó en helicóptero, estuvo cerca al pueblo y cometió las locuras de siempre como fueron echarse un vaso de agua encima y usar “malas palabras” para descalificar a sus rivales.

Al conversar con muchos de los presentes me manifestaron que no creían que el loco fuese la solución. Aceptaron que era corrupto pero dijeron que no es el único político deshonesto, pero sí el más perseguido y no tanto por corrupto como por su lucha antioligárquica. Señalaron que apoyan a Bucaram porque, a diferencia de otros políticos, les da “esperanza y buena energía”. La esperanza de abanderar los resentimientos que produce la exclusión, la buena energía de escuchar sus bromas e insultos a los oligarcas. Otros no estaban interesados en las palabras del “líder de los pobres”. Fueron a disfrutar de la música, del paseo desde sus pueblos a Guayaquil, del trago al que les invitaron los caciques que organizaron su viaje, a coquetear, en fin, a pasarlo bien. Es por esto que algunos caminaron hacia sus buses apenas empezaron los discursos. Otros, tal vez los más, disfrutaron de los insultos a los oligarcas y de la glorificación al pueblo y a los pobres por parte del líder.

El show mediático

Este mitin fue organizado para ser visto en la televisión. Ni la muerte del Papa logró opacar un show que fue retransmitido en vivo por varios canales, aún cuando algunos noticieros se oponen a Bucaram. Como fue un evento

8 La transmutación de la política en religión y moral es una característica del populismo ecuatoriano. Agustín Cueva analizó los mitos religiosos del velasquismo en *El Proceso de Dominación Política en el Ecuador*, Planeta, Quito, 1988. El uso de los símbolos evangélicos por Bucaram es estudiado en mi libro *¡Un solo toque!*

9 Sobre las visiones de las elites sobre los pobres véase Robert Levine, 1989, “Elite Perceptions of the Povo”, en *Modern Brazil Elites and Masses in Historical Perspective*, editado por Michael L. Conniff y Frank D. MacCann, The University of Nebraska Press, Lincoln; Carlos de la Torre, 2004, “Un balance crítico a los debates sobre el nuevo populismo”, en Centro Andino de Acción Popular, editorial, *Releer los Populismos*, CAAP, Quito, pp. 51-79.



pensado para los medios se organizó el recibimiento en la calle 9 de Octubre, símbolo de la regeneración urbana de los alcaldes socialcristianos y espacio que fue copado por los convocados por el alcalde Nebot para la Marcha Blanca por Guayaquil. Los objetivos fueron demostrar que el PRE todavía, y pese al exilio de su líder, tiene una gran capacidad de convocatoria y apropiarse de un espacio socialcristiano. Por primera vez, desde que estoy estudiando a Bucaram, se utilizaron grandes pantallas de televisión para que quienes están lejos de la tarima puedan ver al líder. Es así que quienes estaban presentes en el acto vieron las mismas imágenes transmitidas en la televisión pero con la ventaja de estar cerca del centro del evento, de estar próximo al líder, a su familia, a su partido y a su pueblo.

Este evento tuvo significados múltiples, en gran parte predeterminados por la posición de clase y política de quienes lo observaron. Para algunos fue la pesadilla de la democracia

y la encarnación de la corrupción y de la impunidad. Para otros, la personificación de la vulgaridad. Ver cómo Bucaram con la camisa abierta, todo sudado y enseñando sus kilos de más, se subía a un caballo al final del acto revivió las pesadillas de los sectores cultos y educados del ex-presidente comiendo guatita con cuchara o bailando con modelos teñidas de rubio y enseñando sus chichos en las pantallas de televisión. Algunos invirtieron dinero en el acto con el posible objetivo de sacar ganancias por lo que hasta escribieron sus nombres en las grandes pancartas que adornaron el escenario. Es así que Hugo Quevedo donó las pancartas grandes para la tarima principal; se dice que la productora de Jimmy Jairala puso los sistemas de sonido y televisión, y líderes de recursos más modestos -como Morochito- pusieron pancartas más pequeñas y regalaron agua a los presentes. Para muchos, la figura de Abdalá, sus gestos y sus actos son afrentas a sus superiores que reivindicaban sus



formas de ser y vivir. Por eso Bucaram terminó su discurso ofreciendo bienes materiales a los pobres a cambio de apoyo político: “Tu me das tu voto, yo te doy una escuela” pero sobre todo “comprensión” y “un suelo ecuatoriano en el que vivas con la cabeza erguida”.

Conclusiones

El retorno de Bucaram marcó el futuro político de Gutiérrez. Este outsider de la política llegó al poder en el 2002 con un partido minúsculo y sin una base de apoyo en el Congreso. Con apenas 5 diputados de Sociedad Patriótica de un total de 100, el gobierno de Gutiérrez no tuvo más opción que buscar el apoyo de los llamados legisladores independientes, incurriendo en escándalos con la compra de votos. Luego de la ruptura con el movimiento indígena y con Pachakutik, gobernó con una alianza bajo la mesa con el Partido Social Cristiano (PSC). Esta alianza se rompió luego de las elecciones para dignidades locales del 17 de octubre de 2004 en las

que triunfaron los partidos tradicionales y en las que apenas sobrevivió Sociedad Patriótica. En noviembre de 2004, los ex-presidentes León Febres Cordero -líder del PSC- y Rodrigo Borja -líder del partido socialdemócrata Izquierda Democrática- y los diputados de Pachakutik buscaron seguir un juicio político a Gutiérrez. Este sobrevivió armando una nueva mayoría legislativa con el PRE y el PRIAN. El gobierno sorprendió a la oposición cuando una nueva mayoría de legisladores acapararon la presidencia del Congreso, conformaron un nuevo Tribunal Supremo Electoral, y cesaron a la Corte Suprema de Justicia -asociada al Partido Social Cristiano- con una nueva Corte con personalidades ligadas al PRE y al PRIAN. Las amenazas de los políticos de la oposición de tumbarlo con una simple mayoría de votos en el Congreso y su debilidad política, le llevaron a este pacto que incluía el regreso de Bucaram. Gutiérrez confió que en ausencia de un paquetazo económico, con estabilidad macroeconómica, con políticas clientelares y de patronazgo y con una popularidad de alrededor del 30% tenía asegurada no sólo su supervivencia sino que un pacto con el PRE le podría resultar en un triunfo en las futuras elecciones de 2006. Pero el cálculo le salió mal y el retorno de Bucaram fue leído e interpretado desde posiciones democráticas que vieron en este la manifestación más burda de la falta de instituciones y de descalabro del estado de derecho. El retorno del temido “líder de los pobres” también despertó las viejas pesadillas sobre la falta de buenos modales y cultura de Bucaram, a tal punto que cada vez se vio más a Gutiérrez como un pobre imitador de su estilo. El grito “que se vaya Bucaram y también su edecán” ilustran cómo Bucaram sintetizó el resentimiento de muchos de quienes salieron a las calles para protestar en contra del gobierno de su ex-edecán.

DEBATE

01



Persona, religión y jerarquía

Comentarios al dossier de Íconos 22

Eduardo Kohn
Universidad de Michigan, Ann Arbor, EE.UU.

Quisiera destacar algunos temas importantes que surgen luego de considerar el conjunto de ensayos que conforman este importante dossier sobre la religión y su relación con la política y la identidad. Tenemos aquí cinco estudios de caso, más una valiosa introducción escrita por Carmen Martínez que procura situarlos dentro de las corrientes intelectuales así como dentro de su ámbito histórico. ¿Cómo debemos entender el papel actual de la religión en la región andina y subandina? A nivel mundial, la religión ha surgido como un factor importante en la política contemporánea. Esto ha afectado la manera en que se forman los miembros de diversos grupos sociales como sujetos con capacidad de actuar políticamente. Los esquemas analíticos que contraponen la religión y lo tradicional, por un lado, con la modernización, la secularización y el cambio, por otro, no nos permiten entender el poder organizativo radical que tiene la religión. Tampoco se debe ver a los misioneros únicamente en términos negativos, o sea como agentes imperialistas ajenos a las realidades en las que se insertan, ya que a estas alturas la dinámica que ellos han introducido ha adquirido una vida local que ha tomado su propia trayectoria. ¿Cómo, entonces, entender esa capacidad peculiar que tiene la religión para transformar de una manera tan profunda al sujeto? ¿Y cómo entender las posibilidades políticas que estas transformaciones, a su vez, crean? Estos son los desafíos que nos propone Martínez en la in-



troducción. Y deja a los estudios de caso que siguen la tarea de ilustrar la dinámica que ha hecho de la religión una fuerza potente de transformación.

A lo largo del dossier, esta tarea se cumple de una manera perspicaz e iluminadora, y al hacerlo se revelan varios aspectos inesperados. Mi propósito es simplemente de trazar algunos de los hilos conductores que unen a los varios ensayos que componen este dossier de *Íconos*. Emergen al menos dos variables importantes y entrelazadas que nos permiten entender la dinámica peculiar que proporciona la religión para el ámbito político. Este comentario se limitará a trazar estas variables y como se relacionan entre sí, con el fin de entender la manera en que su interacción crea la posibilidad de una nueva acción política. Estas dos variables son la persona, por un lado,

y el papel que juega la jerarquía en transformar a la persona, por el otro.

Las religiones tratadas aquí (tanto la católica como algunas de las variantes del protestantismo) producen transformaciones profundas en la persona gracias a la manera en que la insertan dentro de una nueva jerarquía. Esto crea cambios estructurales de mayor dimensión ya que, por un lado, se transforma la jerarquía existente (sea ésta doméstica o social) bajo la cual estaba inmersa la persona y, por otro, esta nueva persona adquiere posibilidades de actuar en las jerarquías nacionales más amplias.

Al parecer, este poder de involucrar a la persona en una jerarquía nueva se desarrolla de una manera sorprendente cuando las religiones logran penetrar, aprovechar y afectar las estructuras más íntimas del núcleo doméstico. Este proceso es admirablemente analizado por los estudios de Mares Sandoval y Steve Rubenstein. Sandoval toma el caso de un sistema de albergues organizado por un grupo evangélico español en los barrios marginales de Quito. Los albergados -personas que han acudido a estos lugares por una serie de problemas como la violencia doméstica y el alcoholismo- se internan dentro de estas "casas" y son sumergidas en una jerarquía muy marcada, que reproduce las lógicas de un hogar paternalista -con los misioneros y misioneras en el papel de padres y madres-. El concepto reinante en estos albergues es el de "obrar". Los internados aprenden la disciplina del trabajo, tanto en los quehaceres domésticos como en labores remuneradas. El obrar, como modo de acción en el mundo, es una disciplina totalmente intercalada con una jerarquía que va desde el "hogar" del albergue hasta el dominio de Dios. Los albergados aprenden a obrar para escalar los rangos de esta jerarquía y, en el proceso, también aprenden a obrar sobre sí mismos y de esta manera se moldean como personas.

El caso de la misión católica salesiana entre los shuar de la Amazonía ecuatoriana, analizado por Rubenstein, demuestra lo difícil que es

cambiar las estructuras domésticas cuando uno intenta hacerlo a través de los adultos quienes, por ende, ya están formados. Por ejemplo, los salesianos no tuvieron gran éxito en convencer a los ancianos guerreros de la importancia de la monogamia, pero sí pudieron transformar a los hijos y nietos. Empleando una de las tácticas más nefastas de la colonización en las Américas (perfeccionada por los jesuitas en la Amazonía en el siglo XVIII y también utilizada en el oeste norteamericano y en el ártico de Canadá, entre otros lugares) los salesianos se dieron cuenta de que si lograban sacar a los niños de sus ámbitos familiares e internarlos en "la misión" podían obtener cambios mucho más profundos en ellos y, por consecuencia, sobre la sociedad indígena. Lo lograron, según nos demuestra Rubenstein, gracias a una habilidad para efectuar una especie de "traducción" entre la estructura tradicional del hogar shuar y la jerarquía socio-económica, política y racial del estado ecuatoriano. La jerarquía de la iglesia católica servía como medio para esta traducción, y la misión funcionaba como el sitio en donde esto se hacía realidad. Al pasar por esta jerarquía, el niño shuar salía transformado, y a través de él, también se transformaba la relación que tenían los shuar con un mundo más amplio.

El trabajo de Elizabeth Roberts sobre los debates que surgen alrededor de la preservación de embriones en las clínicas de fertilización en el Ecuador, proporciona un espacio para entender cómo nuevas tecnologías nos llevan a entablar un debate sobre el significado de lo que es ser persona dentro de un escenario mucho más íntimo que el simple seno doméstico. Debates éticos fundamentales acerca de lo que significa ser "persona" se dan alrededor del conflicto perpetuo en estas clínicas sobre el problema de qué hacer con los embriones que sobran después de los tratamientos. Éste es un caso sumamente interesante porque en el Ecuador la iglesia aún no se ha pronunciado sobre estas prácticas. La posición oficial



de la iglesia a nivel mundial es que el embrión es vida humana y, por ende, los embriones que sobran se los tendrían que conservar. Sin embargo, para muchos ecuatorianos que se consideran fieles católicos, el problema no radica en conservar una vida potencial y anónima, sino en el abandono de un miembro de la familia, al dejar a estos embriones a la merced de las clínicas que los conservan. Para estas personas, Dios está “más preocupado con el virtual abandono de niños” que con la eliminación de embriones. Esta es una posición ética, supuestamente católica, que tiene implicaciones muy importantes para el significado de lo que es ser persona. Sin embargo, va en contra de la posición oficial de la iglesia.

El trabajo de Roberts revela algo importante que se ve en casi todos los casos presentados en este dossier: en contextos nuevos las estructuras, credos o valores establecidos por la iglesia católica y las misiones protestantes llegan a salir fuera del control de estas mismas instituciones. En el espacio que resta, quisiera vincular esta dinámica con la manera en que el manejo de la jerarquía juega con la formación de

una nueva clase de persona. También quiero considerar las formas en que estas nuevas personas actúan de una manera “nueva” fuera del control de la misma iglesia que les dio vida.

He mencionado que la iglesia, con su estructura, sirve como una especie de traductora entre una estructura social-política local, como en el caso shuar, y una más amplia, la del estado. Alberto Zalles, en su trabajo sobre la colonización campesina en la región subandina de Caranavi-Alto Beni, Bolivia, demuestra como esto tiene que ver con ciertas propiedades estructurales de los estados actuales andinos que las religiones logran explotar. En un estado moderno podemos pensar que hay dos esferas de control: una es el hogar y la familia, y la otra es el estado, dentro del cual va insertada esa familia. En muchos casos, en las zonas territoriales periféricas, la influencia del estado ha sido mucho menos fuerte y esta segunda esfera de control no existe. Aquí es donde entra la misión religiosa. Como destaca Zalles, la iglesia asume el papel del estado, se asigna ese rol. En el caso del que nos habla Zalles, los luteranos logran insertarse dentro

del poder local a tal punto que un pastor norteamericano alcanza a ser alcalde de Caranavi. Cuando la religión se involucra con el poder, también lo modifica.

El caso analizado por Susana Andrade sobre los indígenas evangélicos de la provincia de Chimborazo en Ecuador, como el antes mencionado caso de los shuar descrito por Rubenstein, muestra los caminos inesperados que puede tomar la relación entre política y religión. El hecho de que la iglesia evangélica haya podido tener tanto impacto en Chimborazo se debe justamente a la falta de la presencia de un estado moderno para garantizar los derechos humanos básicos de la comunidad indígena (que hasta hace poco vivía bajo el yugo del poder hacendatario). Con la llegada de la iglesia evangélica, los indígenas encontraron un camino que los llevaba fuera de esa jerarquía. Se volvieron "personas nuevas" ya no sujetas a las jerarquías viejas de la iglesia católica y del racismo nacional en general. Sin embargo, lo curioso es que al salir fuera de estas jerarquías, también perdieron cualquier acceso al poder del estado. La iglesia evangélica de origen norteamericano está unida a una estructura de poder estadounidense, y los valores que adoptan los indígenas son correlativos a ese poder. Esto es muy diferente al caso shuar en donde la misión vino paulatinamente asumiendo la estructura del estado ecuatoriano, y sus alumnos poco a poco fueron heredando esta estructura. Esto sucedió a tal punto que de una estructura misionera nació la Federación Shuar, que brindó visibilidad a los shuar en calidad de persona colectiva, de grupo étnico. Los shuar, antes de la presencia salesiana, quedaban fuera tanto del control estatal como del acceso a su poder. Gracias a la misión, se apropiaron de un aparato que imita a la estructura estatal, y con esto pudieron entrar a la esfera de influencia del poder público del estado. Los shuar son los primeros indígenas en el Ecuador en tener una federación y, como tal, fueron un soporte indispensable pa-

ra la Conaie en su lucha por la visibilidad en la política nacional de la última década.

Los indígenas evangélicos de Chimborazo, por estas mismas razones, estuvieron apartados de la Conaie y de todos los logros que ésta organización obtuvo. Que hayan estado aislados de este movimiento se debe en gran parte al hecho de que estaban afiliados a una iglesia con fuertes tendencias derechistas, con cierto pavor -inspirado por la Guerra Fría- a cualquier grupo que pudiera tener objetivos de cambio social. Pero también se debe al hecho de que, a diferencia del caso de los shuar (que al entrar a la misión se formaban como ecuatorianos), los indígenas de Chimborazo al ingresar a la misión evangélica salían en cierto sentido de la orbita nacional y, por ende, también se aislaban de los caminos que conducían a las estructuras estatales de poder.

Todo esto ha cambiado en los últimos años. Ahora son frecuentes las alianzas entre la Conaie y los indígenas evangélicos en los levantamientos y las elecciones nacionales (aunque son igualmente frecuentes los desacuerdos). Para entrar en estas alianzas, los indígenas evangélicos han tenido que identificarse no sólo como personas nuevas sino como ecuatorianos también. Un ejemplo de ello es el que nos proporciona Susana Andrade en el caso de un locutor de radio indígena que insistió, a pesar de las críticas de los misioneros norteamericanos, en tocar música nacional en una emisora evangélica. Al asumir un puesto dentro de la sociedad ecuatoriana, los indígenas evangélicos buscan construir ya no una nueva persona, sino una nueva política ecuatoriana. La persona se vuelve un ente más grande que el individuo, y como tal puede actuar en un campo más amplio que lo personal. Y esto, como demuestran los estudios de caso de este dossier, no se debe al hecho de resistir, ignorar o negar las jerarquías existentes sino, más bien, a la forma en la que se las apropia y, en este proceso, también se las transforma.

DIÁLOGO

o



Ciencias políticas y trabajo de campo

Diálogo con Liisa North

Luciano Martínez

Profesor-investigador de FLACSO



Liisa North es actualmente profesora emérita de la Universidad de York en Canadá, institución a la cual ha estado vinculada desde inicios de los años setenta, casi inmediatamente después de obtener su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Berkeley en California con una tesis sobre “Los orígenes y desarrollo del partido aprista del Perú”. Desde entonces ha estado relacionada al espacio académico del norte, pero sin apartar su mirada ni su corazón de lo que sucedía en América Latina y más concretamente en Ecuador. De ello son pruebas fehacientes sus frecuentes viajes a la región, su incansable actividad de investigación y de docencia en varios países, entre los que podemos destacar Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Nicaragua y Guatemala.

Conjuntamente con Louis Leféber ha impulsado importantes investigaciones desde el CER-LAC (Centro de Investigaciones sobre América Latina), institución de la cual fue directora entre 1989 y 1991. Su importante trabajo de investigación sobre el Ecuador se inicia en los años 70 con el Proyecto Ecuador, el cual se concretó en la publicación de 4 tomos sobre temas de historia, economía, sociedad y agro. Su trabajo más actual está orientado a la problemática del desarrollo en el medio rural. La evolución del pensamiento de Liisa es el resultado no sólo de la profundización de sus primeras investigaciones sino también del compromiso con los sectores más pobres de nuestra sociedad. En efecto, desde los años 80, la implementación de políticas de ajuste en nuestro país, ha generado una mayor desigualdad y pobreza especialmente en la población rural. Se abrió así un espacio privilegiado para la investigación, un verdadero laboratorio social que fue muy bien aprovechado por Liisa, pues justamente desde fines de la década de los 90 desarrolla investigaciones sobre economía política del medio rural y viene a llenar en cierto sentido un vacío de conocimiento sobre estos temas, dejados de lado tempranamente por los investigadores nacionales que consideraron equivocadamente que los problemas de la ruralidad habían pasado a segundo plano.

Sus más recientes publicaciones se orientan en el caso ecuatoriano hacia esa realidad con una visión a todas luces optimista y creadora a la vez. Liisa revaloriza la estrategia comunitaria como alternativa frente a la estrategia individualista que se imponen a través del mercado y el neoliberalismo. Considera que la construcción de una sociedad rural con mayor equidad es una base no sustituible del futuro del desarrollo, pero igualmente plantea con claridad la necesidad de cambios estructurales, especialmente la necesidad de una reforma agraria y acceso a los recur-

sos por parte de los pobres rurales, como base de la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Sus últimas investigaciones se han concentrado en el estudio de estos mini-modelos de desarrollo local en la sierra ecuatoriana y que no han sido tomados en cuenta en el diseño de políticas públicas. Liisa viaja, entonces, a Pelileo en Tungurahua, a Salinas en Bolívar y allí realiza un minucioso trabajo de campo, discute sobre el rol de las ONG y estimula el debate sobre el desarrollo rural. Los resultados de estas investigaciones están recogidos en el libro publicado en inglés *Rural Progress, Rural Decay*¹ que resume una parte importante de sus preocupaciones actuales sobre el mundo rural ecuatoriano y donde luego de analizar los efectos del ajuste sobre el campesinado, sus potencialidades organizativas y económicas, deplora la crisis institucional del Estado y la falta de diseño de políticas públicas favorables a los productores pobres rurales.

Por su trayectoria académica y por su constante contribución al desarrollo de las ciencias sociales, Liisa North es la flamante ganadora del Premio Pío Jaramillo Alvarado 2005 que la FLACSO otorga anualmente a los investigadores sociales más destacados de dentro y fuera del país.

Luciano Martínez: Tú tienes una antigua vinculación emocional y académica con América Latina. De lo que yo conozco, hace algunas décadas hiciste un viaje en automóvil desde California que te permitió acercarte a la realidad de nuestros países.

Liisa North: Creo que mi vinculación con América Latina empezó cuando tenía nueve años, cuando mi papá se exilió en Venezuela. Ya tenía 4 años de vivir en Venezuela, cuando mi mamá, mi hermana y yo nos unimos a

él. Era el año 1949. La situación nuestra en Venezuela fue bastante dramática, porque estuvimos en Coro, una zona en donde el cacique local estaba metido en el mismo negocio que mi papá. Lo que ocurrió fue que le confiscó los bienes a mi padre y quedamos casi en la calle. La única manera que encontré entonces mi padre para tener un poco de dinero para comprar los pasajes de avión y poder ir a buscar suerte en Caracas fue trabajar para el cacique. Ya en Caracas teníamos tan poco dinero que vivimos en el garage de otro finlandés durante un año entero. Fueron experiencias duras las de mi infancia, especialmente la cuestión personal y familiar, pero también el cambio entre el frío ártico finlandés y el trópico costeño de Coro, que está muy cerca de Maracaibo.

Con referencia al viaje por tierra de San Francisco hasta Lima y después hasta Santiago de Chile, ¿qué te puedo decir? Era un viaje hacia Perú donde iba a hacer la investigación de mi tesis doctoral sobre el partido Aprista. Convencí a la Fundación Ford de que me de el dinero del pasaje por avión para utilizarlo en un viaje por tierra. El viaje se tornó bastante complicado. Así, por ejemplo, tuvimos la mala suerte de matar a una mula en Nicaragua en la época de Somoza. La guardia de Somoza nos confiscó el carro. Estuvimos presos durante un tiempo en el pueblito de Rivas, pero todo el pueblo estaba tan enojado con el régimen que, conocedores de nuestra situación, iban a hablar con nosotros y contarnos cosas. La mula era de un hacendado muy odiado en la zona y, por eso mismo, recibimos muchos consejos de gente del pueblo sobre cómo negociar con la policía y salir del lío. Al fin, tuvimos que relacionarnos con el jefe de tránsito para salir del problema sin pagarle al hacendado.

L.M.: Es decir que ya en el trayecto hacías una especie de práctica etnográfica y sociológica...

1 Liisa North y John D. Cameron, editores, 2003, *Rural Progress, Rural Decay*, Kumarian Press, USA.

L.N.: Sí. Pero además, la otra cosa que ocurrió es que viajábamos en un jeep y llevábamos gasolina extra, agua extra (muchos de los caminos eran desolados) y David, mi ex esposo, era un mecánico bastante bueno. Entonces cuando nos encontrábamos con gente en líos en la carretera siempre nos parábamos para ayudarles y ellos siempre nos invitaban a tomar una cerveza y conversar. Poco a poco avanzamos hasta Lima pero siempre en conversaciones constantes con la gente, en la carretera y en los pueblos. Ahí pasé por primera vez por Quito.

L.M.: **¿Qué impresión tuviste del Ecuador en ese entonces?**

L.N.: Era 1968, antes de la época petrolera. Entramos desde Colombia por la vieja carretera construida por García Moreno. El viaje desde la frontera con Colombia hasta Quito nos llevo un día y medio. Dormimos en Ibarra. El paisaje en Colombia era impresionante, pero los contrastes del Ecuador fueron verdaderamente alucinantes. De la sierra, en el norte, bajamos al valle del Chota y nosotros decíamos “bueno, entramos en una máquina del tiempo o nos equivocamos de continente”. ¡El Chota era África! Y después subimos otra vez al frío y llegamos a Quito. Había apenas unos 20 kilómetros de carretera pavimentada, si no recuerdo mal. Realmente sólo existía el centro de la ciudad y en toda esta zona, lo que hoy es el norte, había sólo casas de campo. En general había mucho campo, mucho verde. Era un día nublado cuando salimos de Quito y de repente se despejó todo, era maravilloso, realmente maravilloso.

L.M.: **Respecto a las investigaciones que has hecho en Ecuador, ¿qué problemáticas han marcado tu carrera? ¿Se podría decir que en tu recorrido hay un paso desde una visión académica de la ciencia política hacia una visión más social?**

L.N.: Yo creo que tenía preocupaciones sociales desde el comienzo. El primer trabajo en el que estuvimos metidos fue el tomo de Louis Lefebvre para el proyecto Ecuador. Juan Manguashca y yo fuimos contratados el mismo año (1971) en Toronto y empezamos a enseñar juntos. En ese entonces el interés de Juan era la economía política, la historia económica y social. Mi contribución para el libro era un análisis de los correlatos políticos, de por qué el capitalismo ecuatoriano no permitía el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Esta era la pregunta fundamental y necesariamente empecé a hacer el análisis de las clases dominantes, las que toman las decisiones sobre la economía, y esto, si se asume una perspectiva histórica, te conduce necesariamente a los terratenientes. Esto explica que en el primer trabajo publicado sobre Ecuador ya esté el tema del desarrollo rural, de las formas de dominación en el campo, del interés que tiene la organización política y social en el campo para defender los intereses indígenas, campesinos y otros, de la importancia de la organización para poder impactar en las políticas públicas. Con Manguashca estuvimos además analizando el populismo y encontramos una relación entre éste y la falta de organización popular autónoma, la fragmentación política y regional del país, así como las consecuencias de todo esto en la organización interna de los sectores populares, en su capacidad de defenderse con su propia voz. Yo creo que las preocupaciones sociales ya estaban en el análisis del velasquismo y también en el análisis de las políticas económicas para el tomo que editó Louis Fefever.

L.M.: **¿Cuáles fueron tus influencias intelectuales en esos años? Tengo entendido que en tus estudios hay una huella de Barrington Moore.**

L.N.: Bueno, Barrington Moore influyó en mi trabajo, pero habría que ver de qué modo.

La otra influencia intelectual de los años 60 fue Eric Hobsbawm con sus estudios sobre las guerras campesinas y sus análisis del campesinado. Cuando escribí mi tesis sobre el aprismo, estaba analizándolo en relación a los desencuentros del desarrollo en el campo peruano, en particular las consecuencias del surgimiento de la economía azucarera de plantación en la costa norte del Perú y sus efectos destructores sobre la pequeña y la mediana producción, así como los conflictos sociales que se produjeron en las zonas mineras. Porque el aprismo surgió precisamente en estas zonas de conflicto.

Ahora bien, este trabajo sobre el aprismo y los disloques sociales del desarrollo lo hice antes de leer a Barrington Moore. Mi preocupación por las consecuencias de la concentración de tierras a fines de siglo XIX y comienzos del XX, precede a esa lectura. Más bien la lectura que había hecho cuando entré en el análisis del aprismo era la de Torcuato di Tella, quien había trabajado sobre fenómenos similares en algunas regiones de Argentina. Yo fui asistente de investigación de Torcuato en Berkeley. Pepe Nun, también había sido invitado a Berkeley y yo era, en cierto momento, asistente de investigación tanto de Pepe Nun como de Torcuato di Tella. Y fue bajo influencia de Torcuato que formulé mi propuesta de tesis doctoral sobre los disloques producidos por la expansión de economías de exportación y sus consecuencias para las estructuras sociales locales y los impactos en la política.

Barrington Moore me estaba confirmando cosas que ya había descubriendo a través de la investigación empírica y de mi hipótesis inicial. Torcuato me estaba animando a analizar las bases sociales del populismo a nivel latinoamericano, a encontrar la racionalidad social que estaba detrás de esos fenómenos que aún no habían sido bien explicados. Estos habían sido estudiados con referencia a ideologías nacionalistas, el personalismo, la

influencia personal de Haya de la Torre, pero no en una manera integral ni sistemática. Por eso yo creo que sigue siendo muy importante esa perspectiva de análisis para entender el populismo.

L.M.: A propósito del populismo en el Ecuador, ¿no crees que existe una lectura del populismo y, en general, de la cuestión política en el Ecuador, demasiado academicista, que parte muchas veces de un modelo idealizado de democracia?

L.N.: Bueno, yo quisiera entender el razonamiento de la gente que vota, porque a mi parecer sus razonamientos tienen poco que ver con las cosas que nosotros asumimos como investigadores: tenemos la tendencia a juzgar desde una concepción liberal de la ciudadanía. Ahora, yo tengo muy poca experiencia con relación a la Costa; simplemente he pasado en varias ocasiones para conferencias o eventos en Guayaquil, pero creo que para entender este tipo de fenómenos se necesita investigación sobre la Costa. Pero hablo de investigación de campo, de personas que estén dispuestas a quedarse, uno, dos, tres meses en Guayaquil, Portoviejo, Machala.

La gente me felicitó por mi tesis por varias razones, pero una de ellas fue que yo estaba convencida (también en contra de Torcuato di Tella) de que no podía escribir una tesis válida sobre el desarrollo del partido aprista solamente desde Lima. La mitad del tiempo (estuve, en ese entonces, 18 meses en el Perú), fui al campo: estuve un mes en Trujillo, donde nació Haya de la Torre. Entrevisté a todos los miembros de los comités ejecutivos departamentales del partido en Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ica. Para contrastar con los lugares donde el partido era débil, fui a Arequipa, Cuzco, Cerro de Pasco, la zona minera y el lado del cerro de Pasto para ver como impactó la economía minera en Huanuco bajando la ceja de montaña. Entrevisté en

Chimbote, la zona pesquera, en el norte del país, y también en Huaraz en la sierra de An-cash. En el norte del país, estaba tratando de entrevistar tanto en la zona de la costa como en la sierra. Luego escogí otros sitios donde el partido era muy fuerte. Y como contraste, dos departamentos donde el partido era débil, que fueron Arequipa y Cuzco.

No quiero presentarme como una heroína o un modelo. Lo que pasa es que tenía mucha energía y tendía a ser bastante atrevida. El trabajo lo exigía y tenía que arriesgarme. Claro que en esos momentos no estaba Sendero Luminoso y además estaba haciendo mi trabajo en los primeros momentos del gobierno de Velasco Alvarado. La gente tenía tiempo y además mucha gente estaba pensando en qué hacer ahora con el gobierno militar, que según la opinión de algunos apristas estaba robando su programa (el del APRA) con la tesis de la reforma agraria, la nacionalización del petróleo etc. Estaban muy desconcertados con lo que estaba pasando y por eso estaban dispuestos a hablar. Ceo que fue un momento muy interesante.

Yo pienso que al hacer investigación sobre los partidos uno tiene que meterse dentro de las estructuras de los partidos y quedarse ahí donde los partidos son fuertes, donde tienden sus redes políticas y sociales, pero también donde son débiles. Entrevistar a la gente, escucharla en los cafés, en los restaurantes. Yo era mujer y joven, por eso nunca fui a escuchar en los bares, no fui lo suficientemente valiente para hacer eso, pero sí me propuse escuchar en todos los espacios sociales en donde podía entrar. En total entreviste a 150 dirigentes locales del partido en las provincias y una buena parte de mi tiempo de investigación estaba dedicado al trabajo de campo.

***L.M.:* Para hacer buena ciencia política, para entender bien lo que pasa con la política en nuestros países, hay que hacer trabajo de campo a fondo...**

L.N.: Yo creo que sí. No sólo aquí, sino en todas partes. No se puede entender los fenómenos sólo desde la ciudad capital y siguiendo las maniobras de los ministros y los congresos. Se tiene que hacer un seguimiento de lo que ahí pasa, pero no es suficiente. Como dije, en cierto sentido el golpe de Velasco me ayudó, porque no podía acudir al Congreso ni a otras instituciones legales ya que estaban cerradas. Había que inventar otra metodología, otras formas y fuentes de trabajo.

En una investigación como esta también hay que hacer una búsqueda en los archivos y es impresionante lo que uno puede encontrar. En el caso peruano yo buscaba al archivo nacional de elecciones. En muchas partes se me dijo que todos estos documentos habían sido destruidos. Cuando fui al archivo, el director, un hombre de más de 80 años, también me dijo que no existían, pero insistí en buscar para ver que es lo que estaba disponible y poco a poco descubrí documentos sumamente valiosos, sobre las elecciones del 32, sobre las elecciones del 36. Era impresionante la cantidad de material que existía sin que se lo conozca. Entonces, cuando estoy hablando de la importancia del trabajo de campo y de las entrevistas no estoy descartando el trabajo en archivos; hay que hacer las dos cosas, aprender a leer los documentos, los periódicos.

Recuerda que en el caso ecuatoriano, cuando tú estabas trabajando conmigo, hicimos entrevistas en Pelileo. Ya habían trabajos anteriores: estaba el tuyo, el de Hernán Ibarra, el de Nancy Foster y otros sobre Tungurahua y Pelileo, pero para entender lo que realmente estaba pasando yo creo que la serie de entrevistas que hicimos fue importante. Además, lo lindo era hacer entrevistas en diferentes tiempos (algo que uno no puede hacer para una tesis), en diferentes momentos, para ver como están cambiando las cosas. Si uno hace las entrevistas con la misma gente, uno empieza a entablar una relación que les permite hablar con confianza mutua, de lo

que nunca sale en la primera entrevista. En el caso de los productores de jeans de Pelileo, entrevisté a la misma gente un buen número de veces y realmente cada vez que iba para allá, surgía algo que no estaba dentro del cuestionario. Para una tesis, esto es muy difícil, aunque yo siempre animo a los alumnos a que regresen por lo menos una vez a su lugar de estudio para ver los cambios.

L.M.: Al parecer, los científicos latinoamericanos de generaciones anteriores habían logrado bastante prestigio en la academia del norte, al punto de que, como tú mencionas, las orientaciones y el tema de tu trabajo te fue sugerido por un investigador latinoamericano. ¿Qué ha pasado ahora? ¿No te parece que esa influencia casi ha desaparecido? ¿O es que los latinoamericanos en los años 60 y 70 estábamos pensando mucho más sobre nuestra realidad, investigando más, aportando y creando más, y a partir de los años 80 estaríamos repitiendo cosas?

L.N.: La pregunta es difícil. Por supuesto que los autores de Latinoamérica tenían muchísimo impacto en el norte. Por ejemplo, Cardoso, las teorías de dependencia, Faletto, en ese entonces también Celso Furtado y Raúl Prebisch. Pero yo creo que eso no ha cambiado: en el norte se continúa leyendo la producción de los latinoamericanos. Yo diría que ahora hay más latinoamericanos en las universidades norteamericanas que nunca. Antes casi todos los profesores de planta en las universidades de Norte América eran de origen europeo, sobre todo irlandés, con muy poca relación con América Latina. Ahora muchos de los profesores en las universidades norteamericanas son latinos que fueron a estudiar allá y se quedaron, o son hijos de inmigrantes o refugiados.

Cuando yo fui a Canadá en 1971, solo Juan Maiguashca estaba en York. Pero ahora, ¿quiénes son los profesores de planta? La di-

rectora de CERLAC es Viviana Patroni, refugiada Argentina; el ex director es Ricardo Grinspu, un economista chileno; el Jefe del Programa Estudios Latinoamericanos es Eduardo Canell, un refugiado uruguayo. Son personas que siempre están viajando a América Latina, mantienen buenos contactos con las comunidades intelectuales. Y yo podría analizar la planta de profesores que enseñan sobre América Latina en las otras universidades y veríamos algo semejante. La forma en que los latinoamericanos impactan en el pensamiento en el Norte es muy fuerte, a lo mejor no tenemos tantas estrellas pero hay más impacto y más gente, más intercambio.

En los setenta casi no había contactos en Canadá, ahora hay muchos contactos. En York fuimos un centro pionero para establecer un patrón de trabajo que implicaba siempre cooperación con instituciones del sur. No el patrón viejo de viajar y publicar algo en inglés y desaparecer de las redes intelectuales. Existe más trabajo conjunto entre norteamericanos y latinoamericanos.

L.M.: Tus trabajos más recientes sobre el Ecuador están orientados a explicar el desarrollo en el medio rural. ¿Qué opinión tienes de esa propuesta economicista que pretende medir el desarrollo en base al crecimiento económico?

L.N.: Obviamente no la comparto, de ninguna manera. Existe gente dentro de la misma profesión económica que ya no cree en eso. ¿Hasta qué punto, el crecimiento es necesario para regular las condiciones de la vida de la gente? Veamos por ejemplo el caso de Kerala, uno de los estados de la India, conocido por el trabajo de Amartya Sen. En Kerala se ha producido un mejoramiento importante en las condiciones de vida de la gente: existe casi un 100% de alfabetismo, niveles de mortalidad infantil bajos, más o menos semejantes a los de Europa, la desnutrición casi no existe, hay po-

siciones ventajosas para las mujeres en todos los sectores y actividades económicas, políticas y sociales. Y todo esto ocurrió sin crecimiento económico. Los cambios dramáticos se dieron en condiciones en las que la economía de Kerala no estaba creciendo sustancialmente. Hay que tomar en cuenta que no estamos hablando de un lugar exótico con poca gente, si no de un estado de la India que es mucho más grande en términos poblacionales que Ecuador, un estado de 30 millones de personas.

Por otro lado, tenemos el caso de Brasil, bajo el gobierno de los militares y hasta un tiempo después: se observó un crecimiento rápido y al mismo tiempo no mejoraron las condiciones de vida, e incluso es posible que empeoraran en muchas regiones.

¿Cuál era el secreto del mejoramiento en el caso de Kerala? Primero, la educación y organización social. Desde comienzos del siglo XX existió un movimiento educacional que formaba parte de la movilización social y política. Entonces, no estamos hablando simplemente de educación en las escuelas, sino de un movimiento que tenía sus impactos políticos. Segundo, la influencia del partido comunista, que llegó al poder y empezó a invertir en la educación, en la salud y también a conducir una reforma agraria. Estas son políticas redistributivas. Donde encontramos estas políticas coherentes, es donde encontramos un mejoramiento en las condiciones de vida de la gente.

L.M.: ¿Algo de esto has encontrado en el caso ecuatoriano?

L.N.: Lo interesante es que las mejores condiciones de vida en el campo, según el mapa de la pobreza que editaron Carlos Larrea y su equipo, se encuentran en cantones rurales donde predominan los minifundios y la mediana producción, no en las zonas de plantación. Yo diría que hasta en Ecuador se puede ver, por un lado, la correlación entre una dis-



tribución más o menos democrática de los recursos materiales y el mejoramiento de las condiciones de vida y, por otro lado, la relación entre concentración de la tierra y pobreza extrema, como en muchas de las zonas bananeras que tú estás estudiando en la Maná. Al respecto, hay un estudio interesante de Rosemary Thorp donde se analiza precisamente la correlación entre bienestar (acceso a la educación, menores niveles de desigualdad y mejoramientos sociales) y pequeña y mediana propiedad en el sector agrario: es una relación que se ve en los Tigres Asiáticos y también en Costa Rica.

L.M.: Los últimos acontecimientos de abril en Ecuador han demostrado una fragilidad muy grande de las instituciones democráticas, casi como una anomia política. ¿Como relacionarías esto con lo que pasa en la sociedad rural?

L.N.: Esa es una larga historia. En los años 80 todos los partidos políticos habían implementado la misma política económica, con pequeñas variaciones. Pero si todos los parti-

dos siguen las mismas políticas, o por las circunstancias internacionales, la globalización y todo lo que significa, no pueden seguir otras políticas, ¿cómo puede el ciudadano elegir? ¿Cuáles son las verdaderas diferencias entre los partidos? ¿Hasta qué punto la elección de uno u otro partido tiene impacto en tu vida? Yo creo que la desintegración de los partidos, viene del hecho de que cuando llegan al poder no hay realmente diferencias entre ellos. Nosotros, los intelectuales y analistas podemos identificar matices, pero desde la perspectiva de la mayoría de la población creo que no hay diferencias.

El otro tema, que se deriva de las políticas de ajuste, son las condiciones de flexibilización laboral, tanto en el campo como en la ciudad, debido a los cambios legislativos que han ocurrido en relación a las organizaciones sindicales. Uno de los elementos importantes de la organización de la democracia tiene que ver con los sindicatos. Los partidos políticos son importantes, pero los sindicatos son también centrales para estructurar la demanda. Y los sindicatos han perdido un espacio, no tienen impacto, y en regiones como la Costa, los derechos sindicales no son respetados para nada, especialmente en las zonas rurales.

Entonces, si tienes a la gente que vive en un estado de anomia, están imposibilitados de organizarse, de educarse a sí mismos, son presas de ofrecimientos populistas, de las personas que les brindan por lo menos algo inmediato. Sin duda existe una relación, tanto

en el campo como en la ciudad, entre las políticas de ajuste, la desorganización del mundo político y la continuidad del populismo.

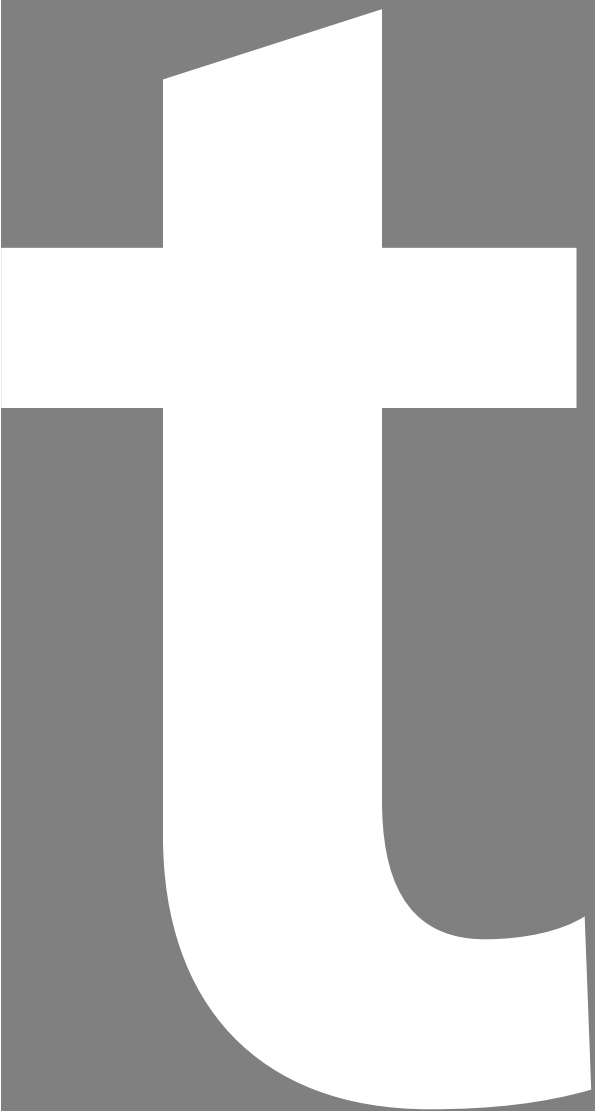
***L.M.:* ¿Qué opinas de los modelos de desarrollo micro locales que plantean el desarrollo desde abajo, aprovechando las potencialidades locales? ¿Tú crees que pueda ser una alternativa para construir la democracia?**

L.N.: Puede formar parte de la construcción de la democracia, pero creo que por sí solo no es suficiente. Los programas micro que las ONG promueven a nivel local son muy frágiles. Si no existen políticas económicas y sociales coherentes a nivel nacional, no funcionan. Yo creo que son pocos los programas micro que pueden rendir los frutos que teóricamente tendrían que dar. Tienen que haber iniciativas complementarias a nivel local y a nivel nacional y tener la capacidad de negociar, conjuntamente con otros países y organizaciones, los términos de la integración en la globalización de manera que no sea destructiva a la economía y la sociedad nacional.

***L.M.:* El papel del Estado vuelve a ser importante en América Latina...**

L.N.: El papel del estado siempre ha sido importante en América Latina. La cuestión es para qué se lo vaya a utilizar. El Estado tiene que tomar un rol más coherente en la planificación del desarrollo social y económico.

TEMAS





¿La ciudad puede llegar a ser educadora?

Patricia Pérez

Mtr. Universidad de Sao Paulo, Brasil

Mail: patiperi@yahoo.com

Fecha de recepción: septiembre 2004

Fecha de aceptación y versión final: abril 2005

Resumen

Este artículo analiza los vínculos existentes entre ciudad y educación. Busca ver y comprender los espacios y los procesos educativos a partir de la noción de “ciudad-educadora”. A partir de allí, rastrea los procesos educativos que hacen parte de la vivencia cotidiana de algunas comunidades inmersas en el espacio urbano de la ciudad de Porto Alegre, Brasil.

Palabras clave: educación, ciudad-educadora, comunidad, gobierno local

Abstract

This article analyses the bonds between city and education. It sees and understands the educative spaces and processes with the notion of “educator-city” (“ciudad-educadora”). From that standpoint, it tracks the educative processes that are part of the daily experience of some immersed communities in the urban space of Porto Alegre, Brazil.

Keywords: Education, Educator-City, Community, Local Government

“El concepto de ciudad educadora comprende la integración de su sistema educativo formal en un conjunto de relaciones políticas y sociales nuevas. La ciudad como un todo pasa a promover la ciudadanía, la inclusión en la sociedad formal y la inclusión en el conocimiento. Espacios urbanos, promociones culturales, acciones políticas abiertas de la ciudadanía en la nueva escena pública, identidad y conflictos vividos democráticamente: un nuevo modo de vida, una nueva ciudadanía, la política descentralizada y activa como elemento desestabilizador de la alienación y del conformismo”

(Paupeiro 2004:128).

Una tendencia generalizada en la sociedad es pensar que la educación se limita al espacio escolar (instituciones de enseñanza formal). Algunas teorías pedagógicas tradicionales aseguran que los procesos educativos sólo pueden ser desarrollados por estas instituciones, siendo ellas las responsables de formar y preparar a los individuos para que formen parte de la sociedad. En realidad, la educación escolar institucionalizada por el Estado ha contribuido a privilegiar un tipo de *razón* supuestamente superior y lo ha hecho separando las tareas educativas de la vida cotidiana. Como dice Moll (2000:57) “la educación escolar pasa a ser pensada como mecanismo central de constitución del orden establecido y simultáneamente se torna uno de sus mecanismos de control” (Moll 2000:57).

En la actualidad, las experiencias de educación no-formal, informal y permanente, en otros ámbitos sociales fuera de la escuela, muestran la importancia de las formas de educación no escolarizadas. Según Trilla, “la ciudad educadora real, acoge y mezcla las denominadas educación formal, no-formal e informal y es el resultado de la dialéctica entre lo pedagógicamente ordenado y el inevitable

juego de encuentros y vivencias educativas que se producen por el hiper-complejo medio urbano” (1997:22). Una serie de tendencias recientes proponen una des-escolarización de los procesos educativos, una apertura a otras experiencias. Como anota Moll, “lo educativo de la escuela no empieza en ella ni acaba en ella. Lo educativo comienza en la complejidad de las acciones humanas, en el mundo de la vida y en la producción de sus vidas totales y, por eso van más allá de la escuela” (2000:10).

En este artículo, en particular, asumo la educación en su sentido amplio, pleno y complejo, destacando la noción de “educación en la vida y para la vida”¹ y contribuyendo así a construir un ser sensible con el ambiente, con las otras personas y con el mismo. Siguiendo el pensamiento de Paulo Freire se puede traducir ese presupuesto en el rescate de los saberes que los sujetos tienen acerca de lo que viven, de lo que luchan, de lo que sufren. Este tipo de conocimiento está atravesado por las mediaciones de la vida cotidiana y se presenta como un campo abierto a nuevas experiencias y significados.

Relación ciudad-educación

El punto de partida en este juego de relaciones entre ciudad y educación puede rastrear-se en la ciudad griega, la *polis*, y la ciudad romana, la *civitas*.² Sólo que el mismo se ha ido transformando y diferenciando históricamente, tomado mayor fuerza y radicalizándose en nuestro tiempo. De acuerdo a Ro-

1 Como lo anota Jacqueline Moll, citando a Jürgen Habermas: *El mundo de la vida* es el largo horizonte de significados que construyen y en el cual se mueven los hombres en su quehacer cotidiano.

2 Esto no quiere decir que antes no existiera esta relación, sólo que a partir de la época clásica griega con los escritos de Platón y Sócrates, la sociedad comenzó a sistematizar sus reflexiones sobre la relación educación y ciudad.

dríguez (2000) esto parece obedecer a la paulatina caracterización de la ciudad como problema; a lo que estaríamos asistiendo es a una transformación en la mirada sobre la ciudad, “de lugar en donde se encuentra la solución para problemas de la vida, hasta convertirse en un lugar-problema por excelencia” (Rodríguez 2000:127). Este hecho se evidencia en los comentarios realizados por habitantes de la comunidad de Morro Alto, ubicada en la periferia de Porto Alegre, Brasil: la lucha diaria por el agua potable, por la luz, por la construcción de su avenida principal, por la permanencia de la escuela, entre otras. Luchas que reflejan un conflicto entre el Estado, el espacio ocupado por ellos y su vida real.

Pensar en la relación ciudad-educación nos lleva a perspectivas diferentes a las de la urbanística o de la pedagogía. Desde J. Dewey y la Escuela Nueva, surge la necesidad de plantear una educación para la vida tanto social como democrática; sin embargo los métodos de la Escuela Nueva orientados a iniciar a los estudiantes en el conocimiento “vivencial” de la sociedad se limitaban a simular la realidad social en las aulas. Estas experiencias han sido criticadas por muchos, ya que intentaban representar la complejidad de la sociedad en un espacio limitado como el escolar. La perspectiva pedagógica cuestiona el sentido de los procesos educativos y concluye que es necesario educar para la vida, lo cual no puede desvincularse de las condiciones materiales de existencia. Dentro del campo educativo se han desarrollado aportes significativos como el de Freinet como pionero de la des-escolarización de los saberes, preocupado por llevar la escuela a su entorno, al barrio, a la ciudad, provocando así una conexión y un encuentro entre conocimiento y realidad social. Se trata, en todo caso, de un proceso complejo que va más allá de los límites de la escuela.

La perspectiva urbanística, por su parte, sostiene que el tejido urbano define las for-

mas de vida y moldea las identidades, lo que implica que los habitantes se apropien de la historia urbana y participen de ella con el fin hacer de la urbe un lugar vivible. Ahora bien, para alcanzar ese sentido de pertenencia y de conciencia es preciso que los procesos educativos complejos, permanentes y variados, lleguen a proponer la educación como centro de la vida ciudadana (Rodríguez 2000).

Antoni Colom plantea la necesidad de desarrollar la noción de educación urbana concebida como “las actividades educativas desarrolladas en el contexto de la administración local” y levanta dos interrogantes con respecto a qué aspectos o cuestiones propone la educación a la ciudad, el papel socializador de la educación, y qué aspectos o cuestiones propone la ciudad a la educación, el papel educador de la sociedad (Colom, citado por Rodríguez 2000:129). Es a partir de estos interrogantes que formula dos puntos de formación sobre educación urbana: educación en la ciudad y educación para la ciudad. Colom responde a su primer interrogante de la siguiente manera: la educación como una síntesis entre conocimiento y formación, y reconoce dos dimensiones: la didáctica y la formativa, que hacen parte de esa gran perspectiva pedagógica.

Lo didáctico centra su atención en “aprender de la ciudad” y “aprender la ciudad”, es decir, aprender la urbe como fuente de información, como medio instrumental, pero más allá de esto, como espacio para aprendizajes; no sólo medio, si no también objeto fundamental de aprendizaje. Lo formativo se asocia con la educación cívica, la moral, la convivencia, la solidaridad y la participación.

Colom responde a su segundo interrogante proponiendo tres elementos de análisis que son, a su vez, “líneas de acción administrativa municipal: intervención funcional sobre el sistema educativo, intervención para compensar las deficiencias del sistema educativo escolar e intervención para la compensación educativa no institucionalizada” (Rodríguez 2000:130).

Otro autor citado por Rodríguez, es Josep Puig (1997). Este autor presenta un análisis de las relaciones entre la moral y la ciudad. Con una mirada pedagógica pregunta sobre las transformaciones que la urbanización ejerce sobre la vida de las personas, las formas que la educación ha adoptado frente a la consolidación de la vida urbana y sobre la relación entre ciudad y escuela. Para Puig “la urbanización impone a la educación problemas de orden técnico con el surgimiento de nuevos saberes, y de orden social, porque las nuevas comunidades urbanas precisan de otras formas de organización y de otras instituciones que regulen la interacción entre sus miembros. La ciudad exige a la institución escolar que forme ciudadanos competentes para vivir bajo las condiciones que impone la vida urbana, preocupados por lo local y lo universal”. (citado en Rodríguez 2000:131). Una de las preocupaciones de Puig es la relación escuela-ciudad y señala que para que exista una adaptación de los educandos al medio ciudadano, es preciso que la escuela se abra a la ciudad y deberá hacer énfasis en el mundo de la vida.

Jordi Borja (1999) destaca la dimensión pedagógica de lo urbano. Propone cambiar la pedagogía que se apoya en la ciudad por la ciudad entendida como pedagogía, lo que implica la participación de los ciudadanos en la organización y gestión de su territorio con el fin de responder a los nuevos y variados desafíos que ofrece el espacio público (citado en Rodríguez 2000:131).

Estas miradas diferentes que cruzan la ciudad y van al encuentro de la educación, nos permiten observar que en la actualidad hay una mayor apertura para comprender que los ámbitos y procesos educativos están en permanente transformación y que requieren de otros saberes y espacios para complementarse y hacerse más ricos y productivos. Como resultado de este nuevo momento y de esa apertura nace una propuesta concreta de educa-

ción que busca conectarla con la ciudad y recibe el nombre de “ciudad educadora”.

La ciudad-educadora

La ciudad educadora es una propuesta de origen institucional vinculada con algunos organismos internacionales que surge en la década del 90 en Barcelona, España, bajo el mandato del alcalde Pasqual Maragall. La propuesta va tomando forma a medida que se van desarrollando una serie de encuentros entre diferentes ciudades. Para el año de 1990 Barcelona organiza el Primer Congreso Internacional de Ciudades-Educadoras, en el que se presentaron los resultados y las reflexiones de los encuentros previos donde se había hablado de educación en un sentido amplio y no sólo relacionada con la vertiente escolar.

Partiendo de este punto surgieron algunas preguntas y reflexiones como la de Figueras quien observa que la familia y la escuela dejaron de desempeñar su papel exclusivo en la educación para pasar a compartirlo con muchas otras instituciones y colectivos tanto públicos como privados que “manifestaban cada vez de un modo más claro su incidencia sobre los ciudadanos y frecuentemente con efectos educadores” (Figueras 1990:9).

La propuesta temática del congreso es el resultado de preguntas clave identificadas a lo largo de los encuentros previos: ¿es necesario el mutuo conocimiento entre la oferta de la educación formal, la no-formal y la informal? Si, es así, ¿quién establece la relación? ¿Cómo ofrecer una buena información para todos los ciudadanos sobre la oferta educativa de la ciudad? ¿Quién se ocupa de esto? ¿Cómo ha de ser la administración local que se encuentra más cerca del ciudadano? Estos interrogantes circularon en torno a cuatro temáticas establecidas para el congreso: escuela, trabajo y sociedad; ocio, juego y participación; conocimiento de la ciudad y viejos y nuevos lengua-

jes. Las ciudades participantes presentaron sus experiencias relacionadas con los temas escogidos. Como resultado del congreso se emitió un documento (“Declaración de Barcelona”) que unificó la mirada de los participantes con respecto a las definiciones o descripciones de lo que es una ciudad-educadora, sus principios y compromisos.

La responsabilidad de desarrollar la propuesta educativa de la ciudad-educadora recae en la administración local de la ciudad; la alcaldía es quien, de acuerdo con las necesidades y realidades de su ciudad, propone su propuesta educativa y en la cual se reflejará la idea de educación que pretende transmitir.

Este interés por incentivar la relación entre pedagogía y ciudad ha llevado a crear estrategias de acción y a identificar los componentes y significados de la ciudad-educadora. Uno de los principales teóricos sobre el tema ha sido el pedagogo español Jaume Trilla. Desde su punto de vista el concepto de ciudad-educadora se enmarca en la inter-relación de procesos educativos y de saberes. La ciudad-educadora es un tejido de instituciones y de lugares educativos que están constituidos por instituciones formales de educación (escuelas, colegios, universidades, entre otras), así como también por intervenciones educativas no-formales que -en palabras del autor- están organizadas por objetivos explícitos de formación o enseñanza, pero se encuentran fuera del sistema de enseñanza formal, como por ejemplo educación para el tiempo libre, escuelas de arte, de idiomas e institutos. Finalmente, encontramos las vivencias educativas informales: son todas aquellas experiencias y contactos que el individuo tiene con los espacios, lugares y personas que viven en la ciudad (Trilla 1990).

Aprender la ciudad, en la ciudad y de la ciudad es la propuesta base de la ciudad-educadora. Para que este acontecimiento educativo se desenvuelva es preciso que existan algunos elementos previos como la planificación y

toma de decisiones de los gobiernos locales, los cuales deben garantizar los recursos y promover las estrategias que permiten hacer de una ciudad una ciudad-educadora; por otro lado, es necesaria la participación de los agentes sociales, partir de la realidad y de las necesidades de los habitantes y construir una red de comunicación y participación de los diferentes agentes que forman el tejido comunitario e institucional de la ciudad.

Trilla nos presenta tres posibles caminos que la administración local puede transitar para consolidarse como ciudad-educadora: aprender la ciudad, aprender en la ciudad y aprender de la ciudad.

Aprender la ciudad es transformarla en objeto de aprendizaje, pues ella nos ofrece un conjunto de escenarios educativos como escuelas, universidades, organizaciones barriales y comunitarias, ONGs, museos, bibliotecas, entre otros. En ellos encontramos experiencias educativas y formativas de diferentes tipos. Generalmente, la aprehensión que hacemos de esos espacios es momentánea, superficial, parcial, desordenada y estática. Estas características constituyen un nivel descriptivo pobre que no corresponde a las exigencias de una ciudad-educadora. Se hace necesario entonces la elaboración de materiales para el conocimiento de la ciudad, construcción y habilitación de centros de información, realización de exposiciones usando la infra-estructura cultural de la ciudad, tanto institucional como la creada por los propios habitantes. Proponer y ejecutar experiencias que incrementen el contacto directo con la ciudad, para después discutir y reflexionar sobre la experiencia, promocionar espacios de participación así como acciones vinculadas con el sentido de pertenencia e identidad. Esto supone además la apertura a expresiones espontáneas y no institucionalizadas de grupos o comunidades (Trilla 1997).

Aprender en la ciudad es asumirla como el contexto en el cual se desarrollan los procesos

educativos, es decir, que nos coloca en los escenarios y nos envuelve en las acciones como sujetos. La ciudad se convierte en un continente de recursos educativos. Pero vista desde un aspecto descriptivo, podemos decir que la ciudad tiene una infraestructura pedagógica estable, formada por instituciones específicamente educativas (formales y no-formales); también posee una red de equipos y recursos, de medios e instituciones que no ejercen una tarea expresamente educativa y encontramos además un conjunto de acontecimientos educativos efímeros, vivencias educativas no planeadas pedagógicamente.

Estas realidades proponen un grupo de acciones que permitan vivenciar una experiencia diferente, aprovechando equipos y recursos con los que cuenta la ciudad sean públicos o privados, promoción de la formación continua, talleres para ciudadanos en diversas áreas e intereses y acciones que privilegien a grupos marginados.

Aprender de la ciudad es comprenderla como agente educativo, como fuente permanente de información, como medio didáctico facilitador de aprendizajes. Desde una mirada descriptiva observamos que ella enseña directamente elementos de cultura, porque es centro de diversidad, de producción artística y estética, y dentro de esos elementos culturales se destacan las formas de vida, las normas y las actitudes sociales, valores y contravalores, tradiciones y costumbres. Algunas acciones que pueden contribuir para dar una mayor proyección a esta dimensión de la ciudad son programas de formación en ciudadanía en instituciones de educación formal y no-formal, entre otras.

Ahora bien, para aprender de la ciudad, en la ciudad y la ciudad es necesario que además de lo anterior, existan un mínimo de garantías, entre ellas la consolidación de una sociedad civil fuerte, constituida por sujetos participativos y activos, también implica un cambio de visión y estrategia por parte de las administraciones locales. La propia *Declaración*

de Barcelona se orienta en ese sentido: “la ciudad será educadora cuando reconozca, ejercite, desarrolle, además de sus funciones tradicionales (económica, social, política y de prestación de servicios) una función educadora, y cuando asuma la intencionalidad y responsabilidad cuyo objetivo sea la formación y desarrollo de todos sus habitantes”.

Límites de la propuesta institucional

Como podemos observar, la propuesta institucional apunta a consolidar una ciudad organizada y pensada bajo la lógica y criterios de la administración local, dejando en muchos casos de lado la participación de sus ciudadanos. Esto conduce a que muchas veces se proceda a diseñar acciones de intervención que no son siempre el reflejo de las necesidades de los pobladores, además incentiva en muchos casos la dependencia de los “beneficiarios” de proyectos y programas de la alcaldía. Este hecho en particular se refleja claramente en el tipo de políticas públicas que son desarrolladas por la alcaldía de Porto Alegre en relación a la asistencia social. No se discute un elemento central que hace la diferencia: la idea de emancipación o de dependencia. Esto plantea una perspectiva educativa y política distinta: otra forma de recibir la atención social, sea del poder público o de instituciones asistenciales privadas. En este sentido vale la pena enfatizar en la necesidad de transformar a las personas de objetos pasivos y dependientes en sujetos activos, transformadores. Para esto es necesario una gestión democrática que permita una cogestión, es decir una distribución del poder, pues la cogestión y la autogestión no son compatibles con la estructura dominante, formal y burocrática (Prestes 1982).

La ciudad-educadora abrió las puertas a nuevas formas y a nuevas experiencias de edu-

cación y nos mostró la necesidad de construir espacios de manera colectiva y democrática, también colocó en la mesa de discusión su propia razón de ser y su papel en la construcción de una nueva mirada sobre la educación y la ciudad. Las formas como los ciudadanos viven sus propios procesos educativos en una ciudad toman matices diferentes, son contruidos a lo largo de su existencia y muchos de ellos son el producto de una vida comunitaria rica en experiencias y sufrimientos.

¿La ciudad-educadora para cuales ciudadanos?

Uno de los aspectos que más me preocupan con relación a Porto Alegre tiene que ver con la participación, la formación y consolidación de redes, el espacio público y la lucha cotidiana de las comunidades urbanas, asumiendo todo esto, además, como verdaderos procesos educativos. Tomo como referencia mi propio trabajo (Pérez 2002) y el estudio realizado por Jacqueline Moll (2000) en la periferia de Porto Alegre en la comunidad de Morro Alto. Al inicio de mi investigación en este campo³, pude pensar que en la ciudad-educadora todos los ciudadanos tenían su espacio de participación garantizado en igualdad de condiciones y esto porque uno de sus principios es la participación ciudadana. Con todo, en el transcurso de la misma observé hechos importantes que fueron modificando mi percepción de esa realidad. Uno de los aspectos que fue determinante en este sentido fue descubrir que los espacios de participación, aunque democráticos y mayoritarios, no ofrecen apertura y acogida a todos los pobladores y

especialmente a aquellos que necesitan con urgencia ser oídos y vistos por los otros. Relacionado con esto pude observar que, por lo general, en las propuestas de experiencias y proyectos diseñados por la alcaldía no se cuenta con la opinión o el parecer de todas las personas implicadas. Todo hace pensar que ellas tienen, por el contrario, el carácter de intervención. Fue, entonces, a partir de estas situaciones que me surgió la pregunta: ¿para cuáles ciudadanos es la ciudad-educadora?

Uno de los caminos, que transité para encontrar posibles respuestas fue pensar si la ciudad-educadora necesita ser construida por y con ciudadanos participativos y activos, ¿qué hombres y mujeres tienen o pueden desarrollar esta condición mínima? Otra pregunta fue saber qué ciudadanos hacen parte del espacio público de la ciudad, entendido en los términos que habla Hannah Arendt (ser vistos y oídos por los otros).

Lo que he podido concluir a partir de la investigación de campo es que para ser un ciudadano activo o participativo, es necesario que el Estado ofrezca y garantice espacios de formación y participación ciudadana, cumpliendo así con un papel educativo que va más allá de sus funciones frecuentes; esto es, asumir un compromiso permanente que sea colectivo y amplio de formación, de promoción y de desarrollo de sus ciudadanos, donde la participación de éstos tenga un carácter decisorio en los asuntos políticos, culturales y sociales de la ciudad.

Porto Alegre y más concretamente su administración local ha venido incentivando, por años, la participación de sus ciudadanos en proyectos como el presupuesto participativo, escuela ciudadana, congresos de la ciudad, entre otros; es verdad que sus administraciones han buscado llegar y escuchar a las comunidades, sin embargo este proceso de incentivar ciudadanía activa requiere de un compromiso y de una convicción política y educativa que muchas veces es olvidada por la propia

3 Desarrollada bajo el tema "A cidade-educadora: da muralha ao dialogo" y en la cual elaboré un estudio de caso entre Porto Alegre (Brasil) y Barcelona (España) que levantaba rasgos característicos de cada una de estas ciudades en su proceso de construcción de ciudad-educadora.

administración local generando una ruptura en el proceso de consolidación de diálogos horizontales entre Estado y comunidad.⁴ Algo de esto es lo que registra Moll:

“Nosotros ya habíamos hablado con la gente de la secretaria de educación, todo estaba listo, la gente ayudó a arreglar la escuela, eso fue sábado y domingo y para nuestra sorpresa, el miércoles anunciaron el cambio de secretaria de educación, nos llamaron allá y dijeron que todo era un error, que la secretaria no tenía autorización para autorizar el funcionamiento de la escuela, que olvidáramos todo” (Moll 2000:118).

Por otro lado, para que el proceso sea consecuente es necesario consolidar la organización y la presencia de los agentes o grupos sociales que forman la red social de la ciudad, como por ejemplo, las comunidades de barrio, los sindicatos, los clubes, las escuelas y las organizaciones de ciudadanos, entre otras; tarea que no le compete al Estado sino a las propias comunidades. La existencia y la presencia de estos grupos pueden motivar la participación de los ciudadanos, generando vínculos con otras personas que tienen vivencias, necesidades y proyectos comunes. El papel importante que estos agentes sociales desempeñan es la lucha por el reconocimiento de una ciudadanía activa: “las redes sociales y los procesos educativos van generando una realidad donde, contradictoriamente, la materialización de la democratización del Estado, en una perspectiva participativa, permite el desarrollo de una esfera pública no Estatal, pero esto no significa minimizar el papel del Estado en este proceso, entonces se trata de buscar los contornos y las interfaces que se producen en el trato cotidiano de lo público, en el campo educativo” (Moll 2000:10).

Uno de los principios y de las prácticas de la ciudadanía activa es la participación, por lo tanto, esto niega la pasividad y la indiferencia. El ciudadano activo es aquel que es escuchado, que escucha y que participa de un diálogo creador; es el que reconoce y valora su participación y la del otro; es quien se enfrenta desde su realidad a los retos que le impone el uso de la palabra, como lo refleja el relato de Celeste, quien participó por dos años en el Círculo de Padres y Maestros (CPM) de Morro Alto:

“Yo aprendí bastante, hasta a hablar, porque yo era medio tímida, me quedaba con vergüenza de dar opinión, sabe. Porque yo nunca tuve la oportunidad de ir a una reunión que yo pudiese exponer, hablar: ‘¡me gusta esto, aquello, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello!’ Entonces en el CPM me sentía bien importante, porque yo podía hablar, de repente la presidenta no iba y era yo quien asumía, muchas veces temblando de miedo como una varita verde” (Moll 2000:127).

Los aprendizajes de la vida comunitaria, el aprendizaje del uso de la palabra y la valentía para ello, de alguna manera provocan la apropiación de lo público; permite romper con preconcepciones del que sabe o del que estudia y por tanto es el que habla, mientras el resto escucha. Entonces el ciudadano activo es el que a partir de su realidad participa, crece en la diferencia de opiniones y argumentos, se apropia de una identidad y lucha por un interés común. Pasa a ser percibido y oído por los demás, no es más un ser invisible. Esto supone una visión distinta de las relaciones entre el Estado, los gobiernos locales y la sociedad. “Se trata entonces de compartir una nueva concepción de reforma del Estado, a partir de una nueva relación Estado-sociedad que abra el Estado a esas organizaciones sociales (y la participación del ciudadano aislado), particularmente aquellas que son autoorganizadas por los excluidos de todos los matices, admitiendo la tensión política como mé-

⁴ Comentario de Regina, quien pertenecía a la Asociación de Mujeres de Morro Alto (AMMA)

todo decisorio y disolviendo el autoritarismo del Estado tradicional bajo presión de la sociedad organizada” (Moll 2000:11).

Estas experiencias que están más allá de la concepción institucional de la ciudad-educadora y que son construidas con las vivencias, las necesidades y el deseo de las propias comunidades, representan la voz viva y propia de estos grupos organizados que están un paso delante de las iniciativas del Estado. Como lo ratifica una de las moradoras de Morro Alto:

“Doña Haidée: con la lucha, la primera cosa que nosotros conseguimos fue alargar la calle, porque era muy pequeña, sólo tenía matorral [...] El día 8 de febrero fue la primera reunión para abrir y formar nuestra comunidad. Fueron 4 años de luchas, primero abrieron la calle, después la lucha por el agua, vino una bomba para repartir el agua allá, pero llevo dos años para ganar esa bomba, hicimos el *abajo-firmado*⁵ [porque la alcaldía siempre dice que no tiene dinero], además de esto teníamos reuniones, asambleas [el Señor João interviene: ‘siempre dando cuentas’] para ver lo que faltaba, lo que no faltaba. Nosotros no teníamos bus, la lucha por el bus fue muy grande también. Moría mucha gente en la calle porque no había semáforo, fue una lucha de la comunidad reunida, con el pueblo, se consiguió el semáforo” (Moll 2000:106).

Es así como la ciudadanía activa coloca en jaque al Estado, quiebra sus límites y cuestiona su legitimidad; no asume pasivamente su existencia y genera acciones “que pueden colaborar para reinventar al propio Estado, creando esferas de vida pública hasta entonces inéditas” (Moll 2000:23).

Estas acciones innovadoras, inéditas, que dinamizan y movilizan a la sociedad, la colo-

can en una relación diferente con el Estado y -conforme Jaqueline Moll- son denominadas “inéditos viables” por Paulo Freire, y “son producidos por esos personajes en el ejercicio cotidiano de inserción comunitaria, de quiebra de los límites impuestos tanto por la acción del Estado, como por la acción corporativa motivada por intereses económicos, y además, de construcción de lazos, algunas veces contradictorios y frágiles, de solidaridad” (Moll 2000:23).

Estos inéditos viables están presentes tanto en su espacio concreto, en su vida cotidiana, como en los pedazos de ciudad que ocupan en sus prácticas comunitarias; en las luchas por conquistar su espacio y por cualificar su vida. Es en esta dinámica que se crea una nueva experiencia y estrategia para lidiar con la vida urbana. Y es entonces, en estas circunstancias, que podemos decir que la ciudad-educadora nos está educando en términos positivos, y tanto a los ciudadanos como al Estado.

Estos movimientos organizados por las comunidades y concretamente por la comunidad de Morro Alto ponen de relieve la importancia y el significado de los procesos educativos no escolarizados: las experiencias y los aprendizajes de estas personas van más allá de los conocimientos escolares y -por tanto- no se agotan en la escuela, pasan por ella y van al encuentro de lo cotidiano, del mundo de la vida. Lo que se observa en esta parte concreta del estudio es la falta de sintonía por parte del Estado que, por un lado, maneja un discurso de la democratización, de la participación y de la necesidad de abrirse a una concepción de educación más amplia, pero por otro lado, al momento de interactuar con esa realidad, entra en profundas contradicciones. En todo caso es importante resaltar que el proceso de consolidación de una ciudad auténticamente educadora es una tarea ardua que necesita de varios interlocutores que vean y comprendan estos procesos de organización

5 Documento usado con frecuencia por los ciudadanos para hacer solicitudes en los organismos públicos, presentan la solicitud por escrito y a continuación la firman todas las personas que respaldan dicho documento.

como un aprendizaje y un derecho, y no como una amenaza a los intereses del Estado.

Esta realidad en la que interactúan Estado y comunidad es complementada por los otros, los que también viven y sufren otro pedazo de ciudad, todavía más caótico; los que no participan de la construcción de lo común, de la esfera pública⁶, los que no tienen vínculos comunitarios o familiares, los que conocemos como radicalmente “excluidos” (indigentes, marginales, emigrantes, desempleados, etc.), que no cuentan con su espacio garantizado en la ciudad-educadora. Muchos de ellos no son considerados siquiera como ciudadanos. El espacio que ocupan es limitado. Son, en el mejor de los casos, sólo los beneficiarios pasivos de las políticas y programas de intervención pensados, organizados y proyectados por los otros, o sea, por los que ocupan la esfera pública, generalmente el poder. Me remito a las palabras de una mujer de más o menos 36 años, indigente de la ciudad de Porto Alegre: “Yo vivo de la caridad de las personas, yo ni conozco que es eso de lo que usted habla la ciudad-educadora” (cf. Pérez 2002:93).

Situaciones como estas nos ofrecen un escenario de realidades opuestas y contradictorias dentro de la propuesta de la ciudad-educadora: por un lado, una comunidad organizada con un espacio de participación y diálogo con el Estado que es importante y significativo. Aunque con sus contradicciones, el proceso está en construcción y debe ser evaluado y mejorado. Por otro lado, una realidad de marginalización, pobreza e invisibilidad que corresponde a un contexto local y global, es decir, a las prácticas económicas, sociales y culturales que están asociadas con el momento actual del capitalismo global. Veamos un ejemplo: José es un indigente de la ciudad, no tiene casa, esporádicamente usa albergues públicos y hace parte de uno de los

programas ofrecidos por la alcaldía de Porto Alegre:

“yo entré en este programa porque otros ya habían entrado y prometieron que nos darían documentos y ayuda para trabajar yo estoy aprendiendo a usar el computador pero no sé si de cierto, ellos no preguntaron que quería o que sabía porque yo si sé cosas, se hacer” (Pérez 2002:105)

Es necesario, entonces, discutir conjuntamente con este grupo de personas alternativas y propuestas, para que en el uso de la palabra den a conocer sus experiencias, sus necesidades, para que -como algunos moradores de Morro Alto- sean escuchados y ocupen el espacio común, el espacio público, en condiciones de dignidad, respeto y diferencia; para que puedan ejercer ciudadanía y no sólo recibir beneficios de inclusión precaria y parcial que no garantizan sus condiciones sociales, económicas y culturales.

Al contrastar las propuestas de la ciudad-educadora con la realidad que se vive en las urbes, encontramos contradicciones que denominamos límites de la ciudad-educadora. Estas son el reflejo de una mirada oficialista, institucionalizada y unidireccional, que ha venido construyendo una ciudad-educadora preocupada con el protagonismo estatal y con la propaganda política y ha dejado de lado la importancia y la contribución de los procesos educativos no escolarizados vivenciados por individuos y grupos sociales de la ciudad, que sin duda generan aprendizajes también para el propio Estado.

Los límites de la ciudad-educadora

Observando más allá de la propuesta institucional de la ciudad-educadora, encontramos una ciudad que alberga prácticas y vivencias cotidianas de todos aquellos grupos e individuos que viven en ella, que la construyen, la

6 Según Hannah Arendt es el mundo de lo común, nos reúne en la compañía de los otros.

sufren y la crean con su sentir y vivir. Son personas anónimas, líderes sociales, mujeres, niños, ancianos y jóvenes, cuyos espacios cotidianos, que hacen parte de la ciudad, no logran ser normativizados ni regulados por el Estado. En ellos hay lugar para el juego, para los encuentros y charlas entre vecinos, para la organización comunitaria, para *lo instituyente*.

Al mismo tiempo, encontramos en esa misma ciudad otro espacio, en el cual la forma de vivir y de sentir la ciudad es diferente: es un espacio institucionalizado y ocupado por el Estado y su poder. En él las relaciones son normativizadas y calculadas, existe un distanciamiento entre ciudadano y poder y cada uno ocupa un papel y una función determinada que no permite un diálogo y una comunicación espontánea. En este espacio encontramos la burocracia, las instituciones del Estado y las relaciones que debemos establecer con ellas, *lo instituido*. La ciudad-educadora, como reflejo de una propuesta institucional, tiende a circular por este último espacio pero su proyección puede ser más amplia e intentar llegar también al espacio de lo instituyente. Por lo general, sus propuestas van en dirección a los grupos sociales o a los ciudadanos, pero nacen de los estudios de escritorio y no son producto de un diálogo creador o de una proposición comunitaria; no existe siempre una retroalimentación que permita enseñar y aprender tanto a los ciudadanos como al Estado. Se convierte entonces en un movimiento unidireccional que en parte se origina en el Estado y se dirige a los otros, a los ciudadanos.

Estos dos universos se encuentran y conviven en un mismo espacio. Según Maffesoli lo instituido y lo instituyente son antagónicos o contrarios, van en ruta de colisión y generan una dialéctica en los procesos sociales; no son independientes ni aislados, pero cada uno se orienta por lógicas diferentes: lo instituido responde a las prácticas racionales, burocráti-

cas y excluyentes; lo instituyente responde a lo sensible, a lo relacional, a la convivencia (Maffesoli 1979).

Comunidad y poder son la representación de lo instituyente y de lo instituido y desde tiempos remotos se han relacionado de diferentes formas, en algunos momentos conviviendo en armonía y equilibrio y, en otros, la fuerza del poder ejerce toda su presión sobre la sociedad, generando diferentes formas de respuestas como resistencia, organización, confrontación, etc. Esa voluntad de respuesta frente a la fuerza del Estado es calificada por Maffesoli como “potencia social o humana”⁷, y ella está en contrapartida al poder de lo instituido. Generalmente, esta potencia se encuentra dispersa, deambula por el cuerpo social, por sus miembros y sólo en momentos o en coyunturas se aglutina, toma cuerpo y forma. Así emerge, presentándose de maneras diversas: una de ellas es la comunidad. Su función principal es consolidar lazos de ayuda, de identidad, de resistencia a situaciones de injusticia, de abandono y de violencia, generar lazos de solidaridad y hacer frente al poder de lo instituido.

Entonces, no es por casualidad que la comunidad de Morro Alto haya desarrollado su fuerza organizativa para hacer frente al abandono del Estado, a la injusticia y a las necesidades que surgen de la convivencia con un medio que les es hostil.

Lo comunitario tiene mucha importancia hoy como en el pasado; las sociedades que logran estructurar su vida organizativa con fuertes lazos comunitarios consolidan principios de pertenencia y de identidad. La comunidad, expresión de la potencia humana, tie-

7 “Lo que se puede llamar potencia social es un conjunto de elementos (fuerza, colectivo, diferencia...) que funcionan bien al articularse, y sólo cuando se desvía de su funcionamiento habitual es que tienden a distinguirse y su articulación (potencia) puede tornarse objeto de comentario e investigación” (Maffesoli 1979:43).

ne la función de regular las fuerzas del poder. Es sólo así, regulándolas, que se potencia y consigue convivir en equilibrio, un equilibrio momentáneo, no perpetuo, pero posible. Es por medio de los lazos comunitarios o de su fuerza que las sociedades generan resistencia organizada (violenta o no) frente a actos de coerción y autoritarismo producidos por el poder (Maffesoli 1979).

Para Maffesoli, el dominio del poder surge cuando hay debilitamiento de la fuerza colectiva y, en ese sentido, esta siempre presente en el cuerpo social (1979:22). Las relaciones entre poder y potencia no permanecen siempre en equilibrio; existen momentos de discontinuidad en los cuales la potencia aglutina su fuerza y la canaliza para lograr un objetivo común. Esta fuerza consigue transformar realidades sociales e injusticias, establece una comunicación y diálogo con el poder hegemónico, constituyéndose así en parte fundamental de las decisiones.

Esta fuerza que moviliza a la comunidad de Morro Alto para lograr un objetivo concreto (permanencia de la escuela pública en el barrio, la pavimentación de la calle principal, el acueducto, la luz y muchos otros) ha generado en sus habitantes un sentimiento de identidad y de apropiación con su espacio y con su realidad: muchos de sus habitantes han aprendido a valorar sus experiencias, sus conocimientos y el uso de la palabra. Han comprendido a partir de sus propias vivencias que los procesos educativos no sólo se restringen al espacio escolar.

La experiencia de vivir la vida de comunidad, de preocuparse por problemas colectivos, forja sujetos diferenciados en la historia de la ciudad y produce un espacio educativo distinto del escolar, sin dejar por eso de ser atravesado por él.

Una de las mujeres (Alcira) que participó de las luchas de la comunidad de Morro Alto explica:

“Es diferente de la escuela, aprendemos más. Uno aprende en la escuela, pero si uno se envuelve en la lucha por alguna cosa para la comunidad, en cualquier sentido que va a ayudar a la mayoría, allí es que es la escuela de verdad, tú traes aquello para dentro de la escuela, aquello que uno aprende allá afuera lo trae. Para mi fue un aprendizaje yo viví una escuela que yo no había vivido antes, yo aprendí en esa escuela una serie de cosas, como lidiar con la política, lo que esta bien y lo que no, como luchar por las cosas” (Moll 2000:126).

Hay algo específico que diferencia estos aprendizajes de los escolares. No teniendo una marca institucional, contribuyen para la construcción de un pensamiento menos lineal en el cual las voces del mundo de la vida se convierten en preponderantes. Son aprendizajes tematizados por el mundo de la vida.

Es por esto, precisamente, por su legitimidad y su fuerza, que la potencia se convierte en una alternativa, “porque ella hace presión a la morbidez, esa parte de sombra de la realidad social, ella se afirma como vida, lucha por la vida y es en ese combate en el que rompe las estructuras sociales que tienen tendencia a siempre osificarse” (Maffesoli 1979:59).

Estos elementos esclarecedores ponen en evidencia que en la construcción de la ciudad-educadora, la comunidad tiene un papel fundamental e importante, aún cuando parece ser ignorada. Ella junto con los otros agentes sociales, dinamizan y da vida a los procesos sociales, genera procesos educativos y formativos que enseñan la convivencia, la solidaridad, el respeto a la diferencia y la justicia, establece un autentico diálogo intercultural, asunto prioritario en la carta de ciudades-educadoras. Todos estos aprendizajes y enseñanzas son interiorizados y transmitidos por la experiencia y la vivencia; ellos hacen parte integral de las personas y por tanto están siempre presentes a lo largo de su vida.

En la investigación de Moll hay un relato esclarecedor sobre estos procesos, en la apropiación de un terreno:

“El lugar de mediador, de organizador de las demandas propias de una población en proceso de ‘instalación’ en un pedazo de urbe, cabe a la propia comunidad. Relatando la historia de la comunidad, la expresidenta de la Asociación de Mujeres de Morro Alto (AMMA) recuerda que las personas iban llegando y preguntando quién era el dueño del terreno, a lo que ella respondía: ‘¡Nadie, puede entrar!’ Y ese proceso a pesar de no mostrar una intencionalidad específica se revela educativo porque produce aprendizajes sociales de convivencia, de toma de conciencia de los problemas ‘urbanos’, de control de soluciones inmediatas y de construcción de argumentos para explicarlos” (Moll 2000:101)

Al ignorar, en la vivencia de las personas y de las comunidades, ese universo de lo vivido y de su significado educativo, el Estado produce su propio límite en la construcción de una ciudad-educadora; utiliza el discurso de lo comunitario como elemento que legitima su existencia pero a la vez desvirtúa en la práctica su existencia y al final lo ignora. Usa el espacio de lo instituyente como recurso político y lo condena al mismo tiempo con sus prácticas, lo ve como el mundo de lo irracional, de la ignorancia, por tanto, sin argumento y lógica.

Las experiencias de vida de las comunidades siempre van más allá de la lógica del Estado; ellas insisten en consolidar su propio mundo. Esta lucha, que es llevada a cabo en el espacio y en las prácticas diarias, confiere sentido y fuerza a su unidad e identidad como grupo; su participación (en aspectos de la vida social, cultural, política y económica de la ciudad) genera encuentros en los que pone en interacción su fuerza, su imaginación y liderazgo.

En última instancia, podríamos decir que la idea de ciudad-educadora nace y se origina en el espacio de lo instituido, del poder. Tiene como objetivo controlar y organizar esa potencia humana que subyace en las comunidades y que permanentemente, de acuerdo a su grado de organización, puede crear inéditos viables que llegan a convertirse en una amenaza para el *status quo*. No es casualidad

que muchas de las experiencias y proyectos de intervención tengan como fin último “civilizar a los pobres” ofreciéndoles espacios de cultura, acercándolos a espacios de participación y brindándoles algunas garantías, así como también, incorporando a ciertos grupos sociales a la dinámica de la ciudad y de la economía global.

En un sentido contrario, cuando miramos para nuestras ciudades y encontramos comunidades que se organizan, que luchan y que viven su historia, vemos que la ciudad sí puede educar, que ella puede enseñarnos otros saberes más allá de los ya tradicionales e institucionalizados, que enriquecen nuestras formas de vida, que los agentes sociales están muchas veces en condiciones de enseñarnos sobre la solidaridad, sobre la participación y sobre la propia vida.

La ciudad puede educar, siempre y cuando se construya y consolide un diálogo multicultural, donde la palabra pedagogía sea una actitud, y no un recurso discursivo y político; la ciudad nos puede educar al permitirnos ver una vida rica en historias y experiencias de vida, por eso la participación, la vida activa y la organización son procesos que toman sentido en una ciudad que se asume como un espacio rico en vivencias y conocimientos, es decir, un espacio que educa.

El espacio de la ciudad es re-contextualizado desde una perspectiva comunitaria pues es la propia comunidad que usa ese espacio, disfrutándolo y sufriendolo con sus necesidades, carencias, vivencias y prácticas; son -por tanto- espacios creados y legitimados por la propia comunidad que dan sentido a su cultura e identidad.

Bibliografía

- Arendt, Hannah, 2001, *A condição humana*, Forense, Rio de Janeiro.
Figueras, Pilar, 1990, “Prólogo”, en Merce Mach, editor, *Primer Congreso Internacio-*

- nal de Ciudades Educadoras, documentos finales*, Ayuntamiento de Barcelona-España, Barcelona.
- Maffesoli, Michel, 1979, *A violência totalitária*, Zahar Editores, Rio de Janeiro.
- Moll, Jaqueline, 2000, *Histórias de vida, histórias de escola: elementos para uma pedagogia da cidade*, Vozes, Petrópolis.
- Paupeiro, Maria, 2004, “Os cenários políticos e pedagógicos de inovações político-pedagógicas na rede municipal de ensino de Porto Alegre”, en Jaqueline Moll, organizadora, *Ciclos na Escola, tempos na vida*, Arned-Editora S/A Brasil, Porto Alegre.
- Pérez, Patricia, 2002, *A cidade-educadora: da muralha ao dialogo*, Disertación de Maestría, FE/USP-Brasil, São Paulo.
- Prestes, Fernando, 1982, *Participação e co-gestão. Novas formas de administração*, editora brasiliense-Brasil. São Paulo.
- Rodríguez, José, 2000, “Formación ciudadana y urbana”, en Carlos Miñana Blasco, editor, *Interdisciplinarietà y Currículo, construcción de proyectos escuela – universidad*, Universidad Nacional-Colombia, Bogotá.
- Trilla, Jaume, 1990, “Introducción”, en Sussi Morell, editora, *La Ciudad Educadora*, Ayuntamiento de Barcelona-España, Barcelona.
- , 1997, “Ciudades educadoras: bases conceptuales”, en Maria Amelia Sabbag, organizadora, *Cidades Educadoras*, UFPR-Brasil, Curitiba.

RESEÑAS







Magdalena León, editora, 2005,
Nadando contra la corriente.
Mujeres y cuotas en los
países andinos,
 UNIFEM, Bogotá.

Un desafío común de los estudios monográficos de género es definir y delimitar su campo de estudio sin por ello aislarse de las disciplinas académicas en las que encuentran inspiración. Este es un reto que *Nadando contra la corriente* enfrenta con éxito, pues analiza el tema de la igualdad de género desde distintos enfoques de la ciencia política incluyendo los estudios sobre democratización, instituciones electorales, rendición de cuentas y participación política.

El libro editado por Magdalena León refleja una década de debates dentro del movimiento de mujeres en torno a la exclusión formal e informal de las mismas por parte de los regímenes políticos en América Latina. La conferencia de Beijing a mediados de los noventa dejó planteada, entre otras cosas, la necesidad de eliminar las condiciones de discriminación política y fomentar la organización y participación de las mujeres en la esfera pública. Dentro de los mecanismos sugeridos

para compensar este déficit de participación figura la adopción de cuotas electorales, a fin de mejorar el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones, en la arena ejecutiva, legislativa y en gobiernos subnacionales.

El proceso de introducción, adopción y aplicación de dicho mecanismo de acción afirmativa, así como los resultados esperados e inesperados de su funcionamiento, es explicado en gran detalle por las autoras expertas en los casos de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. El libro tiene en sus extremos, sustantivos ensayos que añaden la perspectiva comparada al tema. El ensayo introductorio, escrito por Mala Htun, plantea el debate desde la perspectiva de la lucha de las mujeres pero también de grupos minoritarios por el acceso a canales de participación democrática en la región. La conclusión, escrita por María Emma Wills, compara los mecanismos para la adopción de cuotas electorales en las cuatro democracias andinas y deriva condiciones generales que pueden favorecer o retardar el proceso de adopción de cuotas electorales.

El conjunto de ensayos editados por León formulan tres contribuciones principales al debate contemporáneo sobre género y participación política. Dichas contribuciones muestran los progresos obtenidos por el movimiento en cuanto a la inclusión democrática, la adopción misma de las cuotas y la implementación de políticas públicas de género. Pero el libro también muestra las limitaciones conceptuales del debate existente y sienta las bases para desarrollar una fructífera agenda de investigación futura.

Una primera contribución es plantear el tema de la adopción de cuotas electorales como el instrumento más visible de participación política e inclusión dentro del sistema político formal. Desde una perspectiva de género, dicha conquista ofrece a las mujeres un espacio y una oportunidad para redefinir instituciones políticas tradicionales y permitirles una mayor participación en la toma de deci-

siones públicas. Desde la perspectiva de la participación democrática, sin embargo, vale la pena subrayar que la inclusión de las mujeres en política ocurre de manera simultánea a la inclusión de otros grupos tradicionalmente marginados por las instituciones políticas (como los indígenas). Htun sugiere preguntas muy oportunas que hace falta desarrollar sistemáticamente en el futuro: ¿la mayor participación de grupos marginados en la década de los 90 es una simple coincidencia o son producto de una relación causal? ¿Bajo qué condiciones distintos grupos marginados pueden afectar más efectivamente la formación de la agenda pública y obtener mejor acceso a la toma de decisiones? Estudiosos del tema indígena como Yashar y Van Cott han ofrecido sustantivas explicaciones a esta última pregunta en la región andina, dejando abierta una promisoriosa agenda de investigación para los estudiantes de género y ciencia política.¹

Una segunda contribución sustantiva consiste en analizar de manera sistemática los procesos de discusión, adopción y aplicación de las cuotas electorales los países andinos. Los ensayos señalan, de manera explícita o implícita, dos rutas para la adopción de cuotas: una que se propone y se impulsa desde la élite política, en algunos casos como un paliativo de reformas democráticas más profundas (Perú y Colombia), y otra ruta que sería en dirección opuesta, como una demanda generada desde distintos sectores de la sociedad y que la clase política acepta demoradamente, no sin poner obstáculos institucionales a su aplicación (Ecuador y Bolivia). Sin embargo, el modelo propuesto no logra capturar la variación en los casos si no se toma en cuenta el distinto papel que jugaron los partidos políti-

cos así como el papel de organismos internacionales como agentes que jugaron un papel fundamental para facilitar (o bloquear) dichos procesos de reforma. El caso de Ecuador ofrece un ejemplo útil para ilustrar este punto. Si bien la reforma no fue una iniciativa de la clase política en el poder sino una demanda social alimentada por distintas organizaciones de mujeres de la sociedad civil, los partidos políticos rápidamente “adoptaron” la agenda de reformas en un intento por legitimarse en medio de una amplia crisis de las instituciones políticas en general y de los partidos en especial.

Una tercera contribución del libro es plantear la brecha que persiste entre la representación política de mujeres y la adopción de políticas públicas de género. Más allá de discutir la “eficacia numérica” de las cuotas para otorgar más escaños a las mujeres, el libro plantea preguntas necesarias sobre la capacidad de las mujeres y de los (líderes de los) partidos políticos para diseñar una agenda común de reformas que ambos estén dispuestos a discutir y legislar. Nuevamente, el caso de Ecuador es relevante para ilustrar la presencia de importantes mujeres en cargos de liderazgo político, cuya participación política antecede en algunos casos la adopción de sistemas de cuotas. Habría sido impensable concebir la dinámica legislativa, subnacional o ministerial sin la participación de Alexandra Vela (DP), Nina Pacari (PACHAKUTIK) o Susana Gonzáles (PSC), por mencionar unos casos. Sin embargo, la agenda de género en Ecuador todavía tiene muchas páginas en blanco, en espera de legislación sobre temas cruciales. Desde la perspectiva académica, queda mucho por hacer para analizar sistemáticamente el papel que han tenido las legisladoras en la iniciación de agendas de género, formación de comisiones y articulación de coaliciones temáticas.

El libro inicia y concluye con una sana advertencia a sus lectores. Citando a la Con-

1 Van Cott, Donna, 1999, *Indigenous Peoples and Democracy in Latin America*, St. Martin's Press, New York; Yashar, Deborah, 2005, *Contesting Citizenship: Indigenous Movements and Democracy in Latin America*, Cambridge University Press, Cambridge.

vención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, afirma que las cuotas electorales son “medidas específicas de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer (art. 4 CEDAW)”. En la medida en que las cuotas son un instrumento para conseguir una mejor representación política, es necesario mover el debate hacia los dilemas de representación política y rendición de cuentas, carreras políticas y formación de coaliciones, dinámicas legislativas y adopción de políticas públicas, es decir, analizar las arenas políticas favorables para una efectiva representación de género. La publicación de este libro, así como la existencia de nuevas y detalladas bases de datos en estos temas, se convertirán en instrumentos fundamentales que permitan a los estudiantes de género y de ciencia política ofrecer respuestas empíricas a estas preguntas urgentes.

Andrés Mejía Acosta



Fander Falconí y Julio Oleas,
compiladores, 2004,
Economía ecuatoriana.
Antología, Flacso-Ecuador, Quito.

Bienvenida la recopilación y ordenamiento de ensayos sobre economía y ecología de Ecuador, de Falconí y Oleas. Vasta y dispersa es la bibliografía sobre el tema, de modo que esta antología es de por sí meritoria, no obstante su discreta cobertura. Sin embargo, contiene interesantes artículos y fragmentos de textos publicados entre 1992 y 2002.

Asociar temas económicos y ecológicos es trascendente, en tanto se exploran integraciones conceptuales para ahondar -al tenor de la contemporaneidad- postulados, hipótesis y tesis de esos campos científicos. Esa aproximación académica aporta enfoques e investigación que enriquecen el acervo de antecedentes y de soluciones a problemas concretos en que se requiere el concurso de ambas disciplinas.

La antología consta de ocho artículos: cuatro referidos a temas ecológicos diversos vinculados a conceptos económicos, que ilustran la dificultad de asociar estos dos conocimientos -sobre todo en ensayos-, sin que asomen algunas incongruencias, por lo inci-

piente todavía de su interrelación. Falta aún mucho para que -mediante investigaciones, especulaciones de tesis y, entre otros, el debate esclarecedor-, se logren concatenar eficazmente contenidos teóricos y prácticos de ecología y economía.

Otros cuatro artículos son temas tradicionales de política económica: dos previos a la dolarización, centrados en diagnósticos específicos (el ancla cambiaria, de Jaramillo y, el fracaso de las reformas, de Nazmi) que, sin embargo, en su contexto, aportan mensajes válidos. Los dos restantes contienen proposiciones: el de estabilización de Schuldt y Acosta, con un planteamiento sobre estabilización con reactivación, instrumentalizado a través de numerosas políticas específicas; y, el artículo sobre política fiscal en la dolarización, de Samaniego, que postula, en el nuevo régimen monetario, el equilibrio (contable) del sector público, y sugiere que la política fiscal sea proactiva por el lado del gasto y también en el del ingreso.

Preside esta antología un interesante planteamiento teórico y factual de los compiladores, con horizontes conceptuales más vastos que el conjunto de los artículos. Lleva sus argumentos hasta el reconocimiento de la crisis del pensamiento económico contemporáneo explicitado, por un lado, en la crisis teórica y, por otro, en la insuficiencia del contenido del desarrollo, en particular en su adjetivación humana y de sostenibilidad, acompañado por la preeminencia ideológica y la ausencia de debate que abona el dogmatismo, como el ostentado por la afirmación neoliberal: "cambiar la realidad para que se ajuste a la teoría". También contiene sugerencias que vale discutir, como la "normalidad" científica, asociada a una agenda para contribuir "a la solución de problemas sentidos en la sociedad".

La economía -como disciplina y como conocimiento especializado y de métodos para resolver problemáticas de conglomerados hu-

manos, de empresas y del Estado- es apremiada por otras ramas científicas y, lo más interesante, por agrupaciones sociales que le exigen respuestas a situaciones y necesidades objetivas. Por otro parte, la ecología ha llegado tarde al debate; recientemente se están admitiendo sus problemáticas y sus relaciones con la economía, no obstante las demandas urgentes para resolver el deterioro ambiental y el tema de costos y beneficios de proyectos que lesionan el medio, pero que tienen valor económico mercantil.

Se supone -tanto en la teoría como en la praxis- que si la economía resolviera sus propios nudos conceptuales y poseyera suficientes respuestas para abordar problemáticas económicas reales, la ciencia y el practicismo de otras disciplinas tendrían más luces y opciones para ahondar sus teorías y formular soluciones a los temas reales de sus ámbitos respectivos. Pero, en verdad, la economía no ha sido tan rica en contribuciones. El pensamiento económico siempre ha ido detrás de los hechos, y los economistas han pensado y teorizado en función de las realidades de sus tiempos. Las tesis explicitadas o extraídas de obras que han trascendido su época -sin restarles méritos científicos y éticos- siempre están sometidas al riguroso *test* de la realidad presente que, por lo general, no las avala o las relativiza.

Queda aún mucho por recorrer para que la economía y la ecología concatenen áreas fronterizas o sobrepuestas de sus ámbitos científicos, y puedan ofrecer criterios y métodos de soluciones más allá de los iniciales conocidos. La evolución de las ciencias sociales sugiere que es más prolongando que breve el lapso de maduración de concepciones que tocan activos e intereses patrimoniales, como sucede con las áreas en que la economía y la ecología están llamadas a trabajar conjuntamente.

La contribución del pensamiento económico histórico, a saber, identificar temas relevantes y formular conceptos, teorías y metodologías, seguirá progresando si sus cultos-

res apuntan más a dilucidar los problemas objetivos contemporáneos, que a investigar si se cumple tal o cual postulado teórico clásico o neoclásico. Para la academia, las verificaciones o rechazos de leyes o tesis históricas son útiles, pero, sin duda, son más prioritarias las soluciones de problemas ingentes derivados del funcionamiento de la actual economía salvaje de mercado y del daño ecológico en curso.

La ecología, por otro lado, ha introducido en la economía -así como también lo han hecho los temas sociales, políticos y de la gobernanza- tópicos relevantes que auspician la investigación y la controversia para enriquecer el pensamiento contemporáneo, y que coadyuvan a dilucidar el origen y la solución de las problemáticas que van marginando a las amplias mayorías humanas del planeta y de las naciones, del desarrollo científico y tecnológico, y del crecimiento de la economía moderna.

Enrique Sierra C.



Javier Ponce Leiva, editor, 2005,
**La seguridad del Ecuador.
Del 11 de septiembre al
Plan Patriota,**
Flacso-Ecuador, PRADI, Quito.

El Programa de Actualización de Diplomáticos (PRADI) recopiló en 4 volúmenes los temas más destacados de la política exterior ecuatoriana actual: emigración, seguridad, relaciones Ecuador-Estados Unidos y comercio exterior. El objetivo de este proyecto consistió en propiciar la producción académica de los diplomáticos ecuatorianos en los asuntos que al momento causan las mayores controversias en el Ecuador, no sólo por las dudas que genera su posible tratamiento, sino también porque ameritan una seria reflexión por parte de todos los actores involucrados.

Sin duda, este proyecto constituye una excelente iniciativa del editor, Javier Ponce Leiva, quien a través del PRADI logró implementar un proyecto que no se limitó a lo local, sino que por el contrario estableció un sistema de trabajo virtual a fin de facilitar la participación de los diplomáticos ecuatorianos que se encontraban en misiones en el exterior, y su interacción con tutores nacionales

e internacionales de gran prestigio. Como resultado, cada uno de los libros del PRADI constituye una selección de los mejores trabajos realizados, de entre todos aquellos que pudieron participar de este proyecto.

Dada la amplitud de este programa me permitiré hacer una reseña sólo del volumen titulado *Seguridad de Ecuador. Del 11 de Septiembre al Plan Patriota*. Este trabajo se suma a la prolífica producción bibliográfica sobre temas de seguridad y que es el resultado de un renovado interés sobre este tópico. Dentro de este volumen, el primer trabajo, de autoría de Arturo Cabrera, aborda la necesidad de reorientar la discusión internacional sobre seguridad hacia el ser humano. Se concentra en la discusión generada en el seno de los distintos foros internacionales, enfatizando de manera crítica en sus planteamientos. En este sentido, el autor de esta sección llama la atención del lector sobre la falta de definición de ciertos conceptos y acerca de los posibles peligros que estas imprecisiones podrían ocasionar. Adicionalmente, apunta a promover una posición latinoamericana autónoma, hoy casi inexistente, para definir su propia noción de seguridad humana.

El segundo trabajo trata sobre la “agenda de seguridad para Sudamérica”. La idea central del texto sostiene que la seguridad regional en América Latina, al momento, se encuentra en un período de transición desde las doctrinas diseñadas originalmente en términos militares y defensivos hacia un enfoque de seguridad democrática y humana. No obstante, el trabajo demuestra la existencia de algunos vacíos; de hecho, nunca llega a esbozar el significado de una seguridad asentada sobre la democracia que tenga como eje central a las personas. Por otra parte, la autora cae en lo retórico al plantear un argumento orientado, casi de manera exclusiva, por el “deber ser”. Como resultado, su aporte al debate académico o a la formulación de posibles vías de acción alternativas para consolidar una agenda de seguridad sudamericana, es muy débil. Esta situa-

ción le resta capacidad crítica al artículo, en tanto pierde de vista los problemas que obstaculizan la concreción del ideal en realidad.

Los autores de los cuatro artículos siguientes analizan la problemática colombiana y sus efectos sobre la seguridad ecuatoriana desde diferentes enfoques y énfasis. Los trabajos de Oscar Izquierdo, Mariela Salguero y Rosa Vásquez muestran muchas coincidencias en su análisis, puesto coinciden en las siguientes premisas: a) el reconocimiento de que existe una amenaza a la seguridad nacional ecuatoriana proveniente de la vecina Colombia, b) la necesidad de establecer un enfoque de seguridad más centrado en el desarrollo social y económico interno, y c) la urgencia de propiciar un consenso entre los distintos actores de la sociedad civil para darle un tratamiento apropiado al tema. Por otra parte, los tres autores critican la posición del gobierno ecuatoriano. El primero señala que éste es más consistente con las presiones internas y externas que con un análisis profundo de las reales amenazas que enfrenta el Estado. Salguero critica el enfoque de territorialidad de la defensa del país, mientras que Vásquez aduce que el Estado debería tener una posición más demandante ante la comunidad internacional para acceder a una mayor asistencia como medio para enfrentar los impactos del desbordamiento de la lucha contra el narcotráfico.

El artículo de Montalvo, “El Ecuador frente a la política de seguridad democrática y el conflicto colombiano”, que hemos dejado para el último a propósito, es el que presenta la mejor y más sólida argumentación. La idea central del texto gira en torno a la existencia de un complejo de seguridad en la región Andina (concepto tomado de Buzan y Waever), el mismo que está determinado por intereses de seguridad nacionales muy vinculados entre sí y que, por consiguiente, no pueden considerarse aisladamente. En este marco, los intereses de seguridad particulares de cada país andino toman forma en las diferentes percepciones que el conflicto

colombiano genera, especialmente con respecto a sus efectos sobre sus propios territorios. Como resultado se puede ver que los vecinos de Colombia pretenden mantener una asepsia frente al conflicto interno colombiano. Esto también ha ocasionado que los países andinos pierdan la voluntad para establecer una agenda de seguridad andina común, pese a las evidentes y fuertes presiones estadounidenses. Finalmente, el artículo hace un recuento de la política exterior ecuatoriana frente a la política de seguridad democrática colombiana, y señala que existe una marcada tendencia hacia un mayor involucramiento en el problema, la misma que obedece a la interpretación de las percepciones que el conflicto genera, más que a un análisis estructural de la situación, lo que demuestra una incapacidad gubernamental para modular eficientemente sus intereses, en lugar de asumir como propias las problemáticas que le son ajenas.

A manera de conclusión, podría decirse que la real innovación de este volumen del PRADI proviene de la inserción del cuerpo diplomático en el debate sobre temas de seguridad, que -como reconoce el editor en la introducción- requiere una mayor participación y dinamismo de la clase política ecuatoriana. Lamentablemente, los aportes a lo largo del libro muestran una debilidad en el manejo conceptual del término y en las recomendaciones para el frente externo. En general, sería aconsejable ampliar la investigación sobre seguridad para poder determinar con mayor precisión las complejas interacciones que generan las percepciones de inseguridad. Finalmente, los autores tienen una marcada tendencia a hablar desde lo normativo, desde la postura del deber ser, lo cual no es extraño tomando en cuenta que estos aportes vienen respaldados por la experiencia de quienes trabajan directamente con la política exterior ecuatoriana. No obstante, es aconsejable profundizar un poco más en el tema para refinar el análisis.

Carla Álvarez



Franklin Ramírez Gallegos, 2005,

La insurrección de abril no fue sólo una fiesta,

Taller El Colectivo, Abya-Yala, Ciudad, Terranova, Feuce-Q, Quito.

El goce de la democracia radical

Ante la afirmación expresada a través del título que Ramírez-Gallegos ha escogido para su ensayo, *La insurrección de abril no fue sólo una fiesta*, es casi inevitable que una interrogante se destaque incisivamente frente a los ojos del lector. Todo aquel que se encuentre empeñado en desentrañar los posibles sentidos y potencialidades políticas derivadas de la dispersa movilización ciudadana que decantó en el derrocamiento de Lucio Gutiérrez el pasado 20 abril, con mucha probabilidad no podrá dejar de preguntarse: ¿es pertinente nombrar con una palabra tan fuertemente cargada de una significación evocadora de combatividad y radicalidad, *insurrección*, al mencionado hecho político? En el caso de que se aceptase esta manera políticamente explosiva de nombrar a las jornadas de abril, el aura de inofensiva espontaneidad que, por obra y gracia de no pocos intérpretes, las ha envuelto, se desvanecería.

¿Si los sucesos de abril, desprovistos de ese manto de polvo de hadas con el que han sido recubiertos no fueron únicamente una “fiesta”, entonces qué fueron? En uno de los más sucintos y mejor logrados acápites del ensayo, Ramírez-Gallegos responde a esta última interrogante negativamente. Es decir, define aquello que las jornadas de abril *no fueron*. A través de un tono narrativo marcadamente ácido, el autor arremete corrosivamente contra tres frentes que actualmente reclaman para sí el monopolio sobre la correcta interpretación del evento político en cuestión.

Para empezar, a las clases medias “cultas” que, muy pudorosamente, prefieren reconocer en la reciente movilización en Quito única y exclusivamente una decidida adhesión de la ciudadanía a los valores del liberalismo democrático, el autor les recuerda lo poco disimulables aspectos abiertamente anti-liberales (como son el grotesco racismo o el autoritario machismo) que, insertados en su vida cotidiana y formando parte de su cultura política, no dejaron de exhibirse en las calles durante la movilización de abril.

Por otro lado, frente a los torpes y mal intencionados paralelos trazados entre Hugo Chávez y Lucio Gutiérrez realizados por sectores oligárquico-reaccionarios, sobre todo ligados al Partido Social Cristiano, Ramírez-Gallegos recalca lo que fue flagrantemente visible: la disputa política central durante el último periodo de Gutiérrez en el poder giró en torno a las tradicionales querellas entre dos partidos orgánicos de viejas y nuevas élites económicas (el PSC y el PRE), y jamás en torno al enfrentamiento entre las élites económicas y un polo popular en el gobierno, como sí que sucede en el caso venezolano.

Finalmente, desafiando la postura de una izquierda de vieja escuela, doblemente desorientada (primero, por un nostálgico anhelo de ver en las calles únicamente a sectores populares movilizados a partir de motivaciones netamente económicas, y segundo, por la

arrogante pretensión de estar en capacidad de develar la falsa conciencia de todo actor político), Ramírez-Gallegos propone una alternativa interpretativo-política. Ésta consiste, básicamente, en tomarse más en serio las razones que arguyen los propios actores para fundamentar sus acciones políticas. Junto a esta opción teórica que no subestima la capacidad reflexiva de la gente, y que evita desdeñar sus razones como si fueran meros síntomas de una realidad más fundamental (su posición de clase, etc.), Ramírez-Gallegos conmina a no descartar de antemano las posibilidades de radicalización de ese ambiguo sector social denominado clase media. Movilizados por vez primera, y por motivaciones fundamentalmente ético-políticas (no económicas) ciertamente no reducibles a la indignación racista de los “liberales bienpensantes”, quizás los “clasesmedieros” urbanos, como los llama el autor, inaugurados en la vida pública en abril, puedan eventualmente constituirse como uno de los puntales sociales en la construcción de un orden político sustantivamente democrático.

El reconocimiento de la potencialidad democratizadora del evento de abril sugerida en la última línea no es en lo absoluto arbitraria. Lejos de ello, se deriva del reconocimiento y comprensión de las *causas* de la movilización. La estrategia teórica o explicativa que adopta Ramírez-Gallegos para determinar tales causas consiste en escudriñar, no las intenciones de la multitud movilizada en abril, sino el momento en el que tal multitud irrumpió en la esfera pública. Es decir, alejándose de explorar lo que hayan procurado o dejado de procurar las tantas personas que salieron a las calles (aspecto por lo demás, en última instancia, insondable), el autor apunta a comprender el *por qué* de su acción a partir de aclarar *cuándo* la llevaron a cabo. Dos características definen el momento en medio del cual se configuró y a partir del cual se puede explicar la movilización ciudadana de abril.

La primera característica comprende un periodo anterior al régimen de Gutiérrez, y se refiere a la ausencia de hegemonía política en el país, exacerbada desde los noventas. De acuerdo al autor, la escasa capacidad de consolidar un liderazgo intelectual y moral por parte de las élites, ha determinado la utilización patentemente instrumental de la ley y de los diversos órganos del estado, y ha confinado la política a un juego de astucia en el que el choque de fuerzas y las componendas entre los partidos se desentiende de todo mecanismo público de rendición de cuentas. Es en medio de este vacío hegemónico que Gutiérrez y su flamante maquinaria partidaria acceden al poder, adoptando inmediatamente las reglas del juego político que se imponen en tal contexto (reglas reducibles a degradar la política a la mafiosa politiquería orientada a acceder a y a mantenerse en el poder usando cualquier medio). Sin embargo, adentrándonos en la segunda característica del momento en el que estalla la reacción ciudadana, hay una característica distintiva del gobierno de Gutiérrez con respecto a los anteriores. Ésta se refiere, nos dice Ramírez-Gallegos, a la manera en que aquél vinculó su estrategia de gobierno con la estrategia militar. En efecto, si se piensa en las retaliaciones que sufrieron algunos opositores al régimen o en la estrategia clientelar utilizada para contener y debilitar al movimiento indígena, la lógica disuasiva propia de los servicios de inteligencia militar caracterizó claramente al “gutierrezato” (nombre que escoge el autor para señalar la cercanía, sobre todo en cuanto al persistente uso de estrategias militares, que guardó este régimen con el “fujimorato” estudiado por los sociólogos peruanos). Es, en suma, durante un periodo en el que se torna completamente visible la arbitrariedad del poder, o en el que la ilegitimidad se reconoce como instalada en el centro mismo del sistema político, que se desencadena la expresión de resistencia de la ciudadanía.

A la luz de esta explicación centrada en el *cuándo* de la movilización, y partiendo de una perspectiva ética proveniente de la tradición radical de pensamiento democrático moderno, Ramírez-Gallegos no podía sino denominar a las jornadas de abril como una *insurrección*, y lo que es más, no podía sino considerar a tal insurrección como *legítima*. Superando esa ansiedad por la estabilidad propia del régimen presidencialista (reforzado con las reformas constitucionales de 1998), ansiedad tan estrechamente vinculada a los imperativos de orden fiscal emanados desde los organismos financieros internacionales, el autor no titubea en defender el derecho a la resistencia y al desacato por parte de la ciudadanía cuando el poder es ejercido de manera ilegítima.

Probablemente los acápites destinados a la descripción de las formas concretas mediante las cuáles la ciudadanía ejerció su derecho a la resistencia sean los más valiosos en términos del acervo histórico que ofrecen para la posteridad. Y a su vez, me atrevería a decir, por la desenfadada implicación ética que el autor asume en estas partes del texto, su escritura adquiere mucha mayor fuerza que en los lugares en los que pesa más la escrupulosidad teórica. Con la minuciosidad gozosa del cómplice, al estilo de una etnografía comprometida, Ramírez-Gallegos ofrece un recorrido por las calles del Quito desvelado en abril. La descentrada plataforma comunicativa ofrecida por la radio entendida como condición de posibilidad para la desbordante auto-convocatoria ciudadana. El vínculo entre las prácticas de la vida cotidiana y las estrategias de contestación al poder tan creativamente desplegadas durante las varias noches de insurrección. El inédito carácter nocturno y rotativo de la presencia de los marchantes en las calles. La total independencia con respecto a los partidos políticos y la ausencia de liderazgos tradicionales entre los movilizados. Mediante la atenta exploración de éstas y otras características de la insurrección, Ramírez-

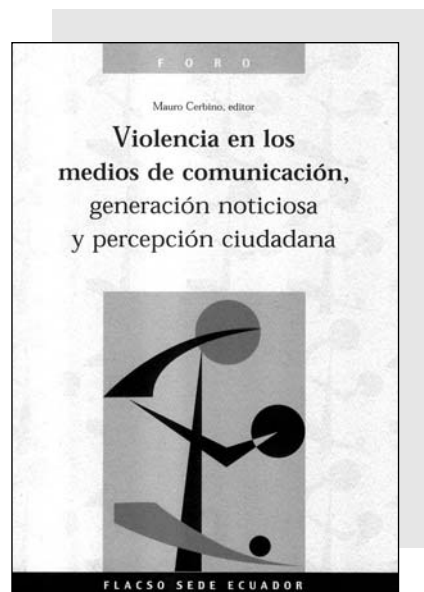
Gallegos destaca y a su vez se vuelve partícipe de su espíritu gozoso, anti-solemne y creativo.

Reconociendo que, hasta hoy, la insurrección democrática de abril no ha reconfigurado al sistema político, el autor sabe que por su mismo carácter intempestivo, esta insurrección (como cualquier otra) por sí sola ni de lejos asegura la estabilización de nuevos mecanismos de participación democrática. Pero sin detenerse en el reconocimiento de este límite, Ramírez-Gallegos no deja de exaltar la libre, siempre singular e inasible expresión de la subjetividad presente en el ciclo de intervenciones públicas ciudadanas que podría abrirse tras la experiencia de abril.

La revuelta ciudadana que tuvo a Quito como su escenario fue una tremenda fiesta pública a la que afluyó y en la que proliferó la fuerza de subjetividades individuales. ¿Quién lo dudaría? Sin embargo, lo que nos recuerda Ramírez-Gallegos es que esa fiesta no fue en modo alguno inofensiva: a juzgar por el momento en el que estalló en las calles, muchos entre quienes se auto-convocaron a esta peculiar fiesta se presentaron o salieron de ella con su individualidad rozada por la explosiva marca de la insurrección.

Alvaro Campuzano Arteta

Sociólogo, M.A. Humanities and Social Thought (Dartmouth University)



Mauro Cerbino, editor;

Violencia en los medios de comunicación, generación noticiosa y percepción ciudadana

Flacso-Ecuador, Quito, 2005.

En tiempos de teorías débiles, desorientaciones valorativas y normativas, y subjetividades ligeras -combinación que se experimenta como incertidumbres existenciales y nebulosidad política-, el tema de la violencia de sucesos criminales en los medios de comunicación de “masas”, como el de su “correlato receptivo”, las audiencias, es de crucial importancia si queremos repensar nuevas alternativas para el ejercicio reflexivo de la opinión pública y ciudadana.

El libro *Violencia en los medios de comunicación, generación noticiosa y percepción ciudadana* podemos inscribirlo al interior de los procesos de la llamada “modernidad reflexiva”, en tanto cumple con dos de las condiciones básicas inherentes a ella: un *mundo de la vida*, cada vez más constituido en relación al mundo mediático (diferente al de hace unas décadas, que se constituía más desde los anclajes espacio temporales tradicionales) y el de *sistemas expertos* cuya misión está en generar

conocimientos sobre los sistemas y subsistemas sociales y culturales, que van permeando progresivamente, ya sea por vías académicas o por la socialización mediada, un conjunto de saberes que son a su vez re-apropiados por los sujetos sociales que, en la modernidad tardía, buscan o deberían buscar, fuentes de sentido para sus propias vidas colectivas.

Centrándonos en el campo acotado de la comunicación, el libro cubre una laguna en la reflexión académica ecuatoriana y busca entablar puentes con ese ejercicio profesional del periodismo que, me atrevo a decir, junto al del publicista y al profesional del marketing, configuran una trama de la comunicación institucional dominante en la formación de las nuevas audiencias, nuevos actores sociales y hasta de las nuevas simpatías políticas.

Uno de los argumentos que atraviesa varios de los ensayos presentados ya sea por estudiosos de Colombia, Chile y Ecuador, como por periodistas de investigación locales, es el de situar a los medios de comunicación como el nuevo *narrador nacional* que da cohesión imaginaria, y tal vez simbólica, a las percepciones y sentidos generados en el espacio público, y que cuenta con una acentuada credibilidad ciudadana, producto de la caída o el debilitamiento de otros referentes institucionales para dar sentido al mundo. Sin embargo, es tanto más peligroso no criticar a este *narrador nacional* cuanto más credibilidad vaya obteniendo de sus receptores-consumidores, pues las respuestas sociales a los conflictos y a la violencia dependen en buena medida de la capacidad de interpelación y juicio a lo que sale publicado en esos medios.

El tema de la seguridad ciudadana es sin duda un tema clave en las agendas tanto de investigadores sociales como de los políticos de gobiernos nacionales y municipales. Las atmósferas de incertidumbre y desconfianza al otro se conjugan con sensaciones de orfandad migratoria, penuria económica y presión consumista. Combinación que no sólo es ex-

plosiva en contextos urbanos, sino en toda la región Latinoamérica. Si esto tiene la envergadura que algunos analistas remarcan, se vuelve más preocupante el listado de síntomas que el periodismo noticioso tiene según se puede colegir de la lectura de este interesante libro. Como ejemplo, quiero dejar anotados algunos:

1) apelación continua al sentido común por parte de editores y periodista a la hora de construir y elaborar sus textos noticiosos;

2) la presencia de la violencia en los medios, genera por lo menos tres impactos: acostumbramiento (que termina en la indiferencia cognitiva y la insensibilidad afectiva); repetición (una paradoja que se establece en el receptor, pues a más afán de primicias novedosas, más madura el sentimiento de lo mismo); y temor (una dialéctica entre semiótica afectiva y rentabilidad empresarial, pues como bien lo señala Jesús Martín Barbero, hay un contubernio entre los medios y los miedos que paralizan la apertura necesaria para comunicarse con el otro, el diferente, la alteridad);

3) las rutinas profesionales instauran unas lógicas de la producción y generación noticiosa que si bien se explican por las urgencias tecnológicas y coyunturales del campo periodístico, tienen consecuencias nefastas cuando ellas obliteran la reflexión y la sensibilidad responsable de lo que se escribe y como se escribe.

Hay otra consideración digna de destacar de este libro. El periodismo encargado de cubrir los sucesos de violencia criminal participa, conciente o inconscientemente (lo que no es excusa política), de la construcción social del enemigo y la “homogenización significativa” entorno a éste. Esta homogenización tanto interpretativa como valorativa calza con esas políticas globales de seguridad, que desean sellar en el discurso, las adherencias ideológicas a procedimientos poco democráticos de control social, que no ve matices, di-

ferencias históricas, determinaciones locales, etc. En tiempos de regeneraciones urbanas, el periodismo tiene la responsabilidad de cuestionarse cómo construye sus representaciones de la ciudad, de la cultura urbana, pues es notoria la contradicción en la que incurren cuando en algunas de sus secciones exaltan los nuevos espacios públicos regenerados, invitando a ser recorridos y disfrutados, al mismo tiempo que, en otras secciones, advierten de los peligros de sectores y dinámicas urbanas amenazantes que asechan, ni siquiera en las sombras, sino a plena luz del día. Si debiera hacer una pregunta -inspirada en el psicoanálisis- a esta problemática, sería: ¿cuál es la participación de los medios de comunicación en los males que denuncian? ¿Qué deben expulsar de su práctica televisiva o “escritural”, para poder construir sus relatos noticiosos que, según el *canon*, deben ser objetivos, imparciales y veraces? Probablemente una respuesta tentativa sería: la subjetividad del malestar que no se satisface sino reiterando el equívoco del texto que a su vez se cree cierto y representativo de la realidad. Pero esto es más un tema interdisciplinario que específicamente comunicacional.

Otra parte destacable a *grosso modo* en este libro son las recomendaciones y sugerencias que los académicos hacen a los periodistas y a la propia institución mediática. Con un espíritu conciliador y dialogante se invita a discutir las agendas, a romper estereotipos mutuos entre académicos y profesionales del periodismo, pero sobre todo a reflexionar sobre las lógicas y rutinas profesionales de generación noticiosa, que sumado a la creación tanto de observatorios de medios como de veedurías mediáticas a las políticas de desarrollo urbano, mejoren la calidad noticiosa y por ende la calidad de la esfera pública.

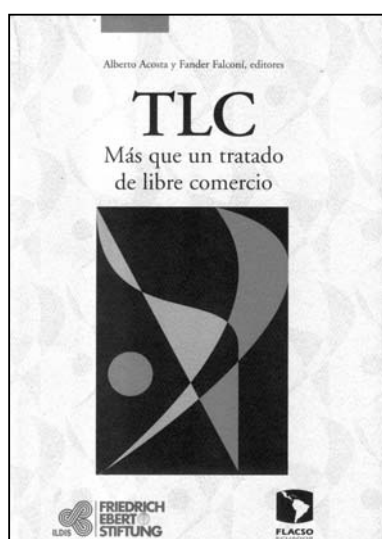
Un comentario aparte merece el ensayo investigativo de Mauro Cerbino (quien también abre el libro con una introducción que

problematiza la relación entre medios y audiencias), que se titula “Maniqueísmo y personalización en el cubrimiento periodístico de acontecimientos violentos: el ‘caso Fybeca’ en el Diario El Universo de Guayaquil”. Son muy pocos los ensayos críticos y analíticos que se hacen y publican con rigor académico en nuestro país. En este caso se enfrenta una temática que no sólo afecta *al modos operandi* del ejercicio profesional periodístico, sino a la comunidad de ciudadanos interesados por hacer el seguimiento noticioso de un caso que cuestiona la viabilidad y rectitud de la justicia, la investigación policíaca, el papel del Estado y el tratamiento mediático. Con un abordaje a medio camino entre la ortodoxia metodológica y la inventiva creativa, el texto escudriña paso a paso cómo se fue construyendo el sentido del mencionado “caso”, cómo afectaron en su tratamiento, la disposición espacial de fotos y titulares, cómo se hilvanaron los discursos, y de modo oblicuo, cómo estuvo presente los fondos ideológicos que marcaron la posición del diario frente a la situación, los poderes y los actores.

Sin duda, el libro será de ayuda para estudiantes y académicos de la comunicación, pues a partir de un tema particular, pueden aproximarse al corazón mismo de los estudios comunicacionales, sus vicisitudes conceptuales, sus problema metodológicos, sus aproximaciones teóricas y, sobre todo, reivindicar para el campo de estudio, el necesario diálogo entre los actores que tienen en sus manos la enorme responsabilidad de comunicar o, lo que es lo mismo, de representarnos el mundo en que vivimos.

Carlos Tutivén Román

Ediciones de FLACSO - Ecuador



Serie FORO

TLC.

Más que un tratado de libre comercio

Editores: Alberto Acosta y Fander Falconí

FLACSO-Ecuador - ILDIS - 2005

Un tratado de libre comercio, en estricto sentido, debería ser un instrumento de intercambio y de desarrollo para los países y regiones que participen en él. ¿Por qué el TLC que actualmente se negocia entre tres países andinos (Ecuador, Perú y Colombia) y Estados Unidos ha suscitado tanta polémica, así como adhesiones críticas? ¿Se trata de un tratado de libre comercio únicamente? ¿Qué implicaciones políticas, económicas, sociales y de soberanía tiene este tratado para los posibles firmantes de este tratado? Estas y otras más son las interrogantes que este libro pretende responder desde una perspectiva analítica crítica y multidisciplinaria.

Política editorial

ÍCONOS es la revista especializada en ciencias sociales de Flacso-Ecuador. Fue fundada en 1997 y su objetivo es estimular un tipo de reflexión que vincule las inquietudes académicas de las ciencias sociales con problemas de la realidad social. La revista está dirigida a la comunidad científica y a quienes se interesen por conocer, ampliar y profundizar, desde perspectivas académicas, temas de debate social, político, cultural y económico del país, la región andina y el mundo en general.

La revista recibe artículos durante todo el año siempre que éstos se ajusten a la política editorial y a las normas de presentación de originales. Por el carácter especializado de la revista, se espera que los artículos presentados sean de preferencia resultados o avances de investigación en cualquier área de las ciencias sociales. También se aceptan ensayos que se apoyen sólidamente en bibliografía especializada, análisis de coyuntura nacional o internacional que partan de aproximaciones académicas y/o entrevistas de interés para el campo de las ciencias sociales. Para la selección de artículos se utiliza un arbitraje bajo el sistema de doble ciego (*peer review*).

Cada edición de ÍCONOS se arma en torno a un tema central, recogido en la sección *Dossier*. En cada edición existe un Coordinador del Dossier, quien es un/una especialista en el tema, y con quien debe coordinarse la publicación en esta sección (información: revistaiconos@flacso.org.ec).

La sección *Debate* presenta textos críticos sobre artículos publicados en ediciones anteriores de ÍCONOS así como artículos de debate y confrontación teórica y analítica.

Diálogo es la sección de entrevistas temáticas y biográficas a académicos/as de las ciencias sociales.

Temas es una sección amplia. Recoge análisis y ensayos con temática libre, artículos de coyuntura nacional e internacional y análisis sobre temas internacionales y/o transnacionales.

Reseñas es la sección de crítica bibliográfica. Se incluyen tanto comentarios críticos a obras de ciencias sociales como estados de la cuestión sobre un tema determinado.

ÍCONOS se publica tres veces al año en los meses de enero, mayo y septiembre.

Normas para la presentación de originales

Las personas interesadas en publicar artículos en la revista ÍCONOS deberán enviar su original por correo electrónico a revistaiconos@flacso.org.ec y respetar las siguientes normas:

1. Los artículos deben ser originales, inéditos en español y no estar aprobados para su publicación en otras revistas.
2. El Consejo Editorial de ÍCONOS se reserva el derecho a decidir sobre la publicación de los trabajos, así como el número y la sección en la que aparecerán. Para su evaluación y selección final, los artículos serán enviados a lectores anónimos, quienes emitirán un informe bajo el sistema de doble ciego (*peer review*).
3. En una hoja aparte, el autor o autora hará constar su nombre, grado académico y/o estudios, adscripción institucional o laboral, el título del artículo, la fecha de envío, dirección postal y correo electrónico. Se debe indicar expresamente si el autor desea que se publique su correo electrónico (llenar formulario).
4. Los artículos deben estar precedidos de un resumen no mayor a 800 caracteres con espacios (100 a 150 palabras) en español e inglés. Esta norma no se aplica para la sección *Reseñas*.
5. Los autores deben proporcionar de cinco (5) a ocho (8) descriptores o palabras clave que reflejen el contenido del artículo. Éstos deben constar tanto en español como en inglés. Esta norma no se aplica para la sección *Reseñas*.
6. El título del artículo no deberá ser mayor a 10 palabras.
7. La extensión de los artículos variará según las secciones de la revista, se medirá en el contador de palabras de Word y será como sigue:

Dossier:	de 25.000 a 35.000 caracteres con espacios (cce)
Debate:	de 20.000 a 25.000 cce
Diálogo:	de 20.000 a 30.000 cce
Temas:	de 20.000 a 25.000 cce
Reseñas:	de 6.000 a 8.000 cce

8. La primera vez que aparezcan siglas deberá escribirse su significado completo, luego las siglas.
9. Sobre cuadros, gráficos y tablas:
 - 9.1 Deberán estar incorporados en el texto de forma ordenada.
 - 9.2 Deberán contener fuentes de referencia completa.
 - 9.3 Cada uno contará con un título y un número de secuencia (Ejemplo: *Tabla 1. Presupuesto por organización, zona y monto*).
 - 9.4 Los gráficos pueden enviarse de forma separada en cualquier formato legible estándar (indicar el formato), siempre que en el texto se mencione la ubicación sugerida por el autor. Para asegurar la calidad final, el autor/a hará llegar a la redacción un archivo digital con alto nivel de resolución (en cd, disquette, zip, usb u otra forma de archivo).
10. Las citas bibliográficas que aparezcan en el texto deben ir entre paréntesis, indicando el apellido del autor, año de publicación y número de página. Por ejemplo: (Habermas 1990:15). La referencia completa deberá constar en la bibliografía.

11. La bibliografía constará al final del artículo y contendrá todas las referencias utilizadas en el texto. Se enlizará la bibliografía de un autor en orden descendente según el año de publicación (2004, 2003, 2002...).

12. La bibliografía se enlizará siguiendo el orden alfabético de los autores y las siguientes formas:

Libro de un autor:

Apellido, Nombre, año de publicación, *Título del libro en cursiva*, editorial, lugar.

Ejemplo: Laclau, Ernesto, 1996, *Emancipación y diferencia*, Ariel, Buenos Aires.

Libro de más de un autor:

Apellido, Nombre y Nombre Apellido, año de publicación, *Título del libro en cursiva*, editorial, lugar.

Ejemplo: Laclau, Ernesto y Chantall Mouffe, 1985, *Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics*, Verso, Londres.

Artículo en libro de editor (es), coordinador (es) o compilador (es):

Apellido, Nombre, año de publicación, "Título del artículo entre comillas", en Nombre Apellido, palabra que corresponda "editor"/ "editores"/ "coordinador"/ "compiladores", etc., *Título del libro en cursiva*, editorial, lugar.

Ejemplo: Muratorio, Blanca, 2000, "Identidades de mujeres indígenas y política de reproducción cultural en la Amazonía ecuatoriana", en Andrés Guerreño, compilador, *Etnicidades*, FLACSO-Ecuador, ILDIS, Quito.

Artículo en revista:

Apellido, Nombre, año de publicación, "Título del artículo entre comillas", en *Nombre de la revista en cursiva*, No. de la revista, editorial, lugar, páginas que comprende.

Ejemplo: Coraggio, José Luis, 2000, "Alternativas a la política social neoliberal", en *ÍCONOS*, No. 9, FLACSO-Ecuador, Quito, p. 52-59.

13. Los artículos presentados para la sección *Reseñas* deben incluir toda la información bibliográfica del libro al que se haga mención.

14. ICONOS se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los cambios editoriales que considere necesarios para mejorar el trabajo.

15. Los artículos que se ajusten a estas normas serán declarados como "recibido" y puestos a consideración del Consejo Editorial para su evaluación antes de ser "aprobados". El mecanismo de evaluación se explica en la norma 2. Los artículos que no se ajusten a estas normas serán devueltos a sus autores y serán declarados como "no recibido".

Ediciones de FLACSO - Ecuador



Serie TESIS

El comercio de productos agrícolas en la OMC

Marcelo Gerona

FLACSO-Ecuador - 2005

El libro tiene como objetivo analizar el papel de la agricultura en las negociaciones multilaterales, desde la perspectiva de los países que requieren expandir el comercio agrícola para mejorar las condiciones de vida de sus sociedades. El contenido incluye un análisis crítico del marco jurídico internacional que proporciona el Acuerdo sobre Agricultura del GATT, y de los documentos de negociación más actuales que se discuten en la OMC. Tanto el lector con conocimientos teóricos, como aquel que sólo busca informarse sobre las reglas del comercio internacional, se encontrará con un compendio actualizado de los intereses nacionales que están definiendo la suerte del comercio agrícola en el mundo. Además, comprenderá más sustancialmente el papel de los países en desarrollo en el ámbito multilateral, frente a la compleja red de acuerdos bilaterales y regionales, que en muchos casos es promovida por los países desarrollados, porque es en ese contexto donde defienden más eficientemente sus intereses.

Contenido de ICONOS 19, mayo 2004

Coyuntura

**Violencia:
peligros autoritarios y desafíos democráticos**

Augusto Barrera Guarderas

**Recursos genéticos, conocimientos
tradicionales y propiedad intelectual:
piezas claves en los TLC**

María Fernanda Espinosa

Dossier

**Dolarización y desdolarización:
elementos para el debate**

Introducción al Dossier

Fander Falconi

**Auge y derrumbe de la convertibilidad
argentina: lecciones para Ecuador**

Saúl Keifman

**América Latina:
buscando el rumbo perdido**

Carlos Parodi Trece

**Dolarización y desarrollo humano
en Ecuador**

Carlos Larrea M.

**Dolarización o desdolarización
¿esa no es toda la cuestión!**

Alberto Acosta

**Costos del abandono de la dolarización
en Ecuador**

Marco P. Naranjo Chiriboga

El dólar vale más

Una reflexión sobre dinero, Estado e identidad

Emilia Ferraro

Debate

La construcción social y cultural de la música

Comentarios al dossier de Íconos 18

Hernán Ibarra

**La identidad colectiva y el proceso de
mo-dernización:**

entre coerciones universalistas y valores particularistas

H. C. F. Mansilla

Diálogo

Otra globalización es posible

Diálogo con Boaventura de Sousa Santos

Fernando García y Miguel Chavarría

Temas

Es la lógica algo obsoleto?

Un análisis de los acuerdos sobre la base de Manta

Teodoro Bustamante

Sin el Fondo, ¿quién estará fuera del mundo?

**Teoría y práctica de la intervención
del FMI en América Latina**

Francesco Martone

Elaborando el silencio:

la respuesta de Sor Juana Inés de la Cruz

Mercedes Prieto

Frontera

La provocadora soledad de la teoría

A propósito de la herencia intelectual de Norberto

Bobbio

Julio Echeverría

Las búsquedas de Norbert Lechner

Felipe Burbano de Lara

Reseñas

José Antonio Figueroa Pérez,
**Del nacionalismo al exilio interior:
el contraste entre la experiencia
modernista en Cataluña y
los Andes americanos,**

Roberto Follari

Luciano Martínez Valle,

Dinámicas rurales en el subtrópico,
María Dolores Vega

Carlos Larrea,

**Pobreza, dolarización
y crisis en el Ecuador,**

Gustavo Arteta

Tamara Estupiñán,

Tras las Huellas de Rumiñahui,

Carlos Espinosa

Contenido de ICONOS 20, septiembre 2004

Coyuntura

A las puertas del abismo

Las implicaciones del TLC para Ecuador
Hugo Jácome E.

Las formas de una guerra amorfa: drogas, democracia y derechos humanos en Ecuador

Fredy Rivera Vélez

Dossier

Patrimonio, políticas de la memoria e institucionalización de la cultura

Eduardo Kingman Gracés

Los centros históricos en la era digital

Fernando Carrión

El Pelourinho de Bahia, cuatro décadas después

Paulo Ormino de Azevedo

Exclusión constitutiva: las organizaciones pantalla y lo anti-social en la renovación urbana de Guayaquil

Chris Garcés

Burocracia: museos, políticas culturales y flexibilización laboral en Guayaquil

Xavier Andrade

Museos y patrimonio: fracturando la estabilidad y la clausura

Mireya Salgado

Debate

Dolarización y desdolarización: más elementos para el debate

Comentarios al dossier de Íconos 19
Rafael Correa

Iconofilia y prácticas artísticas

Apuntes sobre la Bienal de Cuenca
Ana Rodríguez

Diálogo

Marxismo, ensayo y ciencias sociales

Diálogo con Alejandro Moreano
Eduardo Kingman y Felipe Burbano

Temas

Musas, ondinias y misses:

estereotipos e imágenes de las mujeres quiteñas en
los años treinta del siglo XX
Ana María Goetschel

Historias de misses, historias de naciones

Andrea Pequeño

Econometría, teoría política y económica:

el Nóbel de Economía 2003
Salvador Marconi

Frontera

Feminismo, fundamentalismo islámico y la política de la contrainsurgencia

Saba Mahmood y Charles Hirschkind

Déficit democráticos y globalización

Manuel Guedán

Reseñas

Mauro Cerbino,

Pandillas juveniles: cultura y conflicto de la calle

José E. Juncosa

Hugo Jácome

Microfinanzas en la economía ecuatoriana: una alternativa hacia el desarrollo

María S. Floro

Susana Andrade

Protestantismo indígena

P. Juan Bottasso S.D.B

Contenido de ICONOS 21, enero 2005

Dossier

Conflictos por petróleo y gas natural en la Amazonía

Presentación del Dossier

Guillaume Fontaine

Petróleo, seguridad ambiental y explotación petrolera marina en Colombia

Alfonso Avellaneda Cusarúa

Impactos sociales de la actividad petrolera en Ecuador: un análisis de los indicadores

Teodoro Bustamante y María Cristina Jarrín

Microconflictos ambientales y crisis de gobernabilidad en la Amazonía ecuatoriana

Guillaume Fontaine

Camisea: ¿por qué cuesta tanto el gas barato?

Carlos Soria

Los conflictos ambientales del gas boliviano

Marc Gavaldá Palacín

Debate

El patrimonio como domesticación de la cultura

Comentarios al Dossier de Íconos 20

Gey Espinheira

Temas

La desventura de ser soltero: introducción a la sociología rural de Pierre Bourdieu

Luciano Martínez Valle

Encuentros artísticos con el dolor, la memoria y las violencias

Pilar Riaño Alcalá

Coaliciones fantasmas, esencialismos políticos y corrupción

Felipe Burbano de Lara

Reseñas

Francisco Delich.

Repensar América Latina

Carlos de la Torre

Guillaume Fontaine, Editor

Petróleo y Desarrollo

Sostenible en Ecuador. 2. Las apuestas

Pedro Elías Galindo León

Contenido de ICONOS 22, mayo 2005

Coyuntura

El Tratado de Libre Comercio: ¿va porque va?

Fander Falconí y Hugo Jácome

Dossier

Religión, política e identidad

Presentación del Dossier

Carmen Martínez Novo

La conversión de los shuar

Steve Rubenstein

El despertar político de los indígenas evangélicos en Ecuador

Susana Andrade

El pluralismo religioso en la colonización campesina de Caranavi-Alto Beni: iglesias y poder en la sociedad rural boliviana

Alberto Zalles

El embrión extra: ética de vida, ética de parentesco y cryopreservación en las clíni- cas ecuatorianas de fertilización in vitro

Elizabeth Roberts

Una obra del señor: protestantismo, conversión religiosa y asistencia social

Mares Sandoval Vizcaíno

Religiosidad popular: ensayo fotográfico

Gonzalo Vargas y Francisco Jiménez

Debate

Gobernabilidad democrática, conflictos socioambientales y asistencialismo

Comentarios al Dossier de ÍCONOS 21

Alex Rivas Toledo

Diálogo

El oficio de la etnografía política

Diálogo con Javier Auyero

Edison Hurtado A.

Temas

Historia de vida de una mujer amazónica: intersección de autobiografía, etnografía e historia

Blanca Muratorio

Reseñas

Manuel Alcántara,

¿Instituciones o máquinas ideológicas?

Origen, programa y organización de los partidos latinoamericanos

Flavia Freidenberg

Perla Petrich, editora

Identités: Positionnements des groupes in- diens en Amérique Latine

Luciano Martínez Valle

Kart Weyland, Carlos de la Torre, Gerardo Aboy,
Hernán Ibarra

Releer los populismos

Henry Allan

Jimmy López,

Ecuador-Perú, Antagonismo, negociación e intereses nacionales

Katalina Barreiro Santana

Robert Norris,

El gran ausente. Biografía de Velasco Ibarra

Lautaro Ojeda Segovia



Centro Andino de Acción Popular

ECUADOR DEBATE

No. 65

Quito - Ecuador, agosto del 2005

COYUNTURA

El abril que se llevó al Coronel que no murió en el intento
Desde la integración blanda y el comercio rígido al regionalismo autónomo
Conflictividad socio-política: Marzo - Junio 2005

TEMA CENTRAL

Acerca del localismo ecuatoriano
Los actores de la construcción territorial, desarrollo y sustentabilidad
Autonomías regionales y unidad nacional
Una propuesta para evaluar la regionalización
Descentralización y regionalización en el Perú
Integración Europea e identidades regionales

DEBATE AGRARIO - RURAL

Efectos de la producción agropecuaria en los suelos de los páramos:
el caso de Guangaje

ANALISIS

Descentralización en América Latina, Venezuela y Bolivia
Aproximación sociológica a los estudios de la familia:
escuelas, conceptos y tendencias

Suscripciones: Anual 3 números: exterior: US\$ 30,00 - Ecuador: \$ 9,00

Ejemplar suelto: Exterior US\$ 12,00 - Ecuador: \$ 3,00

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre - Telef. 2 522763

Apartado aéreo 17-15-173-B Quito - Ecuador

EL BUHO

Dónde adquirir ÍCONOS

INTERNACIONAL

Amazon.com
www.amazon.com

Libros Andinos
P.O.Box 164900
Miami, Florida 33116 - U.S.A.
Mail: info@incabook.com

La Librería - Flacso
www.flacso.org.ec
Mail: lalibrería@flacso.org.ec

GUAYAQUIL

Librería de la Casa de la Cultura,
Núcleo del Guayas
Av. 9 de Octubre 1200 y Pedro Moncayo

Macclibro
Extremo Norte del Malecón 2000 y Loja
Telf. 2309-400, ext. 123

CUENCA

Sodilibro
Benigno Malo 5-96 y Juan Jaramillo
Telefax: (593-2) 284 3137/284 8501

Universidad de Cuenca
Programa de Turismo y Gastronomía
Av. 12 de Abril 5-199
Telf.: (593-7) 2881-480

QUITO

La Librería – Flacso
Av. Diego de Almagro E7-174 y Pradera
Telfs: (593-2) 3238-888, ext. 2025
Mail: lalibreria@flacso.org.ec

Librimundi
Juan León Mera N23-83 y Wilson
Telfs : (593-2) 2521-606

Librería Abya-Yala
Av. 12 de Octubre 1430 y Wilson,
Teléfono (593-2) 2506-251, 2506-247

Librería Cima
Pasaje Carlos Ibarra 200 y 10 de Agosto
Telf: (593-2) 2571-218

Continental del Libro
Av. 10 de Agosto N11-473 y Pasaje Carlos
Ibarra
Telf: (593-2) 2950-686

Librería Española
Av. 10 de Agosto 1233 y Santiago
Telf.: (593-2) 2222-301/22-22258/2222-165

Librería Pomaire
Amazonas 836 y Veintimilla
Telf: (593 2) 540- 074

Librería Científica
Av. Juan León Mera y Colón
Telf: (593-2) 2552-854/ 2543-164